

**Discursos contra el proyecto de ley fijando el presupuesto de obligaciones eclesiásticas y las relaciones económicas entre el clero y el Estado / pronunciados por los senadores Marques de Barzanallana, Jose Maria Rodenas y Estanislao Suarez Inclan, y los diputados Agustin Esteban Collantes, Placido Jove y Hevia, Alejandro Pidal y Mon, Pedro Salaverria y Conde de Toreno.**

Madrid : Berenguillo, impresor, 1873.

Signatura: FEV-AV-M-00800

La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

<http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html>

Aviso legal

*Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de lucro siempre y cuando se cite la fuente*





15  
16  
17

3002



*Exlibris*  
*Jesús Rodríguez Salmones*

CB: 60000000114398

FEV-AV-N-00800









# DISCURSOS

CONTRA EL PROYECTO DE LÉY

FIJANDO EL PRESUPUESTO DE OBLIGACIONES ECLESIASTICAS

Y LAS RELACIONES ECONÓMICAS

ENTRE EL CLERO Y EL ESTADO,

PRONUNCIADOS

por los senadores

MARQUES DE BARZANALLANA, D. JOSE MARIA RODENAS

Y D. ESTANISLAO SUAREZ INCLAN,

y los diputados

D. AGUSTIN ESTEBAN COLLANTES, D. PLACIDO JOVE Y HEVIA,

D. ALEJANDRO PIDAL Y MON, D. PEDRO SALAVERRIA Y CONDE DE TORENO.

PERTENECIENTES TODOS AL PARTIDO ALFONSINO.

---

MADRID

Berengüillo, Impresor, Huertas, 70

1873





# DISCURSOS

CONTRA EL PROYECTO DE LEY

FIJANDO EL PRESUPUESTO DE OBLIGACIONES ECLESIASTICAS

Y LAS RELACIONES ECONOMICAS

ENTRE EL CLERO Y EL ESTADO,

PRONUNCIADOS

por los senadores

MARQUES DE BARZANALLANA, D. JOSE MARIA RODENAS

Y D. ESTANISLAO SUAREZ INCLAN,

y los diputados

D. AGUSTIN ESTEBAN COLLANTES, D. PLACIDO JOVE Y HEVIA,

D. ALEJANDRO PIDAL Y MON, D. PEDRO SALAVERRIA Y CONDE DE TORENO,

**PERTENECIENTES TODOS AL PARTIDO ALFONSINO.**

MADRID

Berenguillo, impresor, Huertas, 70

1873



# DISCURSOS

CONTRA EL FASCISMO EN ESPAÑA

PRIMERA PARTE. EL FASCISMO EN ESPAÑA

Y LAS RELACIONES ECONÓMICAS

ENTRE EL CLERO Y EL ESTADO

PRONUNCIADOS

por los señores

WILFREDO DE ANSOLUAGA, D. JOSE MARIA RODRIGUEZ

Y D. ESTANISLAO GARCIA JORDAN

y los señores

D. AGUSTIN ESTEBAN GARCIA, D. PEDRO JOVE Y REYES,

D. VICENTE TOLAL Y MON, D. PEDRO CALVIERO Y COME DE TORRES,

PERTINECIENTES TODOS AL PARTIDO ALFONSINO.

MADRID

Editorial "El Financiero", S. A.

1938



## INTRODUCCION.

La publicacion de los discursos que en contra del proyecto de ley fijando el presupuesto de obligaciones eclesiásticas y las relaciones económicas entre el clero y el Estado, pronunciaron los senadores y diputados de la minoría alfonsina en la legislatura de 1872 á 1873, no obedece ciertamente á un pueril sentimiento de vanidad, sino á la conveniencia de demostrar que esta minoría, compuesta, como toda verdadera representacion nacional, de personas procedentes de distintas escuelas y partidos, ha estado perfectamente acorde, contra lo que se ha querido suponer, en los tres puntos esenciales y fundamentales de esta importante y trascendental cuestion, á saber: en considerar como ineludible carga de justicia, por parte del Estado, la dotacion de culto y clero; en estimar como obligatorio el Concordato de 1851 y el convenio adicional de 1859, y en declarar que nada, absolutamente nada puede hacerse en este asunto sin previa autorizacion y de comun acuerdo con la Santa Sede.

Conformes en estas principales bases, naturales á todo partido católico y español, las diversas apreciaciones que acerca de puntos secundarios hayan podido manifestarse son fehaciente prueba y demostracion evidente, de que la minoría alfonsina ha sido en ésta como en las demas cues-



tiones eco fiel de las diferentes ideas que abriga en su seno la nacion española, y que caben todas holgadamente bajo los anchos pliegues de la bandera del órden, de la libertad y del derecho, simbolizado en D. Alfonso XII.

Hay aún más: dando, como no puede ménos de darse, autoridad completa en esta materia á los señores arzobispos y obispos, necesario es manifestar que por conducto de esta minoría hicieron llegar á las Córtes las exposiciones que á las mismas tuvieron por conveniente dirigir.

Terminados los debates de este proyecto de ley en las Cámaras, gran número de prelados felicitaron á los senadores y diputados alfonsinos por su campaña en favor de los intereses del clero, que habian defendido hasta donde sus fuerzas alcanzaron.

## PROYECTO DE LEY

PRESENTADO EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR EL  
MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA, DON JUAN DE MONTES  
RICO, FIJANDO EL PRESUPUESTO DE OBLIGACIONES HOLY-  
MÉTICAS Y LAS RELACIONES CON LA LEY, ENVIADA AL  
SENADO Y APROBADA.

## CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Ante el ministro de la gracia y justicia, por real decreto de 2  
de Octubre de 1874, para presentar a la deliberación de las  
Cortes el proyecto de ley fijando el presupuesto de obligaciones  
voluntarias y las relaciones económicas entre el Estado y el  
Estado, y presentado a las mismas oportunamente, se les ha  
procedido a su discusión y deliberación por parte de las  
Cortes en el día 1.º de Enero último, por lo que tiene el honor de remitirle  
en los términos en que se le remite.

La Iglesia católica, que ha sido la como nos instituye  
nuestro mismo, haciendo nacer a la humanidad de la  
unidad de su origen, no necesita poder de la ley civil un título  
de legitimidad para existir, porque se le provee naturalmente  
al elemento espiritual del hombre, cuyos límites desde  
que constituyen su esencia no admiten al mundo, procediendo  
quien del mismo origen de la unidad del derecho que  
corresponde a todo lo que sea para ella una condición necesaria  
de existencia.

La Iglesia católica, por las condiciones naturales de sus  
afectos, y espiritual por la naturaleza de su fin, de medios  
temporales y espirituales intencionalmente para sostener y cumplir sus  
destinos.

Para la Iglesia no tiene estado en la temporalidad del mundo  
ni marcha sola por las instituciones de la ley civil, sino

donde se halla de las diferentes cosas que abriga en su  
santo la nación española, y que cubren todas las glorias  
de la nación española, de la bandera del orden, de la  
libertad y del derecho. (Aprobado en D. Alfonso XII.)

Hay además de esto, como se puede ver en el texto,  
autoridad completa en esta materia a los señores arzobispos  
y obispos, necesarios en esta materia que por conducto  
de esta institución tienen lugar a la Corte las exposicio-  
nes que a los señores arzobispos por conducto de esta

Comisión los señores de este proyecto de ley en las  
Cortes, para que se pueda ver en esta materia, para  
que se pueda ver en esta materia, para que se pueda ver  
en esta materia, para que se pueda ver en esta materia,  
para que se pueda ver en esta materia, para que se pueda ver  
en esta materia, para que se pueda ver en esta materia,

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

## PROYECTO DE LEY

PRESENTADO EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR EL  
MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA, DON EUGENIO MONTERO  
RIOS, FIJANDO EL PRESUPUESTO DE OBLIGACIONES ECLE-  
SIÁSTICAS Y LAS RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE EL  
CLERO Y EL ESTADO.

### A LAS CÓRTEES.

Autorizado el ministro que suscribe, por real decreto de 2 de Octubre de 1871, para presentar á la deliberacion de las Córtes el proyecto de ley fijando el presupuesto de obligaciones eclesiásticas y las relaciones económicas entre el clero y el Estado, y presentado á las mismas oportunamente, no fué posible proceder á su discusion y deliberacion por haber sido disueltas en 24 de Enero último, por lo que tiene el honor de reproducirlo en los mismos términos que entonces.

La Iglesia católica, aun considerada como una institucion meramente humana, haciendo completa abstraccion de la divinidad de su origen, no necesita pedir á la ley civil un título de legitimidad para existir, porque se lo presta indestructiblemente el elemento espiritual del hombre, cuyos eternos destinos constituyen su elevada mision en el mundo; procediendo tambien del mismo origen la legitimidad del derecho que la corresponde á todo lo que sea para ella una condicion necesaria de existencia.

Sociedad temporal por las condiciones naturales de sus miembros, y espiritual por la naturaleza de su fin, de medios temporales y espirituales necesita para subsistir y cumplir sus destinos.

Pero la Iglesia no vive aislada en la inmensidad del espacio, ni marcha sola por las inconmensurables vias del tiempo. Se



apodera del hombre desde que da el primer quejido, para no abandonarle ni aun en la tumba. Por eso entra en el variadísimo cuadro de las instituciones que forman el eterno acompañamiento de la humanidad, constituyendo una parte necesaria de su armónico conjunto.

Inútil, pues, sería buscarla en la historia ejerciendo sola y aislada su espiritual misión. Á la manera que en el hombre el elemento corporal y el espiritual se hallan esencialmente unidos, así también, en las esferas del progreso humano, la sociedad civil y la religiosa marchan á la par ligadas entre sí con naturales é indestructibles vínculos, cuya legitimidad absoluta descansa, no en las convenciones históricas y variables que entre ellas median, sino en la naturaleza de cada una y en la armonía de sus respectivos fines.

De lo dicho se deduce que los medios de acción de que la Iglesia ha gozado y goza en el mundo, si han sido siempre legítimos en su fundamento, han sufrido las influencias de la historia en su modo de ser y en su organización variable y contingente. Cuando esta organización dejó de estar en armonía, según las épocas, con otras instituciones igualmente legítimas, surgieron terribles conflictos que, al modo de misteriosos agentes de la Providencia, que desde la eternidad de su ser traza en el tiempo los derroteros de la humanidad, fueron el doloroso pero eficaz medio de restablecer la armonía y el concierto pasajeramente perturbados. Los eternos principios del derecho, que presiden los destinos humanos y que constituyen ese cuadro de leyes del mundo moral que los errores y las pasiones de los individuos no alcanzan á derogar, van realizándose siempre á través de las faltas y de los crímenes de que la misera condición humana ha sembrado su camino en el inmenso campo de la historia.

Sí lo que se acaba de indicar es de incontrovertible verdad respecto á las vicisitudes por que en su modo de ser han pasado las instituciones históricas de la Iglesia, lo es mucho más, si cabe, respecto á las que han corrido los medios temporales de que aquella ha necesitado siempre para sostener el culto y atender al mantenimiento de sus ministros.

Perseguida como asociación ilícita desde los primeros días de su existencia hasta los tiempos de Galieno, que fué el primero de los emperadores romanos que la admitió en el número de las personalidades jurídicas que el derecho del Imperio protegía, vivió hasta entonces á merced de la voluntad de los fieles y por cuenta de piadosas ofrendas. Desde la segunda mitad



del siglo III, y más señaladamente desde 313, en que Constantino, por el edicto de Milan, inició una época de protección para la Iglesia, fué entrando ésta gradualmente en el ejercicio de los derechos que, para la adquisición, conservación y transmisión de la propiedad, correspondían á toda persona jurídica, según la legislación del Imperio.

Es de advertir, sin embargo, que la libertad de la Iglesia, en el ejercicio de estos derechos, estuvo siempre contenida, ó por la ley civil ó, en su defecto, por otros hechos que vinieron á reemplazar aquella en la vida económica de los pueblos.

El derecho romano no reconocía más personalidades jurídicas que las que creaba el Estado. Por esto la Iglesia no gozó bajo el imperio de Constantino de una libertad absoluta para adquirir la propiedad. La voluntad del emperador limitaba más ó menos esta libertad, según que lo consideraba necesario para sostener el conveniente equilibrio en el orden económico de la sociedad romana.

Destruído el Imperio en Occidente, y merced á la influencia y superioridad adquirida por la Iglesia sobre los nuevos pueblos, la ley civil dejó ya de regular la propiedad eclesiástica, y aquella gozó de una libertad ilimitada. Pero, en defecto de las limitaciones de la ley civil de la época anterior, surgieron las impuestas por la fuerza. Así la Iglesia tuvo que pasar por grandes conflictos en el orden económico; conflictos que, empezando con el mando de los jefes de palacio de la dinastía merovingia, continuaron repitiéndose de tiempo en tiempo durante toda la Edad Media. Al terminarse ésta volvió á renacer el sistema del Imperio, planteándose en todos los Estados de Europa por medio de leyes de amortización que continuaron subsistentes con más ó menos eficacia hasta el presente siglo.

Durante todo este largo período, la Iglesia, por las indicadas leyes, tuvo más ó menos limitado su derecho de adquirir, atravesando además su propiedad gravísimas crisis que la devolvían á la circulación; crisis que aquella no pudo evitar, no obstante su flexibilidad para dar participación en los productos de sus bienes al elemento temporal de la sociedad civil.

El patrimonio eclesiástico, durante la larga época que, empezando en el siglo VI, llega hasta nuestros días, estaba principalmente formado: primero, con la propiedad inmueble; segundo, con el impuesto decimal; tercero, con las obligaciones que, aunque voluntarias por su naturaleza, el Concilio IV de Letran había declarado obligatorias por su antiguo origen. Este patrimonio, del cual la propiedad territorial era el elemento más

considerable, llegó á tomar inmensas proporciones, apesar de las leyes amortizadoras y frecuentes actos de expropiacion.

La riqueza pública habia llegado á concentrarse, en su mayor y mejor parte, en manos de la Iglesia. El equilibrio económico se habia roto, y no era ya posible restablecerlo con los recursos que ofrecia el derecho positivo de los pueblos. Sobrevino entonces en casi toda la Europa una gran reaccion, y la Iglesia fué perdiendo su propiedad inmueble y la contribucion decimal por medidas del Estado, que si el derecho secular no puede legitimar plenamente, explica, en cambio, suficientemente la historia.

Privada la Iglesia en esta nueva situacion de los recursos con que hasta entonces habia contado para subsistir, se vió reducida á tomar en el presupuesto del Estado una participacion con que éste le brindaba, participacion que quebrantaba su libertad é independencia, porque venia á equipararla á los demas ramos de la administracion civil.

Lo dicho hasta aquí tiene aplicacion á nuestra patria. Tambien el patrimonio de la Iglesia pasó en España por grandes vicisitudes, hasta que desapareció en el siglo actual para ser reemplazado por una subvencion del Estado.

Á las leyes de expropiacion de la Iglesia sucedieron otras determinando la dotacion con que el Estado habia de contribuir para sus atenciones espirituales. Tales fueron las de 16 de Julio de 1837, 30 de Junio de 1838 y 21 de Julio del mismo año, 16 de Julio de 1840, 14 de Agosto de 1841, la de 20 de Abril de 1849, que sirvió de base para la celebracion del Concordato de 16 de Marzo de 1851; el mismo Concordato, el convenio adicional de 25 de Agosto de 1859, y últimamente la Constitucion del Estado, que, en su art. 21, sanciona nuevamente el deber que tiene la nacion de mantener el culto y los ministros de la Iglesia.

Pero, apesar de lo dispuesto en las mencionadas leyes, y señaladamente en el último Concordato y en su acta adicional, es necesario reconocer que hasta ahora la Iglesia no ha logrado entrar en España en una situacion definitiva, en la que tenga asegurados los medios económicos que la son indispensables para el desempeño de su sagrado ministerio con la independencia á que tiene un indiscutible derecho. Colocarla en esta situacion, otorgándola lo que de justicia le corresponde, es el pensamiento en que se ha inspirado el ministro que suscribe al redactar el proyecto de ley que tiene el honor de someter á la deliberacion de las Cortes.



## I.

La necesidad de indemnizar á la Iglesia de los bienes que en diferentes épocas le han sido expropiados por el Estado, es el fundamento de la obligacion por éste contraída de mantener el culto y los ministros de la religion católica. Pero no basta reconocer en principio la existencia de esta sagrada obligacion, sino que es necesario determinar sus límites y la forma en que ha de ser cumplida.

No figura la Iglesia en nuestra historia como una institucion exclusivamente religiosa; fué tambien á la vez institucion política y administrativa.

Como institucion política ocupaba un puesto en las Córtes. Aunque en algunos Estados, como en la corona de Aragon, su intervencion fué más poderosa, en todos era grande su influencia en las Asambleas legislativas. Poseia feudos y señoríos jurisdiccionales sobre pueblos y comarcas enteras, nombraba jueces, imponia penas, recaudaba tributos y, en los momentos de apuro, acudía presurosa al auxilio del Estado y, finalmente, tomaba una parte activa en las guerras extranjeras y en las civiles, siendo muchas veces su intervencion decisiva para el éxito de los combates. Éstos y otros innumerables hechos no los registraria la historia si no hubiera poseido la masa de bienes en que apoyaba su gran poder político.

Como institucion administrativa desempeñaba tambien la Iglesia importantísimas funciones. Á su iniciativa se debe principalmente la creacion de universidades, escuelas y bibliotecas. Para sostenerlas institua beneficios ó cargos eclesiásticos, imponiendo á sus poseedores la obligacion de enseñar algun ramo del saber humano, estimulaba el estudio y premiaba el talento, manteniendo á los mismos escolares por medio de plazas gratuitas en los colegios. Á la Iglesia se debe la creacion de hospitales, casas de caridad y otros establecimientos de beneficencia, los que sostenia con sus propias rentas. Socorria la mendiguez, distribuyendo con mano pródiga sus dones al menesteroso y al desvalido en mil distintas y variadas formas. Tantas y tan múltiples atenciones exigian cuantiosos

bienes, que la Iglesia logró adquirir excitando la caridad de los fieles.

Hé aquí trazadas á grandes rasgos las causas de la necesidad de su gran propiedad en los pasados tiempos, y legitimada ésta hasta tal punto que, sin ella, la accion civilizadora de la Iglesia hubiera sido ménos fecunda en nuestra patria.

Considerada, por último, la Iglesia bajo un tercero y principal aspecto, como institucion religiosa, han sido siempre menores sus necesidades. Si para conservar en el mundo su rango político, extender las ciencias y socorrer al pobre no habia límites á su generosidad, en cambio, cuando consultaba su propio interés, sus aspiraciones fueron siempre más modestas y limitadas. Constantemente predicaba que sus ministros debian disponer tan solo de aquellos bienes ó rentas que fuesen indispensables para cubrir las necesidades de la vida. Desde los primeros concilios hasta el celebrado en Trento, condenó la Iglesia el lujo y ostentacion del sacerdote, cualquiera que fuese su jerarquía; enalteció la humildad y la pobreza, y procuró que los que servian al altar viviesen frugalmente, enseñando sus más ilustres doctores que los beneficiados eclesiásticos no podian en conciencia percibir de sus beneficios mas que la congrua sustentacion.

Mas al inaugurarse en el continente de la Europa el régimen representativo sufrió la Iglesia una profunda trasformacion, y perdió del todo sus caracteres político y administrativo, quedando reducida á una institucion meramente religiosa.

Los grandes principios proclamados por la Asamblea constituyente francesa en 1789, y aceptados más tarde con entusiasmo por otros puebls modernos, destruyéron las bases constitutivas de los antiguos Estados, señalando las atribuciones que correspondian á cada una de las grandes instituciones sociales. El poder civil debia reivindicar sus naturales atribuciones, ejercidas en parte hasta entonces por la Iglesia; y ésta, en su consecuencia, tuvo que renunciar á los privilegios que habia adquirido, perdiendo de este modo su carácter de institucion política y administrativa. Y desapareciendo su personalidad bajo estos dos aspectos, no necesitaba ya la gran propiedad que hasta entonces habia empleado en realizar fines que en adelante habian de entrar de lleno en la jurisdiccion del Estado.

Quedaron, pues, reducidas las atenciones de la Iglesia, en la nueva situacion en que la colocaba el progreso político de la Europa, á las puramente religiosas; y en este estado, las leyes



de expropiacion vinieron á privarla de sus bienes territoriales y de la contribucion decimal, pasando aquéllos á poder de la nacion y siendo los diezmos suprimidos en beneficio del pueblo. Pero, al ser privada la Iglesia de los grandes recursos, con una parte de los cuales habia de cubrir sus atenciones religiosas, tomó la nacion sobre sí, como era de rigurosa justicia, el deber de cubrirlas con sus propias rentas, á título de una debida indemnizacion por los bienes que hasta entonces habian estado consagrados á aquel servicio.

Pero esta indemnizacion ¿debe extenderse al valor total de los bienes que de la Iglesia pasaron á la propiedad del Estado, ó debe tener más bien como límite las verdaderas necesidades del servicio religioso?

Para resolver este delicado punto, bastará recordar los principios que acaban de asentarse acerca del triple aspecto que tenia la Iglesia al ser expropiada de sus bienes, y del diverso uso á que éstos se hallaban destinados. La Iglesia hoy no tiene necesidades políticas ni administrativas en el orden civil á que atender. Si hubiese conservado su antiguo patrimonio, no necesitaría de sus productos mas que la parte indispensable para cubrir sus atenciones religiosas. La nacion, pues, la debe una indemnizacion por el valor de los bienes necesarios para estas atenciones, pero no por el resto de su patrimonio, que consagraba á sus funciones políticas y á sus servicios administrativos. Estos son hoy directamente sostenidos por cuenta del Estado, de la provincia ó del municipio, y no sería justo que la nacion se gravase doblemente con unos mismos gastos. Hoy la Iglesia no tiene carácter político entre las instituciones del país. No necesita, por lo tanto, bienes para cubrir los gastos que en otro tiempo sus funciones políticas la proporcionaban. La enseñanza laical y la beneficencia pública han dejado tambien de ser servicios eclesiásticos, cubriéndose sus atenciones con fondos civiles; tampoco, pues la Iglesia necesita bienes para este objeto. La nacion está obligada á cubrir estos servicios, que en otro tiempo estaban á cargo de la Iglesia, y no viola la justicia al hacerlo por sí misma y sin emplear para ello la mediacion de aquella.

Queda, por lo tanto, reducida la indemnizacion que el Estado la debe á la que baste para la dotacion del culto y para la congrua sustentacion de sus ministros. Todos los demas bienes y rentas que la Iglesia de España poseia y no hubieran sido necesarios para estas atenciones deben suponerse destinados á cubrir los grandes gastos que llevaba consigo la conservacion

de su carácter político y el sostenimiento de los servicios de la enseñanza y de la beneficencia pública.

La Santa Sede ha reconocido en principio, pero de una manera decisiva, que la base de esa indemnización no era el valor de los bienes expropiados por el Estado, sino las necesidades de la Iglesia, puesto que en el Concordato de 1851 no se tuvo para nada en cuenta aquel valor, sino estas necesidades, más ó ménos convenientemente apreciadas.

Resulta, pues, de lo que se acaba de decir que la legitimidad del presupuesto eclesiástico de España tiene por fundamento, no el Concordato de 1851, sino la sagrada obligación anterior que había contraído la nación, al apropiarse los bienes de la Iglesia, de contribuir con las sumas necesarias para el sostenimiento del culto católico y para la manutención de sus ministros.

Pero sostienen los afiliados á ciertas escuelas políticas que, si bien la legitimidad del presupuesto eclesiástico arranca de ese principio de indemnización, no obstante, cada una de las partidas que lo componen tiene su fundamento jurídico en el Concordato, que, como todos los pactos de su especie, constituye una fuente de obligaciones para las altas partes otorgantes; obligaciones tan eficaces é ineludibles, que no pueden dejar de ser cumplidas, sean cualesquiera las circunstancias que á ello se opongan, á no preceder el acuerdo de los mismos que las establecieron en sus pactos.

No es ciertamente necesario al ministro que suscribe examinar ahora la naturaleza jurídica y la fuerza obligatoria de los concordatos. Aun suponiendo que estos pactos tengan absoluta semejanza con los que otorgan los particulares en el comercio de la vida, ó con los tratados internacionales que los Estados celebran entre sí, y suponiendo legítimas las limitaciones que en los concordatos se imponen á sus respectivas facultades autonómicas la Iglesia y el Estado, así como la intervención que mutuamente se otorgan, extendiendo la soberanía temporal á las esferas sagradas del espíritu y vice-versa, no sería posible deducir en buena lógica de todo ello la eficacia absoluta de las estipulaciones en estos convenios celebradas.

Las obligaciones, para ser eficaces, es necesario que sean posibles: obligaciones imposibles son obligaciones nulas. La esencia de la obligación está en la libertad interior, sin la cual no puede ser contrada, y en la libertad exterior, sin la cual no puede ser cumplida.

Así, pues, una obligación en tanto es válida en cuanto puede ser ejecutada por el que la hubiese contraído. El vínculo



jurídico extiende su eficacia hasta los límites de la posibilidad humana; pero un punto más allá se desvanece.

Aplicuese esta elemental doctrina al caso en que se halla el actual presupuesto eclesiástico. Ascende éste á la cantidad de 41.611.676 pesetas, además de la de 1.827.962-50 que, por pensiones alimenticias á exclaustrados, se paga por cuenta del ministerio de Hacienda.

Ahora bien; no necesita seguramente el ministro que suscriba hacer grandes esfuerzos para demostrar á las Córtes la desproporcion que existe entre el presupuesto de obligaciones eclesiásticas y la suma total de los gastos públicos del Estado.

Por el presupuesto que el ministro de Hacienda presenta hoy á las Córtes quedan reducidos los gastos públicos por todos conceptos, excepcion hecha de la mayor parte de los eclesiásticos, á la suma de 558 millones de pesetas. De la comparacion entre y una y otra cifra resulta, pues, que el presupuesto eclesiástico vigente hasta la actualidad representa un 7 1/2 por 100 de la cifra total á que quedan reducidos todos los gastos y obligaciones del Estado. La desproporcion es notable y manifiesta, y demuestra la urgente necesidad de establecer el equilibrio que no puede ménos de existir entre todos los gastos de la nacion.

Por otra parte, cosa es por demas notoria que desde hace largos años venia existiendo un gran desnivel entre los gastos y las rentas públicas, hasta el punto de haber alarmado profundamente la opinion general del pais.

La nacion habia llegado á impresionarse vivamente ante el constante y siempre creciente déficit con que se saldaban las cuentas del Estado, déficit que habia llegado en los últimos ejercicios á la enorme suma de 225 millones de pesetas. De aquí el clamoreo incesante, y hasta ahora nunca satisfecho, de reducir los gastos hasta penerlos al nivel de las fuerzas económicas del pais. De aquí el solemne compromiso contraido ante las Córtes por el actual Ministerio de hacer esa reduccion hasta conseguir la tan ansiada nivelacion de los presupuestos. De aquí, en fin, los actos que aquel se ha visto forzosamente obligado á ejecutar, lastimando intereses de todo género que venian subsistiendo al amparo de las leyes.

En esta situacion, que es el resultado de la inexorable ley de la necesidad, el ministro que suscribe no cree que conculca derechos legítimos de la Iglesia proponiendo á las Córtes una reduccion del presupuesto eclesiástico del Concordato de 1851, reduccion que, sobre guardar la debida proporcion con la que se

hace en la mayor parte de los demás capítulos de gastos del Estado, no deja en descubierto, sin embargo, las verdaderas atenciones de la Iglesia.

Al proponerla el ministro y al acordarla las Cortes, obra aquel y obrarán éstas cohibidas bajo el enorme peso de las necesidades públicas, ante las cuales el patriotismo no puede invocar la fuerza obligatoria del Concordato de 1851, ni la de ninguna otra ley, por respetable que sea su origen y por sagrado que sea su objeto.

Dada la gravedad del mal y la urgente necesidad del remedio, no sería tampoco lícito á las Cortes ni al Gobierno emplear para aplicarlo un procedimiento lento por su naturaleza, y que hoy además es imposible: la negociacion con la Santa Sede para la reforma del Concordato de 1851. Aquella corte no ha restablecido hasta ahora sus relaciones oficiales con la nacion española, y no depende tampoco exclusivamente del Gobierno, apesar de su deseo, el fijar el momento en que haya de ser un hecho consumado el establecimiento de estas interrumpidas relaciones. Y no es posible dilatar la salvacion del país, comprometiendo su presente para hacer más difícil su porvenir, hasta la realizacion de un hecho contingente que depende de ajenas voluntades. Inspirándose las Cortes en los deberes que tienen para con el pueblo que representan, con la conciencia de que no violan libremente derechos legítimos al ceder ante la inflexible fuerza de los hechos, salvarán con la aceptacion de este proyecto de ley, y con los demás que el Gobierno les presenta, la suerte de la fortuna pública, que hace años viene precipitándose por una pendiente en cuyo término encontraria el abismo de la bancarota.

Lo que acaba de indicarse exime al ministro del trabajo de justificar por otros medios, y con el ejemplo de otros pueblos, este proyecto de ley. No dejará, sin embargo, de exponer á las Cortes que, cuando los Gobiernos de las otras naciones católicas consideraron conveniente reformar su presupuesto eclesiástico, lo hicieron por sí mismos desde luego y sin celebrar previamente convenios con la Santa Sede. Así, en el vecino reino de Portugal, por el decreto de 1.º de Octubre de 1869, se rebajaron las asignaciones de los obispos del país, sin que por la Corte Romana se hubiesen hecho reclamaciones en contra. Y en la católica Bélgica fué promulgada en 4 de Marzo de 1870 la ley sobre lo temporal de los cultos, por la cual, sin que tampoco hubiese precedido acuerdo con la Santa Sede, se establecieron disposiciones para la formacion del presupuesto de gastos de las iglesias catedrales y parroquiales.



La legitimidad del principio en que descansa la reduccion propuesta está fuera de toda duda. Pero ahora necesita el ministro que suscribe demostrar que aun en la hipótesis, nada más que por un solo momento aceptada, de que la situación económica del país no hiciese necesaria la reduccion hasta la cantidad que se propone en el proyecto, no por eso podria ser fundadamente combatida con el pretexto de quedar insuficientemente dotada la Iglesia.

Someras y generales consideraciones, para no entrar en otros detalles que tendrán su natural oportunidad durante la discusion del proyecto, serán bastantes para llevar al ánimo de las Córtes la conviccion profunda de que con la cantidad de 31.117.565-65 pesetas, que como presupuesto definitivo se fija para las atenciones eclesiásticas, no quedará ninguna de éstas desatendida.

## II.

El ministro de Gracia y Justicia ha fijado la expresada cifra de 31.117.565-65 pesetas despues de un estudio detenido y desapasionado de las necesidades espirituales del pueblo español y de la actual organizacion de los servicios eclesiásticos en la Península, teniendo, por otra parte, á la vista la que pagan los habitantes de otras naciones católicas que guardan más semejanza con la nuestra, como son Francia, Bélgica y Portugal.

Examinando los presupuestos de estas naciones, se observa que la Iglesia queda decorosamente atendida en sus servicios contribuyendo sus habitantes para los gastos del culto, segun sus respectivos presupuestos generales, en la proporcion siguiente:

Cada frances con una peseta 18 céntimos.

Cada belga con una peseta 9 céntimos.

Cada portugues 26 céntimos de peseta.

En España cada habitante contribuye con dos pesetas 87 céntimos, segun los pagos ejecutados por obligaciones eclesiásticas conforme al presupuesto del Concordato.

Y si en Francia la Iglesia tiene ademas presupuestos departamental y comunal, en España tiene tambien derechos de es-

tola y pié de altar, y otros bienes raíces y recursos de que se hablará más adelante.

Segun esto, la nacion española impone á cada uno de sus habitantes para los gastos del culto doble contribucion que la que exige la nacion francesa, y más del duplo de la que pagan en Bélgica y Portugal.

Y como en Francia y Bélgica se halla la Iglesia católica perfectamente organizada, y todos sus servicios decorosamente atendidos, el ministro de Gracia y Justicia está dentro de lo justo al afirmar que el presupuesto eclesiástico de España puede quedar reducido á una cifra proporcional á una cantidad por habitante, aproximada á la que cada frances ó belga paga para los gastos de culto y clero en sus naciones respectivas. Es decir, que puede quedar reducida á la mitad por lo ménos de lo que importa anualmente, porque cada frances ó belga satisface por este concepto ménos de la mitad de lo que paga cada español.

Por otra parte, no es de creer que la Iglesia sea con los españoles ménos bondadosa que con los fieles de las demas naciones del Mediodía de la Europa, ya que en Francia y Bélgica ha llevado su generosidad hasta el punto de conformarse con un modo de ser, en el órden económico, ménos desahogado que el que la España le habia otorgado en el Concordato de 1851, y que desgraciadamente no es posible sostener. Mas ¿cuál ha sido la causa de esta notable diferencia entre nuestro presupuesto y los de las naciones citadas? El ministro que suscribe no ve otra más poderosa que la que resulta de la actual organizacion administrativa de la Iglesia en uno y en otros países. Entre tanto que en Francia y Bélgica la organizacion eclesiástica, destruida por las terribles convulsiones de la revolucion francesa, renació al calor del Concordato de Pio VII con el primer cónsul, acomodada ya á las nuevas condiciones de los tiempos y á las trasformaciones de que habia sido objeto la sociedad del antiguo régimen, la de la Iglesia española tuvo la suerte, es verdad, de no pasar por tan terribles conflictos; mas, en cambio, entró en la sociedad moderna con la ostentosa forma que habia ido desenvolviéndose lentamente en los siglos anteriores.

Pero descendiendo de estas consideraciones generales á un estudio algo más concreto, se verá cada vez más confirmada la verdad de lo que se ha manifestado antes, á saber: que la cantidad presupuestada es suficiente para todas las necesidades de la Iglesia.



*Clero episcopal.*—Partiendo de este criterio comparativo que en nada perjudica á la Iglesia, el ministro entiende que para el servicio espiritual de los españoles pudieran bastar cinco arzobispos y 33 obispos, y, en su consecuencia, considera bastante la cantidad de 532.500 pesetas que consigna para el sostenimiento de todo el clero episcopal de la Península é islas adyacentes. Y este cálculo lo ha formado teniendo en cuenta los siguientes datos: Francia tiene 15 arzobispos y 67 obispos, con una poblacion de 40 millones de habitantes. España, con una poblacion que no llega á la mitad de esta cifra, tiene nueve arzobispos y 48 obispos, número notoriamente desproporcionado, porque mientras en aquella nacion cada prelado sale á 460.000 almas, en España hay obispo que gobierna un territorio de 70.000 almas, y alguno que no llega á 36.000. Y en el supuesto de la reduccion indicada de las diócesis, cada prelado regirá una circunscripcion de 412.461 almas; es decir, que resultaría todavía más beneficiada la Iglesia en España que en Francia.

Y no se diga que no es posible que un solo obispo pueda atender suficientemente al gobierno de tantos fieles; porque, prescindiendo de que en Francia esto sucede apesar de las dificultades y mayor trabajo que impone á los prelados la coexistencia de diversos cultos en cada diócesi, lo que no tiene lugar en España, es lo cierto que, sin salir de nuestra nacion, existen ya diócesis, como la de Puerto-Rico, que cuenta más de 600.000 almas, y no por eso deja de estar dignamente regida y gobernada, sin que los fieles y el clero de aquella isla hayan sentido hasta ahora la necesidad del aumento de sillas episcopales. Debe tenerse muy presente que la organizacion administrativa de la Iglesia en los tiempos modernos no exige el número de obispos que era indispensable para el servicio espiritual de los fieles en los cinco primeros siglos de existencia de aquella. La distribucion de la poblacion en la sociedad romana y su aglomeracion en grandes centros, la escasez y dificultad de las comunicaciones, la descentralizacion del poder eclesiástico, y muy especialmente la falta del ministerio parroquial, organizados despues por los Concilios IV de Letran y Tridentino, exigieron entonces la multiplicacion de las sillas episcopales, que hoy es completamente innecesaria.

Mas como el Estado es incompetente para introducir por sí solo alteraciones ó modificaciones en la division eclesiástica, por cuya razon no puede determinar las sillas metropolitanas ó sufraganeas que deben subsistir, ni por consiguiente dejar

sin dotacion las restantes, el ministro propone que se distribuya aquella cantidad entre las actuales diócesis proporcionalmente á la asignacion fijada á cada una de ellas en el Concordato de 1851, hasta tanto que la Santa Sede, de acuerdo con el gobierno español, resuelva definitivamente este importante asunto.

Tambien se reduce la dotacion de estas altas dignidades eclesiásticas á la suma anual de 30.000, 22.500 y 12.500 pesetas para el primado, cada uno de los cuatro metropolitanos y de 33 obispos. Apreciando las condiciones económicas de nuestro pais, considera el ministro que suscribe que estas dotaciones son suficientes para la decorosa manutencion de los preladados. No la tienen mayor en Francia, donde perciben una suma igual los arzobispos. Menor es todavía en Portugal, segun el decreto antes citado. Y en esta proporcion perciben tambien los obispos de Bélgica sus dotaciones.

Pero además los de España cuentan con otros recursos para atender á los gastos extraordinarios que lleva consigo la alta dignidad y autoridad de que gozan en la sociedad eclesiástica. En primer lugar, perciben el producto del indulto cuadragésimal, de cuyas dos quintas partes disponen libremente, segun su conciencia, para obras de caridad, socorriendo con las tres quintas restantes á los establecimientos de beneficencia. Y por más que, como se ve, no pueden en conciencia dar diverso destino á estos fondos, siempre resulta que, cubriendo por este medio las atenciones de caridad, no necesitan distraer para ellas su dotacion personal. Nada se dirá de los títulos de la deuda pública que los poseedores de bienes procedentes de capellanías colativas han entregado y continúan entregando para conmutar los bienes y las cargas piadosas ó espirituales impuestas sobre los mismos, en cumplimiento del convenio de 16 de Junio de 1867, porque con esos títulos deben constituir, y lo harán seguramente, nuevos beneficios ó capellanías con la dotacion anual de 500 pesetas, convirtiendo aquellas para este objeto en inscripciones nominativas intrasferibles.

Finalmente, los obispos, en union con los cabildos, suelen poner arbitrios ó contribuciones que producen cuantiosos rendimientos, entre los cuales se citará como ejemplo el que *ad opus Ecclesiae* pagan en cantidad proporcionada á su diversa posicion social todos los que en la ciudad de Barcelona contraen matrimonio religioso, y de cuya recaudacion, distribucion ó inversion están aquellos exclusivamente encargados, sin intervencion ni fiscalizacion del Gobierno.



*Clero catedral.*—Para atender al personal de los cabildos catedrales de las 38 diócesis que la nación puede sostener, según la base anteriormente sentada, el ministro señala la cantidad de 1.385.000 pesetas.

Sin entrar tampoco en consideraciones acerca del estado actual de los cabildos catedrales y de los grandes servicios que pudieran prestar a la Iglesia, si fuere convenientemente reformada su organización, el ministro desde luego no vacila en afirmar que el número que fija el Concordato no es necesario, como se demuestra con el mismo ejemplo de lo que sucede en la nación vecina. Francia, con 81 iglesias catedrales, reúne un clero colegial y catedral compuesto de 900 individuos entre vicarios generales y canónigos; y España, que, según el Concordato, solo cuenta 57 iglesias catedrales, tiene 1.723 clérigos dignidades, canónigos y beneficiados, además de un clero colegial compuesto de 753; total, 2.476 individuos.

No es posible hallar demostración más sencilla, á la vez que más incontrastable, de la necesidad de reducir el personal del clero catedral.

El ministro entiende que bastarian en las metropolitanas doce prebendados y en las sufraganeas ocho. Y en la imposibilidad de practicar el Estado por sí mismo esta reducción, distribuirá el total de las dotaciones de los cabildos catedrales que, según la base del Gobierno, serian suficientes entre las corporaciones que actualmente existen, á prorata de las asignaciones que corresponden á sus individuos según el Concordato. Esta partida es fija y permanente. Por esto, aunque hoy parezca exigua la parte alícuota que haya de percibir desde luego cada uno de los miembros de aquellos cuerpos, irá cada día aumentando en la proporción que disminuya el personal de los mismos hoy existente. Á este fin el Gobierno contribuirá eficazmente, y podrán contribuir también por su parte los ordinarios, absteniéndose de proveer las piezas de gracia que vacaren hasta que definitivamente se fije por la Santa Sede, de acuerdo con el Gobierno, el número y organización de estos cuerpos para el porvenir.

También se reduce el presupuesto benefical á las siguientes cifras.

Clero benefical metropolitano, 120.000 pesetas.

Clero benefical diocesano, 396.000 pesetas.

Cabe decir respecto á esta partida que también será definitiva, lo mismo que se ha indicado acerca de la del clero catedral.

*Material del culto catedral.*—Todavía es más excesiva la dota

cion que por material corresponde á las iglesias catedrales. En Francia sufraga el Estado únicamente para los gastos de visita diocesana 950 pesetas para las diócesis compuestas de un solo departamento, 1.420 para las compuestas de dos y 2.850 para las compuestas de tres.

Ninguna otra cantidad entrega el Estado para las atenciones de las catedrales.

En España, para gastos de administracion y visita, ha de entregar de 5.000 á 7.500 pesetas á los metropolitanos y de 4.000 á 5.000 á los sufraganeos. Los gastos del culto en las metropolitanas imponen al Estado un gravámen anual de 22.500 á 35.000 pesetas, en las sufraganeas de 17.500 á 22.500, y en las colegiadas de 5.000 á 7.500. Se invierten estas sumas en dar al culto gran ostentacion, no solo en los dias festivos y solemnidades mayores de la Iglesia, sino en todos los laborables, en que, por lo general, el pueblo frecuenta ménos los templos. Finalmente, para completar el cuadro de la esplendidez con que la nacion atiende á las necesidades de la Iglesia, resta decir que sostiene tambien en cada diócesi un seminario con la dotacion anual, que no ha de bajar de 22.500 pesetas y puede llegar á 30.000.

Y aunque la nacion francesa no subvencione con tanta largueza los gastos de culto catedral y de enseñanza en los seminarios, nadie ignora que en sus templos se celebran los actos religiosos con el decoro conveniente, y que su clero recibe una instruccion completa en todas las ciencias necesarias para desempeñar dignamente su mision, debiendo á esto la sólida y envidiable reputacion de que goza en el mundo católico.

El ministro que suscribe propone para gastos de material del culto en las metropolitanas 87.500 pesetas, y en las sufraganeas 412.500, cuyas dotaciones se distribuirán entre las actuales iglesias catedrales segun las reglas antes indicadas. Se señala tambien la cantidad de 210.240 pesetas para la dotacion de los seminarios, tomando como base, no la igualdad en la distribucion que hasta ahora se ha observado, sino las respectivas necesidades del personal eclesiástico en las diócesis, segun el movimiento parroquial que hubo en el último quinquenio, creyendo el ministro que, con una asignacion á cada seminario equivalente al importe de las pensiones alimenticias (á razon de 6 rs. una) necesarias para la educacion científica y moral de la mitad del clero que anualmente necesita la diócesi para cubrir las vacantes del ministerio parroquial, quedará este importantísimo ramo de la administracion eclesiástica, suficiente-



mente atendido, ya que puede el obispo elegir sin aumento de gasto el personal de profesores entre los capitulares de su iglesia, y, por otra parte, no es aventurado suponer que la mitad de los seminaristas pertenecerá á familias cuyo estado de fortuna no será tan precario y angustioso, que no les permita satisfacer una pension alimenticia tan módica como la que actualmente se exige en los seminarios.

*Clero colegial.*—El ministro no señala cantidad alguna permanente para el sostenimiento de este clero. No hay razon canónica para la existencia de estos cabildos, y así parece desprenderse de lo dispuesto en el art. 21 del Concordato, en que, como si se tratara de justificar la existencia de estos cuerpos, se impuso á sus presidentes la cura parroquial. En su conservacion han influido principalmente los intereses de localidad. En algunos, aunque pocos casos, el recuerdo de algun suceso histórico nacional podrá justificarlo. Pero el corto número de estos últimos no será razon suficiente para continuar sosteniendo un personal numeroso, compuesto de 752 canónigos, cuyas asignaciones ascienden á 950.000 pesetas, sin grandes ventajas para el servicio espiritual de los fieles. Se exceptúa, sin embargo, de lo dicho la colegiata de Covadonga, cuya íntegra dotacion habrá de continuar pagándose como un justo tributo rendido á una de las más brillantes glorias de la patria. En el proyecto adjunto se dan como suprimidas las dotaciones de estos cargos (salvo las de los abades, que continuarán como párrocos). Á los actuales poseedores se les conserva como crédito transitorio la cantidad necesaria para su cógrua sustentacion, á la que tienen derecho por haberles servido aquel oficio como título de ordenacion. Para determinar esta cantidad, el Gobierno ha tenido presentes las modernas declaraciones de Su Santidad, y principalmente la que contiene el art. 12 del citado convenio de 1867, que fija en 500 pesetas anuales la cógrua sustentacion de todo clérigo en España.

La partida relativa al clero colegial irá disminuyendo constantemente hasta su completa extincion, segun vaya tambien disminuyendo el personal á cuya cógrua sustentacion se destina.

*Clero parroquial.*—No molestará el ministro de Gracia y Justicia la atencion de las Córtes analizando los defectos de la actual division parroquial de la Peninsula. Son tan evidentes y tan conocidos que no de ahora, sino de mucho tiempo, viene la opinion pública denunciándolos. Fueron tambien implícitamente reconocidos en el Concordato de 1851 por el hecho de

haberse acordado en él proceder á su reforma, y ante la representacion nacional se han elevado en diferentes ocasiones fundadísimas quejas por respetables estadistas, pertenecientes muchos de ellos á escuelas que blasonan de interesarse en la conservacion de los derechos adquiridos por la Iglesia en el órden temporal.

El ministro que suscribe somete á la consideracion de los Cuerpos colegisladores los siguientes datos:

Existen en España 9.355 ayuntamientos y 19.287 parroquias, las cuales están servidas por 24.696 clérigos seculares subvencionados por el Estado, y cerca de 10.000 clérigos seculares y regulares adscritos á las mismas parroquias, lo que unido á 3.400 exclaustrados que no tienen cargo alguno elesiástico, suman un total de 38.000 sacerdotes: distribuidos entre los habitantes de la Península, corresponde uno á cada 401 habitantes, número tambien excesivo, como á mayor abundamiento se comprende, si no se olvida, que en Francia á cada sacerdote le corresponden solamente 1.000 habitantes.

Pero es tal la desproporcion que se advierte en la division parroquial de la Península, que al paso que las parroquias de la provincia de Cádiz tienen por término medio 10.833 almas, y las de Málaga, Almería, Murcia y Sevilla 3.000, las de Soria, Leon y Búrgos cuentan ménos de 300 almas; no faltando otras en que existen parroquias, con la categoria de término, que no cuentan más que 100, 20 y aun siete vecinos. Resultando de esto que en aquellas provincias cuesta el sostenimiento del clero ménos que en las otras, que son precisamente las más pobres. Por otra parte, la excesiva aglomeracion de clero en las últimas ofrece el peligro que siempre hay para la Iglesia y el Estado en la existencia de un numeroso personal eclesiástico mal retribuido y sin medios materiales para adquirir y conservar la instruccion y demas cualidades, que tanto en él deben lucir siempre para que pueda desempeñar dignamente su sagrado ministerio.

Sin embargo de una situacion tan irregular, el ministro de Gracia y Justicia ha respetado la cantidad total con que la nacion atiende á la manutencion del clero parroquial, dejando al tiempo y al interés directo é inmediato de los mismos fieles, el cuidado de activar la reforma de organizacion tan defectuosa.

Y no se propone rebaja alguna en este punto, porque, dados los bajos tipos de dotacion del clero parroquial, que no sin hacer extraño contraste con los del clero episcopal, catedral y colegial, se señalaron en el Concordato de 1851, no es posible ha-



cerlo, á no quedar verdaderamente indotados los párrocos, que deben ser, como los obispos en sus diócesis, el amparo de los pobres, los protectores de las viudas y de los huérfanos, y los que alivien las miserias de la vida. El párroco digno de la mision de su cargo es la providencia de sus fieles. No conviene, por lo tanto, escatimarle los recursos económicos que para ello necesita.

Para esto será fija la partida de su dotacion, no habiendo de reducirse hasta que, por resultado de la reforma, la nueva parroquia aumentase su dotacion en más de una mitad de lo que actualmente tiene. El exceso de dicha mitad se amortizará en beneficio del ayuntamiento respectivo. El material del culto parroquial se fija en 7.504.790 pesetas aceptando los tipos del Concordato, y es aplicable á esta partida algo de lo que se acaba de indicar respecto á la del personal parroquial. Tambien resaltaba en el presupuesto del Concordato un gran desnivel entre la dotacion del culto en las iglesias catedrales y la señalada para las parroquiales. Baste decir que alguna de éstas no llegaba á tener anualmente 125 pesetas, para esta sagrada atencion.

Por ella tampoco sufrirá rebaja esta partida (salvo lo que se acaba de indicar en el párrafo anterior), estando destinado á una más conveniente distribucion, segun vaya haciéndose la reforma de la division parroquial.

El presupuesto del Concordato de 1851 estaba gravado con la partida relativa á los conventos de religiosas. Se dispuso en el art. 30 que en lo futuro, así las comunidades existentes como las que en adelante se fundasen, habian de dedicarse á algun ramo de la vida activa, ó, lo que es lo mismo, habian de contribuir al progreso moral del individuo de un modo más directo que el sublime de la oracion.

No solo porque así se ha dispuesto en el Concordato, sino porque el ministro que suscribe está firmemente convencido de los numerosos beneficios que en el orden moral pueden prestar las comunidades religiosas, á la sociedad en esta época en cuya tendencia tanto predominan los intereses materiales, ha respetado la partida de los conventos de monjas que en Octubre de 1868 se hallaban en las circunstancias indicadas, así como tambien consigna la cantidad de 1.827.962-50 pesetas para las pensiones alimenticias de exclaustros; la de 1.245.114-75 pesetas para las religiosas profesas con anterioridad á la ley de 27 de Julio de 1837, y la de 254.100 pesetas para las religiosas cantoras y organistas de los conventos cuyas comunidades,

por no estar dedicadas á la vida activa, fueron suprimidas por el decreto-ley de 18 de Octubre de 1868, siendo de advertir que las tres últimamente mencionadas son transitorias, á la vez que la relativa á los conventos existentes es permanente y definitiva.

Las pensiones que hasta ahora han venido disfrutando las hijas de la caridad de Madrid y de Barbastro, así como el santuario de Montserrat, continuarán satisfaciéndose por cuenta de la obra pia de los Santos Lugares de Jerusalem, segun se ha dispuesto en el decreto de economías del ministerio de Gracia y Justicia, su fecha 17 de Setiembre último. Por el estado que con otros documentos comprobantes se presenta con este proyecto de ley, podrán convencerse las Córtes de que, cubiertas todas las atenciones propias de la obra pia y aun las demas que en tiempos anteriores se la impusieron, produce su capital actual rentas bastantes para satisfacer cumplidamente esta nueva atencion.

Por último, forman tambien parte del presupuesto que se presenta otras partidas que, si bien son transitorias, no sería lícito hoy suprimir, porque tienen principalmente el carácter de alimenticias.

La detallada aunque somera exposicion que se acaba de hacer demuestra, que ninguna parte del servicio religioso queda desatendida, y que todas las que tienen una razon de necesidad, como las relativas al ministerio episcopal y parroquial, quedan, modesta sí, pero suficientemente dotadas. Y, por consiguiente, que aun en la hipótesis de que el pais pudiese cubrir holgadamente las obligaciones que tiene hacia la Iglesia, por no hacerlo así, no podria con justicia acusársele de no destinar á tan sagradas atenciones una cantidad bastante.

Pero el ministro de Gracia y Justicia no se cansará de repetir que, antes de llegar á consideraciones de este orden, existe un primero é indestructible fundamento en que descansa la legitimidad de su proyecto, á saber: la real y manifiesta imposibilidad del Tesoro nacional de contribuir con mayor suma, y la consiguiente necesidad de reducir la hasta ahora señalada, para ponerla al nivel por una parte de lo que se emplea en satisfacer las demas atenciones y obligaciones del pais, y de la otra de los recursos con que éste puede contribuir para todas ellas.



## III.

Demostrada la necesidad de reducir el presupuesto eclesiástico y la posibilidad de que, distribuyendo la suma indicada acertadamente, se atienda á la dotacion del culto y de los ministros de la religion católica, resta presentar á la consideracion de las Córtes los motivos que justifican la forma adoptada por el ministro que suscribe para el pago de aquella cantidad.

De todas las partidas que forman el presupuesto de este proyecto de ley, unas son transitorias, otras son permanentes y definitivas. Las primeras, destinadas á extinguirse, no pueden sufrir la trasformacion que las segundas en cuanto á los fondos con que han de ser satisfechas. Continuarán, pues, como hasta aquí, figurando en el presupuesto general de gastos del Estado. De las segundas, algunas representan servicios que interesan á toda la Iglesia de España, porque no corresponden á ninguna diócesis y mucho menos á ninguna parroquia en particular. Tales son: la pension á favor de las fábricas de San Pedro y San Juan de Letran, la dotacion del Nuncio de Su Santidad y los gastos del personal y material del Tribunal de la Rota, que antes figuraba en el presupuesto del ministerio de Estado.

Á éstas debe añadirse la relativa á la colegiata de Covadonga, que, no como fundacion eclesiástica de la diócesis de Oviedo, sino como glorioso recuerdo nacional, puede comprenderse en el mismo grupo que las anteriores. Es justo que estas partidas sean cubiertas con fondos comunes á todas las diócesis y no con los propios de algunas de ellas; así lo exige la ley de natural relacion que debe mediar siempre entre el servicio y el gasto que lo sostiene.

El ministro que suscribe, inspirándose en estas consideraciones, propone á las Córtes que las mencionadas partidas, se satisfagan con las rentas de la concesion apostólica de la Bula de la Santa Cruzada, á que contribuyen indistintamente con sus limosnas los fieles de España.

Para el pago de las demas partidas que constituyen el presupuesto definitivo se propone á las Córtes una forma especial que, á la vez que alivia la situacion angustiosa del Tesoro, responde á derechos sagrados de la Iglesia y á elevadas consideraciones en el órden político, que habrán de ser tenidas ciertamente en cuenta por las Córtes.

Esta forma es, con accidentales modificaciones, la misma que en el Concordato de 1851 y en el convenio adicional de 1859 se estableció para el régimen económico de la Iglesia, y que por causas muy diversas no había llegado todavía á plantearse. Según el art. 38 del mismo Concordato, los fondos con que había de atenderse á la dotación del culto y del clero eran, en primer lugar, el producto de los bienes devueltos á éste por la ley de 3 de Abril de 1845 y los demás que, no estando comprendidos en dicha ley, no hubiesen sido vendidos, incluso los de comunidades religiosas de varones; en segundo lugar, el producto de limosnas de Cruzada; en tercero, el de las encomiendas y maestrazgos de las cuatro órdenes militares, y en cuarto lugar, «una imposición sobre las propiedades rústicas y urbanas y riqueza pecuaria en la cuota que fuere necesaria, para completar la dotación, tomando en cuenta los productos expresados en los tres números anteriores y las rentas que en lo sucesivo se asignaren á este objeto, cuya imposición debería recaudar, no el Estado, sino el mismo clero, previo concierto que podría celebrar con las provincias, con los pueblos, con las parroquias ó con los particulares». Se dispuso en el mismo Concordato que todos los bienes devueltos al clero serían vendidos por los prelados, con intervención de persona nombrada por el gobierno, convirtiéndose su capital en inscripciones intrasferibles de la deuda del 3 por 100.

Este mismo sistema fué confirmado por el convenio adicional de 25 de Agosto de 1859, con la diferencia de haber de realizarse la venta por el Estado, previa cesión canónica de los prelados y entrega á éstos del precio, y de autorizar al gobierno para que, en equivalencia de las cuotas de imposición que el clero podía repartir y recaudar para completar su dotación, entregase inscripciones intrasferibles del 3 por 100.

Pero el clero no manifestó deseos de aceptar este sistema de dotación. Prefirió el de percibir sus asignaciones del presupuesto general del Estado, como las perciben los funcionarios públicos dependientes de la administración, con lo cual ciertamente no se atendieron los verdaderos intereses de tan respetable clase, que de este modo quedaba ante la opinión vulgar con el carácter de cuerpo asalariado, carácter que no estaba ciertamente en armonía con la independencia que exige su sagrado ministerio. No conviene que el sacerdote aparezca como un delegado de la administración, y esto sucederá mientras el pueblo crea y entienda que se le retribuye por la misma razón que se retribuye á los empleados públicos. Por eso es tan



perjudicial que la Iglesia cubra su presupuesto en la misma forma con que se cubren los presupuestos de los demas servicios.

Estos principios están ademas conformes con otras disposiciones del mencionado convenio de 1859, y mueven al Gobierno á proponer á las Córtes que se entregue á la Iglesia el importe de su presupuesto definitivo (salvas las partidas antes expresadas) en renta consolidada del Estado, del interes del 3 por 100, á cuyo efecto se procederá inmediatamente á efectuar la correspondiente emision. Se hará ésta en láminas intrasferibles á favor de cada uno de los cargos, piezas ó corporaciones eclesiásticas reconocidas por el Concordato, cuya dotacion no quede suprimida por el adjunto proyecto de ley. Con esto se simplifica la administracion y contabilidad de cada diócesis.

Para establecer la debida conformidad en los títulos de la deuda eclesiástica será necesario retirar y cancelar las inscripciones entregadas al clero en cambio de los bienes vendidos ó conmutados hasta la fecha. Produce tambien esta conversion el equitativo resultado de que, se distribuya el valor de los bienes que fueron devueltos á la Iglesia, entre todas las diócesis en proporcion á sus respectivas necesidades.

La cantidad total que el Estado ha de entregar á la Iglesia en las nuevas inscripciones, representa no solo el valor de los bienes vendidos por el Estado y el de los entregados por los obispos en cumplimiento del convenio de 1859, sino el de los que todavia no hayan entregado.

Por consiguiente, el Gobierno excitará el celo de los ordinarios para que, sin demora alguna, cumplan con este deber que les fué impuesto en el art. 7.º del mencionado convenio, suspendiendo entretanto la emision de las inscripciones correspondientes al clero catedral de las diócesis que, apareciesen morosas. El importe de estos bienes quedará íntegro para el Tesoro público. Asimismo representan las nuevas inscripciones las cuotas que el clero puede imponer sobre la riqueza rústica, urbana y pecuaria, conforme al art. 38 del Concordato, y para cuya conversion está autorizado el Gobierno por el art. 15 del referido convenio de 1859.

Aunque el ministro de Gracia y Justicia considera posible la reduccion de provincias eclesiásticas y diócesis, y la disminucion de oficios y demas piezas eclesiásticas que forman la dotacion actual de los cabildos catedrales, rindiendo tributo á la independencia de la Iglesia, se abstiene de introducir la menor reforma en este punto, esperando con fiadamente que no la

dilatará la sabiduría de la Santa Sede. Mas, dada la necesidad de rebajar las cargas que pesan sobre la nacion, y con el deseo de conciliar esta necesidad con la organizacion actual de la Iglesia de España, el Gobierno distribuirá las inscripciones correspondientes al clero episcopal entre las sillas hoy existentes; la correspondiente al culto y clero catedral entre los cabildos, y la del culto y clero parroquial entre las parroquias actuales, tomando como base para esta distribucion las asignaciones respectivamente señaladas en el Concordato.

Los intereses de la inscripción correspondiente á cada cabildo catedral se distribuirán á prorata entre los capitulares y beneficiados; pero nunca podrá percibir ninguno de ellos una cantidad superior al máximun fijado en el Concordato, debiendo quedar el resto á disposicion del ordinario para las atenciones extraordinarias de la diócesi.

Cuando se haga canónicamente la reforma de la actual administracion eclesiástica, las inscripciones que ahora se expidan á favor de los oficios ó corporaciones que por aquella se supriman, se distribuirán en justa proporcion entre los que hayan de subsistir, á cuyo efecto se hará la oportuna conversion, entregándose otras nominativas á favor de los últimos.

Segun lo expuesto, la Iglesia de España tendrá en lo sucesivo una dotacion independiente, fija y permanente para atender á las necesidades del clero catedral y parroquial y de las casas de religiosas, con los réditos é intereses de las inscripciones intrasferibles que el Estado se compromete á emitir desde luego y sin demora alguna, en cambio de los fondos que el art. 38 del Concordato señala para atender á dicha dotacion.

Indudablemente corresponde á la nacion el pago de los expresados réditos é intereses, conforme al art. 21 de la Constitucion vigente; y como la más alta y directa representacion de la nacion es el Estado, á éste incumbe en primer término el cumplimiento de tan sagrada obligacion. Mas tambien puede el Estado, segun los principios generales del derecho, encomendar á otras corporaciones ó institutos de la nacion, el pago de una deuda que la misma ha reconocido, sin que por ello varíe la naturaleza de la obligacion ni los derechos que corresponden á la Iglesia frente á frente del Estado.

Y fundado en esto y en razones de incuestionable utilidad para la Iglesia y para la sociedad civil, el ministro de Gracia y Justicia propone:

1.º Que las provincias satisfagan en justa proporcion entre sí los intereses de las inscripciones intrasferibles, expedidas á



favor de la Iglesia catedral y de los servicios generales de la diócesis á que corresponda.

Y 2.º Que el municipio abone los intereses de las inscripciones expedidas para atender á las obligaciones del culto y clero parroquial y de los monasterios de religiosas, que tengan las condiciones del Concordato.

Aunque á primera vista parezca atrevida la reforma que en el pago de los intereses de las inscripciones del clero propone el ministro, á poco que se fije la atencion se advierte, que se halla inspirada en el mismo sistema adoptado por la Santa Sede en dicho Concordato de 1851 para la dotacion del clero, porque en el tantas veces citado art. 38 se dispuso, que aquel cobrase por sí mismo las cuotas de imposicion sobre la riqueza territorial y pecuaria de las provincias, de los pueblos y de las parroquias, pudiendo celebrar conciertos ó convenios con cada una de estas corporaciones, obligándose el Estado, no á cobrar por sí mismo, sino á auxiliar al clero en el cobro de la imposicion. Además se halla de acuerdo esta forma con las tradiciones de la Iglesia universal, que imponen á cada uno de los fieles la obligación de sufragar los gastos del culto y la manutencion de sus ministros, y á cada parroquia la de contribuir con ciertas rentas, *jus catedralicum, sinodaticum, procurationis, cuarta funeraria* y otros, al sostenimiento de la iglesia catedral de su propia diócesis, y no de las ajenas.

En el orden económico, la Iglesia se compone de una confederacion de diócesis bajo la suprema inspeccion y autoridad de la Santa Sede; de tal suerte, que las rentas y los bienes de una no deben aplicarse á cubrir las atenciones de la otra sino en caso de extrema necesidad. Finalmente, esta forma de pago tiene para la Iglesia otra ventaja de gran cuantía.

En el art. 9.º del convenio adicional de 1859 se dispuso que, «en el caso de que por disposicion de la autoridad temporal la renta del 3 por 100 de la deuda pública del Estado, llegase á sufrir cualquiera disminucion ó reduccion, el gobierno de S. M. se obligaba desde entonces á dar á la Iglesia tantas inscripciones intrasferibles de la renta, que se sustituyese á la del 3 por 100 cuantas fueren necesarias para cubrir íntegramente el importe anual de la que iba á emitirse en favor de la Iglesia»; de modo que esta renta no se habia de disminuir ni reducir en ninguna eventualidad y en ningun tiempo.

Ahora bien; si el Tesoro hubiere de satisfacer los intereses de la deuda de la Iglesia habria de ser muy difícil á ésta, apesar de lo dispuesto en el convenio de 1859, eximirse de las cargas

que sobre la deuda del Estado pudieran imponerse, porque si respetable es el derecho que, fundada en el convenio sobredicho, la Iglesia podría alegar en tal caso, respetable también sería el que expondrían y harían valer los demás tenedores de la deuda nacional, diciendo que su propiedad procedía de un título de compra-venta, que es tan sagrado como el de indemnización que puede ostentar la Iglesia. Y no pagándose con un acervo común los intereses de una y otra deuda, es fácil á la nación, y así lo propone el ministro que suscribe á las Cortes, eximir á la Iglesia de las cargas que hayan de gravitar sobre las demás del Estado. La forma, pues, propuesta da á la Iglesia en el presente y en el porvenir unas seguridades que de otro modo no tendría.

No son éstas las únicas ventajas que han de obtenerse de la forma propuesta. Interviniendo en el pago de las obligaciones eclesiásticas la provincia y el municipio, se aproximarán mutuamente el clero y el pueblo, aumentándose los lazos de unión y de verdadera concordia que entre ambos es preciso que existan.

El pueblo demostrará más interés que hasta ahora en el régimen y administración temporal de la Iglesia, y el clero procurará merecer, por su imparcial y desapasionada conducta y por su constante alejamiento de las luchas políticas y de localidad, las simpatías de todos sus feligreses, sin distinción de matices, realizando la misión de paz y de amor que le encomendó el Divino Maestro, y habrá, en fin, un estímulo más para apresurar la reforma de la división territorial eclesiástica, por el interés directo que en ella tendrán las corporaciones populares para solicitar con insistencia la reorganización de los servicios eclesiásticos, en armonía con las necesidades y fuerzas productoras de los habitantes de cada comarca ó localidad.

Así ha acontecido en la provincia de Guipúzcoa, en la que, merced á la intervención que los municipios y la diputación y juntas generales tienen en la dotación del culto y clero, se ha logrado con perseverancia y sin agitaciones ni desórdenes introducir tales reformas en el arreglo parroquial, que su presupuesto, que en 1863 importaba la suma de 682.998-50 pesetas, ha quedado reducido en 1870 á la cantidad de 281.900, mejorándose á la vez considerablemente el servicio espiritual de aquellos pueblos. Y téngase en cuenta que esto sucede precisamente en las provincias cuya religiosidad tanto se enaltece, y en las que la influencia del clero parece tan decisiva.

Este antecedente lo invoca también el ministro que suscribe,



para demostrar que no puede tacharse de novedad un sistema que desde hace años funciona con aplauso de la Iglesia y del pueblo en ciertas comarcas de la Península y en las islas de Cuba y Puerto-Rico. En éstas los gastos de dotacion del culto y clero se satisfacen con sus peculiares recursos, clasificándolos en parroquiales y diocesanos, cubriéndose los primeros por los municipios y los segundos con cargo á los presupuestos generales de cada isla.

En el orden político encuentra asimismo apoyo la reforma propuesta porque aspira á realizar la asimilacion del mecanismo administrativo de toda la nacion española, dotándola de la uniformidad que debe constituir su principal carácter. En la necesidad de optar entre los dos sistemas que existen en el pais para el régimen económico de la Iglesia, el ministro debe proponer como base para la uniformidad el que considere más conveniente para los intereses generales, y desde luego propone aquel que atribuye á la provincia y al municipio la intervencion que hasta ahora ha ejercido el Estado.

Aconsejan ademas esta eleccion los principios de organizacion administrativa que ha sancionado la revolucion de 1868, segun los cuales los servicios públicos se dividen en generales, provinciales y municipales, satisfaciéndose, segun su respectiva naturaleza, con los fondos del Estado, de la provincia ó del municipio. Las necesidades religiosas revisten el carácter de municipales cuando se trata de la parroquia, y no traspasan los límites de la provincia en lo que se refiere á la diócesi.

Por eso, mientras á todos los españoles interesa la construccion de fortificaciones, arsenales y cuarteles necesarios para la defensa del territorio, la conservacion de los grandes archivos y bibliotecas nacionales, la de las universidades, en las que se da la enseñanza de los más elevados conocimientos humanos, y la de todos los edificios indispensables para la administracion general en sus varios órdenes, porque de todos estos servicios disfruta la generalidad de los habitantes de la nacion, solo á los vecinos de un pueblo concierne el sostenimiento de las escuelas de primeras letras, de las casas de beneficencia y del médico y farmacéutico, y á los de la provincia interesan únicamente los establecimientos de la segunda enseñanza, los de caridad con destino á los pobres y desvalidos de todo su territorio, y de todos aquellos institutos que satisfacen á necesidades peculiares de determinadas comarcas.

De este último carácter participa la institucion de la parroquia y de la diócesi; y reconociéndolo así el ministro que sus-



cribe, no introduce elementos extraños á nuestras costumbres ni perturba la organizacion y funciones propias de la sociedad civil y de la religiosa. Mas no ha de faltar quien, aparentando tomar la defensa de los municipios y de las provincias, alegue que se les impone un gravámen superior á sus fuerzas, con la obligacion de pagar los intereses de las inscripciones al clero parroquial y catedral, correspondiente á su respectiva demarcacion administrativa. Fuera cierto este agravio si el Gobierno obligase á dichas corporaciones á levantar estas nuevas cargas con sus actuales recursos, y sin darles medios de procurarse los demas que pudieran necesitar. Cuando el Estado incluyó en sus presupuestos la suma de 44.485.738 pesetas para pagar las dotaciones del culto y clero, como realmente pagó en el año económico de 1867 á 1868, los pueblos y las provincias entregaban al Estado 45.000.000 pesetas procedentes de la recaudacion de los consumos. Ahora el Estado devuelve á los pueblos la facultad de restablecer esta renta, y renuncia ademas á toda participacion en ella, habiendo de ser sus productos exclusivamente para los pueblos que la restablezcan, y en cambio exige de ellos un sacrificio mucho menor, porque la cantidad total que han de satisfacer por gastos de culto y clero, y que no pasará de 31.117.565-65 pesetas, es inferior en más de un tercio á lo que importaba la parte de la contribucion de consumos que el Estado percibía.

Es innegable, por lo tanto, que los pueblos salen notoriamente beneficiados con la reforma propuesta. Ademas, las corporaciones provinciales y municipales podrán crear nuevos arbitrios, con aplicacion á los créditos de su presupuesto eclesiástico, siempre que no graven la contribucion territorial más de lo que se establece en el proyecto de ley de presupuestos generales.

Quedarán además á beneficio de los ayuntamientos, y para cuenta de su presupuesto parroquial, los productos de la Santa Cruzada, deduciendo el importe de las partidas anteriormente mencionadas.

Alcanzaron estos productos en el último quinquenio la cifra de 3.500.000 pesetas, y serán tanto mayores cuanto más activo sea el celo que desplieguen los eclesiásticos en su predicacion, y cuanto más eficazmente vayan comprendiendo los pueblos que los mayores rendimientos de la gracia de Cruzada, vendrá á ser en último término una partida ménos en sus presupuestos de ingresos.

Al ceder estos productos á los ayuntamientos, no se intenta

invertirlos en usos diversos de aquellos á que han sido destinados por la Santa Sede. En el art. 38 del Concordato de 1851 se dispuso, que se invirtiesen en el pago del presupuesto del culto y clero; mas en el 14 del convenio adicional se previno que se reservasen para el culto. Y siendo mucho mayor que aquellos productos el presupuesto del culto parroquial que habian de satisfacer los ayuntamientos, es por demas obvio que con su cesion á estas corporaciones para tal objeto nada se hace contrario á la voluntad de la Santa Sede, que ha concedido la gracia á la nacion.

Las diputaciones provinciales y ayuntamientos habrán de acomodarse á los reglamentos en sus relaciones económicas con el clero parroquial, catedral y episcopal, gozando de la libertad que les corresponde respecto á la forma y reglas de distribucion de su presupuesto de ingresos; pero estarán sometidos á la accion y vigilancia del Gobierno en todo lo que se refiera al pago de las obligaciones eclesiásticas. En este punto no obrarán como corporaciones autonómicas, sino como representantes del Estado, en cuyo nombre han de cubrir estas sagradas atenciones. Despues de lo dicho no es de temer que el clero deje de percibir los intereses de las inscripciones que han de constituir la dotacion de los oficios ó piezas eclesiásticas. Mas el Estado, que en último término responde del pago de estos intereses, declara de nuevo que esta deuda, queda bajo la salvaguardia de la nacion, y gozará de todas, absolutamente de todas, las garantías que corresponden á las demas deudas del Estado, no habiendo de faltar jamas á la Iglesia el auxilio del Gobierno y de sus autoridades para obligar, en la forma que determinen los reglamentos, á los ayuntamientos y diputaciones provinciales al cumplimiento de las obligaciones que se les imponen.

#### IV.

El capital representado por las láminas intrasferibles no será el único recurso de la Iglesia. Ademas de las propiedades inmuebles que conserva, continuará percibiendo los cuantiosos emolumentos conocidos con los nombres de *derechos de estola y pie de altar*. Derivan éstos de las antiguas oblacones que solian hacer los fieles en dinero ó especie al recibir algunos sacramentos ó en ciertos actos religiosos. Y aunque semejantes ofrendas



fueron al principio enteramente voluntarias y de acuerdo con el espíritu del Evangelio, los clérigos no podían reclamarlas, ni aun en determinados casos recibirlas, como es de ver por las decisiones del Concilio de Illiberis en el siglo IV y del III de Letran en 1179, es lo cierto que, en atención sin duda al precario estado en que se halló después el clero secular, por las vicisitudes de su patrimonio territorial y por las exenciones de los regulares, se declararon obligatorias aquellas oblaciones por el Concilio IV de Letran, celebrado en 1215. Esta medida, que justificaban las extraordinarias circunstancias de aquellos tiempos tan calamitosos para la Iglesia, y que parecía destinada á desaparecer cuando se mejorase la situación económica del clero, continuó vigente, sin embargo, hasta el punto de que su riguroso cumplimiento da algunas veces márgen, á que los ignorantes crean que la dispensación de las cosas santas, depende del pago de las expresadas oblaciones. Mientras eran voluntarias, estaban dentro de la doctrina del Evangelio; ahora que son forzosas, su legitimidad está un tanto oscurecida, y su conveniencia religiosa es problemática.

Si el ministro que suscribe hubiera de inspirarse exclusivamente en sus particulares convicciones, prescindiendo de las consideraciones de gobierno que le obligan á tener en cuenta su posición oficial, se abstendría de proponer á las Cortes la confirmación del carácter jurídico de los derechos de estola y pie de altar, apesar de lo dispuesto en las leyes de 31 de Julio de 1839, 14 de Agosto de 1841, y principalmente en el art. 33 del Concordato de 1851. No obedecerá, sin embargo, á sus particulares inspiraciones, y para no aumentar el gravámen del presupuesto eclesiástico, dada la poco desahogada situación económica del país, propone la confirmación de lo dispuesto en las leyes anteriormente citadas.

Pero si bien el Estado habrá de dispensar á la Iglesia el auxilio de su fuerza por los medios establecidos en las leyes para hacer cumplir estas obligaciones eclesiásticas, es necesario que á su vez se reconozca el derecho que tiene para saber la extensión de las obligaciones que protege, á fin de no sancionar abusos cuya posibilidad no puede ser en absoluto contestada. El Estado, pues, ha de examinar los aranceles en que se fijan definitivamente y equitativamente estos derechos, conviniéndose con los ordinarios de las diócesis respecto á su cuantía, y estando facultado en último término para retirar el auxilio de su fuerza á las exacciones, que no tengan su fundamento en aranceles de mutuo acuerdo examinados y aprobados.



No es que el Estado intente mezclarse en los asuntos interiores de la Iglesia; pero desde que se solicita su auxilio para exigir, por título civilmente obligatorio, una prestación eclesiástica en dinero ó en especie, es manifiesto el derecho que le asiste para saber hasta qué punto ha de llevar el auxilio demandado. Los antecedentes, por otra parte, confirman la legitimidad de esta intervencion. En el reinado de Carlos III, el Consejo de Castilla conoció de las reclamaciones que con frecuencia hicieron entonces los pueblos y los párrocos, por exceso ó por insuficiencia de aquellos derechos, acordando la formacion de aranceles parroquiales donde no existian y la rectificacion de los antiguos al tiempo de revisar los sinodales de todos los obispados de España. Posteriormente, y en vista de que estas disposiciones no llegaron á tener cumplido efecto, se ordenó por la real instruccion de 31 de Julio de 1838 la reforma de los aranceles de los *derechos de estola y pie de altar* de todas las diócesis de España, previa audiencia de los ayuntamientos y diputaciones provinciales, por consecuencia de cuya disposicion se hicieron y aprobaron los de once obispados por diferentes reales órdenes dictadas en los años de 1838 y 1839; á fin de llevar á término la obra comenzada, se volvió en 29 de Setiembre de 1841 á excitar el celo de los prelados para que formasen y remitiesen al gobierno los aranceles que todavía no habian sido hechos, sin que, apesar de varias disposiciones dictadas al efecto en 1846 y en 1854, se haya logrado hoy el deseado término.

Por otra parte, la Iglesia misma es la más interesada en que de una vez se fije la cuantía de estos derechos, con la moderacion que reclama el estado precario de los pueblos, y que tambien demanda la alta dignidad del ministerio espiritual, á fin de que cesen de una vez para siempre esos escándalos en que con frecuencia incurren, no los ministros de la Iglesia, sino empleados subalternos del culto, que, aprovechándose de las angustias de las familias en los momentos en que la muerte invade el hogar doméstico, llevan sus codiciosas exigencias hasta una impia crueldad, ocasionando con esto la tibieza, cuando ménos, del sentimiento religioso en el corazon de los débiles, y el desprestigio de una angusta religion que busca la principal fuerza en la pureza de sus doctrinas y en su inagotable caridad.

La independencia que en el orden económico adquiere la Iglesia de España por las disposiciones del proyecto de ley adjunto, sería incompleta si al mismo tiempo el Estado reprodujese la absoluta prohibición, consignada en algunas leyes de desamortización, de adquirir aquella toda clase de bienes raíces. Por eso el ministro que suscribe, prestando á tan grave asunto la atención necesaria, ha procurado satisfacer las aspiraciones del clero en lo que tienen de legítimas y convenientes, pero sin comprometer los intereses generales de la nación.

Al amparo de las leyes de los primeros emperadores cristianos, la Iglesia pudo adquirir la propiedad de bienes inmuebles y atender con su renta á las necesidades del ministerio espiritual, con más holgura que durante el tiempo de las persecuciones.

Las vicisitudes de los tiempos obligaron al clero á tomar parte en las contiendas políticas y en las guerras civiles y extranjeras, recibiendo en premio de su eficaz cooperación extensos y ricos heredamientos, que, unidos á los que procedían de la liberalidad de sus piadosos hijos, y de otros muy diversos y variados títulos, acumularon bien pronto en manos de corporaciones eclesiásticas gran parte de la propiedad territorial de las naciones cristianas. Llegaron á temer los reyes, los grandes y los pueblos que la concentracion siempre creciente de la riqueza inmueble en manos del clero pudiera acarrear graves peligros, y se apresuraron á limitar la facultad, que hasta entonces había sido libre en la Iglesia, de adquirir bienes raíces. Y por lo que hace á nuestra nación, los fueros generales y particulares de los reinos en que se dividía la Península, consignaron numerosas disposiciones encaminadas á prohibir unas veces y limitar otras aquella facultad. Apesar de ellas, la Iglesia siguió acumulando grandes masas de bienes en la Península, lo mismo que en los demas pueblos de Europa, con lo que se ocasionaba grave daño al progreso económico por el estancamiento ó falta de circulacion de la riqueza territorial.

La corriente avasalladora de las ideas modernas, que reclamaban la movilizacion de toda propiedad, chocó de frente con la amortizada por la Iglesia, así como con la estancada en el patrimonio de otras clases y corporaciones civiles, y cual im-



petuoso torrente que salva los diques y arranca los seculares obstáculos que se oponen á su curso, destruyó aquella organizacion de la riqueza que se habia ido formando lentamente, bajo la proteccion de las leyes del Estado, y dejó á la Iglesia privada del gran caudal que hasta entonces habia sido la abundante fuente de sus recursos.

La justicia exige consignar aquí, que esta revolucion económica de los pueblos modernos, no tuvo su origen en ningun sentimiento de odio ni en ningun propósito de persecucion contra la Iglesia. De la manera que la propiedad territorial de ésta fué arrojada á la circulacion, lo fué tambien la propiedad vinculada de las clases nobles del Estado, y la estancada por otros establecimientos ó corporaciones civiles. Ó lo que es lo mismo, la tendencia á la individualizacion de la propiedad se impuso incondicional é ilimitablemente sobre todo lo que hasta entonces habia venido subsistiendo como propiedad corporativa.

El ministro que suscribe consigna un hecho político que ha sido general en la Europa moderna; pero se abstiene de examinarlo y de apreciarlo con el criterio de jurisconsulto. Basta á su objeto hacer constar que, en el concierto de las instituciones sociales, cuando cualquiera de ellas, inspirándose en un principio absoluto del derecho y prescindiendo del de las demas, se rompe ese equilibrio universal en que es fuerza que todas vivan, para que de su armónico movimiento salga vigorosa la obra del progreso humano, la legislacion establecida no tiene resistencia bastante para salvar los intereses creados á su sombra, y la opinion general, lentamente formada y robustecida cada dia con el alimento que la prestan los abusivos resultados del ejercicio de un derecho ilimitado, llega á imponerse y á destruir la antigua fórmula legal, para levantar sobre las ruinas una nueva, que podrá no estar modelada en un principio absoluto de justicia, pero que responderá ciertamente á una verdadera aunque transitoria necesidad social.

La ley escrita pierde su eficacia y muere en su espíritu y en su letra, cuando no satisface á una necesidad real que en su incesante movimiento llegue á sentir la sociedad.

Inútil, pues, y más que inútil perjudicial, sería para la misma Iglesia reproducir en este proyecto de ley la facultad ilimitada que en el Concordato de 1851 y en el convenio adicional de 1859, se le reconoció de adquirir la propiedad territorial. Si llegase un dia en que, al amparo de esta facultad, la propiedad inmueble de la Iglesia, que por razon de sus condiciones no



puede ménos de ser amortizada, amenazase ó fuese un obstáculo al desarrollo de la riqueza pública, y hasta un peligro para la existencia del Estado, los conflictos de otros tiempos volverían á surgir con la misma irresistible fuerza, con que entonces se presentaron, sin que ni la letra de la ley ni la voluntad de los gobiernos pudieran ser bastante poderosas, para salvar aquella propiedad contra el fuerte empuje de la opinion. Para los que duden de la gran verdad que contienen estas frases, hay una demostracion muda, pero elocuente. Apesar de esta facultad, que data en su nueva época de 1851, que no fué limitada en la ley de 1.º de Mayo de 1855, y que fué ratificada en el convenio adicional de 1859, la Iglesia no se consideró segura en estos veinte años, y se abstuvo de colocar su propiedad al amparo de la ley civil.

No es una garantía bastante firme para ella esa facultad ilimitada que el ministro que suscribe, siguiendo las corrientes, así de la opinion más radical en la política del país, como de la que se inspira en los intereses temporales del estado eclesiástico, pudiera presentar á las Córtes para que la dispensasen una nueva confirmacion. Un deber de franca lealtad y su ardiente deseo de buscar una garantía verdaderamente sólida y eficaz para la Iglesia, en el ejercicio de un derecho tan importante, le inspira el valor necesario para proponer á las Córtes que limiten la mencionada facultad, que sin esto no encerraria mas que peligros para el porvenir de la Iglesia. Conviene á ésta grandemente que la sociedad civil tenga de hoy para siempre la plena seguridad de que sus intereses económicos, no han de poder ser jamas comprometidos con la propiedad eclesiástica. Conviene á la Iglesia que, aun á costa de una parte de su derecho, se haga imposible en el porvenir la necesidad, ó siquiera la conveniencia por parte de la sociedad civil, de atacar la propiedad eclesiástica. Solamente de este modo podrá restablecer su patrimonio sin recelos ni temores procedentes de las terribles crisis por que ha pasado en otras épocas de su historia. Conviene, en fin, á la Iglesia armonizar desde luego sus intereses económicos con los generales del país, porque solamente así conseguirá la seguridad que necesita para ejercer los derechos que la ley civil le reconoce.

Acepte, pues, de buen grado, ya que en su beneficio se establece, una limitacion á su facultad de adquirir, cuando por otra parte esa limitacion no la imposibilita para aumentar su caudal, hasta reunir lo necesario para cubrir holgada y aun lujosamente sus atenciones religiosas y satisfacer su constante

aspiracion á socorrer con mano pródiga al hombre en sus privaciones y en sus dolores.

No es, por otra parte, nueva en la historia de la legislacion de los pueblos cultos, la limitacion que el ministro propone á las Córtes. Por el contrario, en todas ellas se registran disposiciones que tienen por objeto limitar de uno ú otro modo las adquisiciones de la Iglesia.

En las naciones constitucionales de Europa prevalecia el sistema de la fiscalizacion del Estado en todos los actos de adquisicion de propiedad eclesiástica. En Inglaterra y en los Estados-Unidos de América prevalece, por el contrario, el que combina la libertad interior de la Iglesia con el interes general de la sociedad civil, por medio de la fijacion de un tipo máximo de propiedad de todas las clases que pueda adquirir cada una de las atribuciones eclesiásticas.

Precedentes de este sistema registra tambien nuestra antigua legislacion. Las Córtes celebradas en Toledo en 1526 pidieron al emperador Carlos V, que nombrase visitadores para que reconociesen los monasterios y las iglesias, y «aquello que les pareciere que tienen demas de lo que han menester para los gastos, segun la comarca donde están, les manden que lo vendan, y les señalen qué tanto han de dejar para la fábrica y gastos de las dichas iglesias y monasterios y personas de ellos».

Siguiendo estos precedentes, y aceptando el sistema que sostienen los dos pueblos más libres del mundo, y sin entrar aquí en abstractos razonamientos sobre si la capacidad jurídica de las asociaciones en el orden civil procede directamente del derecho individual de asociacion ó es una concesion del Estado, el ministro de Gracia y Justicia tiene el de honor proponer á las Córtes que reconozcan y dispensen la proteccion de la ley civil á la propiedad de todas clases: que la parroquia y la diócesi adquieran hasta una cantidad cuyo rédito no exceda del total de la dotacion del culto y clero que respectivamente les corresponda por este proyecto de presupuesto, teniendo, sin embargo, en cuenta que para hacer esta regulacion no han de computarse los edificios y objetos destinados al culto, las casas episcopales ó parroquiales, las de los seminarios, los cementerios, ni las ofrendas voluntarias de los fieles.

Las consideraciones que el ministerio de Gracia y Justicia ha tenido presentes para reconocer en la parroquia y en la diócesi, el carácter de personas jurídicas capaces de derechos y obligaciones civiles, no tienen la misma fuerza, en opinion del



que suscribe, si se trata de aplicarlas á las demas asociaciones que el sentimiento religioso ha creado en el seno de la Iglesia con los nombres de cofradías, hermandades, congregaciones y órdenes monásticas. Sin duda alguna los fieles en España tienen el derecho de asociarse para fines religiosos. Sin duda estas asociaciones pueden obedecer, en su organizacion y modo de ser, á las leyes de la Iglesia en cuanto no se opongan á las leyes comunes del Estado. El art. 17 de la Constitucion vigente extiende su sancion á los fines morales y religiosos como á los demas de la vida humana.

Y tiempo es ya de que los partidos liberales depongan los restos de una preocupacion que, si tuvo una razon de ser muy legítima en otros tiempos, debe ya depositarse en el panteon de lo pasado por los que, firmemente convencidos de la fuerza incontrastable de la libertad para curar los mismos males que á su sombra germinen, proclaman la muerte eterna del privilegio ante el triunfo glorioso y definitivo de la ley comun.

Por grandes que hayan sido, como desgraciadamente lo fueron, los abusos que, así en el órden religioso como en el político, habian oscurecido la pureza primitiva de las órdenes monásticas; por mucho que éstas se hubiesen ido apartando del fin santo y civilizador de su instituto, hagámosles, señores, justicia, para no ser ingratos; porque sin los eminentes servicios que prestaron en su tiempo á la causa del progreso humano, la Europa moderna no hubiera quizas adquirido en esta época el vivificante calor de la libertad, las fuerzas mismas con que destruyó al fin los obstáculos que aquellas en su decadencia habian desgraciadamente levantado á la marcha de la sociedad por las espaciosas sendas del progreso.

Paguemos con el corazon agradecido un tributo de justicia á esas en un tiempo benéficas instituciones con que, como grandes monumentos levantados en testimonio eterno de su accion civilizadora, la Iglesia fué sembrando en su marcha el inmenso campo de los siglos; y al concederles hoy los beneficios de la ley comun, tengamos la seguridad de que, si vuelven á aparecer entre nosotros, vendrán á la nueva vida exentas de las grandes sombras con que la accion disolvente del tiempo habrá manchado su pureza primitiva, y con las condiciones necesarias para poder subsistir entre las instituciones de la sociedad moderna.

Pero de todo esto lo que deducirse puede es la necesidad que hay de derogar el art. 6.º del decreto-ley de 18 de Octubre de 1868, que si entonces fué producto lógico de las circunstan-



cias, no consiente sostener por más tiempo el principio de justicia, que es el elemento vigoroso de la libertad.

Mas al hacer esta derogacion, dando á la historia una prueba más del respeto que el espíritu religioso merece á los hombres que profesan la idea moderna, necesario es tambien consignar muy alto que las asociaciones mencionadas no gozarán de ningun derecho privilegiado, y habrán de vivir sometidas al comun, á cuyo tenor se regularán los efectos jurídicos de los actos más solemnes de sus individuos.

Respetado de este modo el precepto constitucional y reconocida la libertad de asociacion para fines religiosos, como lo está tambien para los demas fines honrados de la vida, ¿gozarán las congregaciones religiosas, independientemente de la concesion del Estado, de una perfecta personalidad jurídica, y serán capaces de los derechos y obligaciones civiles? Tampoco es preciso resolver aquí de un modo absoluto esta cuestion gravísima, para cuya solucion nuestro derecho escrito no contiene mas que fórmulas parciales y concretas para determinadas clases de asociaciones, como las mercantiles.

El ministro de Gracia y Justicia se anticipa á proponer á las Córtes, el conocimiento de la personalidad de las órdenes religiosas que se funden cumpliendo los requisitos establecidos en las leyes. Pero no por consideraciones meramente abstractas, sino por razones de conveniencia pública análogas á las que anteriormente se han expuesto, propone tambien á las Córtes que, por regla general, limiten esa capacidad para la propiedad territorial á la adquisicion, conservacion y trasmision del templo y de la casa que aquellas corporaciones hayan de ocupar, sin perjuicio de que el Gobierno quede autorizado para extender en cada caso particular esta capacidad á más bienes inmuebles, ya que no es posible fijar *à priori*, y por una regla general, como se ha hecho respecto á la diócesi y á la parroquia, el tipo máximo del valor de la propiedad que necesitarán adquirir.

Ha concluido el ministro que suscribe de exponer los principales fundamentos del proyecto de ley que somete á la deliberacion de las Córtes.

El pensamiento íntimo que domina todas sus disposiciones consiste en establecer definitivamente, sobre bases sólidas, las relaciones económicas entre la Iglesia y el Estado, procurando su mutua independencia hasta donde es hoy posible. Con la mayor imparcialidad ha propuesto la manera más conveniente de conciliar los apuros del Tesoro público, con el cumplimiento del art. 21 de la Constitucion, estableciendo con leves modifi-

caciones el régimen adoptado por el Concordato de 1851 y por el convenio adicional de 1859 para la dotacion de la Iglesia.

Permitan las Córtes al ministro que suscribe, manifestar la conviccion firmísima que abriga de que, si este proyecto llega á merecer su aprobacion, será un gran progreso en nuestro derecho público, y señalará el principio de una nueva y más feliz era para la Iglesia católica y para la libertad política de nuestro país.

Fundado en tan importantes consideraciones, el ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el Consejo de ministros y autorizado por S. M., tiene el honor de someter á la deliberacion de las Córtes el siguiente

#### PROYECTO DE LEY.

Artículo 1.º La nacion habrá de contribuir anualmente á la Iglesia, desde 1.º de Enero de 1872, con la cantidad de 31.147.065-65 pesetas para sus atenciones permanentes.

Esta cantidad se distribuirá en la forma expuesta en el adjunto presupuesto.

Art. 2.º Las cantidades comprendidas en el capítulo 1.º se satisfarán por cuenta de las limosnas de Cruzada.

Art. 3.º Para el pago de las partidas comprendidas en los capítulos 2.º, 3.º y 4.º se emitirán láminas de la renta del 3 por 100 consolidado por un capital cuyo interes anual equivalga á la suma de aquellas.

Art. 4.º Las partidas del capítulo 5.º se satisfarán por cuenta de la obra pia de los Santos Lugares de Jerusalem.

Art. 5.º Las láminas mencionadas en el art. 3.º de esta ley, se expedirán á nombre de cada uno de los oficios y corporaciones eclesiásticas á que se refieren los capítulos 2.º, 3.º y 4.º del presupuesto. Cada oficio ó corporacion recibirá tantas láminas cuantos sean los conceptos á que corresponda su dotacion.

Cada lámina representará un capital proporcionado á parte de la suma señalada en el respectivo artículo del presupuesto, que corresponda al oficio ó corporacion á cuyo favor se expida, tomando como base para la distribucion que ha de hacerse, la cantidad que hasta ahora venía señalada á cada partícipe en los presupuestos hasta ahora vigentes.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los seminarios conciliares, cada uno de los cuales percibirá una lámina



nominativa por un capital proporcional á las cantidades que respectivamente se les señalan en el estado adjunto á esta ley.

Art. 6.º Los intereses de las láminas expedidas se pagarán mensualmente á los poseedores de los oficios eclesiásticos y á las corporaciones á quienes corresponda, ó á sus poder-habientes.

Art. 7.º Las diputaciones provinciales pagarán los intereses de las láminas correspondientes al capítulo 2.º del presupuesto. Para ello lo distribuirán entre sí proporcionalmente á la parte que representen en cada diócesi, calculada por el número de habitantes.

Art. 8.º Los ayuntamientos satisfarán los intereses de las láminas de los capítulos 3.º y 4.º del presupuesto correspondiente á sus respectivas demarcaciones.

Art. 9.º Los ayuntamientos percibirán el importe recaudado en sus respectivas demarcaciones por limosnas de Cruzada, con deducción de la cantidad necesaria para el pago de las atenciones del capítulo 1.º del presupuesto.

Art. 10.º El Gobierno compelerá á las diputaciones provinciales y ayuntamientos morosos al pago por los medios que se establezcan en los reglamentos.

Art. 11. Las cantidades señaladas en los capítulos 2.º, 3.º y 4.º del presupuesto no sufrirán disminucion aunque se reduzca el número de oficios ó corporaciones eclesiásticas actuales ó el de individuos de éstas, habiendo de canjearse en tal caso las láminas que ahora se emitan, por otras que se expidan á favor de los oficios ó corporaciones que definitivamente hayan de existir.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior:

1.º Las cantidades señaladas á los conventos de religiosas que llegasen á extinguirse, cuyas láminas serán amortizadas en beneficio de los ayuntamientos respectivos.

2.º Las cantidades señaladas para el culto y clero de cada parroquia, si por resultado de la reforma de la actual division parroquial llegara á aumentarse la parte que por aquellos conceptos les corresponde ahora hasta más del 50 por 100, en cuyo caso se suprimirá lo que exceda de dicho 50 por 100 á favor del ayuntamiento respectivo.

Art. 12. Los canónigos y beneficiados de las iglesias catedrales en ningun caso podrán percibir una cantidad superior á la que hasta ahora les estaba señalada, quedando en tal caso el resto de la dotacion que represente la lámina expedida á favor de la corporacion respectiva á disposicion del ordinario



de la diócesi, para invertirle en las atenciones ordinarias de la misma.

También podrá invertirse en estas atenciones la asignación de las sillas episcopales correspondiente al tiempo que se hallasen vacantes.

Art. 13. Las sillas episcopales, iglesias y cabildos catedrales, seminarios conciliares y parroquias, podrán adquirir y conservar la propiedad de toda clase de bienes cuyos productos anuales no excedan de una cantidad igual á la que les corresponda por el adjunto presupuesto.

Para hacer esta computación no se tomarán en cuenta los edificios y objetos destinados al culto, cementerios, casas de seminarios, casas episcopales y parroquiales, á razón de una por cada uno de estos oficios, y las ofrendas voluntarias de los fieles.

Art. 14. Las congregaciones y órdenes religiosas existentes en la actualidad, ó que en lo sucesivo se fundaren con arreglo al art. 17 de la Constitución, no podrán adquirir y conservar más propiedad territorial que la de los edificios necesarios para el culto y para la habitación, á no ser que obtuviesen una autorización especial del Gobierno para poder aumentar por aquel medio su patrimonio.

Art. 15. Se procederá inmediatamente, por acuerdo de ambas potestades, á la formación ó reforma de los aranceles de los derechos de estola y pie de altar, los cuales continuarán formando parte de la dotación diocesana ó parroquial, según los casos.

Los aranceles mencionados, después de ser definitivamente aprobados, tendrán el carácter de civiles para los efectos de la exacción y pago de los derechos que en ellos se fijen.

#### ARTÍCULO TRANSITORIO.

Por el presupuesto general del Estado se satisfará anualmente la cantidad de 2.928.453-48 pesetas en él consignada, la cual irá reduciéndose á medida que vayan disminuyendo las clases para cuya congrua sustentación se destinan.

#### ARTÍCULOS ADICIONALES.

1.º Se derogan todas las leyes y disposiciones contrarias á lo que en ésta se dispone, y señaladamente el artículo 6.º del

decreto-ley de 18 de Octubre de 1868, en cuanto por él se prohibieron la admision de novicias y las nuevas profesiones en los conventos de religiosas.

Los actos de profesion y demas que ejecuten los individuos de congregaciones ó comunidades religiosas, no producirán más efectos civiles que los que les correspondan segun las leyes comunes.

2.° El Gobierno dictará los reglamentos necesarios para llevar á efecto lo dispuesto en esta ley.

## PRESUPUESTO ECLESIASTICO GENERAL.

### CAPITULO PRIMERO.

#### OBLIGACIONES GENERALES ECLESIASTICAS.

Pesetas.

Art. 1.°....	93.922-50	Para las fábricas de San Pedro y San Juan de Letran en Roma.
Art. 2.°....	30.000	Para el nuncio de Su Santidad en España.
Art. 3.°....	74.500	Para gastos del personal y material del Tribunal de la Rota.
Art. 4.°....	37.200	Para gastos de personal y culto de la colegiata de Covadonga.
Art. 5.°....	69.700	Para gastos reproductivos del personal y material de la bula de Cruzada é indulto cuadragesimal.

305.322-50

### CAPITULO II.

#### Presupuesto diocesano.

#### OBLIGACIONES PROVINCIALES.

Pesetas.

Art. 1.°....	30.000	Para el metropolitano primado.
Art. 2.°....	5.000	Para gastos de administracion y visita del metropolitano primado.



	Pesetas.	
Art. 3.º.....	90.000	Para los demas arzobispos metropolitanos.
Art. 4.º.....	16.000	Para gastos de administracion y visita de los metropolitanos á que se refiere el artículo anterior.
Art. 5.º.....	263.000	Para el personal de todos los cabildos metropolitanos.
Art. 6.º.....	120.000	Para el clero catedral metropolitano benefical.
Art. 7.º.....	87.500	Para el culto en todas las iglesias catedrales metropolitanas.
Art. 8.º.....	412.500	Para los obispos sufraganeos.
Art. 9.º.....	99.000	Para los gastos de administracion y visita de los obispos sufraganeos.
Art. 10.....	1.122.500	Para el personal de los cabildos catedrales sufraganeos.
Art. 11.....	396.000	Para el clero catedral benefical de las iglesias sufraganeas.
Art. 12.....	412.500	Para el culto en las iglesias catedrales sufraganeas.
Art. 13.....	210.240	Para 57 seminarios conciliares.
	<u>3.264.240</u>	

## CAPÍTULO III.

**Presupuesto parroquial.**

## OBLIGACIONES MUNICIPALES.

	Pesetas.	
Art. 1.º.....	17.111.843	Para el personal de párrocos.
	2.428.350	Para el personal de coadjutores perpetuos parroquiales.
Art. 2.º.....	7.504.790	Para culto de las iglesias parroquiales.
	<u>27.044.983</u>	

## CAPÍTULO IV.

## CONVENTOS DE RELIGIOSAS.

	Pesetas.	
Art. único:	483.920	Para 288 conventos de religiosas.

## PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO.

## CAPÍTULO V.

INSTITUTO DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE MADRID Y DE BARBASTRO.

	Pesetas.	
Art. 1.º....	18.850	Para el noviciado de las Hijas de la Caridad de Madrid.
Art. 2.º....	250	Para el culto del templo de las Hijas de la Caridad de Barbastro.
	19.100	
	31.117.565 50	Total del presupuesto eclesiástico.

Madrid 21 de Setiembre de 1872.—El ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Rios.



## DICTÁMEN DE LA COMISION

SOBRE EL PROYECTO DE LEY FIJANDO EL PRESUPUESTO DE OBLIGACIONES ECLESIASTICAS Y LAS RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE EL CLERO Y EL ESTADO.

La comision encargada de emitir dictámen acerca del proyecto de ley en que se fijan el presupuesto de obligaciones eclesiásticas y las relaciones económicas entre el clero y el Estado, tiene hoy el honor de presentar al Congreso su informe, de acuerdo en todo lo esencial, con el mencionado proyecto.

Grave siempre y ocasionado á conflictos todo cuanto á las relaciones de la Iglesia con el Estado se refiere, siquiera se limite á lo que, por tocar á intereses temporales del clero, más indudablemente corresponde á la accion de la potestad civil, no podia ménos este asunto de exigir un detenido estudio y un no ménos prolijo exámen. Así ha procurado verificarlo esta comision en repetidas conferencias á que el señor ministro de Gracia y Justicia ha concurrido, resultando de ellas el proyecto que somete á la deliberacion del Congreso, y que solo difiere del que el Gobierno ha presentado en la forma y en algun punto de secundaria importancia.

Afortunadamente para la comision, el extenso y luminoso preámbulo que al referido del Gobierno acompaña, excúsala de un trabajo que no podría desempeñar con más brillo ni mejor acierto, bastándola decir que acepta la doctrina teórica y el desarrollo práctico que sirven de base y aun de razonado comentario á los artículos de la ley. Procúrase conciliar en ésta lo que nunca debiera haberse visto separado, ni mucho ménos en azarosa y á veces hostil discordancia: la dignidad y libertad de la Iglesia católica en todo lo que al dogma, á la disciplina interna y á las funciones del culto atañe, y la autoridad incuestionable del Estado para determinar las relaciones mutuas de naturaleza meramente económica, ó que más ó ménos directamente se rocen con los derechos, deberes é intereses de la administracion política y civil.

Desenvolviéndose y acatando por todos, absolutamente por todos los que del título de ciudadanos españoles no se despojen, los preceptos de la ley fundamental, es como ha de llegarse á la era nueva y profundamente provechosa para la Iglesia, que con razon anuncia el Gobierno, porque solo así finalizará esa lamentable pugna que una y otro han venido sosteniendo, que la historia señala con justa censura, que ni á los intereses políticos ni á la santidad de la Iglesia favorece, y que en vano ha tratado de suavizarse por medio de concordatos nunca bien observados, y que poco más han sido que débiles aplazamientos.

Sin llegar al extremo de la absoluta separacion de la Iglesia y el Estado, nuestra Constitución política ha establecido toda la independencian que reclaman las necesidades de la civilizacion, cuya bandera nunca habrá de abandonar la Iglesia católica. Al garantizar en el art. 21 el ejercicio de todo culto, establece la única proteccion, el único apoyo *especial* que al católico y sus ministros debe, y que consiste en su mantenimiento; y esta libertad por un lado, y este apoyo por otro, son elementos bastantes para que la Iglesia goce *la libertad de vivir vida propia y la de propagarse segun los medios de su organizacion*, que en son de oposicion y protesta reclama un ilustre prelado, confundiendo, por efecto de una preocupacion, sin duda de buena fé, la libertad con el privilegio.

Pues bien; este compromiso de la nacion, no del Estado, que no significan lo mismo estas palabras, es el que cumplidamente llena el proyecto en su conjunto y en sus pormenores. Estos servicios, como todos los que contribuyen á la vida ordenada de los pueblos, divídense en generales, que, segun determina el art. 2.º, se hallan á cargo del Estado; provinciales, referidos en el art. 3.º, y municipales, en cuyo número entra el culto y clero parroquial, cuya dotacion constituye la parte más importante, de más trascendencia, y que una vez lealmente aceptada y cumplida, más fecunda ha de ser en benéficos resultados.

La explicacion y defensa que de todos estos capítulos hace el Gobierno, y que la comision admite sin vacilacion alguna, la eximen de molestar al Congreso repitiendo aquellos razonamientos, pero no de responder, aunque sumariamente sea, á los contenidos en las exposiciones que los prelados y alguna que otra corporacion civil han elevado.

Lamenta sinceramente la comision que el celo de los ilustres exponentes haya acalorado su espíritu hasta el punto de censurar en términos nada benévolos el preámbulo del proyecto



del Gobierno, afirmando que en él se mezcla artificiosamente la verdad con el error, la razon con el sofisma, la sana doctrina con los principios más detestables, y llegando alguno de aquellos á añadir que las disposiciones del proyecto son *contra el dogma católico, que determina la mision del apostolado, su magisterio, su encargo sobre la tierra, su accion continua y perseverante*. En vano la comision, que de católica se precia, ha buscado hechos ó razones que tales asertos comprobasen: no ha acertado á descubrirlos, y ha quedado con el sentimiento de temer que espíritus más apasionados puedan creer, que se ofende la alteza de los dogmas cuando se mezclan y confunden con lo que en esferas tan inferiores á ellos se agita. *obsta la y*  
 ¿Será acaso obstáculo insuperable para este arreglo el Concordato de 1851 y su adicional de 1859? No dirá esta comision lo que en circunstancias análogas informaba otra, compuesta de personas tan piadosas como entendidas, á las Córtes de 1823; no calificará como ella los concordatos; ni aun repetirá siquiera las palabras con que anunciaba su juicio respecto á que «si nuestros reyes, por conservar la paz, se prestaron á aquellos sacrificios, hoy (1823), que aquella curia nos declara la guerra y nos falta á todos los pactos consignados en ellos, la nacion está en el caso de recobrar sus derechos».

Complácese esta comision en confesar que las relaciones eclesiásticas no tienen toda la tirantez que en aquella otra época, aunque falte algo á la cordialidad que el bien del Estado y de la Iglesia exigen, y no deja de notarse por parte de ésta alguna omision en el cumplimiento de ciertas reformas concordadas, y no está, por tanto, enteramente libre de responsabilidad en la misma infraccion que ahora lamenta. Nada es ménos necesario que el descender á ese campo de recriminaciones, cuyo calor no alteraría, sin embargo, la serena imparcialidad que ha de presidir á la resolucion de las Córtes. Baste observar solamente que, prescindiendo de diferencias fáciles de apreciar entre los *tratados internacionales* y las concordias ó convenios que median entre potestades de tan diversa naturaleza como la civil y la eclesiástica, la ley fundamental ha introducido precisa é indeclinablemente modificaciones en parte de lo acordado, que antes pudo hallarse en armonía con la legalidad existente, y que por más fuerza que á esos convenios quisiera darse, nunca podria ser tal que impidiese á la nacion el alto, el grande, el imprescriptible derecho de constituirse en la forma más adecuada á sus necesidades. Y ademas de esto, sin acudir á las poderosas consideraciones que respecto á este punto consigna

el Gobierno en su preámbulo, la verdad es que el proyecto de ley se atempera, en todo cuanto es legal y económicamente posible, á las reglas del Concordato, cuya inexecucion en importantes artículos no es imputable al Estado, que en vano ha venido pugnando para que, por ejemplo, se determinaran los límites y demarcacion de las diócesis, y se procediese inmediatamente á la nueva circunscripcion de parroquias, y se llevase á puntual efecto la permutacion de los bienes que obran en poder del clero, á quien fueron devueltos por consecuencia de ese mismo Concordato.

La comision apenas puede persuadirse de que los ilustres prelados exponentes hayan creido algún tanto justificadas las quejas y declamaciones que en sus escritos abundan. Cuando confesaban que la dotacion del clero, segun el Concordato que invocan como ley incontrovertible, *era incierta y aun incongrua*; cuando la Santa Sede, deseosa de que se llevara inmediatamente á efecto *una dotacion cierta, segura é independiente* para el culto y para el clero, accedia, en obsequio *á la mayor utilidad de la Iglesia*, á que en compensacion de los aludidos bienes recibiera títulos é inscripciones intrasferibles del 3 por 100; cuando de hecho ha estado prefiriendo á esa independencia de la dotacion, el cobrar dependiendo del presupuesto y de las nóminas, ¿cómo se explica que ahora, en el momento que se le aseguran las dotaciones por el estilo que prevenia el Concordato, levante esos clamores y afirme con seriedad que el proyecto tiende á la destrucccion y ruina de la Iglesia católica apostólica romana?

La comision considera oportuno ofrecer á la meditacion del Congreso, un dato suficiente para el doble objeto de evidenciar que la ley de que va á ocuparse, satisface dignamente todas las necesidades del culto y clero garantidas por la Constitucion, y de colocar en su verdadero punto de vista las duras acusaciones que contra ella se fulminan. Segun cálculos oficiales, las fincas y censos pertenecientes al clero, enajenadas desde 1855 á fin de Junio de 1872, han producido 543.783.504 pesetas, y las que se hallan sin enajenar están avaloradas en 72.866.281; total 616.249.785. El presupuesto, segun el art. 3.º del proyecto que á continuacion se inserta, asciende á 30.793.143 pesetas anuales; y capitalizando esta suma al tipo medio de un 5 por 100, resulta un capital equivalente al anterior, y tanto, que importa 615.862.860. Si los enemigos del proyectado arreglo hubiesen hecho este sencillo ajuste, habrian evitado la contradiccion de combatir en aquel lo que aplauden y conceptúan satisfactorio en el Concordato.



Verdad es que califican de irrisoria la dotacion presupuestada, creyendo que es carga insoportable para los pueblos mismos á quienes los prelados, en su protesta, ofrecen la perspectiva de señalarles las cuotas en frutos ó en dinero, con que los fieles deban atender á tan urgentes é imperiosas necesidades; pero tampoco es difícil demostrarles el error que padecen. El rendimiento de la contribucion de consumos puede calcularse aproximadamente, por la cantidad que produjo en el ejercicio de 1867-68, en el cual excedió de 90 millones de pesetas, correspondiendo de esta suma á los pueblos que no eran capitales ni puertos habilitados más de 49 millones. El producto de Cruzada, que se destina tambien á cubrir esta obligacion, se graduá por término medio, segun el quinquenio de 1865 á 1869, en 3.455.555 pesetas; de suerte que, para una deuda de 30 millones, hay recursos por la suma de 93, muy sobrados para levantar aquella carga aun cuando se lleve á cabo el impuesto del 15 por 100 que reserva el Estado, sobre cuya oportunidad no toca decidir á esta comision. Y esto aun en el caso de que se realizase la amenaza que dejan entrever los prelados al indicar que el recurso de los fondos de Cruzada, desaparecerá en el momento que los fieles sepan que su importe se entrega á los ayuntamientos y que se ha variado el objeto de su inversion, ¡Mal juicio tendrian formado de la religiosidad de los fieles si los creyesen capaces de renunciar á las gracias de la Cruzada, por un motivo que, sobre ser frívolo, no es exacto! Porque, en efecto, el Concordato de 1851 destina dichos fondos al mencionado objeto de sostener el *culto y clero* (art. 98, núm. 2.º), y el adicional de 1859 los dedica tambien (art. 14) *al culto*. ¿Será acaso que por haber vuelto á la disposicion del primitivo Concordato, hayan de tener los fieles motivo aparente para faltar á un deber religioso, desoyendo la voz de sus prelados, que no pueden dejar de recordárselo?... No abriga la comision tan injustificado recelo.

Bien quisiera no molestar sin necesidad la atencion del Congreso; pero en asunto tan grave ha creido que no la era lícito prescindir de tomar en cuenta, lo que contra el proyecto se alega en las peticiones que tambien para su exámen se la han comunicado. Completa así la exposicion y defensa de los principios que sirven de base á su dictámen, porque rebatiéndose los argumentos se fortifican las razones en favor de aquello contra que se arguye. Verificado de esta manera, aunque tal vez con demasiada brevedad, y sin entrar en la apreciacion de pormenores á que la discusion oral podrá dar margen, pasará la

comision á detallar los puntos en que aparece en su proyecto modificado el del Gobierno, pero con su acuerdo y conformidad. Entre ellos es el de más importancia el que hace relacion al derecho de adquirir, respecto al cual los artículos 13 y 14 establecian que las sillas episcopales, iglesias y cabildos catedrales, seminarios conciliares y parroquias, pudiesen adquirir y conservar la propiedad de toda clase de bienes, cuyos productos anuales no excediesen de una cantidad igual á la que les correspondiera por el presupuesto, y que las congregaciones y órdenes religiosas existentes en la actualidad, ó que en lo sucesivo se fundaren con arreglo al art. 17 de la Constitucion, no pudiesen tampoco adquirir y conservar más propiedad territorial que la de los edificios necesarios para el culto y para la habitacion.

No dejó la comision de reconocer la fuerza de los motivos que al Gobierno decidieron á proponer la disposicion mencionada; recordó la historia de esas adquisiciones, principalmente desde que dejaron de seguir el movimiento que imprimia el cambio de situaciones políticas y de atemperarse á las verdaderas necesidades de la Iglesia; pero creyó por fin, y en ello convino igualmente el Gobierno, que mucho más que estas consideraciones vale la de que bajo instituciones libres como las que nos rigen, no deben las corporaciones eclesiásticas ser colocadas en situacion legal ménos amplia, que todas las demas cuya legítima formacion reconoce nuestra ley fundamental. El problema aquí consiste en conciliar la facultad de adquirir con la prohibicion de amortizar; y ésta, que debe ser ley general de toda propiedad corporativa, es la que para las religiosas ha adoptado con la amplitud que contiene el art. 13, consignando el derecho ilimitado de adquirir y la obligacion de enajenar en un plazo cómodo los bienes inmuebles, para invertir su producto en láminas intrasferibles del 3 por 100, que tienen las ventajas de la perpetuidad sin los perjuicios de la amortizacion. Los grandes principios de justicia y de derecho están por cima de las preocupaciones de partido, y cubren igualmente á los amigos que á los adversarios.

En el art. 2.º la comision ha hecho un aumento de 27.000 pesetas para el sostenimiento de la capilla de los reyes de Granada. Una vez conservada á cargo de la nacion la colegiata de Covadonga, lógico era aplicar igual beneficio á la de Granada, ya que una y otra son recuerdo glorioso de nuestra historia, primero y último canto de la gran epopeya de ocho siglos de lucha por la religion y por la unidad política, que simbolizan



las grandes figuras de Pelayo en Covadonga y los Reyes Católicos en Granada.

Por último, el Congreso observará que en el art. 3.º, capítulo de obligaciones provinciales, la partida de 210.240 pesetas, que el Gobierno asignaba para 57 seminarios conciliares, se fija con aplicacion á la enseñanza del clero. La comision ha creido que no era éste el lugar oportuno para resolver acerca de la existencia de los seminarios. Correspóndela solo auxiliar una funcion tan importante como la de educar é instruir al clero, y reserva á la Iglesia toda su libertad de accion, que desenvolverá como más acertado conceptúe, utilizando las libertades de enseñanza y asociacion, principios de fecundos resultados que, como todos los que en la razon se fundan, no pueden ménos de concluir siendo por todos aceptados.

No estima necesario molestar por más tiempo al Congreso, y concluye sometiendo á su aprobacion el siguiente

PROYECTO DE LEY.

Artículo 1.º La nacion contribuirá anualmente á la Iglesia, desde 1.º de Enero de 1873, con la cantidad de 31.144.565-50 pesetas para sus atenciones permanentes.

Esta cantidad se distribuirá en la forma que se expone en los artículos siguientes.

Art. 2.º Las partidas que á continuacion se expresan constituyen las obligaciones generales eclesiásticas, y se satisfarán por cuenta de las limosnas de Cruzada:

	Pesetas.
1.ª Para las fábricas de San Pedro y San Juan de Letran en Roma.....	93.922-50
2.ª Para el nuncio de Su Santidad, siempre que resida en España desempeñando las funciones de su cargo.....	30.000
3.ª Para gastos del personal y material del tribunal de la Rota.....	74.500
4.ª Para gastos del personal y culto de la colegiata de Covadonga.....	37.200
5.ª Para id. id. de la capilla de Granada.....	27.000
6.ª Para gastos reproductivos del personal y material de la bula de Cruzada é indulto cuadragesimal.....	69.700
Total.....	332.322-50

Art. 3.º Para el pago de las partidas que á continuacion se enumeran, y que constituyen las obligaciones provinciales y municipales eclesiásticas, se emitirán láminas de la renta del 3 por 100 consolidado por un capital cuyo interes anual equivalga á la suma de ellas.

## OBLIGACIONES PROVINCIALES.

	Pesetas.
1.ª Para el metropolitano primado.....	30.000
2.ª Para gastos de administracion y visita del metropolitano primado.....	5.000
3.ª Para los demas arzobispos metropolitanos..	90.000
4.ª Para gastos de administracion y visita de los metropolitanos á que se refiere la partida anterior.....	16.000
5.ª Para el personal de todos los cabildos metropolitanos.....	263.000
6.ª Para el clero catedral metropolitano benefical.....	120.000
7.ª Para el culto de todas las iglesias catedrales metropolitanas.....	87.500
8.ª Para los obispos sufraganeos.....	412.500
9.ª Para los gastos de administracion y visita de los obispos sufraganeos.....	99.000
10. Para el personal de los cabildos catedrales sufraganeos.....	1.122.500
11. Para el clero catedral benefical de las sillas sufraganeas.....	396.000
12. Para el culto en las iglesias catedrales sufraganeas.....	412.500
13. Para la ensenanza del clero.....	210.240
Total.....	3.264.240

El gobierno establecerá en el reglamento respectivo la proporcion en que ha de ser distribuida á cada diócesis esta última partida.

## OBLIGACIONES MUNICIPALES.

	Pesetas.
1.ª Para el personal de párrocos.....	17.111.843
2.ª Para el de coadjutores perpetuos parroquiales.....	2.428.350



	Pesetas.
3.ª Para culto de las iglesias parroquiales.....	7.504.790
4.ª Para 288 conventos de religiosas dedicadas á enseñanza y beneficencia.....	483.920
Total.....	27.528.903

Art. 4.º Se satisfarán por cuenta de la obra pia de los Santos Lugares de Jerusalem las dos partidas siguientes:

	Pesetas.
1.ª Para el noviciado de las Hijas de la Caridad de Madrid.....	18.850
2.ª Para el culto del templo de las Hijas de la Caridad de Barbastro.....	250
Total.....	19.100

Art. 5.º Las láminas mencionadas en el art. 3.º de esta ley, se expedirán á nombre de cada uno de los oficios y corporaciones eclesiásticas á que se refieren las distintas partidas señaladas para las obligaciones provinciales y municipales. Cada oficio ó corporacion recibirá tantas láminas cuantos sean los conceptos á que corresponda su dotacion.

Cada lámina representará un capital proporcionado á parte de la suma señalada en la respectiva partida que corresponda al oficio ó corporacion á cuyo favor se expida, tomando como base para la distribucion que ha de hacerse, la cantidad que venia señalada á cada partícipe en los presupuestos hasta aquí vigentes.

Art. 6.º Los intereses de las láminas expedidas se pagarán por trimestres vencidos á los poseedores de los oficios eclesiásticos y á las corporaciones á quienes corresponda ó á sus poderhabientes.

Art. 7.º Las diputaciones provinciales pagarán los intereses de las láminas correspondientes á las partidas que constituyen las obligaciones provinciales eclesiásticas. Para ello las distribuirán entre sí proporcionalmente á la parte que representan en cada diócesis, calculada por el número de habitantes.

Art. 8.º Los ayuntamientos satisfarán los intereses de las láminas que se expidan por las obligaciones municipales eclesiásticas correspondientes á sus respectivas demarcaciones.

Art. 9.º Los ayuntamientos percibirán el importe recaudado

en sus demarcaciones por limosnas de Cruzada, con deducción de la cantidad necesaria para el pago de las atenciones que se fijan en el art. 2.º de esta ley.

Art. 10. El Gobierno compelerá á las diputaciones provinciales y ayuntamientos morosos, al pago de sus obligaciones eclesiásticas, por los medios que se establezcan en los reglamentos.

Art. 11. Las cantidades señaladas en el art. 3.º no sufrirán disminucion aunque se reduzca el número de oficios ó corporaciones eclesiásticas actuales, ó el de individuos de éstas, habiendo de canjearse en tal caso las láminas que ahora se emitan por otras que se expidan á favor de los oficios ó corporaciones que definitivamente hayan de existir.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior:

1.º Las cantidades señaladas á los conventos de religiosas que lleguen á extinguirse, cuyas láminas serán amortizadas en beneficio de los ayuntamientos respectivos.

2.º Las cantidades señaladas para el culto y clero de cada parroquia, si por resultado de la reforma de la actual división parroquial llegara á aumentarse la parte que por aquellos conceptos les corresponde ahora hasta más del 50 por 100, en cuyo caso se suprimirá lo que exceda de dicho 50 por 100 á favor del ayuntamiento respectivo.

Art. 12. Los canónigos y beneficiados de las iglesias catedrales nunca podrán percibir una cantidad superior á la que hasta ahora les estaba señalada, quedando en el caso de reduccion del número anteriormente previsto, el resto de la dotacion que represente la lámina expedida á nombre de la corporacion respectiva á disposicion del ordinario de la diócesis, para invertirla en las atenciones de la misma.

Tambien podrá invertirse en estas atenciones la asignacion de las sillas episcopales correspondiente al tiempo que se hallasen vacantes.

Art. 13. Las sillas episcopales, iglesias y cabildos catedrales y parroquias, así como las congregaciones y órdenes religiosas existentes en la actualidad, ó que en lo sucesivo se fundasen con arreglo al art. 17 de la Constitucion, podrán adquirir libremente toda clase de bienes, pero con la obligacion de enajenar los inmuebles en el preciso término de tres años, y de convertir su importe en láminas intrasferibles de la renta del 3 por 100. Se exceptúan de esta enajenacion los edificios y objetos destinados al culto, los cementerios, las casas de seminarios mientras éstos subsistan, y las episcopales y parroquiales, á razon



de una por cada uno de estos oficios, exceptuándose asimismo los edificios necesarios para el culto y habitacion de las congregaciones y órdenes religiosas.

Art. 14. Se procederá inmediatamente, por acuerdo de ambas potestades, a la formacion ó reforma de los aranceles de los derechos de estola y pie de altar, los cuales continuarán formando parte de la dotacion diocesana ó parroquial, segun los casos.

Los aranceles mencionados, despues de ser definitivamente aprobados, tendrán el carácter de civiles para los efectos de la exaccion y pago de los derechos que en ellos se fijen.

#### ARTÍCULO TRANSITORIO.

Por el presupuesto general del Estado se satisfará anualmente la cantidad de 2.928.453-48 pesetas, la cual irá reduciéndose á medida que vayan disminuyendo las clases que á continuacion se expresan, y para cuya congrua sustentacion se destinan:

	Pesetas.
1.ª Para jubilados del clero superior y parroquial.....	20.300
2.ª Para personal de religiosas en clausura....	1.159.843-73
3.ª Para material de idem.....	244.425
4.ª Para capellanes excedentes en las catedrales.....	15.549
5.ª Para el personal del clero colegial que se suprime.....	164.500
6.ª Para el suprimido por el Concordato.....	163.316-75
7.ª Para vicarios, tenientes y beneficiados parroquiales.....	1.163.319
8.ª Para obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.....	7.522-40
Total.....	2.938.775-88

#### ARTÍCULOS ADICIONALES.

- 1.ª Se derogan todas las leyes y disposiciones contrarias á lo que en ésta se establece, y señaladamente las que prohiban ó pongan obstáculos al establecimiento de congregaciones y órdenes religiosas, en uso del derecho de asociacion.
- 2.ª El Estado no reconoce en las referidas asociaciones más

derechos ni concede á los actos de sus individuos más efectos que los civiles que les correspondan segun las leyes comunes.

3.º El Gobierno dictará los reglamentos necesarios para llevar á efecto lo dispuesto en esta ley.

Palacio del Congreso 9 de Noviembre de 1872.—Ramon Pasion y Lastra, presidente.—Pedro Gonzalez Gutierrez.—Constantino Vazquez Rojo.—Alvaro Gil Sanz.—José María Valera.—Narciso Guillen.—Fernando Romero Gil Sanz, secretario.

Primer discurso en contra: y empieza el debate del dictamen de la comisión sobre el proyecto de ley fijando el presupuesto de obligaciones estatísticas y las relaciones económicas entre el comercio y el Estado.

EL SR. PIDAL Y MON: Señores diputados, al levantarme para impugnar el proyecto de ley que a vuestra deliberación asometa, cumplí antes todo lo que me hizo deber. Tengo que decir, señores, que la ley que me honra y que me da el honor de ser un acto de oposición al acto de oposición que se debate en grandes y muy trascendentes los intereses que se debaten en este asunto, para que pueda yo abogar otras cosas que las de realizar el derecho en todas sus partes, y mucho más en aquellas que por su naturaleza de relación entre las potestades, están perfectamente unidas a las otras leyes de la vida, que son y deben ser la norma de todas las sociedades. No voy a hacer un acto de oposición, no voy a combatir la institución, voy a combatir el proyecto que a vuestra aprobación se propone. No me escucheis, señores, con ánimo hostil y prevenido. Escuchad mis razones y juzgadlas; haced cargo de mis argumentos, combatidlos. Pero oídlos con ánimo sereno, para contestarlos como mejor os parezca, y no para rechazarlos como ataques de un enemigo sistemático. Voy a decir, señores, no voy a hacer un acto de oposición, no voy a combatir la institución, tal es la institución, tal es el partido, tal es la monarquía; que no contestaré yo en esta discusión a más cargos ni a más acusaciones que a las que dirijáis a la historia, a la libertad y a los derechos de la Iglesia, porque solo en defensa de la Iglesia voy yo de la palabra en la cuestión que se debate.



## SESION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 1872.

Empieza el debate del dictámen de la comision sobre el proyecto de ley fijando el presupuesto de obligaciones eclesiásticas y las relaciones económicas entre el clero y el Estado.

### Primer discurso en contra:

El Sr. PIDAL Y MON: Señores diputados, al levantarme para impugnar el proyecto de ley que á vuestra deliberacion se somete, cúmpleme ante todo haceros una declaracion. Tengo que aseveraros, bajo la fê de mi honrada palabra, que no vengo á hacer un acto de oposicion ni un acto de partido; que son muy grandes y muy trascendentales los intereses que se debaten en este asunto, para que pueda yo abrigar otras miras que las de realizar el derecho en todas sus esferas, y mucho más en aquellas que, por su naturaleza de relacion entre las dos potestades, están imperiosamente sujetas á las eternas leyes de justicia, que son y deben ser la norma de todas las sociedades.

No vengo á hacer un acto de oposicion, no vengo á combatir la situacion; vengo á combatir el proyecto que á vuestra aprobacion se propone. No me escuchéis, pues, con ánimo hostil y prevenido. Escuchad mis razones y juzgadlas; haceos cargo de mis argumentos, combatidlos. Pero oidlos con ánimo sereno, para contestarlos como mejor os parezca, y no para rechazarlos como ataques de un enemigo sistemático.

No vengo á hacer un acto de partido, no vengo á defender tal ó cual institucion, tal ó cual partido, ni siquiera ésta ó aquella monarquía; que no contestaré yo en esta discusion á más cargos ni á más acusaciones que á las que dirijais á la historia, á la libertad y á los derechos de la Iglesia, porque solo en defensa de la Iglesia uso yo de la palabra en la cuestion que se debate.

Permitidme, señores diputados, que, por ser la primera vez que uso de la palabra en ocasion tan solemne, me lamente de que no esté aquí para defender los derechos de la Iglesia aquel vigoroso defensor del diezmo en 1838; aquel esforzado atleta defensor de la Iglesia en 1840, 41 y 45; aquel que negoció el Concordato en 1851, y que lo restableció en 1857; aquel que dirigió aquella nota diplomática á los gabinetes europeos, que hizo que se coligaran todas las naciones católicas para restablecer al jefe supremo de la Iglesia en sus Estados, organizando la famosa expedicion que, al mando del marques de Mendigorria, recibió la bendicion de Su Santidad Pio IX bajo los muros de Gaeta.

He dicho que me lamentaba de que no estuviera hoy aquí, y me lamento por dos razones: primera, porque la causa que se debate no tenga más elocuente defensor; y segunda, porque aquellos que me combatan no tengan enfrente un adversario más digno de su ilustracion y de su ciencia.

Grande error fué el mio, señores diputados, cuando allá en las ásperas cumbres del Auseva, en el oscuro seno de la gloriosa cueva de Covadonga, cuna de nuestra nacionalidad é independencia, llegó á mi noticia el triunfo de la revolucion de Setiembre; grande fué mi error, señores diputados, porque creí que el triunfo de la revolucion iba á ser el triunfo del sistema liberal, con todos sus principios filosóficos y con todas sus consecuencias políticas y sociales; y entonces, evocando los heroicos recuerdos del pasado, vi desfilar ante mis ojos por los sombríos ámbitos de la cueva aquella gloriosa serie de santos y guerreros, que en ocho siglos de contienda llevaron la cruz en triunfo desde los riscos de Asturias hasta los muros de Granada; y entonces, ante el recuerdo del pasado, que huía ante la aparicion del porvenir, me despedí con un triste adios de aquella España gloriosa, de aquella España antigua, ante esta España nueva que veía renacer y alzarse de sus ruinas; ante esta España hermosa, porque tambien el error se reviste con hermosura que fascina.

¿Sabeis por qué tenía esta esperanza? ¿Sabeis por qué creía que la revolucion iba á ser la práctica del sistema liberal con todas sus consecuencias filosóficas y sociales? Porque yo conocía la revolucion de Setiembre antes que naciera; porque yo conocía sus hombres, su credo, sus masas; no las turbas que siempre están dispuestas al pillaje y al saqueo, no esas turbas que gritan viva la libertad ó viva las cadenas segun les place, sino aquellas masas inteligentes, educadas en las academias



y en los ateneos; aquellas masas que se agitan, no inconscientemente y al acaso, sino con conocimiento y solidez, porque tienen principios filosóficos en que sientan sus ideas. Yo conocía sus hombres; conocía los hombres de la revolución, no aquellos militares que sirvieron solo de instrumentos para escribir con la punta de sus bayonetas los principios democráticos en el frontispicio de nuestras instituciones, sino á los hombres del partido democrático; yo conocía los hombres de la revolución; yo conocía sus grandes filósofos, sus grandes oradores; yo conocía la elocuente palabra del Sr. Castelar, la gran inteligencia del Sr. Martos, y, sobre todo, conocía el poderoso ascendiente del apóstol de la democracia, de aquel que tantos años estuvo solo en estos bancos defendiendo los principios democráticos, y que hoy es acaso la figura más grande, la figura más digna que pasará á la historia de la revolución de Setiembre; todos sabéis de quien hablo: hablo del Sr. Rivero.

Me equivoqué grandemente: la coalición desvirtuó la revolución; los principios democráticos se vieron falseados por las prácticas progresistas, y aquella revolución que se hacía en nombre de los principios filosóficos del sistema liberal, que venía proclamando los principios democráticos y la separación de la Iglesia y del Estado, empezó por la expulsión de los jesuitas y la disolución de la sociedad de San Vicenté de Paul; siguió incautándose de los archivos de la Iglesia, que habia sido la guardadora de los tesoros de nuestra historia; atropelló á las religiosas, despojándolas de su verdadera propiedad, é hizo, en fin, cuantos atropellos pueden hacerse en las esferas de las relaciones del Estado y de la Iglesia; y todo á nombre de la libertad religiosa, todo al grito de la separación de la Iglesia y del Estado.

Pero, señores, la coalición se rompió: un partido de los que habian tomado parte en la revolución tomó el nombre de partido conservador de la revolución de Setiembre; como si las revoluciones se conservasen de otro modo que avanzando cada vez más en su carrera, que avanzando sin cesar á eso que unos llaman espacios sin límites y que otros califican de abismo sin fondo. El partido progresista se fundió con el partido democrático, y pareció, señores, que en aquella fusión traía el partido progresista las masas, al paso que el partido democrático las informaba con sus grandes principios y doctrinas. Entonces esperé yo que el régimen liberal, especialmente en lo que se refiere á las relaciones de la Iglesia y del Estado, se plantease con todas sus naturales consecuencias; y lo espe-

raba tanto más cuanto que al frente del departamento de Gracia y Justicia se hallaba un maestro mio muy querido, un hombre á quien veo con mucho sentimiento en la senda que ha emprendido, una persona á quien no me he atrevido á estrechar la mano, sabiendo que un día tendría que hacer cruda oposición á toda su conducta, cuando, apesar de todo, solo por haber sido maestro mio, le considero y aprecio como S. S. particularmente merece.

El proyecto del Sr. Montero Rios ha venido á dar por tierra con todas mis ilusiones y á desvanecer todo el horizonte de mis esperanzas. Podeis analizarlo, y vereis como, lejos de dar aquella libertad á la Iglesia que le concede siempre el sistema liberal, no es mas que un medio de oprimir á la Iglesia, que ni obedece á ningun sistema ni se rige por ninguna lógica.

Pero, señores diputados, permitidme que os lo recuerde. El proyecto que ha presentado el Sr. Montero Rios no puede considerarse aislado, no es más que una etapa mas en el camino, un acto más de esa tragedia que se llama el despojo de la Iglesia; y para comprenderlo en toda su fuerza y su verdad, es necesario pasear rápidamente la vista por el horizonte de la historia, y recordar aquellos actos, aquellos momentos, aquellas leyes que sirven de premisas naturales á este proyecto, y que ponen más de relieve su natural maldad, porque maldad es lo que se encierra en este proyecto desdichado.

La Iglesia, señores diputados, y no temais que os hable en nombre de la religion, porque ya sé que, por desgracia, hay entre nosotros algunos que han perdido la fé, si es que alguna vez la han tenido, y porque desgraciadamente la religion ha dejado de ser un lazo general de todos los españoles. Pero os hablaré en nombre del derecho, esa ley que la mano de Dios grabó en el corazon humano; os hablaré en nombre de la razon, esa centella divina que Dios encendió en el entendimiento del hombre; me guardaré de invocar el derecho divino; solo invocaré el derecho comun, considerando á la Iglesia desde ese punto de vista subjetivo, y no como una realidad metafísica, partiendo desde el punto de vista de que la Iglesia no tiene los títulos que el Sr. Montero Rios sienta en el preámbulo, puesto que después no le sirven mas que para sacar las más contradictorias consecuencias.

La Iglesia, señores, es una sociedad que tiene la mision de enseñar y de practicar ciertas doctrinas religiosas y morales; que yo no vacilo en calificar con el nombre de la verdad objetiva religiosa. Tres medios tiene esta sociedad, reconocidos, in-



herentes á su propio fin: la enseñanza, la caridad y el culto.

Para estos tres medios necesita de los bienes temporales, y el derecho natural, reconociéndola como persona jurídica, le concedió el derecho de adquirirlos desde el principio de su nacimiento; porque el derecho natural no es mas que la participacion de la ley eterna en la criatura racional, y la Iglesia, señores, adquirió desde el primer momento de su existencia en las galerías subterráneas de las Catacumbas, y adquirió predios, como lo prueba perfectamente el edicto de Constantino de 313, que devuelve á la Iglesia los predios que le fueron confiscados antes por Diocleciano y Maximino.

Pero llega el tiempo en que la Iglesia abandona las Catacumbas para santificar las naves de las basílicas, y el derecho romano considera entre los colegios lícitos á la Iglesia; flota la cruz en el lábaro de Constantino, y la Iglesia se extiende por todo el mundo; y entonces aquel derecho natural de la Iglesia, que nadie le habia podido negar, es reconocido por todas las legislaciones del Imperio romano.

Pero, señores, el paganismo cae, y Dios, que habia querido que todos los crímenes de la humanidad fuesen desfilando ante la Iglesia para recibir su condenacion; Dios, que habia querido que todas las razas fueran desfilando ante el cristianismo para que fueran purificándose, hace que la barbarie desfile despues del paganismo; y los bárbaros, aquellos pueblos primitivos en cuyas selvas no habia podido penetrar la civilizacion romana, caen sobre la vieja Europa y la sumen en un inmenso caos en que todo es oscuridad y tinieblas, en que no hay mas que una luz: la eterna luz de verdad que brilla y resplandece en las augustas manos de la Iglesia.

Entonces la Iglesia no tuvo más remedio que adquirir, y aquellas adquisiciones fueron despues uno de los elementos más poderosos de su influencia en la nueva civilizacion. Necesitaba bienes para hacer suntuosas catedrales, porque era necesario que aquellos pueblos vírgenes, acostumbrados á los grandes espectáculos de la naturaleza, encontraran en las catedrales esa misma naturaleza espiritualizada; para que pudieran levantar su alma de la realidad de la materia al ideal del cristianismo.

Pero necesitaba ademas que aquellos bárbaros aprendiesen y se civilizasen; necesitaba ademas ejercer la caridad y la beneficencia, dar limosna, que es uno de los actos más propios de su piadoso corazon, y para esto le hacian falta bienes. Por otra parte, basado como estaba aquel sistema social sobre la tierra,

era necesario que la Iglesia poseyese bienes territoriales, para que se pudiese erguir ante el señor feudal á pedir amparo para el desvalido, y para esto era necesario que tuviese lo único que entonces daba la fuerza: la propiedad territorial.

Por dos medios adquirió la Iglesia: por las donaciones y por el trabajo de los monjes; las donaciones, que eran una especie de síntesis, de resumen de los dos más hermosos sentimientos que pueden albergarse en el humano corazón, el amor á Dios y el amor á los pobres; y por el trabajo de los monjes, por el trabajo de aquellos admirables varones que, dividiendo su vida entre la oración y el estudio, entre la caridad y el trabajo, llevaban la vida agrícola á las impenetrables selvas del Occidente, arreglaban las abandonadas calzadas, levantaban los derruidos puentes, reconstruían, en una palabra, la civilización material, destruida por las invasiones, y preparaban, armados de la cruz y del arado, las entrañas de la tierra para recibir el germen de una nueva é imperecedera civilización, roturando y cristianizando la Europa.

Entonces fué cuando la Iglesia erigió aquellas suntuosas abadías, aquellos colosales monasterios, asilos de la virtud y de la ciencia; entonces fué cuando fundó aquellas célebres universidades europeas, y cuando difundió por todas partes aquellas escuelas cristianas, focos de ilustración y de cultura; y entonces fué cuando, secundando por medios temporales sus miras espirituales, empleó sus bienes en la manumisión de esclavos, en la redención de cautivos, en el socorro de menesterosos, satisfaciendo á la vez las necesidades de la humanidad doliente, siendo el paño de lágrimas de todos sus dolores, el alivio y consuelo de todas sus aflicciones. Pero aquella civilización que había recibido su impulso de manos de la Iglesia, aquella civilización que se había levantado gigante en las Cruzadas, y que con el descubrimiento del Nuevo-Mundo había extendido sus dominios al otro lado de los mares, se vió de repente detenida ante el protestantismo que, nacido del interés y la lujuria, la lujuria y el interés presentó como cebo de su doctrina, destruyendo la santidad del matrimonio con el divorcio y fundando las leyes del despojo en su libro del fisco común. Interés y lujuria que atraieron á su causa á los soberanos corrompidos, como el apóstata del orden teutónico en Alemania y el apóstata defensor de la fé en Inglaterra.

Inspirada por el espíritu servil y anticatólico del protestantismo, vino después la enciclopedia, que crió á sus pechos á aquella serie de regalistas que, como Macanaz, Campomanes,



Pimentel, y Chumacero, ejercieron influencia funesta en el derecho, y aquella otra serie de ministros que, como Choiseul, Pommal, Kannit, Tannuci y Aranda, armonizaron con el mejor concierto la adulacion al ilimitado poder de los monarcas y el odio y el encono mortal contra la Iglesia.

Vino la revolucion francesa, y aquella revolucion, en que el clero se mostró tan generoso, dió el gran golpe de muerte á la propiedad eclesiástica. ¿Quién dió el golpe de muerte? ¿Creeis que esta vez fué ya el pueblo? No, no fué el célebre Sieyes el que habia dicho: «¿Qué es el tercer estado? Nada. ¿Qué debe ser el tercer estado? Todo». No; él fué quien se opuso al despojo de de la Iglesia; él fué el que en plena Asamblea constituyente lanzó al rostro de los demagogos estas palabras: «Quereis ser libres y no sabeis ser justos». Si quereis saber, señores, quiénes fueron los que despojaron á la Iglesia de sus bienes, no los busqueis entre los defensores del tercer estado; buscadlos, señores, entre la aristocracia corrompida y entre el clero apóstata; Mirabeau y Talleyrand fueron los que en la Asamblea nacional pidieron el despojo de la Iglesia.

En España, señores, los grandes beneficios prestados por la Iglesia hicieron, ademas de su derecho, que en nuestros Códigos y en nuestras costumbres se la considerara siempre digna de adquirir bienes inmuebles, hasta que vinieron unas Cortes corrompidas, y con esas Cortes corrompidas vinieron los enciclopedistas y los regalistas á atentar contra esa propiedad sagrada.

Empezó, señores, el ataque á los bienes de la Iglesia por la abolición del diezmo, y todos sabeis, señores diputados, que entre las quejas que la revolucion lanzaba contra la reaccion del absolutismo, ni una sola habia que pidiese la abolición del diezmo, y fué preciso que el mismo Mendizabal, aquel hombre funesto en quien se sintetizó el espíritu irreligioso de los ministros absolutistas y de las turbas demagógicas, escribiese aquella célebre Memoria, que él mismo calificó de «iniciativa intelectual» para crear atmósfera y probar que era un gran beneficio para el pueblo la abolición de los diezmos; ¡beneficio, señores! cuando el diezmo era un censo que pagaba la propiedad; cuando el diezmo no pesaba sobre los plebeyos, sino que pesaba solamente sobre los grandes propietarios; cuando el abolir el diezmo no era mas que, segun las palabras de un orador ilustre, «un robo hecho al pueblo».

Tras de esto, señores, vino la desamortizacion, que se presentó como una cosa ventajosísima para el Estado, como una gran necesidad, como un gran bien hasta para la misma Iglesia.

Pues bien, señores, la desamortizacion se hizo sin derecho alguno, porque nunca lo hay para despojar á nadie de su propiedad, hállese donde se halle, téngase donde se tenga, con conocido perjuicio del interes público y sin la justa y previa indemnizacion correspondiente. Pero, en fin, la Iglesia aceptó despues una indemnizacion insuficiente, y subsanó las ventas de los bienes por medio del Concordato. Pero aquella misma indemnizacion se la escatima cada vez más y más, tanto que, habiéndola calculado Mendizabal en 380 millones, la rebajó luego él mismo á 153, y ahora el señor ministro de Gracia y Justicia propone que no exceda de 31 millones de pesetas.

Lo mismo sucedió, señores, con el diezmo. El diezmo, despues de suprimido, se rebajó primero al medio diezmo, despues al 4 por 100, hasta que se abolió por completo; y hoy, señores, el Estado se desentiende de la obligacion de sostener el culto y clero, dejando esta carga á los pueblos, y justificando así la prevision de Balmes al decir que no era bastante garantía el Erario, porque podia venir un ministro que rebajara esta cantidad de la manera y en la forma que tuviera por conveniente, puesto que quedaba la manutencion del culto y clero á merced de la impericia de un ministro.

Tal es el objeto del proyecto que á vuestra deliberacion ha sometido el señor ministro de Gracia y Justicia. Para esto el señor ministro de Gracia y Justicia ha escrito un largo y difuso preámbulo, al que, no yo, sino personas que están muy por encima de mí, han calificado tristemente. El señor ministro de Gracia y Justicia, en vez de decir que ese proyecto se funda en la equidad y en la justicia, debia haber dicho simplemente que lo habia presentado *quia nominor leo*, pues únicamente en virtud del derecho de la fuerza puede justificarse este proyecto de ley.

Entre los muchos sofismas que se ven con la simple lectura del proyecto del Sr. Montero Rios, descuellan cuatro principales, que voy á exponer á la consideracion del Congreso.

El primero, señores, consiste en decir que la Iglesia únicamente tiene necesidades religiosas, y que no las tiene ni políticas ni administrativas, entendiendo por estas últimas la enseñanza y la beneficencia; como si fuera posible, señores, que la Iglesia se desentendiera de las grandes obligaciones que tiene; como si fuera posible que la Iglesia renunciara al cumplimiento de los dos grandes deberes de enseñar y ejercer la caridad; y por consecuencia de esto, deduciendo con extraña lógica el Sr. Montero Rios que con la secularizacion de la ense-



ñanza y de la beneficencia la Iglesia no tiene necesidad de los grandes recursos que antes poseía, consigna en el preámbulo de este proyecto que no debe pagársele mas que la cantidad necesaria para el cumplimiento del fin religioso, que, por lo visto, solo consiste para el señor ministro en el culto.

El segundo sofisma, que tambien se echa de ver en el preámbulo de este proyecto, es el de que las leyes no obligan con condiciones imposibles, y da como condicion imposible el estado actual del Tesoro. Yo me permitiria observar al Sr. Montero Rios que esta condicion no es de las que se consideran como imposibles en derecho; y ademas, si esto fuera así, el señor ministro de Gracia y Justicia habria dado á entender que estábamos en completa bancarota, y que se debia considerar al Estado como un deudor insolvente y con estafa. La desproporcion entre los gastos y los ingresos, que S. S. considera como una razon para no pagar á la Iglesia la cantidad que se consigna en el Concordato, no puede considerarse como una razon justa, puesto que esa cantidad no se paga al clero como la dotacion de los empleados públicos, sino como una carga de justicia.

El tercer sofisma es el de que se hace preciso llevar á cabo este arreglo porque no hay posibilidad de hacerlo entendiéndose directamente con Roma. ¿No está Roma dispuesta á transigir con vosotros en cuanto vosotros restablezcáis el pacto que habeis roto sin derecho alguno para ello? Restableció el Concordato, y de la misma manera que el Papa transigió con la venta de los bienes desamortizados, de la misma manera aprobará toda transaccion que redunde en beneficio de todos los ciudadanos, sin menoscabo de los derechos de la Iglesia.

El último sofisma del señor ministro de Gracia y Justicia es el ejemplo de lo que acontece en las demas naciones. Este ejemplo, señores, no prueba nada contra el derecho que asiste á la Iglesia española para ser indemnizada, y nada prueba ademas, porque no tienen punto de comparacion las demas naciones con la nuestra. En otras naciones tiene recursos la Iglesia de que en la nuestra carece, como sucede con los productos de fábrica y sillas, cosa á que no estamos acostumbrados en este pais verdaderamente democrático.

Ademas, señores, los datos del Sr. Montero Rios no son exactos: S. S. presenta unos datos por los cuales se ve que el clero de Francia tiene ménos dotacion que el de España. Á 31 millones de pesetas asciende lo que el Sr. Montero Rios asigna al clero español, mientras que el de Francia cobra 100 millones de francos. Compara ademas S. S. los derechos de estola y pie de

altar en nuestro país con los presupuestos departamental y comunal de Francia, siendo así que aquellos derechos, según el dictámen de una comisión de la que formó parte el Sr. Muñoz Torrero, no pasaban de 8, 10, ó á lo más 20 millones.

En Francia, señores, hay también órdenes religiosas que auxilian al clero, y el señor ministro no ha tenido en cuenta más que la desigualdad de la población, y no la igualdad de la extensión del territorio, que es lo que más importa en esta clase de comparaciones.

Éstas son las razones principales que presenta el Sr. Montero Ríos para que aceptéis su proyecto, proyecto que entraña en sí grandes vicios: primer vicio, que es un proyecto inútil, porque la Iglesia no lo acepta, como ya lo ha dicho por boca de sus prelados; y segundo vicio, que es un proyecto ilegal, porque rompe la ley internacional, que es el Concordato, y rompe la ley interna, que es la Constitución, que en su art. 21 consigna la obligación de pagar los gastos del culto y clero, y es de suponer que la idea de las Cortes Constituyentes sería que se pagara tal y como se hacía antes, de ninguna manera tal y como pudiera entenderse por cualquier ministro de Gracia y Justicia, siquiera fuera tan ilustrado como el Sr. Montero Ríos.

La comisión, señores, preciso es confesarlo, ha mejorado el proyecto: concede derecho de adquirir á la Iglesia, pero la prohíbe amortizar, puesto que la obliga á enajenar sus bienes y á convertir su valor en inscripciones nominativas intransferibles. Aquí, señores, veo yo un ataque al derecho, y al mismo tiempo una condición imposible, porque los obispos, una vez espiritualizados los bienes, no tienen poder para enajenarlos, y, sin embargo, la comisión quiere que los enajenen, conculcando el derecho de propiedad y la libertad de la Iglesia.

Tal es el proyecto, señores, que se ha sometido á vuestra deliberación, proyecto que he calificado de último acto del terrible drama de los despojos de la Iglesia; los primeros actos los llevaron á cabo los reyes y la clase media; ¿llevará á cabo este último la democracia? Vosotros lo habeis de decidir. Dos caminos os quedan, señores demócratas: ó seguir el camino trazado por aquella democracia autoritaria que hizo de un gran pueblo un pueblo cadáver, como Francia, ó seguir el camino trazado por la democracia liberal, que, fundando unas pequeñas colonias, vino luego á crear un gran pueblo; el camino iniciado por la democracia de los Estados-Unidos: entre estos dos extremos escoged.



## SESION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE.

Despues del discurso del Sr. Pidal, ocupó todo el resto de la sesion del dia 19 el Sr. Gonzalez Gutierrez, consumiendo, en nombre de la comision, el primer turno en pro del proyecto de ley.

El dia 20 rectificó, en cuanto se entró en la órden del dia, el Sr. Pidal, ocupándose solo en algunos de los puntos más culminantes del extenso discurso del Sr. Gonzalez Gutierrez. Dijo así:

EL SR. PIDAL Y MON: Señores, si para algo hubiera de tener en cuenta los principios de filosofía de la historia que en el discurso de ayer tarde, para justificar los atropellos cometidos con la Iglesia, expuso el Sr. Gonzalez Gutierrez, no vendria aquí á molestaros con mi desaliñada palabra en una rectificación; porque, efectivamente, si hay una ley de la naturaleza que se cumple por encima de la voluntad del hombre y por encima de la humanidad entera, ¿á qué viene ejercer nuestra libertad? ¿Á qué viene el deliberar? Sumámonos en la inaccion, estémonos en el quietismo y dejemos que esa ley se cumpla apesar de la libertad del hombre: no os molesteis, señores ministros, en buscar medios para atender á las necesidades superiores del clero; no os molesteis en buscar el modo de solventar las cargas de justicia que hay en el presupuesto; no os molesteis, señores diputados, en discutir ni en votar nada; no teneis que molestaros, las leyes de la naturaleza se cumplirán por encima de la voluntad del hombre y por encima de la humanidad entera.

Afortunadamente, señores diputados, la libertad es un hecho de conciencia que se proclama por sí propio, y no tengo nece-

sidad de discutir los principios de filosofía y los hechos de la historia que prueben esto; y como se proclama por sí mismo, no hay necesidad mas que de recordarlo.

Decía ayer el Sr. Gonzalez Gutierrez que yo no habia atacado el proyecto en su esencia. Señores, yo habia dicho que el proyecto era ilegal porque rompía la ley internacional, el pacto entre la Santa Sede y el Estado, y rompía la ley interna de la sociedad española, ó sea la Constitucion de 1869; yo habia dicho que era inútil, porque la Iglesia no aceptaba esa legislación, como contraria á sus más sagrados derechos y á sus más altos deberes; yo habia dicho que era odioso, no solo para la Iglesia, sino para el pueblo. Luego si decir que el proyecto es ilegal, inútil y odioso no es atacarlo en su esencia, yo confieso que no sé lo que es esencia de las cosas.

Y decía el Sr. Gonzalez Gutierrez: el Sr. Pidal dice que el proyecto no responde á ninguno de los estados de relaciones entre la Iglesia y el Estado. ¿Á qué estado obedece? ¿Obedece al en que el Estado protege á la Iglesia? Claro que no; y no necesito extenderme en probar esto, porque está á la vista. ¿Obedece al otro estado en que se proclama por fórmula la Iglesia libre en el Estado libre? Claro que no, puesto que limita las facultades de la Iglesia, limita las facultades administrativas de beneficencia y enseñanza, que son en las que se funda el señor ministro de Gracia y Justicia para no pagar esas necesidades. ¿Responde al principio de la separacion de la Iglesia y del Estado? Á este ménos que á ningun otro. ¡Pues si precisamente yo me opuse al proyecto bajo vuestro punto de vista! ¿Vine yo acaso á defender á la Iglesia bajo el punto de vista objetivo del derecho divino?

¿No vine á admitir los principios que habian formado la escuela democrática, y desde este punto de vista del derecho comun de vuestros principios atacué el proyecto, y le atacué como esencialmente regalista, como más propio de ministros de Felipe V ó de Carlos III que de ministros de la revolucion de Setiembre, principios á que la revolucion no habia obedecido, debido á causas que expliqué ayer tarde?

Asíes que, si leéis el proyecto, vereis una serie de disposiciones verdaderamente pequeñas, mezquinas; allí se ajustan las cuentas de los ministros, de los canónigos, de los párrocos, las de los derechos de estola y pie de altar; en fin, todo: lo que me hace recordar el dicho de Federico de Prusia, hablando de José de Austria, á quien por lo minucioso de sus persecuciones contra la Iglesia llamaba «mi hermano el sacristan». ¿No teme el



señor ministro que si este proyecto llega á aprobarse le llamen el ministro sacristan de la revolucion española?

Y decia el Sr. Gonzalez Gutierrez que nuestros Códigos limitaban la facultad de adquirir la Iglesia. ¿Cuáles? Yo rogaria á S. S. que me citara qué Código general limita esa facultad; yo sé decir á S. S. que, por lo que yo entiendo, y por lo que entienden otras personas más ilustradas que yo, no hay uno solo, desde la ley romana hasta la Novísima Recopilacion, que limite el amplio derecho de la Iglesia á adquirir.

Y decia tambien el Sr. Gonzalez Gutierrez que la propiedad de la Iglesia hacia imposible todo desarrollo económico, político y científico. ¡Señores, que la propiedad de la Iglesia hacia imposible todo desarrollo económico, político y científico! No quiero extenderme en grandes consideraciones. ¿Qué triste desarrollo es el que ha habido despues de la desamortizacion! Voy á leerlos dos textos nada sospechosos para vosotros, para que estimeis en lo que valen las apreciaciones del Sr. Gonzalez Gutierrez: una de las pruebas más grandes de que los bienes del clero eran un grande obstáculo al poder absolutista, está en esta preciosa confesion que se hacia en el seno de la Asamblea constituyente.

Decia el ilustre orador Mirabeau, vendido al rey, hablando de la venta de los bienes de la Iglesia: «Muchos reinados de un gobierno absoluto no harian tanto como este solo año de revolucion en favor de la autoridad real».

Gibbon, escritor volteriano, dice: «El despojo de los bienes de la Iglesia en Francia ha falseado la sociedad en sus cimientos y la ha amenazado de una disolucion general». Y Bentham y Say, autoridades nada sospechosas de la escuela economista, aseveran que «los bienes de la Iglesia eran los mejor cultivados y los más beneficiosos al interes público, en una época en que la propiedad de los barones era la ruina de la agricultura».

Supongo que S. S. no rechazará las autoridades que acabo de citar.

Y la prueba, señores, es muy sencilla. ¿Qué era lo que venia á ser la amortizacion en la Iglesia? La Iglesia era una sociedad que tenía un voto general de pobreza; la Iglesia adquiria, la Iglesia no enajenaba, la Iglesia no gastaba, y la Iglesia daba limosnas y arrendaba sus tierras por un cánon exiguo á los colonos. ¿Y qué sucedia con esto? Que la propiedad que estaba en manos de los ricos pasaba á los pobres por el intermedio de la Iglesia, la cual compraba los bienes, y como no los gastaba, y daba limosnas, y las daba en arrendamiento por un

cánon pequeño, los pobres venian á disfrutar la propiedad.

Así es que, hasta que se ha llevado á cabo el ataque á la propiedad de la Iglesia, no ha venido en la sociedad, como castigo providencial en un orden superior y como consecuencia lógica en un orden inferior, el pauperismo.

Que el Estado necesitaba los bienes de la Iglesia. La Iglesia, en atencion á estas consideraciones, nunca llegó á ser una verdadera mano muerta. Sí, la Iglesia era la primera que, cuando las necesidades del Estado eran muy grandes, eran muy justas, daba sus bienes al Estado; sí, la Iglesia era la primera que daba sus bienes al Estado cuando ella los tenía, si bien no cuando solo poseia lo necesario para su congrua sustentacion. Por eso Carlos V dijo cuando la desamortizacion de los bienes de la Iglesia en Inglaterra: «Habeis quitado los bienes á la Iglesia; pues con esto habeis matado la gallina de los huevos de oro». Muchas de nuestras cargas del presupuesto se sobrellevaban antes con los medios que proporcionaba la Iglesia, y ahora, por falta de estos bienes, apenas podemos cumplirlas.

Crea el Sr. Gonzalez Gutierrez que no hay en el presupuesto que discutimos más derecho que el de la fuerza ó el del número; presente el proyecto: *quia nominor leo*, y acabe diciendo en su defensa: *sic volo, sic jubeo; sit pro ratione voluntas*.

Rectificó á su vez el Sr. Gonzalez Gutierrez, negando que, como habia supuesto el Sr. Pidal, hubiese revestido su discurso de un espíritu fatalista. Insistió en su primitiva aseveracion de que el Sr. Pidal habia dejado el proyecto intacto apesar de su discurso; añadió que el pensamiento de la ley consistia «en separar la Iglesia por los medios de accion del Estado»; y despues de detenerse á probar que repetidamente y en épocas distintas el derecho de adquirir de la Iglesia se habia visto limitado, terminó doliéndose de un calificativo dado por el Sr. Pidal al autor de la ley, que dijo esperaba recogeria este diputado, «porque á sus años nunca debe de haber tanta hiel ni tan amarga en el pecho, y, si la hubiera por desventura, no debe nunca salir á los labios».

El Sr. Pidal rectificó de nuevo en los siguientes términos:



El Sr. PIDAL Y MON: Empiezo por decir al Sr. Gonzalez Gutierrez que no hay hiel en mi corazon para nadie, ni mucho ménos para S. S. He dicho ayer que venía aquí á usar de la palabra en defensa de una causa que es para mí más querida que todas las causas del universo, porque, exento yo de toda pasion política y de todo interes mundanal, veo en ella la causa de la Iglesia; y ya que no pueda defender á mi santa madre la Iglesia con la razon, con la ciencia y con la justicia que ella enseña, he de defenderla, inspirándome en su espíritu, con todo el amor y con toda la caridad que ella sola inspira.

Si en alguna de mis palabras he ofendido al Sr. Gonzalez Gutierrez, yo le ruego que las dé por retiradas, así como á todos los señores diputados, y que sirva esta declaracion para todos los días que tenga que hacer uso de la palabra, sea contra quien sea.

Ha dicho el Sr. Gonzalez Gutierrez que yo le habia atribuido la siguiente expresion: «Que habia una ley de la naturaleza que se cumple por encima de la voluntad de los hombres y de la humanidad entera»; y S. S. ha negado que hubiera dicho semejante cosa. Pues dice el Sr. Gonzalez Gutierrez en el *Extracto de la Gaceta*:

«El Sr. Pidal ha olvidado que por encima de la voluntad del hombre, y hasta por encima de la humanidad entera, están las leyes de la naturaleza.»

Las leyes de la naturaleza, tales como yo las entiendo, y como creo que se entienden en todas las escuelas filosóficas, son leyes fatales, leyes que no admiten la libertad, que son completamente necesarias, como es la ley que rige al vegetal y al mineral; yo creo que esa ley ha de ser fatal, ha de ser fatal como todas las de la naturaleza, y mucho más cuando su señoría dice que está por encima, no solo de la voluntad del hombre, sino por encima de la voluntad de la humanidad entera.

Ha dicho el Sr. Gonzalez Gutierrez que yo califico y no juzgo: yo califiqué el proyecto actual de ilegal, de inútil y de odioso, y enseguida, para probarlo, dije que era ilegal porque rompía con el Concordato y con la Constitución; que era inútil porque la Iglesia, que es para quien el proyecto se hace, no lo acepta, y que era odioso porque el clero y el pueblo, que son los dos ineresados en el proyecto, lo rechazan de consuno. Me parece que estas razones vienen á probar los cargos que habia hecho al proyecto.

Dice enseguida el Sr. Gonzalez Gutierrez: «¿Cómo se dice que este proyecto no obedece á ningun sistema ni á ningun princi-

pio? Es verdad que no obedece al sistema de la proteccion de la Iglesia por el Estado; es verdad que no obedece tampoco al principio de la Iglesia libre en el Estado libre». Pues si no obedece á ninguno de estos dos principios, digo yo ahora, ¿á qué principio obedece? Señores, en esto no hay mas que dos caminos que seguir: ó el Gobierno, inspirándose en el catolicismo, quiere que la Iglesia sea protegida, en cuyo caso lo mejor es ofrecerla lo que ella quiera, y para esto habrá que ponerse de acuerdo con los obispos ó con el Papa, ó decretar la completa separacion entre la Iglesia y el Estado, y considerar á la Iglesia como una sociedad extraña, y no entrar en ese género de pequeneces que, como he dicho antes, me temo que han de dar muy malos resultados aun para la misma fama del señor ministro de Gracia y Justicia, cuya ilustracion yo soy el primero en reconocer.

Decia el Sr. Gonzalez Gutierrez que si no conozco yo los Códigos en que se limita el derecho de adquirir por parte de la Iglesia, que si no recuerdo á Alfonso X. Pues bien, señores, Alfonso X, á quien sus contemporáneos dieron el nombre de Sabio, calificativo que ha ratificado la posteridad despues, dice así en el Fuero Real: «Mandamos que todas las cosas que fueren dadas á las iglesias, ó sean dadas de aquí en adelante por los reyes ó los otros fieles de Dios, que siempre sean guardadas y firmadas en su juro la Iglesia y en su poder».

Hé aquí cómo Alfonso X limitaba el derecho de adquirir la Iglesia.

Me preguntaba S. S. si no conozco las leyes de desamortizacion. Precisamente para combatir estas leyes hacía yo estas citas, y aducia estos textos para demostrar que todos nuestros antiguos Códigos están en contradiccion con las leyes de desamortizacion.

Y rectificados estos errores, no tengo más que decir, y concluyo rogando de nuevo al Congreso se sirva desechar este proyecto de ley.

Terminadas las rectificaciones de los Sres. Pidal y Gonzalez Gutierrez, consumió el segundo turno en contra de la totalidad del proyecto de ley el Sr. Estéban Collantes. Su discurso fué como sigue:

EL SR. ESTÉBAN COLLANTES: Señores diputados, el Congreso sabe por experiencia que, siempre que tengo que hacer



uso de la palabra, procuro inspirarme primero en el sentimiento de justicia que encuentro en el fondo del asunto que he de ventilar, y segundo en las consideraciones que debo á la Cámara y que me debo á mí mismo; y aun cuando en la ocasion presente he de tener que combatir reciamente un proyecto de ley que considero exactamente bajo el mismo punto de vista que el Sr. Pidal, es decir, como injusto y arbitrario, y como incapaz de responder á ningun pensamiento político, ni económico, ni religioso; aun cuando creo que despues de discutido y aprobado este proyecto estaremos mucho peor que si no se hubiera consumado semejante obra; aun cuando tengo que impugnarle ampliando razones que ya se han aducido y que no han sido contestadas hasta ahora por la comision, ni han de ser contestadas en lo venidero, he de proceder siempre con la calma que el asunto mismo necesita y exige, y con la calma que el asunto mismo me inspira. Me he de hacer cargo, no solo de lo que procede directamente del proyecto y del preámbulo, así del proyecto y del preámbulo del Gobierno como del proyecto y del preámbulo de la comision, sino de todas aquellas cuestiones que directa ó indirectamente tengan relacion con este grave asunto, no penetrando en ciertas profundidades porque no son de nuestra competencia y porque no quiero que otros tomen pretexto de mis palabras para decir cosas inconvenientes.

Me haré cargo, no solo de lo que tanto en el proyecto como en el preámbulo se encierra, sino de todas las cuestiones que tengan relacion con la magnitud del proyecto y con lo respetable y sacratísimo del asunto principal. Conociendo lo delicado que es hablar de religion sin autoridad para ello, me contento con creer en la religion de Jesucristo, con defenderla; pero me abstengo de discutirla, por lo mismo que soy buen creyente.

Es preciso reconocer que ninguna sociedad humana puede estar bien dirigida y bien gobernada sin ciertas ideas morales, fuertemente arraigadas en el corazon mismo de la sociedad, y que el Gobierno, que tiene la suerte de encontrar, no solo estas ideas morales arraigadas en el seno de la sociedad, sino sostenidas y defendidas por la generalidad, por la casi universalidad, ese Gobierno comete un gran desacierto para consigo mismo y para con la sociedad que dirige, tratando de disminuir esta fuerza moral ó de dividirla siquiera dándola una falsa direccion. En este sentido, la unidad de cultos en España, políticamente hablando, es la única ventaja que podíamos alegar en medio de nuestras desventuras; y el Gobierno que ha atentado á la unidad religiosa ha hecho un gran daño á la sociedad

y se ha hecho un gran daño á sí mismo. Y que la unidad religiosa está fuertemente encarnada en la sociedad española lo prueba el que, apesar de llamarse á la libertad de cultos una de las conquistas de la revolucion, apesar de los esfuerzos que el Gobierno ha hecho para que encarnase esta novedad en nuestras costumbres, apesar de la persecucion sistemática contra el clero y contra todas las cosas eclesiásticas, en cuatro años de continuos esfuerzos no se ha podido conseguir el menor adelanto. En toda España no se ha construido una sinagoga, y alguna que otra capilla protestante que se abrió en los comienzos de la revolucion se ha cerrado, y puede decirse que los pocos que profesan culto distinto del católico tienen como vergüenza y se retiran al fondo de su hogar, donde ninguna ley humana puede penetrar.

No me negareis este hecho, que es evidente y que es importantísimo. Por más esfuerzos que se hacen para introducir la libertad de cultos en España por parte del Gobierno, mayor resistencia encuentra cada día la novedad, y no hay síntoma alguno externo ni interno que no sea favorable á los que creemos que España apetece y desea la unidad católica; y en una época en que se da tanta importancia al voto universal, yo creo que sobre esta materia tan grave y tan capital es sobre la que más pública y solemnemente ha manifestado su opinion el pueblo español y sobre la que más escandalosamente se falta á la voluntad nacional.

No hay pueblo alguno que no diera la mayor parte de sus glorias por poder tener, sin complicaciones ni exacerbaciones de ningun género, el beneficio de la unidad religiosa. Prusia daría la mitad de sus conquistas por tener la unidad religiosa y por evitar el gran conflicto que tiene encima con las disidencias religiosas, que son hoy la preocupacion constante del emperador Guillermo.

Esto me parece evidente. Yo creo que todo gobierno debe procurar inculcar estas ideas, en lugar de debilitarlas, y mucho más un gobierno que se llama católico; y aquí, sin embargo, sucede una cosa muy extraña, de la cual no hay ejemplo en ningun pueblo del mundo. Aquí hay un gobierno que encuentra una sociedad constituida, que encuentra la unidad católica arraigada, y que voluntariamente y sin necesidad introduce la perturbacion entre el Estado y la Iglesia, atenta al orden establecido, y busca enemigos en donde debía encontrar aliados. Es el caso más raro de temeridad que yo conozco en la historia.

Todos los pueblos, sin excepcion, los más ambiciosos, los más



conquistadores, cualquiera que sea su forma interior y su política, todos los pueblos, cultos ó bárbaros, tienen á gloria y á honra el proteger la religion del Estado, el dar fuerza y autoridad á la religion del Estado, al culto nacional, no solo en su propio pais, sino cerca de las naciones extranjeras; y esto no de los tiempos antiguos, sino de nuestros dias.

Rusia ha sostenido la guerra de Crimea por el mantenimiento de los privilegios de los griegos en Jerusalem. Rusia protege la Iglesia griega, y se cree en esta obligacion, no solo en sus propios dominios, sino en todos los pueblos del orbe donde hay Iglesia griega. Inglaterra se cree con el protectorado religioso en todos los pueblos protestantes. No solo mantiene la religion nacional llena de privilegios y de riquezas, sino que el ministro de Negocios extranjeros de la Gran-Bretaña está en perpetuas reclamaciones, ya en Constantinopla, ya en los pueblos católicos, para que se permita introducir las Biblias protestantes. El sultan protege á los partidarios de Mahoma en todos los pueblos de Oriente, y todo el mundo sabe las complicaciones que ha habido en Siria por las cuestiones religiosas.

La Iglesia católica ha tenido siempre una nacion desde los tiempos de Cárlos V, desde los tiempos de los emperadores germánicos, ha tenido una nacion que especialmente se ha cuidado de los intereses católicos en el universo. Cuándo ha tenido esa honra España, cuándo Austria, cuándo Francia; y bien recientemente Francia ha hecho una expedicion á Siria en un interes puramente católico, y la república francesa de 1848 fué á Roma á destruir la república romana en un interes puramente católico; y si Francia hubiera continuado desempeñando esta noble mision, Napoleon estaria en las Tullerías siendo emperador de los franceses, Pio IX sería dueño de Roma y de sus Estados, y la Iglesia católica no sufriría los tormentos que sufre; pero Francia ha abandonado á la Iglesia, ha hecho traicion á la obra civilizadora que le estaba encomendada; Francia ha hecho la unidad de Italia; la unidad de Italia ha engendrado la unidad de Alemania, y Alemania ha deshecho á Francia, la tiene subyugada, y Francia, vencida y humillada, ha visto levantarse á la *Commune* vengadora, no derribando templos, sino incendiando el palacio de los césares que habian abandonado á la Iglesia.

Ésta es la historia de nuestros dias. Esto es lo que todos nosotros vemos y presenciarnos. Solo el Gobierno español, que dirige una sociedad eminentemente católica, que él mismo se llama católico; solo el gobierno actual de España es el que aban-

donar los intereses católicos en su propia patria; porque el hecho es notorio y evidente: en España hay libertad para todo el mundo ménos para el clero católico, ménos para las cosas católicas; y así se ve que no hay derecho de asociacion, ni derecho de reunion para las cosas católicas, puesto que el clero no puede ejercer la enseñanza que le está encomendada por el Evangelio; han sido perseguidos y expulsados los jesuitas, y se ha prohibido recientemente una procesion en Barcelona, porque se creia que tenia carácter político.

¿Cuál puede ser la causa de esta aberracion y de este contrasentido? ¡Un gobierno católico persiguiendo la Iglesia católica! No vereis este ejemplo en parte alguna del universo. Vosotros, los que todos los dias y en todas las cuestiones nos contais lo que pasa en otros paises y os fundais para legislar en España en lo que pasa en otras naciones, no nos direis que en Inglaterra se persigue á los protestantes, que en Constantinopla se persigue el culto de Mahoma, y que en Rusia se persigue el culto griego. Al contrario, en todas partes se venera, respeta y enaltece el culto nacional.

Yo bien sé que el Gobierno ha de negar esto, que se ha de llamar católico; pero, contra su deseo y su voluntad, las cosas resultan así.

He dicho que todas estas consideraciones eran atendibles é invencibles por el razonamiento, bajo el punto de vista político; porque, claro es, bajo el punto de vista religioso, no hay más religion verdadera que la religion de Jesucristo; y así es que hoy en rigor y en realidad lo que sucede es que, ó hay católicos ó incrédulos. Yo tengo por la mayor desdicha para una criatura no creer, que es lo mismo que ser ciego del alma.

Pero una de dos: ¿continúa el Gobierno español llamándose católico ó no? Si así es, el Gobierno tiene que retirar ese proyecto. Si las Cortes españolas, si la mayoría de las Cortes españolas es una mayoría católica, debe votar en contra de ese proyecto de ley.

Aquí viene naturalmente la ofuscacion, el error capital en que incurren los que sostienen ciertas opiniones sobre esta materia, en que ha incurrido á su pesar, y yo lo siento mucho, el Sr. Gonzalez Gutierrez, cuya erudicion no tuvo necesidad de acreditar ayer, pues cuando ha llegado á este sitio tenía ya su crédito muy alto; pero, ofuscado indudablemente por esta misma idea que tenía que exponer, que tenía que combatir, ha venido á obtener con su discurso un resultado perfectamente



contraproducente, ha obtenido un resultado completamente negativo.

El error, á mi juicio, del Gobierno y de la comision consiste en creer que la Iglesia tiene hoy las mismas pretensiones que en la Edad Media y que en todos los siglos posteriores. Los revolucionarios creen que la Iglesia quiere avasallar y dominar á la sociedad civil; que quiere poner la mano sobre los reyes y sobre los pueblos; y la revolucion se funda para esto en decir que así ha sucedido otras veces, y que ésta es la tendencia natural de la Iglesia. En esto consiste el error.

¿Es cierto que la Iglesia católica ha tenido durante muchos siglos cierto predominio en la sociedad civil? ¿En qué ha consistido este hecho histórico é innegable? ¿Cómo ha ejercido la Iglesia ese predominio? ¿Cómo ha dispuesto de sus bienes? ¿Cómo hemos dispuesto nosotros de esos bienes cuando han venido á nuestro poder? No sirve declamar, no sirve decir vulgaridades. Los legisladores de un pais libre deben meditar algo sus resoluciones, y deben tratar formalmente estas cosas tan formales.

La Iglesia, durante algunos siglos, ha tenido un justo predominio en la sociedad en general. La Iglesia puede decirse que habia recogido el espíritu humano, y que le dirigia, enseñándole las nociones del bien, enseñándole las artes y las ciencias; la Iglesia era la que más sabía, y su influencia era natural y legitima. Con sus riquezas alimentaba á los pobres y creaba universidades, confortando á un tiempo el alma y el cuerpo. Con sus riquezas creaba hospitales, levantaba templos que son la admiracion de las gentes, y premiaba y recompensaba á todos los artistas del universo. No solo son hijos de la Iglesia y hechura de la Iglesia los grandes santos y los grandes teólogos, sino que eran en aquella época, y durante mucho tiempo, los hijos de la Iglesia los grandes jurisconsultos, los pintores, arquitectos y escultores, los poetas, los músicos y todos los demas artistas.

La Iglesia tenía cátedras para todos, inspiracion para todos, dinero para todos. La Iglesia, pues, ha sido la única asociacion que ha derramado por el mundo generosamente todo cuanto ha tenido en su seno; ha derramado amor, instruccion y fortuna, y la ha derramado para hacer la felicidad del género humano y para hacer la riqueza y el bienestar de aquellos mismos que hoy la atormentan y persiguen.

Todos los edificios que causan vuestra maravilla, todos los hombres que causan vuestro encanto, todos los grandes talen-

tos, todas las creaciones que hacen nuestro orgullo, todas han sido creaciones de la Iglesia.

Esto no lo dudareis; esto lo reconocereis todos.

Y bien, ¿son hoy éstas las condiciones de la Iglesia para que vosotros traigais proyectos de ley tan atentatorios á todos los derechos como el que yo he de examinar y discutir? ¡Oh! no. La situación es bien diferente y bien extraña por cierto. El Jefe santo de la cristiandad está preso en el Vaticano; todos sus Estados han sido conquistados por la fuerza y por la violencia; el clero está empobrecido y humillado; se le han arrebatado sus bienes; no se le quiere pagar lo que legítimamente se le debe, y se le dice: tienes libertad de enseñanza; tienes libertad para hacer iglesias, para hacer hospitales, para hacer obras de caridad; tienes libertad de asociación, cuando se disuelven todas las congregaciones religiosas, cuando se confunde á las monjas unas con otras, cuando transigís con los revolucionarios del Ferrol porque les teneis miedo, y no os atreveis mas que con débiles mujeres ó con débiles hombres, con los eclesiásticos ó con las monjas, que son vuestra pesadilla, porque son vuestro remordimiento.

Pero, en fin, ¿es que la Iglesia amenaza hoy al Estado? ¿Es que hoy la Iglesia pone su mano sobre las testas coronadas? No, y vosotros estais bien ciertos de que no aspira á ese poder.

No hay, no puede haber semejantes temores, que serian ridículos y absurdos. La Iglesia no disputa por lo superfluo, sino por lo necesario, y la Iglesia no ha sido nunca contraria á la verdadera civilización, sino que ha sido la madre de las verdaderas civilizaciones, y el género humano se ha mecido en la cuna de la Iglesia durante su infancia y durante su juventud. Todos estos hechos que rápidamente expongo y todas estas razones que brevemente alego están en el ánimo, en la razón y en la conciencia de cuantos me escuchan y de cuantos han de leer estas pobres palabras mías.

Pero se dice, como lo habeis oído desde lo alto de esta tribuna, que ceda la Iglesia, que se declare reconciliada con la revolución, y nadie se meterá con ella, y no hubiera tenido que sentir el que se la hubiera quitado sus propios bienes declarándolos nacionales. Pues declararais dos cosas que favorecen á la Iglesia: luego la Iglesia no resiste por querer dominar la sociedad civil; no resiste por tener bienes temporales, porque, si cediera, vosotros declararais que no la inquietaríais y que le daríais bienes terrenales, y presupuesto crecido, y una gran in-



fluencia en la sociedad civil; luego la Iglesia resiste y vosotros la atacais por una razon más alta, por razon de su ministerio, por su esencia; y aquí es donde se presentan frente á frente la Iglesia y la revolucion, y la Iglesia hace bien en resistir, cumple su deber, y los obispos, y los párrocos, y los eclesiásticos, todos se elevan más cuanto más resisten á los que se oponen á la esencia de la Iglesia misma.

Y yo pregunto á los señores diputados que están presentes: ¿hay alguna clase en el Estado, hay alguna clase en la sociedad que haya hecho eso durante muchísimos años? ¿Hay alguna clase que haya prescindido completamente de todo interes terrenal, de toda influencia y de todo interes político, únicamente por sostener lo que es su más sagrado deber, lo que es su principal deber, descuidando lo accesorio? La Iglesia no cede, y hace perfectamente; la Iglesia tiene en esto una fórmula que nadie ha podido desvirtuar, ni mitigar, ni destruir. La Iglesia dice: *Non possumus*. Pero si la Iglesia tiene el *Non possumus* para todos los casos que son de dogma, pudiera argüírseme diciendo que la Iglesia podría ceder en otros asuntos que no fueran de dogma, y que entonces no sería esa la razon que tuviera para resistir. A eso contestaria yo diciendo que la Iglesia ha cedido y que no ha adelantado nada, porque sus enemigos han demostrado que quieren la destruccion de la Iglesia por completo.

Pero entremos en el fondo de la cuestion. ¿Que la Iglesia ceda! Pues qué, ¿no ha cedido? ¿No ha hecho todas las concesiones posibles? ¿No las ha hecho voluntaria y espontáneamente? ¿Y qué ha conseguido? Examinémoslo. El inmortal, el ínclito, el hombre maravilloso de los tiempos presentes, Pio IX, en fin, fué el primero que dió la libertad á Italia cuando los principes de la casa de Saboya eran absolutistas y tiranos. ¿Cómo respondió la revolucion á los actos magnánimos y de clemencia, á los actos liberales del bondadoso Pontífice? La revolucion respondió asesinando á su primer ministro á las puertas del Parlamento, del Parlamento abierto por Pio IX. La revolucion respondió destronando al Pontífice, desterrándole á Gaeta y cometiendo todo género de iniquidades; iniquidades tan grandes, que la Francia republicana, alarmada y contristada, mandó sus ejércitos para restablecer el trono pontificio, á cuya gloria está unido tambien el ejército español que, mandado por el actual ministro de la Guerra, concurrió á aquella brillante jornada. Francia no ha querido persistir en esta buena política, y Francia se ha perdido.

Despues, consumadas ya la mayor parte de las iniquidades

de Italia, no respetada la paz de Villafranca ni respetado el tratado de Zurich, se afirmó la convencion del 15 de Setiembre entre Francia é Italia, y Francia entonces volvió á decir al Sumo Pontífice que cediera y que hiciera reformas en la administracion de sus Estados, que hiciera reformas liberales; y el Sumo Pontífice contestó dos cosas que no tenían réplica, y como no tenían réplica, las negociaciones no tuvieron resultado, porque no podian tenerlo. El Sumo Pontífice decia: ¿qué reformas he de dar á mis pueblos? ¿Sobre qué puntos han de versar estas reformas? ¿Consisten en dar una Constitucion? Pues ya la he dado, y aquellos á quienes la dí me destronaron. Y luego hacia este otro argumento dirigiéndose al emperador de los franceses: si os parecen bien las reformas liberales para Italia, ¿por qué no haceis esas reformas en Francia, donde la revolucion las pide con el mismo imperio que en Italia? Esto era irrefutable.

No, señores diputados. Que Roma hubiera cedido ó que no hubiera cedido, que la Iglesia ceda ó no ceda, la revolucion será siempre su enemiga capital; y así es que el rey de Italia no ha parado hasta hacerse dueño de Roma y poner su planta sobre el Quirinal, apesar de haberse comprometido en tratados solemnes con Francia, diciendo que no iria á Roma; pero en cuanto ha visto á Francia débil y vencida, el gobierno de Italia ha faltado á sus compromisos, á su palabra y á su honor.

No se concibe que, en una época en que se habla tanto de libertad, solo se quiera tener esclava á la Iglesia; y la razon es porque la Iglesia quiere tambien ser libre. Para la Iglesia, su libertad es su vida, y la libertad de la Iglesia es una garantía y una necesidad para los ciudadanos, que tienen interes en que sus jefes espirituales sean libres, para no encontrar el dominio del Estado en el dominio de su conciencia, porque su confianza sería destruida desde el momento que pudiéramos sospechar que aquellos que tomamos por guias y consejeros de nuestra vida espiritual eran dependientes del Estado, y que la Iglesia era una administracion por el estilo de una direccion de aduanas ó de caminos.

En el momento en que los fieles no vean en los párrocos los guardianes de su fé y de su conciencia, la religion está en peligro.

La Iglesia es la aliada del Estado, pero no es su esclava. Salir de estas ideas elementales es mantener la guerra civil en los espíritus y en los pueblos.

Ésta es, señores, en breves palabras la historia moderna de la Iglesia, los hechos modernos que han pasado á nuestra vis-



ta, que todos vosotros conoceis á poco que os fijeis, sin penetrar, sin entrar en profundos conocimientos de la ciencia ni recordar los tiempos antiguos, para venir á parar á los tiempos modernos.

Venimos ahora á España, y he de recoger algunas cosas que parecen pequeñas y quiero que queden bien claveteadas en esta discusion; yo tengo que referir las palabras que se atribuyen á un hombre importante; y he observado que, cuando un hombre de gran talento dice una cosa vulgar, impropia de los hombres de talento, inmediatamente todo el mundo se apodera de aquella vulgaridad, y la repite, añadiendo: lo dijo Donoso Cortés, lo dijo Balmes, ó lo dice, por ejemplo, el Sr. Castelar; pero estos hombres de talento, estos hombres extraordinarios dicen ó pronostican una cosa propia de su gran capacidad, y entonces, como el vulgo no les conoce, dice: «Están locos»; y de esta manera se toman las cosas y los dichos insignificantes, dejando olvidados los que debian aprovecharse. Pues esto es lo que ha pasado con todo lo que se dice, con los bienes nacionales, del modo con que se ha efectuado la venta de los bienes nacionales, y es menester recogerlo y refutarlo en este augusto recinto.

Se dice: «Los moderados se oponen á la desamortizacion de los bienes de la Iglesia, y, sin embargo, ellos han comprado sus bienes»; y aquí es donde se citan con mucha frecuencia unas palabras de una persona que ya no existe, de un gran filósofo, un eminente orador, y yo tuve la honra de ser amigo suyo, de Balmes, que decia «que los moderados compren los bienes de la Iglesia y los explotan, y luego mandan á sus mujeres á la Iglesia». No, los bienes nacionales los ha comprado todo el mundo; los han comprado los carlistas, los han comprado los progresistas, los han comprado los moderados, los han comprado los pueblos; esta es la verdad: los pueblos, sin atender á opiniones políticas, porque casi todo ha sido objeto de una negociacion especial dentro de los pueblos mismos, por convenio entre los vecinos; y voy á explicar cómo esto se verificaba, aunque esto es inútil, porque lo saben tan bien como yo todos los señores diputados, y, sobre todo, porque lo saben y lo conocen en los pueblos donde esto se ha verificado, y lo saben mejor que nosotros.

Hay que distinguir en esto de la venta de los bienes nacionales tres épocas distintas: la época de la guerra civil es cuando se compró casi de balde, pero en cambio habia una gran inseguridad sobre la validez de las ventas; la época próxima ya al

Concordato, y la época posterior al Concordato. Desde que se vieron los bienes nacionales asegurados y la aprobacion del Sumo Pontífice, el valor de estos bienes dobló y triplicó, y han producido y se han vendido más caros que los bienes de los particulares, y es preciso no perder de vista ni un solo momento esta consideracion capital, porque, si se destruye el Concordato, esos bienes vuelven á perder de su valor y estimacion.

Yo pondré un ejemplo para que los señores diputados se convenzan de lo que voy diciendo. En la época de la guerra civil se vendió en Madrid el convento de Recoletos, que ocupaba todo el terreno en que hoy están contruidos los palacios de Salamanca, de Campo, de Remisa, todas las manzanas de casas contiguas que forman hoy una parte del embellecimiento de Madrid, hasta el terreno en donde se ha de construir el palacio para los archivos, que se construirá cuando Dios quiera. Pues bien, todos esos terrenos se vendieron despues en 1.100,000 rs., y yo intervine en esta venta cuando se estableció un gran taller para coches, y esos mismos terrenos han valido recientemente más de 20 millones de reales.

Y vuelvo á la venta de bienes nacionales: ¿cómo se han verificado estas ventas? Ó eran fincas de gran magnitud, ó se subdividian, y la Hacienda ha propendido á subdividir las. En el primer caso, claro es que los grandes capitales podian interesarse solos en su adquisicion, y estos capitalistas han pertenecido á todos los partidos.

En el segundo caso, los vecinos mismos de los pueblos eran los rematantes, carlistas, moderados y progresistas; cuando se entendian entre sí para el remate, se hacía una especie de reparto entre vecinos, y cuando no se entendian, se pujaban los bienes extraordinariamente, se elevaba su precio sin discrecion, y esto ha traído la ruina de muchas familias. La circunstancia de pagarse en plazos ofuscaba á muchas gentes, y de aquí resultaba que los bienes se han vendido generalmente por el doble de su valor, y que si hoy se va á preguntar al director de bienes nacionales, nos dirá que hay en su direccion 10 ó 12.000 expedientes en que se reclama la nulidad de las ventas hechas á pretexto de desperfectos, malas mediciones, confusion de términos y mojones, falta de arbolado, etc., etc.

En mi juicio, el mayor desacierto, entre tantos desaciertos como todos hemos cometido, el mayor desacierto ha sido el de las ventas de los bienes nacionales. Esos bienes, con los cuales la Iglesia ha hecho tantas maravillas, los hemos tirado por la



ventana en el primer período de las ventas, y despues han causado la ruína de muchos compradores, sin que el Estado haya sacado grande utilidad, por mala y equivocada administración. Si con estos bienes se hubiera amortizado la deuda, tendríamos hoy muy poca; y si los hubiéramos empleado para las subvenciones de los ferrocarriles, los hubiéramos hecho de balde. Pero lo ha perdido la Iglesia, lo ha perdido el Estado, y no lo ha ganado nadie; de manera que no ha sido ni para Dios ni para el diablo.

Esta es mi opinion, que me parece fundada; y no se puede decir con asomo de verdad que los moderados son los que se han aprovechado de los bienes nacionales. Habrá moderados que hayan comprado, y habrá moderados que no hayan comprado, como me sucede á mí. Este juicio es el recto y sensato.

Pero se oyen sobre este asunto las cosas más raras, extraordinarias é inconexas, y que, sin embargo, es menester que sean contestadas en una discusion formal como ésta.

Se dice que el clero es carlista, y que algunos eclesiásticos están hasta con las armas en la mano; pero, señores, ¿qué queréis que sea el clero? ¿Qué haceis vosotros para que el clero deje de ser carlista? ¿Qué haríais vosotros, qué seríais todos vosotros en lugar del clero? Siento entrar en estas suposiciones, pero hay que contestar á todo.

Aquí, donde se oye decir todos los dias en presencia del pueblo español: hemos abandonado á la reina Isabel porque era una ingrata, que nos separó del ministerio ó que no nos hizo ministros; estamos dispuestos á separarnos de D. Amadeo si no nos hace ministros ó no nos conserva en el ministerio. Aquí, donde no hay fé política; aquí, donde por un destino se cambia de opinion de la noche á la mañana, ¿os extrañais que el clero, que ve perseguir á la Iglesia, que se ve perseguido en lo esencial y en lo accidental, que se ve perseguido en lo que pertenece á la conciencia, al alma, y en lo que pertenece al cuerpo, en lo que pertenece al espíritu y en lo que pertenece á la carne, se acuerde algunas veces de que es carne, de que es débil criatura humana?

¡Oh, señores! no todos hemos nacido para santos ni para heroes; y aunque yo no creo ni se me pasa por la imaginacion que el clero sea carlista ó moderado por razon de sus intereses, es preciso convenir en que la naturaleza humana se inclina siempre por aquello que más nos favorece; y que en la cuestion actual, no solo son los bienes materiales lo único que se litiga, el litigio consiste principalmente en lo fundamental; el litigio es

entre los dogmas de la revolucion y los dogmas de la religion.

No hay, pues, motivo para temer de la Iglesia invasiones de ningun género. No debeis extrañaros vosotros de que haya clérigos carlistas, cuando se ve aquí todos los dias por un pedazo de pan adoptar una ú otra política.

Lo que yo sé es que, reinando la reina Isabel, no habia clérigos carlistas, y la Iglesia española se habia conformado por completo con aquel orden de cosas, lo cual prueba una vez más que la Iglesia no pretende ser invasora en los tiempos modernos.

Me contento con citar y consignar este hecho, y no lo discuto más ampliamente porque no es ésta la ocasion oportuna, pero digo que nosotros habíamos llegado á una completa reconciliacion con la Iglesia, y que el sistema del Gobierno actual es de una enemistad sistemática, incomprensible é inconveniente.

Tratad á la Iglesia con justicia, y ella os corresponderá con amor; pues, aun tratándola como la tratais, no os faltará nunca su misericordia.

Pero el clero en general ¿puede dar más prueba de paciencia que la que está dando? ¿Qué clase en la sociedad se conduce con mayor mansedumbre? ¿Cuál cumple mejor sus obligaciones y deberes? No la citareis.

Habeis perturbado las relaciones de la Iglesia con el Estado; no habeis conseguido ningun resultado, y nos encontramos como el primer dia.

Examinemos ahora el proyecto.

El expediente está completo.

Se sabe lo que propone el Gobierno; se sabe que no lo acepta la Iglesia; se sabe que no le han de poder pagar los pueblos. El proyecto es completamente inútil é ineficaz.

¿Qué se ha propuesto el Gobierno? ¿Á qué pensamiento responde? El proyecto no responde á las relaciones mutuas entre la Iglesia y el Estado.

No responde á la Iglesia libre en el Estado libre.

No responde á proteger el Estado á la Iglesia; es decir:

No responde al Concordato.

No responde al principio de indemnizacion.

No responde á cumplir obligaciones contraidas.

No responde al art. 21 de la Constitucion, por el cual la nacion se obliga á mantener el culto y los ministros de la religion católica, y yo deseo oir las explicaciones del Gobierno sobre este particular.



¿Os creéis con facultades para romper el Concordato? Pues la Iglesia se quedará libre de las obligaciones que contrajo. Hay un contrato de por medio. Vosotros le rompéis no contando con la otra parte contratante; pues cometéis un acto de fuerza, y no un acto de legisladores.

¿Tiene el Gobierno la facultad para romper el Concordato? ¿Cree el Gobierno de buena fé y en buenos principios que puede romper el Concordato? Estos son los dos puntos de vista en que ha de girar la discusion de este proyecto. Yo creo que el Gobierno no puede dirimir la obligacion que hay contraida en el Concordato, ni ha de poder conseguir nada con los medios que adopta. ¿No hace caso del Sumo Pontífice y de las relaciones contraidas? Pues el clero tampoco hará caso de este proyecto, y dirá que no aprueba la venta de los bienes nacionales; y aunque muchos se reirán de esta especie de protesta, el tiempo quizás venga á justificar los temores. No hay remedio: si acaba la obligacion para el Estado, se acaba la obligacion para el clero; si acaba la obligacion de la Corona, acaba la obligacion del Pontífice; si se rompe el Concordato para el uno, se rompe el Concordato para el otro. Esto es evidente, y no hay que hacer muchos esfuerzos para demostrarlo.

¿Obedece este proyecto, como ha preguntado el Sr. Pidal, al principio de la Iglesia libre con el Estado libre? No, y así es que tiene este proyecto la desventaja de que no acomoda al clero, de que no nos acomoda á nosotros, de que no acomoda á la revolucion, de que no gusta á nadie; y me maravilla que una persona de la inteligencia superior del Sr. Montero Rios, una persona de instruccion tan vasta, especialmente en este ramo, haya hecho una gran obra de arte enlazando tantas cosas buenas para dar un mal resultado (yo creo que se necesita la inteligencia de un hombre superior para hacer el preámbulo que tiene este proyecto, pues son cosas antitéticas los antecedentes que invoca y el resultado que propone). Á mí, señores, me maravilla que el señor ministro nos haya presentado esta ley; porque yo pregunto: ¿Tiene el Gobierno la facultad de variar la calidad de los deudores? ¿Puede el Gobierno decir que aquello que está obligada á pagar la nacion ó el Estado lo satisfagan los ayuntamientos?

Pues entonces creo que el señor ministro de Gracia y Justicia rompe, no solo los contratos, sino que rompe con toda doctrina sana, y se convierte en director de los intereses eclesiásticos, como el ministro de la Guerra es el director de los soldados, y como el ministro de Marina de los barcos; y si hoy

el Gobierno puede con una gran facilidad mandar que la obligacion de pagar al clero vaya á recaer sobre los ayuntamientos, mañana con la misma facilidad podrá decir que la obligacion que tiene la nacion de pagar la deuda pública recaiga en adelante sobre los ayuntamientos, que los ayuntamientos paguen la deuda, con el mismo derecho con que ahora se les dice que paguen al clero.

¿Tiene el Gobierno facultad para hacer que paguen los ayuntamientos al clero? Pues ¿qué dificultad habrá para que el día de mañana el Gobierno diga que los ayuntamientos paguen la deuda que la nacion ha contraído? Y ese sistema sería mucho más fácil y económico, y yo se lo recomiendo á los señores economistas para que apunten esta nueva idea. (*Risas.*) No, no puede el Gobierno anular el contrato que tiene contraído con la Santa Sede; no puede mandar á los ayuntamientos que paguen las obligaciones del Estado, porque es la nacion, es el Estado en este sentido el que tiene y ha contraído la obligacion de pagar.

La comision sostiene que el proyecto llena cumplidamente el precepto constitucional, expresado con estas palabras: «La nacion se obliga á mantener el culto y los ministros de la religion católica»; haciendo notar que no es el *Estado*, sino la *nacion*, la que tiene el compromiso; distincion demasiado sutil, porque *nacion* y *Estado*, con permiso de la comision, se usan y han usado muchas veces en idéntico sentido, *significando lo mismo las dos palabras*, puesto que la primera se define «coleccion de los habitantes en alguna provincia, pais ó reino», y la segunda se define, entre otras varias maneras, «el pais ó dominio de algun príncipe ó señor», así como tambien «el cuerpo político de una nacion». Mas prescindiendo de esta cuestion de inteligencia y significacion de las palabras, conviene observar que cuantas veces se escribe en las leyes, en los tratados internacionales y en los documentos públicos que España, Francia, Inglaterra, esto es, la respectiva *nacion* se obliga á una cosa, siempre se ha entendido que es el *Estado*, la colectividad asociada, el cuerpo político de la *nacion* el que se obliga. Así, pues, al consignarse en el art. 21 de la Constitucion política de 1869 que «la *nacion* se obliga á mantener el culto y los ministros de la religion católica», se entendió y debió entenderse que la obligacion la contraía el *Estado*, el cuerpo político de la *nacion*, siendo una interpretacion pueril cualquiera otra que se dé al artículo.

¿Cómo encontró la revolucion esta cuestion? Perfectamente



resuelta. Lo que ha hecho y lo que hace es crearse complicaciones por su gusto y hacer injusticias por capricho.

El sistema del Gobierno es el sistema de la ilegalidad, es la confiscacion, es la fuerza bruta.

Declara lo que hace falta para culto y clero; varía la cantidad; varía el deudor; en una palabra, hace de los párrocos lo que podría hacer de los agentes de policía, lo que podría hacer de los serenos, del alumbrado. Mañana vendrá otro gobierno y dirá que esto es mucho, y se tratará á los ministros de la religion como á los perros; y así es que es irrisorio que el Gobierno llame definitivo á este proyecto.

¿De dónde han de pagar los ayuntamientos?

¿Dónde tienen los recursos? ¿De qué fondos han de satisfacer las obligaciones eclesiásticas? Aquí hay dos cuestiones: primera, la desigualdad completa de la contribucion, porque en un pueblo de 1.000 vecinos habrá 10 eclesiásticos, y en otros de 1.000 habrá 20; y si los pueblos han de pagar segun el número de eclesiásticos, la desigualdad de la contribucion es evidente. Pero vamos á lo fundamental: supongamos (que yo lo niego) que el Gobierno tuviera facultad para cambiar la calidad del deudor, que el Gobierno tuviera facultad para eximir á la nacion de la obligacion de pagar al clero; supongo tambien que los ayuntamientos quieran pagarle; ¿de dónde han de pagar? El Gobierno dice que los ayuntamientos tienen 93 millones de pesetas que han de percibir de los consumos, y que de éstos pueden pagar 32 al clero. Si estoy inexacto en las cifras, desearia que algun individuo de la comision me rectificara. Señores, el Gobierno no ha establecido un solo dato en el proyecto de ley que trae á las Córtes, no ha establecido un solo dato exacto; el Gobierno dice que los ayuntamientos pueden pagar con aquello que ingrese en las arcas municipales por efecto del restablecimiento de los consumos, que quedan por este nuevo sistema económico á cargo de los ayuntamientos. En primer lugar, una contribucion que se ha estado estigmatizando durante muchísimo tiempo, una contribucion que se ha tenido por una de las glorias de la revolucion el acabar con ella, una contribucion que el Estado no la percibe, sino que ha desacreditado por completo, ¿cómo se va á establecer nuevamente para los pueblos? ¿Quién ha dicho al Gobierno que esos 93 millones de ingresos no quedarán reducidos á la mitad? Esta es la primera consideracion. Segunda: los ayuntamientos ¿no tienen más obligaciones que la de pagar al clero, con arreglo á este proyecto? Pues ¿y el alumbrado, que equipara con esta obligacion? ¿Y el pago de los

serenos? ¿Y el pago de los mozos de escuadra, etc., etc., cuyo pago ha de salir tambien de la contribucion de consumos? Y los maestros, y el médico, cirujano, botica, beneficencia y hospitales, ¿de dónde se paga? Por consiguiente, se ve que el Gobierno no es exacto en cuanto propone en el proyecto, ni en la calidad ni en la cantidad.

Se dice tambien en el proyecto que lo que se da al clero es exactamente lo que le corresponderia percibir si, teniendo íntegros los bienes nacionales, los pusiera á renta y le produjesen el 5 por 100; y parece como que se le hace un gran favor en darle este 5 por 100. Si esto fuera cierto, el clero, bajo el punto de vista de la utilidad material, bajo el punto de vista de tener con que vivir, podria darse por satisfecho; pero es todo inexacto.

Primero, el Gobierno supone que no se han vendido más bienes del clero que por valor de 2.600 millones de reales; y aun cuando yo no quiero tener presente mas que los datos más exigüos, más mínimos, las ventas de los bienes nacionales se hacen subir á 3.000 millones, si bien hay quien las ha hecho subir hasta 5.000. Teniendo, por consiguiente, 3.000 millones de bienes nacionales vendidos, por este solo concepto el clero no percibiria ciertamente ni el 5 por 100 que el Gobierno y la comision suponen. ¿Pero es que al clero no se le ha desposeido mas que de los bienes territoriales? ¿Es que el clero no tenía otra renta tan productiva como la que daban de sí los bienes nacionales? Pues es menester computarlo todo para poder sacar las consecuencias de con qué sacrificios ha procurado el clero el bienestar de la nacion, y qué sacrificios ha hecho en cuanto á los bienes que ha poseido.

Suponiendo que solo se hubieran vendido los bienes que el Gobierno cree que se han vendido, darian una renta de 150 millones de reales; el proyecto que actualmente presenta el Gobierno á la aprobacion de las Córtes no da mas que 120 millones de reales; por este concepto se le merman al clero 30 millones de reales de renta anual. Pero el clero tenía el diezmo, tenía las primicias y tenía otra porcion de derechos que, en junto, daban una renta líquida de 350 á 400 millones de reales; y si lo que se trata es de indemnizarlo por razon de los bienes que ha poseido, en lugar de 120 millones, hay que indemnizar al clero por valor de 350 millones de reales; por donde ven los señores diputados que este proyecto, por cualquiera parte que se toque, no hay por donde cogerlo, que no obedece á ninguna necesidad y que no hay cálculos exactos.



Hé aquí sobre el mismo razonamiento que acabo de hacer un estado formado por persona competente, que ha tratado este asunto con detenimiento y á conciencia.

VALOR DE LOS BIENES DE QUE SE INCAUTÓ EL ESTADO, PERTENECIENTES AL CLERO SECULAR Y REGULAR Y Á LAS FÁBRICAS DE LAS IGLESIAS.

Segun los datos más autorizados, por haberlos recogido persona sumamente entendida y dedicada especialmente á estas materias, el valor de los bienes de que se incautó el Estado, en virtud de las leyes de 29 de Julio de 1837, de 2 de Setiembre de 1841 y de 1.º de Mayo de 1855, que tratan de la desamortización de los bienes eclesiásticos, debe calcularse en la forma siguiente:

	Reales.
Valor de los bienes del clero secular y de las fábricas de las iglesias, mil seiscientos millones de reales.....	1.600.000.000
Valor de los bienes del clero regular, novecientos millones de reales.....	900.000.000
Total, dos mil quinientos.....	2.500.000.000

Algunos han elevado el valor hasta cinco mil millones de reales..... 5.000.000.000

Pero esta suma indudablemente es exagerada, formándose un cálculo prudente, pues el primero aquí consignado es algun tanto escaso por falta de todos los datos. Debe creerse que el valor más aproximado á la verdad es el de tres mil millones de reales.. 3.000.000.000

En este supuesto, la renta que hoy produciría esa suma, y que percibiría la Iglesia de España por los bienes que tenía en propiedad, si los conservara, ascendería, á un 5 por 100, á la cantidad de ciento cincuenta millones de reales..... 150.000.000

De modo que solo por este concepto debe el Estado á la Iglesia casi el total de la dotacion que ha percibido desde el Concordato de 1851, y mucho más de lo que hoy se señala en el proyecto del Sr. Montero Rios.

Pero á esa cantidad de renta, que debiera tener la Iglesia por

los bienes de su legítima y sagrada propiedad de que el Estado se *incautó*, hay que agregar la indemnizacion debida por los diezmos y las *primicias* que la Iglesia canónica legalmente percibia, y cuyo producto anual se calculó en el quinquenio de 1828 á 1833 en doscientos diez millones de reales próximamente..... 210.000.000

Unida esta suma á la anterior de ciento cincuenta millones de reales..... 150.000.000

Resulta un total de trescientos sesenta millones..... 360.000.000

Esta partida de trescientos sesenta millones se intenta compensar con ciento veinte millones de reales..... 120.000.000

escasos en el proyecto del Gobierno actual; de manera que á la Iglesia de España se la da en ese desdichado y absurdo proyecto, como le llamó en el Congreso, y con razon, el señor Rios Rosas, la tercera parte de lo que ella tenía *por derecho propio*, tan respetable como el de cualquier particular, y de lo que no pudo ser *despojada*, como dijo en las Cortes el señor D. Pedro José Pidal, sin una insigne injusticia y una evidente conculcacion de toda clase de derechos. La indemnizacion, ilusoria ciertamente, que el proyecto del Sr. Montero Rios pretende dar á ésta es una befa y un escarnio, porque ninguna deuda se paga dando el deudor al acreedor una tercera parte del valor de la misma.

La Iglesia transigió por medio del Concordato de 1851, aceptando como dotacion segura, en indemnizacion de lo que se le habia arrebatado violentamente, ménos de las dos terceras partes de la renta que debiera percibir, porque el presupuesto eclesiástico, segun aquel notable tratado, solo ascendia próximamente á 210 millones de reales anuales.

Esta transaccion, tan beneficosa al Estado, obliga á éste en todo derecho y en toda razon, y los gobiernos, y las Cortes, y los monarcas no pueden rebajar dicha suma, porque es *una carga de justicia* procedente de un pacto. Cualquiera que realice la rebaja comete un atentado, y obtendrá la calificacion de *tramposo*.

Pues bien; descendiendo despues el proyecto, dice «que el clero español es el clero mejor pagado de todos los cleros católicos, y que no tiene por qué quejarse. En primer lugar, tendria siempre por qué quejarse, porque aquel á quien se le expropia de una cosa no está bien que se le diga que porque otro no la



tiene hay que quitársela». De manera que, aun cuando fuera el clero español el más dotado, no es una razón el decir que porque haya otro más pobre debe éste serlo también; y en segundo lugar, no es cierto que el clero francés ni el clero belga tengan menos productos que los que se trata de asignar al clero español con este proyecto de ley. ¿Por qué no compararlo con el clero inglés? ¿Por qué no compararlo con el clero alemán? ¿Y por qué no compararlo con otros cleros que hay en la religión protestante, que son mucho más costosos que el clero español y que tienen bienes? ¿Por qué no compararlo con el clero de Rusia? (*Una voz:* Esos son herejes.) Pues si los herejes pagan bien á su clero y enaltecen las falsas religiones, ¿qué consecuencias no se deducen en contra de una nación que se precia de católica, y que tiene en la abyección el culto y clero de la religión verdadera? (*Una voz:* Bien cogido.) Es decir que los herejes tienen un sentimiento de moralidad y justicia más íntima que vosotros que os llamais católicos, mayor que el de un gobierno que se llama católico y que trata de esta manera al clero.

Oigan los señores diputados lo que tiene de renta el clero protestante en Inglaterra:

ESTADO EXPRESIVO DE LAS RENTAS DE LAS PRINCIPALES DIGNIDADES  
ECLESIASTICAS DE INGLATERRA.

	Reales.
Arzobispo de Canterbury.....	1.440.000
Arzobispo de Yorck.....	960.000
Obispo de Lóndres.....	900.600
Obispo de Durhan.....	768.000
Obispo de Bangor.....	403.000
Obispo de Bath and Wells.....	480.000
Obispo de Exeter.....	250.000
Dean de Canterbury.....	192.000
Dean de Yorck.....	199.000
Dean de Durhan.....	288.000
Dean de Bath and Wells.....	96.000
Dean de Exeter.....	115.000
Dean de Bangor.....	81.600
Canónigos de Lóndres, el que ménos.....	63.000
Canónigos de Durhan.....	96.000
Canónigos de Bangor, el que ménos, y son los más pobres.....	33.000

NOTA. En Inglaterra hay más de 15.000 beneficiados, sin com-

prender los de Escocia é Irlanda, cuya menor dotacion pasa de 10.000 reales.

Todos tienen triple cantidad que los arzobispos católicos de España.

En Rusia no hay ningun eclesiástico que tenga ménos de 10.000 reales, y en todos los puntos del orbe sucede una cosa parecida.

El Gobierno actual hace una clasificacion bien inexacta: supone que cada español paga sobre 10 1/2 rs., y supone que en Francia no se paga mas que 2 francos para culto y clero. Pues en Francia se paga 4 francos por cada habitante, y el gobierno, no por falta de ilustracion, sino por la necesidad en que se encuentra, supone que el clero frances no tiene mas que aquello que está puesto en los presupuestos. Aun en éstos tiene más el clero frances, y eso que no tiene los establecimientos de instruccion, los seminarios, como el clero español; y solo con las sillas de las iglesias tiene una renta bastante subida.

*Una voz:* Pues ponerlas aquí tambien.)

No basta que se pongan, sino que haya costumbre de sentarse en ellas. (*Risas.*) Y no quiere decir que los templos en España no estén concurridos; lo que hay es que no es bueno establecer una innovacion en la iglesia, porque está establecido otra cosa. Sus señorías están completamente equivocados: el pueblo español no dejaria ciertamente de ir á la iglesia por tener que pagar las sillas, pero no es justo que el Gobierno venga á hacer argumentos de cierta índole, y diciendo que en otras partes el clero tiene ó deja de tener tales bienes, cuando en realidad no es verdad.

Después de todo, aquí es preciso indemnizar por cuenta del Estado, y no de los fieles en particular.

Hemos tenido un ejemplo en nuestra propia legislacion, que es el que ha servido hasta cierto punto de pensamiento para establecer las actuales relaciones entre la Iglesia y el Estado, y es el de los partícipes legos en diezmos, que se encontraban en una situacion parecida, á la en que ahora se encuentra el clero cuando por una ley se echó abajo el diezmo. ¿Qué hizo el Estado con los partícipes legos en diezmos? Darles una indemnizacion en títulos de la deuda, cuyos intereses siguen aún incluidos en los presupuestos, sin que á nadie se le haya ocurrido después cercenar una parte de ella; los partícipes siguen gozando de su renta como de una verdadera propiedad. Ahora bien, una cosa parecida se arregló por medio del Concordato entre el Estado y el clero, para indemnizar á este último de la



renta de sus bienes vendidos; si ahora se anula el Concordato, desaparece la indemnizacion. Y no se venga á decir que esta indemnizacion se sustituye con una dotacion ni con una gracia especial al clero, no; esta obligacion es una obligacion distinta de todas las demas del Estado; al clero se le debe, ó el valor de sus bienes, ó una indemnizacion por la renta que le producian: el día que se le deje sin estos bienes y sin esta indemnizacion, se habrá cometido la mayor de las iniquidades, y se habrá dejado al clero en la situacion más precaria.

Voy á concluir haciendo una observacion general sobre la ley, relativa á una omision que encuentro en ella, que es muy esencial; y si la comision y el Gobierno no dan sobre este punto explicaciones categóricas, yo haré una enmienda cuando llegue la discusion del artículo correspondiente.

En las diferentes discusiones que hemos tenido en la comision de presupuestos, á la que yo asistia algunas veces por gusto, apesar de que no pertenezco á ella, se trató la cuestion del juramento del clero, y salí de allí muy convencido de que en este proyecto se declararia terminantemente, que no habria necesidad de que el clero jurase, para que le fuera pagaða su asignacion ó la indemnizacion por aquellos bienes de que fué desposeido, que es en realidad el punto de vista que no hay que perder en el asunto, y ahora me encuentro que no hay nada establecido en el proyecto sobre este punto. Y, señores, es una obligacion hasta de honor en el Gobierno el resolver de una vez esta cuestion: si despues de todo lo que aquí se ha dicho contra este proyecto, si despues de demostrar su injusticia, su inutilidad y la imposibilidad de que sea aceptable para el clero ni para los pueblos, salimos con que tendrá que jurar el clero si quiere cobrar las dotaciones que aquí se le asignan, más sencillo es decir que el clero se muera de hambre y no hablar más del asunto. El exigir el juramento al clero vale tanto como negarle lo que no se negaria á un perro, que es el necesario alimento: el clero se morirá de hambre, pero no jurará; esto se sabe de cierto.

Es preciso, pues, que se tome una determinacion: si se determina, como es justo, que el clero no tiene necesidad de jurar, tened entendido que le debeis dos años y medio de asignacion, y es necesario que se los pagueis por medio de un proyecto especial, por medio de un empréstito, si es preciso, que ya que tantos se hacen aquí para necesidades dudosas, me parece que bien se puede hacer uno para una atencion tan sagrada. Aclaremos en la ley este punto: el clero no debe jurar para perci-

bir lo que se le debe; pero decidlo claramente, porque no corresponde á la dignidad de un Gobierno y de un Parlamento el dejar en olvido cosas tan importantes como ésta; y no me digais que eso es más propio del reglamento: yo sostengo que éste es uno de los puntos más esenciales de la ley, porque un reglamento puede tardar diez años en publicarse, y no se puede dejar por tanto tiempo en la situacion precaria en que se encuentra el clero que no ha creído deber jurar en conciencia. Ruego, pues, al ministro y á la comision que den sobre este punto explicaciones categóricas, claras y terminantes.

Finalmente, de lo que se trata es de una expropiacion violenta. Lo que al clero se le paga, se le paga porque se le debe, no por ningun favor: ó cumplir el Concordato, ó devolverle los bienes nacionales; los bienes nacionales son una cosa sancionada mientras cumplais las condiciones del Concordato, y concluyo diciendo que el proyecto se opone á las nociones más vulgares del derecho.

No conseguís nada: ni agradar á la revolucion, que quiere más, quiere la separacion de la Iglesia y el Estado, ni conciliarlos con Roma, ni las simpatías de los herejes, ni las de los católicos, ni las de los pueblos, ni arreglais y nivelais el presupuesto.

Por todas estas incontestables razones os propongo que voteis contra semejante proyecto de ley.

*(El orador recibe numerosas felicitaciones al terminar este discurso.)*

El Sr. Canalejas se encargó de contestar al Sr. Estéban Collantes, ocupándose principalmente en aseverar que el partido alfonsino pretendia apoderarse de esta cuestion y monopolizarla, con objeto de acrecentar sus huestes, que, á juicio del orador radical, se hallaban muy mermadas.

Se extendió el Sr. Canalejas en probar que el partido alfonsino no tenía un credo general en esta cuestion, como, á su entender, le sucedia en todas las demas, y pretendió, partiendo de este punto, hacer notar, patentizándolas á su modo, las contradicciones que suponía que existian por razon de escuelas entre los Sres. Pidal y Estéban Collantes, que ya habian hablado, y el conde de To-



reno, que si bien no habia hecho uso de la palabra, tenía entendido era partidario de la *escuela liberal católica*.

Mantuvo el Sr. Canalejas que la Iglesia no habia desistido en sus pretensiones de dominar el mundo, influyendo directa y poderosamente en la sociedad civil y política, en los términos que expresaba la *Enciclica*, que al mismo tiempo, segun manifestó, era de ello bien clara prueba.

Fué de parecer de que el Estado estaba en su derecho al romper el Concordato; aseguró equivocadamente que el Sr. Estéban Collantes habia dicho que, en la cuestion de la libertad de cultos, lo que «echaba en cara al movimiento revolucionario de Setiembre era que *precipitadamente* habia establecido la libertad de cultos. De ese *precipitadamente* deducia que, si precipitadamente no hubiera sido, no mereceria el caso la reprobacion de S. S. Suponia el Sr. Canalejas que el Sr. Pidal decia que nunca, en ninguna ocasion, en ningun momento debia existir libertad de cultos; que no hay mas que el dogma católico, y sobre esto no hay discusion, ni libre exámen, ni libertad de la conciencia».

Á lo que el Sr. Estéban Collantes, interrumpiendo, manifestó que *él decia lo mismo*, y continuando en el terreno de las suposiciones, el Sr. Canalejas atribuyó al orador alfonsino la aseveracion de que las iglesias estaban generalmente desiertas.

El Sr. Estéban Collantes rectificó en estos términos:

EL SR. ESTÉBAN COLLANTES: Señores diputados, para escribir el proyecto de ley que estamos discutiendo se necesitaba el ingenio del Sr. Montero Rios y los sofismas del preámbulo; para defender el proyecto se necesitaban los sofismas que acabais de oir: lo mismo para escribirlo que para defenderlo, se han malgastado dos altísimas inteligencias de las primeras de nuestra patria, que es lástima que no se empleen en defender causas justas.

La prueba de que el proyecto no tiene defensa es que no le ha podido defender el Sr. Canalejas; la prueba de que el proyecto no tiene defensa, la prueba de que con él se socavan todos los

fundamentos de la justicia, todos los fundamentos sobre que debe descansar un Estado regular y un gobierno que quiere gobernar es que, apesar de los toques con que se ha llamado artificialmente la atencion de la Cámara, no hay una razon para defender el proyecto contra lo que hemos manifestado el Sr. Pidal y yo: observad, si no, las muestras de ingenio y no las razones.

Primer punto del Sr. Canalejas: hacer de la defensa del proyecto del culto y clero una cuestion política, una cuestion de partido, una cuestion alfonsista. Pretendeis vanamente que nosotros vamos, por la sagacidad del Sr. Canalejas, á caer en esa red para dar explicaciones que no necesitamos dar. Nosotros estamos perfectamente unidos en todo lo que es principal; pero desde el momento en que aquí se trae esa cuestion, aun cuando sea con el objeto de destruir los verdaderos fuegos del enemigo, es necesario decir algunas palabras; y siento que no venga la cuestion de frente, de lleno, de expreso, porque crea S. S. que nos ha de encontrar bien apercibidos. Hay una gran diferencia en tratar esta cuestion exclusivamente en los periódicos, de la manera que á cada cual conviene, á tratarla expreso y fundamentalmente: yo no la temo en ningun terreno; pero hay diferencia de tratarla particularmente entre amigos, á tratarla en presencia de la nacion, para dar á ésta la explicacion que pueda necesitar. Pero, ya digo, la prueba de que el Sr. Canalejas no encontraba razon ninguna para llevar el ánimo de la Cámara á una votacion es que ha hecho lo que se llama en el ejército una distraccion de fuerzas extrañas, una diversion.

Pues si se tratara (decia el Sr. Canalejas aproposito del proyecto), si se tratara de enaltecer aquí la gran personalidad de Napoleon el Grande, la gran epopeya de las guerras del imperio, comparándolas con el reinado de Isabel II, no tendria nada de particular que los alfonsinos hubieran traído aquí cierta clase de cuestiones.

Yo, señores, no compararé las guerras del gran emperador con las reformas admirables hechas por una reina constitucional, algo más productivas para la nacion española que las guerras del imperio para el pueblo frances, que despues de la gloria de algunos dias le ocasionaron grandes desastres y la ruina de la libertad; pero sí diré que el reinado de Isabel II en España fué el principio de la libertad, y que no llorareis nunca con lágrimas bastantes la desgracia de haberla perdido.

¿Á qué hablar de alfonsinos, á qué hablar de Napoleon, á qué hablar de la reina doña Isabel II, cuando lo que el Sr. Canalejas tenia que hacer era probar que el proyecto de culto y clero



era un proyecto beneficioso, justo y útil para la nación y para la Iglesia? Los alfonsinos estamos unidos en lo fundamental; defendemos la monarquía legítima hereditaria; defendemos el principio constitucional; combatimos proyectos como el presente. ¿Qué otro partido afirma más?

Segundo punto de diversion, de distraccion de fuerzas; segunda razon fundamental de que el proyecto del Gobierno no tiene defensa: «La escuela del Sr. Pidal y la escuela del Sr. Estéban Collantes son dos escuelas distintas»; y de esta manera, tratando de distraer la atencion de la Cámara otra vez, y tratando de que nadie se fije en los fundamentos erróneos del proyecto, quiere establecer una division de escuela en esta materia cuando no existe ninguna.

Yo le juré á S. S. aquí, y delante de Dios, que yo creo en la religion católica apostólica romana, y creo que la Iglesia, ni en los tiempos antiguos ni en los tiempos modernos, ha sido contraria á la verdadera civilizacion, ni creo que la *Enciclica* tiene la interpretacion que S. S. le ha dado, porque, por mucho que sea el telento de S. S., á quien yo respeto, respeto y venero en estas materias la inteligencia y la interpretacion de los obispos, únicos jueces de mi conciencia y de mi fé, y conozco perfectamente la interpretacion de la *Enciclica*, hecha por obispos católicos y aprobada por Su Santidad. Y voy rectificando brevemente, porque S. S. necesita una refutacion amplia, y yo no puedo dársela ahora porque lo impide el reglamento.

Cree el Sr. Canalejas que tenemos poca fé en la fé de los demas; que creemos que hay poco deseo de favorecer el culto católico, cuando sostenemos (lo cual no es cierto) que acude poca gente á las iglesias. ¿Cuándo he dicho yo semejante cosa? Precisamente en España no puede decirse eso: si S. S. frecuenta las iglesias, como yo no dudo, S. S. verá que hay dificultades para entrar en ellas, por los muchos fieles que allí acuden á consolarse en sus penas y rogar á Dios; y si S. S. creyera lo que ha dicho, y el Gobierno fuera de su misma opinion, no debía oponerse á que la Iglesia adquiriese cuanto quisiera. Porque ¿cuál es el fundamento principal que se tiene para no permitir que la Iglesia adquiera sino con ciertas restricciones? Los verdaderos fundamentos que hay, las verdaderas razones son que los revolucionarios creen que, siendo tan grande el espíritu religioso de los españoles, á la vuelta de ocho ó diez años la Iglesia tendria tantos ó más bienes como cuando se los expropiaron. Este es vuestro temor, temor que nace del espíritu religioso del pueblo español. Esta es la verdad.

La Iglesia no tiene más medio de adquirir que las donaciones de las almas piadosas; si realmente creéis que en España está tan abatido el espíritu católico que no ha de haber quien haga donaciones á la Iglesia, no sé por qué habeis puesto limitaciones á su derecho de adquirir, porque no podeis albergar temor de que vuelva á crecer entre nosotros la mano muerta.

De manera que hay una contradiccion perfecta entre los argumentos del Sr. Canalejas y las consecuencias del proyecto.

Yo no dije ni podia decir que habia habido precipitacion en el establecimiento de la libertad de cultos. El argumento principal mio, que no ha sido destruido, es que, cuando la revolucion estableció la libertad de cultos, no satisfizo ninguna necesidad real de la sociedad española, y que toda revolucion ó todo poder constituyente, cuando trata de establecer una reforma, debe procurar satisfacer una necesidad existente en el momento, y no necesidades imaginarias, y hablo en este sentido porque me dirijo á vosotros y por las necesidades de la discusion.

Y la prueba la daba acto continuo: yo decia que, si estaba realmente oprimida la conciencia en el reinado de doña Isabel II, esta opresion no era ciertamente la obra de un partido, porque aquí hemos tenido la Constitucion de 1812, obra de los varones más ilustres en el liberalismo español, que establecia la unidad católica, y la Constitucion de 1837, hecha por unas Cortes Constituyentes del partido á que pertenece el señor Canalejas, y que establecia la unidad del culto, porque los hombres que en cierta época sostuvieron con más energía la absoluta necesidad de la unidad religiosa para la nacion española son los más eminentes y más respetables del partido progresista, Olózaga, Argüelles, todos aquellos para cuyas tumbas teneis ó preparais estatuas. ¿Qué habia ocurrido, pues, en el período de dos años en esta sociedad que hiciera precisa una innovacion tan peligrosa? Declarándose todos católicos dentro y fuera de esta Cámara, no existiendo como no existia en la nacion culto alguno distinto del católico que pudiera considerarse oprimido, ¿á qué necesidad respondia la libertad de cultos? Éste era mi argumento, que no supone ciertamente en mí ningun espíritu que no esté perfectamente conforme con la fé católica.

Preguntaba despues el Sr. Canalejas (y éste quizas es el único argumento de S. S. pertinente al proyecto que se discute): ¿Tenía la nacion facultad para romper el Concordato? ¿Tenía la nacion facultad para establecer libertad de cultos? Desde



el momento en que se estableció la libertad de cultos el Concordato quedó roto, ¿no es verdad? Pues quien tiene facultad para lo más, tiene facultad para lo ménos. No puedo entrar de lleno en la cuestion. No está bajo mi dominio discutirla. Este argumento de S. S. me llevaria muy lejos; voy solamente á atajarle el paso con una observacion. El Estado puede romper el Concordato, como puede un particular romper el contrato que ha hecho con otro; pero, al romperlo, tiene que atender el Estado á las obligaciones del Concordato, tiene que cumplir las obligaciones que en virtud del Concordato ha contraido; porque, si no, seria muy cómodo para el Estado el romper con todos los lazos, con todos los vínculos de la nacion, y no pagar á nadie, y esto no puede ser; si mañana el Estado se declarara en bancarota, eso tendria sus consecuencias indeclinables y necesarias.

De la misma manera la Constitucion, ó las Córtes Constituyentes, ó el Gobierno que está al frente de los negocios, está en el deber de cumplir para con la Iglesia todas las obligaciones que habia contraido por medio del Concordato. Y ésta es la base principal de nuestra impugnacion al proyecto; porque, si así no fuera, para el Estado no habria derechos adquiridos á la sombra de la ley; con decir que no podia atender á ellos, y adoptar ciertas disposiciones en leyes secundarias, estaba libre de todo compromiso de índole permanente y sagrada, y eso no se puede admitir de ninguna manera: no hay poder para echar abajo los derechos adquiridos; por eso las leyes no pueden tener efecto retroactivo.

Y por ahora no entro en más consideraciones: he hecho las que creia estrictamente necesarias; pero como esta discusion ha de continuar, ocasion tendré de hacerme cargo de algunos puntos importantes del discurso del Sr. Canalejas, que hoy he pasado en silencio porque el reglamento me lo prohíbe.

Se puede romper el Concordato cometiendo un acto de fuerza, cometiendo una arbitrariedad, ó, lo que es lo mismo, se puede hacer, pero no se debe hacer; pero, rompiéndole, privais al Estado y á los particulares de los favores que concede el Concordato, y el clero queda completamente libre por lo que pueda suceder; de lo contrario, vuelvo á repetir, la cosa sería muy cómoda para el Estado.

De todos modos, resulta que el Sr. Canalejas no ha alegado una sola razon en defensa del proyecto: ha querido introducir confusion en nuestro campo, y no lo ha conseguido, porque no venian los tiros directos y se le conocia la intencion: no ha con-

seguido ponernos en divergencia al Sr. Pidal y á mí, que somos católicos, apostólicos y romanos; y al mismo tiempo que cree que el Concordato está roto por la Constitución, sostiene que este proyecto arranca del Concordato y es una confirmación del Concordato, lo cual es contradictorio y absurdo.

El Sr. Pidal, repetidamente aludido por el Sr. Canalejas, hizo acto continuo uso de la palabra para rectificar.

El orador radical no solo se había ocupado, como ya se ha dicho, en contraponer las opiniones de los diputados de la minoría alfonsina que habían hablado, sino que, ocupándose de Su Santidad Pío IX, y refiriendo la historia política de su reinado desde el punto de vista propio de su escuela, terminó esta parte de su discurso con las siguientes frases, que dieron lugar á que el Sr. Pidal pidiera la palabra. Dijo así el Sr. Canalejas:

«Después, amenazado el Pontificado por el creciente oleaje de las opiniones, por el creciente empuje de las escuelas, por el ensoberbecimiento, si se quiere, de los pueblos que defendían sus derechos, como todos los poderes que se ven en tal crisis, se acogió á la dictadura; porque la infalibilidad pontificia no es, señores, en resumen, no es mas que una dictadura político-religiosa.»

El Sr. Pidal rectificó en los siguientes términos:

El Sr. PIDAL Y MON: Señores diputados, tengo el sentimiento de deciros que no agradezco en nada las benévolas frases del Sr. Canalejas; es verdad que S. S. me ha levantado un pedestal, pero ha sido para subirse en él y desde allí tirar piedras al señor Estéban Collantes. No, Sr. Canalejas, yo no soy de los que dividen á Pío IX; yo soy de la escuela que lo toma todo entero; yo le considero y aprecio, lo mismo en los momentos en que la revolución daba aquellos gritos farisáicos de ¡Viva Pío IX! que en los momentos en que le arrojaban en su camino el cadáver de un ministro asesinado y le destinaban la bala que hirió mortalmente en el pecho á monseñor Palma. Pues yo le admiro lo mismo en aquellos momentos, para él tan críticos, como en los momentos en que la revolución le obligó á retroceder. ¿En qué,



Sr. Canalejas? ¿En la parte dogmática de la religion? No, en el régimen político de sus Estados. El Papa, señores, iba á dar la libertad á Italia. El Papa queria la emancipacion y la independencia de Italia. Pero se le exigió que sacrificase á la unidad de Italia la constitucion de la Iglesia, y entonces retrocedió, porque antes que italiano era jefe visible de la Iglesia. Pues yo, Sr. Canalejas, le venero lo mismo en aquellos momentos en que, perseguido y desterrado, parecia anunciar á los enemigos del catolicismo que el catolicismo habia muerto, como en los momentos que, rodeado de los cardenales y de los obispos de la Iglesia católica, daba la sancion al gran Concilio que le reconocia y declaraba la infalibilidad pontificia.

Tampoco acepto, Sr. Canalejas, aquella otra coleccion de frases benévolas con que S. S. trataba de retratar mi posicion haciendo contraste con la del Sr. Estéban Collantes. Yo, Sr. Canalejas, no soy de esos que practican una especie de quietismo panteista que espera la realizacion de la verdad sin procurarla, y que, sumidos en una especie de letargo, todo lo esperan de una fuerza ciega. Si S. S. quiere buscar á los que profesan estas opiniones, más cerca que yo los tiene S. S.; busque su señoría por los campos de la filosofia contemporanea una escuela, ó mejor que una escuela, una secta, que, panteista en el nombre, pero panteista en la realidad, partiendo de un ontologismo místico, afirma la vision instintiva de Dios y asevera que todo existe en Dios, con quien está en comunicacion inmediata.

Á esa escuela, Sr. Canalejas, puede S. S. aplicar el retrato que ha hecho mejor que á mí, que reconozco en mi entendimiento una participacion del entendimiento divino, que tiende incesantemente á la verdad, que reconozco en mi voluntad una aspiracion constante hacia el bien, que reconozco en mi corazon un sentimiento íntimo hacia la belleza; verdad, bondad y belleza que quiero realizar en todas las esferas de la vida, porque, al realizarlas en la tierra, se realiza la civilizacion espiritual, intelectual, moral y material, medios que, encaminados á mi fin, constituyen la verdadera ley del progreso formulada en aquellas palabras, síntesis de la civilizacion: «Sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre, que está en los cielos».

## SESION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE.

Al contestar el Sr. Pasaron y Lastra, en nombre de la comision, al discurso pronunciado por el Sr. Gamazo, que habia consumido el tercer turno en contra, aludió al señor Pidal, diciendo que, á lo que habia dicho de que no conocia ninguna disposicion de los reyes de Castilla que tendiese á coartar la libertad de adquirir de la Iglesia, él tenía que citarle la disposicion de D. Alfonso VII, en las Córtes de Nájera de 1138, que prohibia donar ni vender ningunos bienes de realengo á los monasterios é iglesias que no tuviesen un privilegio especial de adquirir.

Indicó que podria señalar otras varias disposiciones de las Córtes de Castilla, de Carlos III, y aun citó alguna de Carlos IV.

Con su discurso dió lugar á que hablase el Sr. Pidal en esta forma:

El Sr. PIDAL Y MON: Señores diputados, el Sr. Pasaron y Lastra ha sido el tercer defensor de este desdichado proyecto que, entre sus desdichas, cuenta la de haber sido defendido en sus dos primeros turnos por dos personas completamente ajenas á su espíritu, puesto que el uno tiene principios hegelianos y el otro es muy conocido como perteneciente á la escuela krausista; y por más que el espíritu del proyecto sea altamente irreligioso, no va seguramente por estos caminos. Pero por fin ha tenido la fortuna de que, para ser defendido en el tercer turno, se haya encontrado uno de aquellos antiguos y venerables



progresistas que, con las condiciones de inteligencia y de temperamento que le son propias, defendiera esa inmisión de las dos esferas, que constituye la esencia del proyecto. Así es que el Sr. Pasaron no se ha remontado á las regiones de la ciencia, no ha ido en busca de éste ó el otro principio filosófico, sino que ha acudido al arsenal de las armas regalistas para buscar datos y citas con que defender el proyecto.

Una de estas citas ha sido el decir que en nuestra antigua legislacion, en aquella legislacion informada por el espíritu de la Iglesia, habia leyes en las que se ponía coto á las adquisiciones de la Iglesia. Al decir esto el Sr. Pasaron, húbese yo de preguntar qué ley era esa, y S. S. me dijo que era una ley hecha por Alfonso VII; y como yo no conozco más leyes de Alfonso VII que las contenidas en el Ordenamiento de Alcalá, y allí no he encontrado absolutamente ninguna ley que prohibiese que los bienes de realengo pasasen á ser de abadengo, yo rogaria al Sr. Pasaron y Lastra que repasase bien en su memoria y recordase qué ley era esa, y me la citara, porque yo estoy seguro de que semejante ley no existe; yo estoy seguro de que no me la podrá citar S. S.; yo reto á S. S. á que me la cite.

El Sr. Pasaron apoyaba sus asertos en las opiniones de los regalistas: yo me felicito de que para S. S. sean autoridades Floridablanca y Godoy; en cuanto á mi, que acaso pasaré aquí por el más reaccionario de la Cámara, cúmpleme decirlos que no tienen autoridad de ningún género, porque no hay para mí nada más odioso que un absolutista irreligioso.

Dice el Sr. Pasaron que la amortizacion acabó, que la amortizacion es un hecho que ha pasado ya al panteon de la historia. Y, sin embargo, ¡qué lastimosa contradiccion! La comision de que el Sr. Pasaron es presidente confirma el hecho de la amortizacion, y la prueba es sencilla: lo que la ley prohíbe no es la amortizacion; lo que prohíbe es la amortizacion de los bienes inmuebles, de los predios, de las tierras. ¡Ó es acaso que en el espíritu de atraso en que todo este proyecto se inspira, domina todavía la teoría de aquellos antiguos fisiócratas que creían que solo la tierra era valor? Me alegraré mucho de que así sea, porque esto me demostrará que ni aun en esto se aparta la comision del vergonzoso espíritu de atraso que en todo el proyecto domina.

Decia S. S.: «¡Ah! es que las iglesias eran muy ricas, habian aglomerado en sus manos toda la propiedad territorial, el Estado estaba pobre y tenía que venir una reaccion». Y dirá mañana La

Internacional: «Las clases medias habían aglomerado toda la propiedad territorial»; y vendrá la reacción, y en el mismo nombre en que el Sr. Pasaron justifica el despojo de la Iglesia, mañana La Internacional justificará el despojo de los bienes de fortuna del Sr. Pasaron.

pero, señores, decía el Sr. Matissonna, no tiene la Iglesia derecho a poseer bienes. ¿Por qué? Porque la Iglesia...

El Sr. VIGNERON, de la Comisión, dijo: «Bueno, pero ¿qué es lo que se quiere decir con esto?»

A petición del Sr. Matissonna, que deseaba comprender el proyecto sobre obligaciones sociales en la totalidad, y consumido ya el tiempo por el Sr. Gamaro, el Consejo acordó que fuese un caso de orden del día, y se ocupase. Combatiendo el proyecto del Sr. Matissonna, se ocupase del derecho de adquirir de la Iglesia y de la forma en que lo había hecho, en la que el orador creía hallar un ejemplo de los requisitos legales, el Sr. Pidal se creyó obligado a pedir la palabra, cuando de ella cuando terminó el orador repulicando, haciéndolo de esta suerte: «Señores, yo quisiera que se ocupase de esto».

El Sr. VIDAL, de la Comisión, dijo: «Señores, yo quisiera que se ocupase de esto» y de contacto porque al fin he venido a encontrar un artículo francés, y he leído el artículo del Sr. Gamaro, como con otros de buena opinión el debate en el artículo como en la comisión lo he leído. Por fin me he encontrado con un socialista francés y completo en toda la extensión de la palabra socialista en los principios, socialista en la doctrina, socialista en la práctica, que ha venido a combatir la propiedad de la Iglesia bajo el punto de vista de los principios socialistas. Y sin embargo, señores, es un socialista muy partidario, porque no quiere la propiedad en la sociedad, y dice: «Señores, no quiero la propiedad en la sociedad, he de negarme el derecho de propiedad y entregar sus bienes al Estado, que es una sociedad». Yo no sé qué socialista sea esto. Y qué dice, señores, lo está contradiciendo. Dice que los argumentos del Sr. Matissonna todos son verdades, porque dice: «La Iglesia no tiene derecho a poseer bienes».



## SESION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE.

A petición del Sr. Maisonnave, que deseaba combatir el proyecto sobre obligaciones eclesiásticas en su totalidad, y consumido ya el tercer turno por el Sr. Gamazo, el Congreso acordó que hubiese un cuarto turno.

Combatiendo el proyecto el Sr. Maisonnave, al ocuparse del derecho de adquirir de la Iglesia y de la forma en que lo habia hecho, en la que el orador creia faltaban generalmente los requisitos legales, el Sr. Pidal se creyó aludido y pidió la palabra, usando de ella cuando terminó el orador republicano, haciéndolo de esta suerte:

El Sr. PIDAL Y MON; Señores diputados, respiro lleno de alegría y de contento porque al fin he venido á encontrar un adversario franco, y hemos salido del estrecho empirismo que como con aros de hierro oprimia el debate en el estrecho círculo en que la comision lo sostiene. Por fin me he encontrado con un socialista franco y completo en toda la extension de la palabra: socialista en los principios, socialista en la deducción, socialista en la práctica, que ha venido á combatir la propiedad de la Iglesia bajo el punto de vista de los principios socialistas. Y, sin embargo, señores, es un socialista muy particular, porque no quiere la propiedad en la sociedad, y dice que, siendo la Iglesia una sociedad, debe negársele el derecho de propiedad y entregar sus bienes al Estado, que es... otra sociedad. Yo no sé qué socialismo sea éste. ¿Y qué nace, señores, de esta contradicción? Nace que los argumentos del Sr. Maisonnave todos son viciosos, porque dice: «La Iglesia no tiene derecho á poseer bie-

nes. ¿Por qué? Porque es una corporacion. (*El Sr. Maisonnave: Tiene derecho ahora, pero no lo tenía antes.*) Pues entonces no comprendo el argumento.

Yo creía que el derecho era una ley eterna y absoluta, que no obedecía á limitaciones de tiempo ni de espacio, y que esto era una verdad todavía más en la escuela á que pertenece S. S.; pero si ahora S. S. me pone limitaciones temporales para aquellos principios que deben obedecer á leyes eternas y absolutas, entonces yo debo decir que S. S. pertenece á la misma escuela empírica que la comision.

Pero, señores, decía el Sr. Maisonnave: no tiene la Iglesia derecho á poseer bienes. ¿Por qué? Porque la Iglesia...

El Sr. VICEPRESIDENTE (*Romero Giron*): Ruego á S. S. que se contraiga á la alusion.

El Sr. PIDAL Y MON: Señor presidente, el diputado que acaba de usar de la palabra, me ha aludido en el mero hecho de decir que todos los argumentos que él queria combatir en la comision ésta no los habia expuesto, sino que quien los habia expuesto era yo, y al refutarlos venía á contradecir mi discurso; y yo, señor presidente, no pienso de ningun modo contestar á los argumentos, sino rectificar los que hice en aquella ocasion.

El Sr. VICEPRESIDENTE (*Romero Giron*): S. S. ha pedido la palabra para alusiones; si la hubiera pedido para rectificar, la Mesa hubiera tenido buen cuidado en dársela para rectificar.

Ahora, si quiere S. S. usar de la palabra para rectificar, no tengo inconveniente en concedérsela; pero de antemano le ruego que se concrete á rectificar.

El Sr. PIDAL Y MON: Pues bien, pido la palabra para alusiones y para rectificaciones.

Decía el Sr. Maisonnave: los bienes no son de la Iglesia, porque la Iglesia es una sociedad, y por lo tanto no tiene derecho á poseer, sino que esos bienes son del Estado. Y yo pregunto: ¿y qué es el Estado? Otra sociedad. De consiguiente, el Sr. Maisonnave quita los bienes á la Iglesia porque es una sociedad, para dárselos al Estado, que es otra sociedad; si éste es el argumento de S. S., yo no acierto á dar en el quid de la dificultad; porque el Estado es una sociedad, y una sociedad que tiene, no precisamente el dominio que se llama eminente, sino tambien el dominio pleno de las fortalezas, de los caminos reales, etc.; en una palabra, que tiene propiedades que no poseen la familia y los municipios; ¿pues qué son mas que sociedades ó entidades colectivas?

¿Pero es que se quiere decir por un socialista (y esto, seño-



res, es muy particular) que no hay propiedad corporativa? ¿Es que se quiere decir tambien que las personas no tienen derecho á adquirir? ¿Es que se quiere que entremos en el terreno del derecho natural? Pues entremos en él. Precisamente en ese terreno me encuentro más á mi gusto, porque abre ancho campo y vastos horizontes á la inteligencia; discutiremos, pues, en ese terreno, y puesto que el Sr. Maisonnave ha concedido que la Iglesia es una asociacion lícita, veremos si las asociaciones lícitas tienen ó no el derecho y el deber de conservarse, base y fundamento del derecho natural de propiedad; y si su señoría quiere, veremos más: veremos si ese derecho se puede aplicar al individuo, ó es exclusivo de la personalidad. Porque aquí, señores, pasa una cosa muy graciosa, y es que todos vosotros hablais y reconocéis los derechos individuales, y en buena filosofía los individuos carecen de derecho como individuos, porque individuos son tambien los animales, y el derecho solo es propio de las personas, es decir, de á las que al elemento individuo añaden el suplemento de la racionalidad, complemento de la personalidad humana. No deben, pues, llamarse derechos individuales, sino derechos personales.

Pues bien, decia el Sr. Maisonnave que la Iglesia no podia vender, y yo digo á S. S. que la Iglesia podia vender, podia cambiar, podia enajenar, podia adquirir á título gratuito y á título oneroso.

Y nos habló enseguida el Sr. Maisonnave de las grandes usurpaciones de la Iglesia, de cómo se habia apoderado del poder civil, de cómo...

El Sr. VICEPRESIDENTE (Romero Giron): Dejo á la consideracion de S. S. si el contestar, como lo está haciendo, á los argumentos del Sr. Maisonnave es rectificar y contestar á alusiones.

El Sr. PIDAL Y MON: Señor presidente, con la franqueza que me es habitual no tengo más remedio que decir á S. S. que tiene completa razon. Si S. S., en atencion á la importancia del debate, me quiere dejar alguna extension, continuaré...

El Sr. VICEPRESIDENTE (Romero Giron): Á mí no me permite el reglamento conceder á S. S. más extension que para lo que ha pedido la palabra. Considere S. S. la benevolencia con que le está tratando la Mesa, y segun ella, mida la extension de su derecho.

El Sr. PIDAL Y MON: Pues voy simplemente á rectificar. Tenía preparado para leérselo al Sr. Maisonnave un extracto de todas las disposiciones de nuestros Códigos, que todas ellas

consignan el derecho de adquirir para la Iglesia; pero ya que no es posible, se los podré enseñar particularmente, ó examinaremos esta cuestion más adelante, cuando tratemos del derecho de adquirir de la Iglesia. Y ahora no tengo más que decir sino que S. S. me ha complacido, ó mejor dicho, porque soy franco, S. S. me ha disgustado, pues yo no soy pesimista; yo no quiero vencer á una escuela haciéndola ver que está en contradiccion con sus principios, sino haciéndola ver que sus principios son absurdos. Á mí me gusta la lucha de principios contra principios, y siento por el mismo porvenir del partido de S. S. que, en lugar de abogar por la completa independencia de la Iglesia y del Estado, venga S. S. aquí á hacerse eco de las añejas doctrinas de los pelucones, y de los golillas, y de los fiscales del Consejo en el funesto siglo XVIII.

Rectificó el Sr. Maisonnave, manifestando que los textos del Sr. Pidal serian de las Partidas, que es un Código ultramontano, é indicó que seguramente no presentaria ninguno del Ordenamiento de Alcalá ni de la Novísima Recopilacion.

Aseguró que no era socialista, y que únicamente, como todos los republicanos, aspiraba á las reformas sociales que estén dentro del derecho, y en este concepto era él socialista; pero que en términos generales no queria pasar por tal, por más que respetase esa doctrina, como lo debian hacer todos, incluso el Sr. Pidal, aun cuando no se acepte; pues, á su juicio, debe respetarse todo aquello que reconoce como base un principio científico.

El Sr. PIDAL Y MON: Pido la palabra para una brevísima rectificacion.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Romero Giron): La tiene S. S.

El Sr. PIDAL Y MON: Yo, Sr. Maisonnave, respeto mucho, muchísimo, no á las doctrinas, sino á las personas en que se encarnan; y así es que á S. S., aunque socialista, le respeto tanto como al mayor individualista de la tierra; pero á la doctrina de S. S., ó sea al socialismo, como lo considero un error, lejos de respetarle, le he de perseguir en donde quiera que se levante.

Que S. S. es socialista se lo voy á probar con las palabras de





S. S., palabras que le merecieron una ligera advertencia de parte de un compañero suyo.

Decía S. S. para probar que el Estado no debía indemnizar á la Iglesia: «El Estado, en virtud de su dominio eminente, se puede apoderar de los bienes de la Iglesia». Es así que este dominio lo tiene sobre toda propiedad, luego cabe la teoría de que el Estado se puede apropiar los bienes de todos los ciudadanos, incluso los de S. S.; el argumento no tiene vuelta de hoja.

Me sale S. S. con la expropiación, diciendo que está consignada en la Constitución, y lo mismo de cualquier persona que de cualquier individuo. ¿Expropiación en qué caso? En que cuando, por causa de utilidad pública, hace falta destruir una propiedad para hacer un camino, una fuente, es justo expropiar á uno de tal ó cual pedazo de su finca. ¿Pero se puede, en virtud de este principio, proceder á la expropiación de todas las propiedades de una corporación, hállese donde se hallen, y sin causa conocida de utilidad pública? Pero, además, ¿qué es lo que dice la Constitución? Que se puede expropiar, previa indemnización. ¿Dónde está aquí esa previa indemnización de los bienes de la Iglesia? Hé aquí cómo no se puede aplicar la teoría del dominio eminente del Estado para la expropiación de los bienes de la Iglesia sin ser, como el Sr. Maisonnave, profunda, esencialmente socialista.

En su discurso el Sr. Maisonnave había dicho que el proyecto de ley que se estaba discutiendo mereció ser combatido por el partido conservador, y que lo era á su vez por él, por no ser revolucionario; añadiendo más adelante que ese criterio estaba en los bancos republicanos, y no en los del Ministerio y de la comisión. Añadió que el proyecto que se había querido presentar como revolucionario, para fascinar á todo un partido, era solo una débil transacción.

Estas aseveraciones del Sr. Maisonnave dieron lugar á la siguiente rectificación del Sr. Estéban Collantes:

EL SR. ESTÉBAN COLLANTES: Voy á decir muy pocas palabras: yo tengo el propósito de que siga su curso ordinario y natural esta discusión, y tengo también el intento de que todo proyecto de ley que presente el Gobierno, cualquiera que sea

el punto de vista bajo el cual se le combata, no luchemos las oposiciones unas con otras, desvirtuando nuestros propios argumentos, porque únicamente debemos dirigirnos al proyecto en su fondo; así, pues, no me propongo contestar al Sr. Maisonnave. Su discurso es el más sensato en el caso actual, dadas sus opiniones tan contrarias á las mías, y yo me alegro mucho que, tanto S. S. como los demás individuos de su partido, tengan el propósito que S. S. ha sentado de no discutir aquí la religion, porque esto no es un Concilio, sino un Congreso de diputados. Sigamos todos este ejemplo.

Tengo que rectificar y confirmar al mismo tiempo mi opinion con la del Sr. Maisonnave. Yo he dicho que el proyecto (y lo he sostenido y demostrado) es de tal naturaleza que no satisface ningun interes, ninguna opinion, que no lleva por delante la aplicacion de ningun sistema, y el discurso del Sr. Maisonnave nos dice que el proyecto del Gobierno es contrario tambien al principio revolucionario. Esto es lo que yo dije, y ahora lo sostengo con la autoridad de S. S., que es la autoridad del partido verdaderamente revolucionario; es decir, el plan del Gobierno es hipócritamente revolucionario, y el partido republicano es más franco, y por lo mismo quizá ménos peligroso en esta parte; pero todo lo que se separa del acuerdo de la Santa Sede es igualmente inadmisibile y en el fondo igualmente revolucionario. El proyecto no satisface á los intereses conservadores, segun lo hemos demostrado nosotros; el proyecto no satisface al clero, no satisface al Sr. Maisonnave ni á nadie.

En los artículos de este proyecto se tratan cuestiones determinadas muy importantes: es natural que los que toman parte en la discusion de los artículos han de hacer referencia á los que hemos iniciado esta discusion; pero yo anuncio desde ahora que no he de hacer rectificaciones aisladas, que deslucen naturalmente y hasta desnaturalizan la fuerza de los argumentos: yo me reservo para más adelante, y espero que han de quedar contestadas todas las opiniones que aquí se emitan contrarias á las nuestras.

El Sr. Maisonnave ha estado perfectamente dentro de las reglas del derecho al decir lo que ha dicho; nada más cierto: si hay derecho para adquirir, hay derecho para retener; por consecuencia, ó hay propiedad, ó no la hay. El plan del Gobierno flaquea por todas partes.

Pero vuelvo á decir que la necesidad en que está la comision de contestar y aclarar las dudas del Sr. Pidal me impide ahora entrar en ciertos detalles, y me limito solamente á con-



signar que en este proyecto no se da al clero lo que antes se le daba, puesto que se le disminuyen 30 millones de su consignacion anual; y yo digo: si hoy hay derecho para disminuir la dotacion sin consideracion ninguna á la justicia, otro gobierno podrá venir mañana que diga que no quiere dar nada. Este es el motivo por el cual he hecho esta rectificacion, sin perjuicio de dejar mejor sentadas en adelante mis opiniones en la materia, y más destruidos aún, si cabe, todos los argumentos, mejor dicho, todos los sofismas en que se funda el proyecto del Gobierno. La comision dice: «Damos al clero lo mismo que antes y por el mismo concepto». Ni lo uno ni lo otro. Hoy rectifico afirmando. Otro día rectificaré probando. Nada ha de quedar en duda por nuestra parte.

Resumió el debate sobre la totalidad el ministro de Gracia y Justicia, indicando en su discurso que la Iglesia estaba ya en condiciones para poder apreciar toda la sinceridad, todo el respeto y todo el entusiasmo con que siempre la han defendido los prohombres del partido moderado, y que, si tuviera que escoger entre las desinteresadas y sinceras muestras de afecto de este partido y la actitud, que muchos han calificado de hostil, del partido liberal, no vacilaria un momento en aceptar la del segundo, por más que no reconozca como bueno ni lo uno ni lo otro.

Refiriéndose á los jesuitas, dijo:

«Nosotros no hemos cogido á los jesuitas en una noche, ni los hemos embarcado, sin dejarles mas que el breviario; nosotros hemos disuelto esa asociacion, es verdad, pero los individuos que la componian, en el pais continuaron, y si no lo hicieron como asociacion religiosa, pudieron proseguir como asociacion libre; nosotros no hemos degradado hasta ahora la Santa Sede hasta el punto de hacerla conferir el capelo y nombrar como sucesor de un Fenelon á un abate Dubois. (*El Sr. Estéban Collantes: Ni nosotros tampoco.*)»

Este discurso dió lugar á la siguiente rectificacion:

El Sr. ESTÉBAN COLLANTES: Como es sabida la rara habilidad y el extraordinario talento de quien ha escrito el preámb-

bulo del proyecto de ley, no habrá sorprendido á la Cámara el discurso que acaba de pronunciar. Yo esperaba que el señor ministro de Gracia y Justicia haria este discurso tan completo, tan del agrado de la mayoría, y tan conforme sobre todo y en armonía con el preámbulo. S. S. es consecuente entre lo que ha escrito y lo que ha dicho, y es natural. Lo que á mí me extraña es que una persona que dispone de tantos conocimientos y de tantos medios haya tenido necesidad de valerse al principio de su peroracion de ciertos argumentos que no son procedentes; pero que, una vez hechos, aunque sean repetidos, hay que insistir tambien por mi parte. Hablo de aquellos argumentos que nada tienen que ver con el punto que se discute, que no prueban su bondad, y que nosotros no hemos alegado ni insinuado siquiera. Que el partido moderado se ha conducido bien ó mal con el clero. No es esto lo que está puesto á la órden del dia.

Yo no tengo ningun inconveniente en que entremos en un debate especial sobre la conducta que el partido moderado ha observado en otras ocasiones en este asunto. Creo que no es procedente para la cuestion que se ventila; pero hechas algunas indicaciones, naturalmente, estando en oposicion, estando en minoria, no se pueden dejar pasar sin ningun correctivo, sobre todo cuando, á mi juicio, la razon está en nuestro favor. Hay empeño en extraviar la cuestion por los que deberian atraerla á buen camino, caso de que otros la lleváramos por malos caminos. Primera muestra de que la razon está con nosotros. Tanto por los radicales y por los demas partidos liberales, como por los partidos que no son liberales, se coloca al partido moderado entre dos paredes, y se le hace por unos el argumento de que es un partido retrógrado, y por otros de que es un partido demasiado liberal. Sin embargo, el partido moderado tiene bastante fortaleza para salir de este mal paso; y así sucede que se le hacen argumentos contradictorios; de manera que con las armas de los unos contestamos á los otros.

Por una parte se dice en esta Cámara, se ha dicho esta noche, se ha repetido en dias anteriores, que el partido moderado ha perseguido á la Iglesia y al clero, y hasta se admiran algunos de que ahora tenga ese partido la pretension de defenderlos; y por otros se dice que la reina Isabel perdió su trono por haberse entregado al partido católico; que los gobiernos que tuvo la reina Isabel fueron de tal modo católicos y favorables á la Iglesia, que eso contribuyó en gran manera á que no tuvieran las fuerzas liberales en su favor, y fuese derrumbado aquel trono.



De manera que no se comprenden los argumentos de los unos con los argumentos de los otros. La verdad es que nosotros no estamos en el caso de merecer que se nos hagan ni unos ni otros argumentos.

Así no se tratan asuntos serios. Esto es abandonar la discusión. ¿Dónde está la razón? ¿Cuál será el verdadero fundamento para poder decir rectamente, en buena intención, en buena polémica, para poder decir qué partido es el que se ha conducido mejor con la Iglesia? Yo creo que donde hay que buscarla no es en lo que dice el señor ministro de Gracia y Justicia, ni donde digo yo, puesto que somos partidarios de diversas escuelas: hay que buscarla en el romano Pontífice, en lo que ha dicho y hecho la Iglesia. Pues la Iglesia nos ha dado á nosotros la razón. ¿Por qué en todos los discursos que se pronuncian aquí para la apertura de las legislaturas y en todas las contestaciones que da la Cámara á estos discursos hace votos el gobierno radical, y el no radical, los gobiernos que aquí se han sucedido desde la revolución de Setiembre, hacen votos constantes para entablar las relaciones con la Santa Sede? Por una parte, mucho deseo de tener relaciones con la Santa Sede. El gobierno revolucionario intenta ponerse bien con Roma, y cree halagar al pueblo español diciéndole: «Vamos á estar bien con el Sumo Pontífice; nuestras relaciones con la Iglesia van mejorando»; y se manifiestan deseos de poder tener un obispo en Palacio, y aunque sea una monja, lo cual prueba que conocéis el espíritu de la nación y que gobernais contra ese espíritu; y yo no tengo necesidad de hacer grandes esfuerzos para demostrar estas intenciones del Gobierno, que bien claras y manifiestas son. Y, por otra parte, y como en despecho, se presentan proyectos como el que ahora discutimos, con los cuales se atenta á la propiedad y á los derechos de la Iglesia, y se atenta á la independencia de la Iglesia. En vano aguardais reanudar las relaciones con la Iglesia por este camino, porque teneis bastante talento para conocer que es imposible.

El partido moderado tiene una conducta mucho más consecuente: entabla sus relaciones con la Santa Sede, las acepta, negocia los concordatos y los mantiene; y este es el punto de vista bajo el cual yo he combatido el proyecto del Sr. Montero Rios, y esta noche tengo que volver á combatirlo por vía de rectificación. Y así vemos que aquí, en el momento en que viene una revolución, se marcha el nuncio, y en el momento en que opera lo que se llama una reacción, el partido cuyos principios yo sostengo en este momento vuelve el nuncio de Su

Santidad. Pues eso prueba que no somos peores que vosotros, ni iguales en nuestros procederes con la Iglesia. Ésta es la razon fundamental de nuestra diferencia. No sirven argucias. Nosotros hemos conseguido siempre mantener y estrechar las relaciones con Roma: vosotros nunca. Cuestion resuelta. Por eso el partido á que yo tengo la honra de pertenecer hizo una concordia con la Santa Sede, y la ha cumplido; porque si bien es cierto, como ha dicho el señor ministro de Gracia y Justicia, que hay ciertos puntos en los cuales no se ha cumplido el Concordato, consistió en que no hubo tiempo bastante, porque eran necesarias informaciones, expedientes, datos y noticias para el arreglo de las parroquias y de los obispados, y eso, como S. S. sabe, no se puede hacer en veinticuatro horas, porque los asuntos entre la Iglesia y el Estado son un tanto lentos por lo mismo que son graves; y de esto no debe extrañarse S. S., porque para el despacho de un expediente que no tiene más intervencion que la del ministro y el oficial del negociado, suele suceder que los interesados, aun poniendo de por medio las influencias de los diputados, no pueden conseguir su pronta y fácil tramitacion y terminacion en mucho tiempo. Por consiguiente, el completo desenvolvimiento de un Concordato no puede hacerse en dos, tres ó cuatro años; ésta es la verdad, y esto es discutir con cierta buena fé que reconocerá el señor ministro de Gracia y Justicia. Ha entrado luego S. S. en otra consideracion que tampoco es pertinente para la discusion actual, y que no responde á ningun argumento serio de los que aquí hemos presentado y aducido sobre el fondo de su proyecto. Dice el Sr. Montero Rios, como con vanagloria y en aire de triunfo: «Nosotros no hemos desterrado á los jesuitas en una noche con misterio, sacándolos á todos á un tiempo de sus casas y haciéndolos embarcar y extrañar del reino». Ni yo tampoco, ni mi partido ha echado á los jesuitas del reino, sino que, muy al contrario, los ha introducido; les ha permitido vivir, existir, organizarse y enseñar, estableciendo sus colegios y teniendo una vida quieta y sosegada como no la han tenido jamás en España; y yo por mi parte, y personalmente, debo decir que he contribuido, aunque débilmente, á que se conservara en el pueblo donde he nacido, y que tantas veces he representado en el Congreso, á que se conservara el convento de San Zoilo, y que despues se estableciera en él un magnifico colegio de jesuitas; y la prueba de que el pueblo español deseaba esta instruccion, la instruccion que dan los jesuitas, es que sus colegios estaban completamente ocupados siempre, y que los pa-



dres de familia, si tuvieran libertad, esa libertad que ahora se pregonaba y no se practica, optarian por la enseñanza de los jesuitas.

Los que han desterrado aquí á los jesuitas, los que tienen más responsabilidad que Carlos III son los partidarios del Gobierno actual, porque en los tiempos de Carlos III regía el gobierno absoluto; pero un gobierno que se llama liberal, que hace una revolucion para que todo el mundo tenga los derechos de la personalidad humana, que quiere mantener el derecho de asociacion, el derecho de reunion, el derecho de enseñanza libre para todo el mundo, priva de esos derechos á la Iglesia católica; porque no sirve decir á la Iglesia: ten establecimientos de enseñanza, funda colegios y seminarios, porque si no se le da lo puramente preciso para mantenerse, ¿cómo ha de mantener estas enseñanzas que son costosas? ¿Por qué S. S., que la echa de liberal, no publica un decreto diciendo: puesto que hay enseñanza libre, que vengán los jesuitas?

Hasta ahora no se da más que una razon para que los jesuitas no vivan en España, y es que tienen su jefe en el extranjero. Señores, ésta es una disculpa que yo no comprendo, sobre todo con la tendencia de la escuela que trata de declarar la Iglesia libre en el Estado libre; porque entonces, con el mismo derecho que expulsais á los jesuitas, llegareis á la expulsion de todos los eclesiásticos, porque su jefe es el Pontífice y tampoco vive en España.

Los jesuitas están expuestos á sufrir vejaciones y violencias con gobiernos absolutos y con gobiernos radicales. Solo los moderados los han mantenido en sus derechos. Esto es lo que se desprende de la argumentacion del Sr. Montero Ríos.

Conste, pues, que sobre estos dos puntos no tiene responsabilidad alguna el partido moderado, que ha aprovechado todas las ocasiones que se le han presentado para que en España se establecieran los jesuitas y tuvieran toda clase de facilidades para encargarse de la enseñanza; que yo les daria más aún de las que les daban las leyes del antiguo partido moderado, y me fundo en muchas razones que ahora sería muy largo de exponer, pero una de las cuales es el resultado que esta misma enseñanza ha producido: casi todos los liberales que inauguraron en España el régimen constitucional, se han educado con frailes ó curas, y una gran parte de la juventud neocatólica de nuestros dias, ha salido de las escuelas de esos filósofos que dicen que no creen en Dios.

La cuestion de la enseñanza no puede tratarse á la ligera en una rectificacion.

Vengo á la rectificación sustancial del proyecto. Dice el señor ministro que su proyecto obedece á un pensamiento político, á un pensamiento religioso y á un pensamiento económico. Buena falta hacía que S. S. lo dijera, porque aquí hemos visto este proyecto combatido por todas las escuelas y bajo todos los puntos de vista, y es muy extraño que ninguno de los señores que han usado de la palabra, haya encontrado el pensamiento político, religioso y económico del proyecto.

Yo creo que quien ha encontrado el verdadero pensamiento de este proyecto es el Sr. Pi y Margall cuando decía: lo que el Gobierno quiere es poner en contacto al clero con el ayuntamiento en cuestión de intereses, al deudor con el acreedor, porque así vendrán los disgustos y los pleitos, y el clero acabará de tener influencia. El pensamiento no puede ser más perjudicial.

Lo que se quiere es acabar con la influencia benéfica del clero, pero no se conseguirá, porque lo que se observa hoy es que el clero está perfectamente unido; que no solo el clero español, sino el clero francés, que con sus libertades anglicanas ha tenido ciertas luchas, el clero todo permanece compacto y fiel al lado del Soberano Pontífice; y esto consiste en las desgracias y en las persecuciones que sufre el Padre común de los fieles y las persecuciones que sufre el clero. Vosotros habeis contribuido á que esa union sea cada día más estrecha y más íntima.

Dice el señor ministro de Gracia y Justicia que el proyecto es económico: ya lo creo, y muy cómodo. Lo que S. S. no probará jamás es que el proyecto sea justo. Que se economizan algunos millones; pero se destruyen las obligaciones contraidas, y esto no puede hacerse solo por una razón económica.

El Sr. PRESIDENTE: Señor diputado, eso es replicar al señor ministro.

El Sr. ESTÉBAN COLLANTES: Acabo en breves palabras.

El Sr. PRESIDENTE: No puedo consentir más; evidentemente está V. S. replicando.

El Sr. ESTÉBAN COLLANTES: Tratándose de un discurso de la importancia del que acaba de pronunciar el señor ministro, hasta cierto punto necesita algo de réplica, y yo creo que el mismo señor ministro me lo ha de agradecer. Además, este punto queda oscuro en la discusión, y yo necesito aclararle...

El Sr. PRESIDENTE: Pero eso contradice al reglamento, y el reglamento no agradece esas cosas.

El Sr. ESTÉBAN COLLANTES: Voy á terminar. Después de



todo, yo tengo la conviccion de que en el Parlamento nada se queda por decir cuando se tiene habilidad y el propósito firme de decirlo.

El Sr. PRESIDENTE: Por esa razon he llamado á V. S. á la cuestion; porque, si quiere, ocasion tendrá de decir dentro de su derecho lo que pensara decir ahora.

El Sr. ESTEBAN COLLANTES: Pues voy á terminar, por complacer al señor presidente.

El señor ministro se hace la ilusion de creer que mantiene el Concordato y de que se ha arreglado á todas sus disposiciones en este proyecto; pero no sirve que lo crea S. S. solo, es preciso que lo crea tambien la Iglesia; y si yo combato este proyecto es porque creo que no es S. S. solo el encargado de cumplir el Concordato: mientras la Iglesia no diga que está conforme con este proyecto, yo no he de ver en él mas que la libre voluntad del señor ministro, ni más ni ménos; un acto de fuerza, y no otra cosa.

El Sr. Pidal tuvo que rectificar de nuevo para hacerse cargo de algunas palabras del Sr. Maisonnave, que volvió á negar que fuera socialista, y ademas para ocuparse de las indicaciones hechas por el Sr. Gil Sanz, atribuyéndole la defensa de lo que llamaba la escuela neocatólica.

Dió lugar tambien á esta rectificacion el discurso del ministro de Gracia y Justicia, que repetidamente aludió al Sr. Pidal calificándole de partidario de la escuela neocatólica. El Sr. Montero Rios, y muy particularmente el Sr. Gil Sanz, aludieron á una ley firmada, segun tenian entendido, en 1849 por D. Alejandro Mon, en la que se establecia una imposicion sobre las propiedades rústicas y urbanas y sobre la riqueza pecuaria, igual á la cantidad necesaria en cada provincia para la dotacion del culto y clero, y casi idéntica á la que establece el gobierno radical y la comision.

Éstos fueron los fundamentos de la rectificacion del señor Pidal, que dijo así:

El Sr. PIDAL Y MON: Señores diputados, empezando por

un orden en cierto modo inverso, voy á rectificar en dos palabras las que me ha dirigido el Sr. Maisonnave.

Yo no he calificado á S. S. de socialista: quien se ha calificado de socialista ha sido S. S. mismo, y mientras no retire su señoría la teoría del dominio eminente del Estado, tal como la sentó aquí esta tarde, yo sostengo la calificación, y no puedo ménos de sostenerla, porque es la que corresponde á la doctrina que ha expuesto S. S.

Al Sr. Gil Sanz tengo que hacerle tres ligerísimas rectificaciones. Yo no he venido aquí, Sr. Gil Sanz, ni tengo la intención de restablecer el régimen teocrático, y la razón es bien sencilla, porque no puedo; porque siendo el régimen teocrático el gobierno de Dios, si yo no recuerdo mal la etimología griega, creo que, aun á aquellos mismos que no creen en un Sér Supremo, les placiera más que este Sér Supremo, caso de existir para ellos, viniese á gobernar esta sociedad, que vive bastante mal gobernada desde que las causas segundas han sustituido á las primeras. Si S. S. quiere decir que, en lugar del sistema teocrático, lo que yo quiero introducir es el hierocrático, yo le voy á decir á S. S. una cosa, y para que la comprenda bien, voy á decírsela en una fórmula progresista: quiero los curas en la Iglesia, no quiero los curas en el gobierno de los pueblos; la fórmula es algo ruda, es tosca, pero pertenece á la escuela.

Respecto á lo que S. S. me ha dicho, y de lo que también se ha ocupado, aunque en otro sentido, el señor ministro de Gracia y Justicia, de que yo tenía en mi familia antecedentes parecidos á lo que consigna este proyecto, voy á decir en primer lugar que yo no vengo aquí á responder por nadie de mi familia, y en segundo lugar que yo he dicho en el pobre exordio de mi pobrísimo discurso, que en este caso especialmente no voy á defender mas que á la Iglesia, y ni siquiera como una entidad depositaria de la verdad metafísica y objetiva, sino como una sociedad cualquiera y desde el punto de vista del derecho común y de la libertad de la Iglesia. Pero, sin embargo, he de decir á S. S. que está lastimosamente equivocado, y esto es muy de extrañar en un subsecretario del ministerio de Gracia y Justicia. La ley de dotación del culto y clero que el Sr. D. Alejandro Mon presentó al Congreso en los presupuestos de 1844 y 1845, no venía á cargar sobre los ayuntamientos, ni dividía el clero parroquial del catedral. Donde esto se proponía era en una enmienda presentada contra el espíritu, contra las tendencias y contra la letra del proyecto por el Sr. Peña Aguayo.

Y respecto á otra acusación mucho más grave, que fué la que



motivó que yo pidiese la palabra, tengo que decirle á S. S. algo, que le ruego no lo tome á ofensa. Dijo S. S. que yo habia venido aquí con miras políticas, y yo le aseguro que nada podía decirme que me ofendiera más, porque no habria para mí nada más vil ni más infame que venir aquí á hacer instrumento de pasiones bastardas, de ambiciones terrenas, lo que es más alto, lo que es más sagrado, lo que es divino, y que está por encima de todos los intereses del mundo y de la tierra.

Su señoría entró en el sagrado de las intenciones; ¿y qué diría S. S. si yo me introdujera en el sagrado de las intenciones de S. S., y haciéndome eco de una especie que corre por esas galerías y pasillos, dijese que el señor ministro de Gracia y Justicia no ha hecho mas que ataviar con los galanos arreos de la ciencia y de la literatura este proyecto, cuyo verdadero inspirador ha sido S. S., y metiéndome en el sagrado de las intenciones de S. S., dijese que la intencion de S. S. al inspirar este proyecto no era otra que poner en pugna al clero, que debe cobrar, con el municipio, que le ha de pagar, y de esta manera descatalogar á esta nacion por medios tan indignos como poco francos?

Esto se diría si me introdujese en el sagrado de las intenciones.

El Sr. PRESIDENTE: Bueno será que S. S. no se introduzca, ni diga tampoco frases que no son muy convenientes.

El Sr. PIDAL Y MON: Yo soy deferente á todo lo que S. S. me dice; pero si hubiera presenciado S. S. el sentido que el señor Gil Sanz dió á mis palabras, diciendo que yo venía inspirado de miras políticas, creo que S. S. hubiera dicho lo mismo que yo digo.

El Sr. PRESIDENTE: Ruego á S. S. que mida la diferencia que hay de palabras á palabras.

El Sr. PIDAL Y MON: Respeto mucho las indicaciones de su señoría.

Y entrando en un terreno para mí mucho más agradable, como es la discusion de doctrinas, en el que tan noble y lealmente ha defendido el proyecto el Sr. Montero Rios, tengo que decirle que buena desdicha es la de este desventurado proyecto, que no ha de poder defendersele con una sola razon que no lleve envuelto un cálculo de pasion política.

El Sr. Montero Rios no contestaba á mis argumentos mas que «la escuela del Sr. Pidal». Parecia como que queria distraer el ánimo de los señores diputados y apartarle de los argumentos claros que yo exponia, para que viesen allá en el fondo de no

se qué tenebroso porvenir el fantasma sombrío de la escuela neocatólica. Yo, señor ministro y señores diputados, no he venido aquí á hablar en nombre de ninguna escuela, sino en nombre del derecho comun consignado en los principios democráticos, en nombre de la separacion de la Iglesia y del Estado. Si S. S. cree que yo pertenezco á esa escuela que S. S., no yo, ha calificado de neocatólica, y quiere S. S. comprender bajo esta denominacion á una escuela que es tradicionalista en filosofía y absolutista en política, yo tengo que decir á S. S. que no pertenezco á esa escuela, porque no soy tradicionalista en filosofía ni absolutista en política; soy partidario en política del régimen representativo, y en filosofía soy escolástico; y digo esto con intencion, no como una vanagloria, porque, siendo escolástico, sabe S. S. perfectamente lo que pensamos los que á esta escuela pertenecemos y mis teorías acerca de los concordatos; yo creo, señores diputados, siguiendo al Dr. Eximio, que para S. S. no será autoridad de poco valor, que los concordatos son unos contratos bilaterales onerosos. ¿Le satisface á S. S. la teoría que tengo acerca de los concordatos?

No desconozco, señores, como el señor ministro no desconoce tampoco, la polémica que ocupa á los canonistas modernos acerca de si el Concordato es pacto ó privilegio; pero lo que á ningun canonista se le ha ocurrido defender es que el Concordato sea una especie de ley del embudo, para aplicarla á la Iglesia por el lado estrecho y al señor ministro de Gracia y Justicia por lo más ancho. Si el Sr. Montero Rios quiere tomar parte en la polémica canonista que en estos momentos se debate, le aconsejo, por bien de su fama y de su ilustracion, que no tome parte en ella en el mismo sentido que lo practica desde el banco ministerial.

Respecto á que he faltado á mis tradiciones, yo creo haber probado con las declaraciones que he hecho aquí que no he faltado á ninguna; yo defiendo, señores, en este momento la causa de la propiedad sagrada de la Iglesia, que defendieron heroicamente los Sres. Mon y Pidal en 1837, en 1838, en 1840, en 1841, en 1844, en 1845 y 1858.

Y decia el señor ministro de Gracia y Justicia: «Hay que someter á la propiedad de la Iglesia á examen...»

El Sr. PRESIDENTE: Señor diputado, que no está V. S. replicando.

El Sr. PIDAL Y MON: Pues entonces, para acabar de rectificar, voy solamente á decirle al señor ministro de Gracia y Justicia, respecto á lo que cobra el clero en Francia, que los datos



de S. S. son algo atrasados: son de 1858 los relativos al presupuesto del culto y clero frances; los que yo tengo en la mano son de 1871, y en ellos consta que lo que el clero cobra en Francia asciende á 100 millones de francos. Por no abusar de la bondad de la Cámara y del señor presidente, podré luego dar á leer particularmente á S. S. estos datos, y únicamente voy á añadir, para sentarme, dos palabras dirigidas al señor ministro de Gracia y Justicia.

Desengáñese S. S., no hay mas que dos campos posibles: ó católico ó racionalista; y esta distincion, no tal como yo la hubiera establecido aquí, que yo no vine aquí á hablar de catolicismo, es la que ha venido á plantear el señor ministro. Si S. S. es católico, véngase con toda la Iglesia, que tiene una unidad asombrosa con sus fieles al lado de los obispos y los obispos al lado de su centro de unidad; y si no lo es, váyase al campo racionalista, en el que estará mucho más á sus anchas que en ese campo intermedio, en que ni da gusto á los unos ni á los otros.

Y si yo tuviera la facondia y la gracia del Sr. Martos para contar cuentos, me permitiria recordar á S. S. el de aquel vecino de cierto pueblo en que, siendo costumbre los dias de Carnaval saludar con cierto instrumento médico que yo no puedo permitirme nombrar aquí los de una acera á los de la otra, y vice-versa, quiso, animado por un espíritu parecido al que anima al señor ministro de Gracia y Justicia, pasar por enmedio, creyendo librarse así de los tiros de ambas partes, y el resultado fué que le pusieron como chupa de dómene, porque de ambas partes le tiraron.

El Sr. Pasaron y Lastra rectificó de nuevo, diciendo que, excitado por el Sr. Pidal para que presentase la ley de las Córtes de Nájera, á que habia aludido, atribuyéndola que limitaba el derecho de adquirir de la Iglesia, decia que era la segunda, título I del Fuero Viejo de Castilla.

El Sr. PIDAL Y MON: Dos palabras para contestar al Sr. Pasaron.

El Sr. PRESIDENTE: Tiene V. S. la palabra para pronunciar dos.

El Sr. PIDAL Y MON: Dije el otro dia que no habia ningun Código general que limitase el derecho de adquirir que tiene

la Iglesia. El Sr. Pasaron y Lastra me citó las leyes de Nájera, y le contesté que no existían, y que los más célebres juriscultos españoles y alemanes no las han encontrado aún. Si el Sr. Pasaron y Lastra las ha encontrado, le ruego que telegráfie dando parte á la Academia de Berlin, porque va á ser recibida la noticia con mucha alegría.

El Sr. Pasaron no me ha citado una ley de las Cortes de Nájera; me ha citado una ley del Fuero Viejo.

«Ese infame Fuero Viejo  
de fazañas y albedríos»,

que, si es autoridad para S. S., no lo es para nadie, porque nunca fué Código general, sino fuero de la aristocracia turbulenta de la Edad Media, y ni aun esto fué, porque S. S. sabe que, *por las muchas priesas que el rey ovo, fincó el pleito en tal estado*, y en esa ley...

El Sr. PRESIDENTE: Basta, señor diputado.

El Sr. PIDAL Y MON: Señor presidente...

El Sr. PRESIDENTE: No puede V. S. continuar.

El Sr. PIDAL Y MON: Pues me siento, diciendo únicamente que no es exacto lo que dice el Sr. Pasaron, y que tampoco lo es lo que ha dicho el Sr. Gil Sanz de los jesuitas, como estoy pronto á demostrar.



# SESION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE.

Se discutió en esta sesion la siguiente enmienda al artículo 1.º (1) del proyecto de ley:

«Los diputados que suscriben tienen la honra de proponer al Congreso la siguiente enmienda al dictámen de la comision del proyecto de ley fijando el presupuesto de obligaciones eclesiásticas y las relaciones económicas entre el clero y el Estado:

«El art. 1.º se sustituirá por el siguiente:  
«Mientras otra cosa no se acuerde por ambas potestades, la nacion contribuirá á la Iglesia con las cantidades que resultan de las obligaciones contraídas por el Concordato de 1851 y convenio de 1859.»

Despues de este artículo se intercalará el siguiente:

«Para el cumplimiento de esta obligacion no se exigirá al clero ninguna clase de juramento político.»

Palacio del Congreso 12 de Noviembre de 1872.—Plácido de Jove y Hévia.—Pedro Salaverría.—El conde de Pallares.—Agustín Estéban Collantes.—Cipriano Piñero.—Domingo Carames.—El conde de Toreno.»

El Sr. Jove y Hévia, como uno de los firmantes, la apoyó en los siguientes términos:

El Sr. JOVE Y HÉVIA: Empiezo, señores diputados, por reconocer que es limitado el campo en que puede moverse aquel que va á sostener una enmienda; reconozco que terminaron, y terminaron felizmente por los grandes oradores que

(1) Véase la pág. 52.

en ellas tomaron parte, las solemnes discusiones sobre la totalidad de esta ley; ya no se puede, sino por incidencia, analizar el espíritu y tendencias de la misma, que es, según el reglamento, lo que compete á la discusion de la totalidad. En un campo más limitado, como he dicho, debemos movernos los que venimos á apoyar una enmienda; pero un campo al mismo tiempo más práctico, un campo de detalles y un campo que tiene por lo mismo mayores responsabilidades; porque, al cabo, esta parte dispositiva, esta parte de detalles es aquella que se vota. En este sentido debo empezar por referirme al artículo al cual tuve la honra de presentar la enmienda, en union de otros de mis dignos compañeros de la Cámara. Este artículo fija la cantidad que se consigna al clero y la forma de su reparticion, haciendo á ella referencia cuando dice que será en la forma de los artículos sucesivos.

La enmienda que tuve la honra de presentar parte de las obligaciones contraídas, de la palabra empeñada por la nacion española, de un solemne Concordato; y el cumplimiento de este Concordato es lo que vengo á pedir al Congreso, es lo que creo que tiene el clero derecho á exigir del Estado, mientras otro Concordato no se celebre. Esta enmienda se compone de dos partes: de ésta que he indicado y de una segunda, que es más bien una adición, adición importantísima en mi concepto, porque sin ella caería por tierra todo lo que en el artículo se dispone. Esta adición es que desaparezca una suspension que aquí existe sobre las obligaciones del Estado para con el clero; que desaparezca ese juramento que al clero se ha querido exigir, y que en esta ley se consigne clara y terminantemente que tendrá derecho á lo que por ella se le concede sin necesidad de que jure. La fórmula bajo la cual vengo á pedir esto á la Cámara es una fórmula concreta y determinada: sirva esto de contestación á algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra, y que decían que en estos bancos no presentábamos mas que soluciones negativas; yo vengo á presentaros una fórmula por la cual defiendiendo mi enmienda, y en la cual apoyo todo lo que exijo y todo lo que voy á expresar aquí esta noche: esta fórmula es la *armonía de los poderes*; la armonía, que es la ley del mundo moral como del mundo físico; la armonía, fuera de la cual no puede haber mas que destrucción y caos.

Ha habido quien ha fundado el derecho de la Iglesia en la indemnización por lo que se le ha tomado; otros lo fundan en la verdadera retribucion de un servicio; yo lo fundo en ambas co-



sas. Y siendo dobles los motivos que me obligan á expresar el deber que con el clero se tiene en este asunto, no extrañareis que puedan ser tambien mayores mis exigencias.

Al estallar la revolucion de Setiembre se consideró por los poderes revolucionarios que estaba roto el Concordato. ¡Triste consideracion, señores, y triste procedimiento! ¡Triste hazaña por cierto que el poder español se fuese á estrellar contra un anciano abandonado y desvalido; que el poder español desconociese obligaciones sagradas ante aquel que no tiene una espada material para defenderse, al mismo tiempo que se humillaba ante el indio Juarez, verdadero enemigo del nombre español, enviándole una embajada á la cual no ha correspondido, y al mismo tiempo que recibia tristes agravios de una gran potencia americana y ni siquiera reclamaba ante ella, dejando que obrase á su sabor y favoreciese á los desventurados de Cuba!

Pero existe, señores, un Concordato; ¿y cómo habia venido la Iglesia á este Concordato? He oido con pena esta noche que la Iglesia habia podido venir á él con cierta preponderancia, con ciertas concesiones que pretendia presentar como graciosas: muy al contrario de esto, la Iglesia habia venido como vencida, habia venido á tratar con los que habian heredado el poder de aquellos que habian atropellado su autoridad y sus derechos de todo género; y al venir, durante las negociaciones, el Estado defendió sus propios intereses de modo que solo dejó á la Iglesia una congrua sustentacion. ¡Y todavía esta congrua sustentacion se le pretende rebajar! Si así lo haceis, lejos de ser esto una ley de obligaciones del Estado para con la Iglesia, acaso vaya á ser una ley que con el tiempo se llame *la ley del hambre del clero*.

La concordia, la armonía se habia establecido con la Iglesia por aquel partido que, viniendo al poder cuando los pueblos sienten la necesidad del orden á causa de desórdenes anteriores, viene siempre á restañar las heridas políticas y las heridas morales causadas á la patria; entonces, como siempre, vinimos nosotros á restablecer la armonía, y la armonía se restableció: sirva esto de contestacion á los que nos hacen cierta clase de argumentos.

Hízose el Concordato de 1851, dando á la Iglesia una congrua sustentacion que debia establecerse sobre la propiedad rústica y urbana y sobre la riqueza pecuaria, disponiendo que la Iglesia pudiese hacer convenios especiales con los pueblos; es decir, concediéndole una facultad, cosa muy distinta de lo que ahora se quiere hacer por medio de una imposicion. Desde

aquella época volvió la revolucion á enseñorearse de España, y, como siempre, á romper sus relaciones, sin motivo fundado ni aparente, con el jefe supremo de la Iglesia; y vino despues lo que llamaís reaccion, y que efectivamente es la reaccion del enfermo á la salud, y se hizo el convenio de 1859; en este convenio ya se le propuso á la Iglesia, y lo aceptó, porque acepta siempre todo lo que puede en favor del Estado, que la indemnizacion de lo vendido desde 1855 pudiese estar representada por láminas de la deuda, y efectivamente así se hizo; pero en uno y en otro convenio se fijó la cantidad que la Iglesia tiene derecho á percibir: desde el art. 31 en adelante del Concordato se fijaron terminantemente las asignaciones de los señores arzobispos, obispos y cada una de las clases diferentes del culto y del clero. De este modo, y sumadas estas obligaciones en los presupuestos del Estado, con arreglo á ellas, antes de la revolucion era de 180 millones la cantidad con que contribuíamos á la Iglesia, cantidad que figuraba en los presupuestos con el nombre de obligaciones eclesiásticas. ¿Con qué se quiere sustituir esto? Con lo que resulta de la ley que el señor ministro nos ha presentado, que son 120 millones de reales; es decir, que de una congrua sustentacion, precisa é indispensable, rebajais la tercera parte: ¿y en qué os fundais? En ningun principio; es completamente arbitrario: una sola razon he oido, la pretendida razon de la necesidad; pero si la ley de la necesidad pudiera existir con respecto á las relaciones eclesiásticas, existiria tambien respecto á todo el resto del presupuesto, y á éste no se le ha atacado en nada.

Tambien habeis querido rebajar una tercera parte á los acreedores por la renta del Estado; pero ¿cómo se conoce que estos acreedores tienen otros medios de defenderse! Les habeis dado inmediatamente una compensacion, y sin temor á que la masa de papel agobie y aplaste esta nacion, creais una nueva deuda para dar la compensacion á estos rentistas, y olvidais completamente á la Iglesia, apesar de que en el Concordato viene establecido que, de cualquiera manera que disminuyesen las rentas de sus inscripciones, habian de venir nuevas láminas á suplir la parte proporcional de aquella pérdida; de modo que, teniendo en su favor un beneficio especial, habeis prescindido de este beneficio, que estableceis en favor de quien no lo tenía.

Hay tambien en el Concordato, señores, todos lo sabeis, y no lo cito sino como recuerdo, el art. 41, que trata del derecho de adquirir sin condiciones de ningun género, y hoy se viene á cambiar este derecho natural y positivo de la Iglesia, imposi-



bilitando la conservacion de lo adquirido, porque se la obliga á cambiar la forma de su riqueza. No se quiere que sea propietaria del suelo; ¡como si hubiese diferentes clases de propiedad! La propiedad es siempre una; no se pueden admitir, no admite la ciencia distinciones en este punto. La propiedad, como idea abstracta, es siempre la misma. La propiedad no es mas que un medio para llenar un fin. Así ha sido siempre, y he oído con asombro ayer establecer diferencias entre la propiedad de la Iglesia y la particular ó unipersonal, porque para enajenar los bienes eclesiásticos habia que llenar ciertas formalidades.

Todas esas son disposiciones internas relativas á operaciones del mismo propietario, y no tienen nada que ver con lo que forma la condicion externa y jurídica de la propiedad. Condiciones análogas tenian, como sabeis, los bienes amayorazgados, y nadie ha negado la propiedad de los bienes amayorazgados dentro de la familia, especie de corporacion, y que por lo tanto constituia una propiedad que por extension pudiera llamarse tambien corporativa. Por consiguiente, esta diferencia no existe, no puede existir, no está fundada en la ciencia ni en la razon, ni tampoco en la historia.

Voy á hacerme cargo de una apreciacion infundada del uso que la Iglesia venia haciendo de esa propiedad. Segun el señor Gil Sanz, esa propiedad, que era de los administrados, se empleaba en provecho de los administradores. Efectivamente, la propiedad era de los administrados; pero no se empleaba en provecho de los administradores, sino de los mismos administrados, que eran los pobres. Si quereis consultar la historia, la hallareis por todas partes llena de fundaciones caritativas, y todas ellas están demostrando que desde los primeros tiempos de la Iglesia, desde que empezó ésta á poseer algunos bienes, siempre constituyeron éstos el patrimonio de los pobres.

Todos sabeis que en los primeros siglos de la Iglesia, durante ciertas persecuciones más sangrientas, pero parecidas en la intencion á las que hoy está sufriendo, querian tambien los emperadores romanos apoderarse de los bienes de la Iglesia, y todos recordareis aquel hermoso hecho de uno de los diáconos, el cual, para contestar á la autoridad que queria arrebatarle los bienes de que era depositario, al contestar al que le decia «¿Dónde están tus tesoros?», reunió todos los pobres que sostenia, y le contestó: *Ecce thesaurus Ecclesie*. Éstos son los tesoros de la Iglesia, los pobres; y esos son hoy todavía los tesoros de la Iglesia, los pobres que socorre con el triste óbolo que puede recoger.

Pero aun esa exigua cantidad, que mermada en una tercera parte concedéis á la Iglesia, tampoco quereis entregársela directamente. El Estado ha querido alejar de sí esta obligacion ó aligerar el presupuesto de esta cantidad, y no teniendo otra cosa más débil contra quien estrellarse, se ha estrellado contra la Iglesia, pero cargando esta obligacion sobre los pueblos. Es el caso, señores, que los pueblos y la Iglesia se resisten á esta imposicion. Y que la Iglesia se resiste no hay que dudarlo; que la Iglesia se resiste, todos lo sabeis, porque desde que esta ley se presentó los eminentísimos cardenales, los señores arzobispos, los señores obispos, toda la Iglesia española ha venido reclamando de las Córtes que no aprobaran este proyecto, y han acudido para presentar esas instancias á aquellos que creen que son hoy, como lo han sido siempre, sus mejores defensores, sus representantes más autorizados. Por eso los que nos sentamos en estos bancos hemos sido los encargados de presentar aquí esas reclamaciones; prueba evidente del lazo de amor, del lazo de buena correspondencia que con la Iglesia nos une.

Con respecto á los sacerdotes, yo, que deseo ser práctico en todos los asuntos; yo, que cuando se trata del interes de los trabajadores voy á estudiarlo á los talleres y á las revistas que los mismos trabajadores escriben, cuando se trata de los derechos de la Iglesia, y sobre todo del clero parroquial, acudo á los sacerdotes mismos, acudo á las excelentes y modestas revistas que por ellos se publican, y que para la generalidad pasan, por desgracia, desapercibidas. Hay una sobre todo que, aunque de fecha reciente, tiene grande y merecida reputacion entre los párrocos: se llama *El Consultor de los Párrocos*, y está escrita por ilustradísimos sacerdotes. En esta revista he encontrado últimamente uno de los artículos mejor fundados que se pueden escribir contra la ley que estamos discutiendo. Y para fijar tan solo alguna de sus frases que me ha hecho mucho efecto, y que desearia que lo surtiese igual entre los señores diputados por la verdad que encierra, y hasta por lo delicado de la diction, voy á permitirle leerla.

Dice así: «Un culto mezquino y un clero necesitado son á la vez un escándalo y un peligro, y cuando se permite una religion no se la debe condenar á la vergüenza y á la miseria».

Esto por lo que respecta á la voluntad de la Iglesia, que aquí se ha dicho que iba á ser agraciada con este proyecto. Por lo que respecta á la voluntad de los pueblos, tengo parecidos argumentos que haceros.

Todos los dias vienen aquí los municipios, sus verdaderos re-



presentantes, á hablaros, á pedirlos, á suplicaros que no voteis esta ley, á deciros que están ya agobiados con los impuestos municipales, que absolutamente no podrán cumplirla, que no será por falta de voluntad—¿por qué no la habian de tener si es precisamente la obligacion que el hombre cumple con la mejor voluntad, la obligacion de sostener aquello que une el cielo con la tierra?—pero que su cumplimiento les es absolutamente imposible. Yo voy á citaros un ejemplo, porque en este género de cosas es verdad aquello de *ab uno disce omnes*. Yo tuve la honra de presentar aquí una exposicion de uno de los pueblos laboriosos, pero pobres, de mi provincia, el pueblo de Candás, en la que se manifiesta con toda esa exactitud terrible y fatal que resulta de los números, que no podria de ninguna manera cumplir esta obligacion; más aún, que no puede cumplir siquiera las que ahora tiene sobre sí porque ha agotado todos los medios de imposicion que la ley le da, ha llegado al límite de todos ellos, y todavía tiene un déficit, aun sin esta obligacion que nuevamente se le quiere imponer. Y si de los quejidos mismos de los pueblos pasamos á las consideraciones de sus representantes en Córtes, tambien esto demuestra evidentemente los defectos de la ley.

Todos habreis asistido á la reunion de diputados que se llaman, y con mucha honra (y yo la tengo en ser uno de ellos), diputados de representaciones rurales; todos sabeis, porque no han sido misterios, han sido cosas que los periódicos han publicado y en nuestras conversaciones nos hemos referido, todos sabeis los sucesos de la seccion sétima; todos teneis noticias de aquel nucleo de celosísimos diputados que allí se reunieron por ser la expresion de la voluntad de sus representados; todos ellos, diputados de la mayoría en su mayor parte, estaban y están evidentemente decididos á votar en contra de esta ley. Nombraron una comision, esta comision trató de entenderse con el señor ministro; no lo ha podido conseguir, y en su consecuencia hay en esta gran masa de diputados de la mayoría una actitud verdaderamente hostil á la ley. ¿Qué mejor prueba de que, respondiendo esos diputados á la voluntad de los pueblos, los pueblos están en contra de ella? Yo creo que el señor ministro, en primer lugar en interes de la justicia, y en segundo en interes de la union de la mayoría, que aunque no me toca á mí aconsejar, deploro siempre las divisiones porque me gustan los partidos compactos, para que puedan hacer la felicidad de la patria, en interes de esta mayoría debiera, pues, el ministro adoptar la enmienda que apoyo, que para nada le estorbaria en su intento;

cumpliría así en lo que pudiera (á lo imposible nadie está obligado) los deberes del Concordato, y en el entretanto negociaría. De esa negociacion, siendo la Iglesia como siempre es benévola con todos los poderes humanos, podría llegar á un acuerdo que le diera justos y beneficiosos resultados. Hay para que así lo haga otro grande interes político para S. S. y para todos los que le apoyan. Hay una gran masa de españoles que son antes católicos que políticos; esa gran masa de españoles que siguen el precepto evangélico de *obedecer á los poderes, aunque sean malos*, en todo lo que es político, acaso estén separados de este gobierno y de otros análogos por estas cuestiones meramente religiosas; y si el señor ministro pudiera satisfacerles es probable que, si no los tenía completamente á su lado para apoyarle, no los tendría completamente enfrente para combatirle.

Hay, pues, el interes de la justicia, el del clero, el de los pueblos, el de la union de la mayoría y, finalmente, un interes político en apoyo de lo que estoy sosteniendo.

Y he dicho, señores, que voy á apoyar la enmienda en espíritu de concordia, porque yo no creo que entre la Iglesia y el Estado pueda haber mas que tres situaciones: la de concordia entre esos poderes, que es la verdadera en mi concepto; una soñada separacion entre la Iglesia y el Estado, que no puedo reconocer, y otra, que es una situacion de guerra. Y digo que no puedo reconocer la separacion entre la Iglesia y el Estado porque no la veo en la historia, porque no la veo en ninguna parte, porque desconoce completamente la naturaleza humana, compuesta de cuerpo y alma, y porque cuando el alma se separa del cuerpo el cuerpo muere, y siendo el cuerpo el Estado, yo no quiero que la sociedad española tenga las condiciones de un cadáver.

Hay entre las relaciones de la Iglesia y el Estado asuntos naturalmente sujetos á relaciones mistas, porque participan de ambas naturalezas, y como esto está en la misma esencia de esos dos poderes, es imposible que se separe sin destruirlos. Relaciones mistas, señores diputados, debe haber siempre: la separacion completa debe relegarse al catálogo de las utopias. ¿Quereis vosotros la Iglesia esclava? No os hago este poco favor: es imposible que quisiérais, por medio de vuestras pretendidas relaciones, arrastrar á la Iglesia á vuestro lado, como los emperadores romanos uncian á su carro los reyes cautivos del Asia para coronar su triunfo. No lo creo: vosotros debeis, buscando la armonía, debeis colocar á la Iglesia á vuestro lado,



no como esclava, sino á la derecha del Estado, por la preferencia que debe tener lo espiritual sobre lo temporal; así caminareis mucho mejor y triunfalmente en la gobernación del Estado.

Y hoy más que nunca, señores, es necesaria esta armonía; hoy que la civilización trae consigo, digan lo que quieran pretendidos filósofos, un verdadero espíritu cristiano; hoy que las Iglesias disidentes en todas partes se encarnan en la Iglesia católica, lo mismo en Bulgaria que en los Estados-Unidos y en Inglaterra; hoy que hasta el filosofismo, que ya abandona ciertas anticuadas escuelas, propende á la religión católica. Yo tuve la honra de conversar detenidamente con muchos filósofos...

El Sr. VICEPRESIDENTE (Mosquera): Señor diputado, yo oigo á S. S. con muchísimo gusto, como creo que le oye la Cámara; pero S. S. está discutiendo la totalidad evidentemente. Sirvase S. S. ceñirse á la enmienda.

El Sr. JOVE Y HÉVIA: Señor presidente, yo creo que esto viene en apoyo de la enmienda. Si S. S. cree otra cosa, daré nuevo giro á mi discurso y voy tan solo á terminar la frase.

Muchos filósofos alemanes me decían que, en el momento en que estuviesen dispuestos á abrazar una religión, abrazarían la católica, porque es la única que consideraban verdadera religión, porque posee todo lo bueno de todas ellas y aun algo más, que es la fe; y que la moral, esa moral abstracta, separada de las religiones, que se quiere presentar aquí, no puede existir en su integridad sino en preceptos ó prácticas aisladas, que son siempre, aunque no lo confiesen, hojas caídas del árbol frondoso de la religión católica.

Me hablareis de la libertad religiosa, y á esto os diré que vuestra libertad religiosa siempre se ha expresado por medio de persecuciones contra el catolicismo. Buen testigo de esto es Francia desde el año 89 hasta el año 8; mientras existía esa libertad, digámoslo así, abstracta, se traducía en persecución del catolicismo; necesaria fué la concordia, necesarios fueron los concordatos para que se restableciese el derecho de la Iglesia.

Pero además, señores, el artículo, al cual tuve la honra de presentar la enmienda no corresponde en manera alguna al espíritu del preámbulo del proyecto de ley. El preámbulo del proyecto y el del dictamen son en su casi totalidad esencialmente religiosos, y no sé en verdad por qué se proclaman ciertas máximas excelentes para venir á conclusiones tan tris-

tes. Paréceme á mí, señores, aquel preámbulo como las flores de que se revestía á las víctimas para conducir las adornadas al sacrificio; paréceme á mí que es como el *ave rex* que los libros sagrados nos presentan como befa de lo que era la verdad misma. Por este motivo la doctrina del preámbulo no viene á la conclusion que aquí se sostiene, sino á la conclusion de la enmienda que estoy sosteniendo.

Una cosa rechazo de ese preámbulo: que funde las conclusiones de la ley en meras necesidades de equilibrio económico, como con necesidades de equilibrio económico trata de disculpar los antiguos despojos que motivan esta pretendida compensación. Este razonamiento, señores, nos llevaria muy lejos. La necesidad del equilibrio económico se presentó como causa de trastorno social por esa fatal asociacion que se llama La Internacional. Y aquí me permitirá el señor presidente que recoja, no ya una alusion, sino una terrible acusacion que contra mí se ha lanzado en esta discusion.

Autor de la interpelacion que acerca de La Internacional tuvo lugar en esta Cámara, se me ha acusado de haber hecho malgastar con ella el tiempo que debiera haberse empleado en beneficio del país. Yo necesito recoger esta acusacion, porque estoy siempre pronto á responder y á aceptar la responsabilidad de todos mis actos. Aquella discusion dió un gran resultado: desacreditar completamente esa asociacion, despojarla de todo su colorido filosófico y dejarla en su completa desnudez. Ahora ya no viene con pretensiones filosóficas, como venia cuando me citaba por la elocuente voz de una mujer ya célebre en sus anales, y me llamaba á los Campos Eliseos á discutir: hoy se presenta en su horrible desnudez. Si habeis leído el Manifiesto que la federacion internacional española ha publicado estos dias, vereis que allí se dice que debe haber un gran movimiento para apoderarse de todas las personas y de todos los bienes de aquellos que han tenido parte en la administracion del Estado, desde tiempos muy atrasados, de diputados, de senadores, de empleados, de todo el mundo; y todo esto ¿para qué? Para exigirnos una pretendida responsabilidad que ninguno de nosotros rechaza. Y todo esto ¿qué significa? Que ya ese aparato filosófico decayó, y se presenta descarnado el monstruo, cerniéndose sobre nuestras cabezas con su verdadero carácter, con el carácter de ave de rapiña.

Alguna utilidad ha tenido, pues, aquella discusion, y no se ha perdido en ella un tiempo que entonces no podiamos emplear en otra cosa, porque la gran cuestion económica, que



es la que siempre debe llamar nuestra atención, no estaba en posibilidad de ser discutida, porque la comision de presupuestos no habia presentado su dictámen. Y basta con esto que tenia que decir acerca de esa injusta acusacion.

Mi enmienda va dirigida á que se negocie nuevamente con la Iglesia, y esta posibilidad no me la negareis. La Iglesia está siempre pronta á todos los sacrificios posibles y benéficos, y antes de la revolucion hizo uno, que fué consentir la imposicion del 5 por 100 sobre sus asignaciones, imposicion que se puso á los empleados, y que el clero, sin tener este carácter, admitió gustoso, porque, por más que lo que se le habia asignado era lo absolutamente necesario para su manutencion, accedió á rebajarlo en beneficio del Estado. Y que está pronto á negociar teneis la prueba en que todavía, muy próximos aquellos dias en que habia recibido de España los mayores insultos como Iglesia y como Estado independiente, en que sus armas habian sido arrastradas por las calles de Madrid, y en que se habia quemado el Concordato delante de la casa del representante de la Santa Sede, todavía en aquellos momentos en que, no el pueblo español, sino algunos infelices, inspirados por sociedades secretas que, habiendo sido siempre combatidas por la Iglesia por su egoista y tenebroso proceder, no pueden perdonar á la Iglesia que las haya combatido, en aquellos momentos la Iglesia se mostró ya propicia á tratar.

Sucedió por entonces que el gobierno español mandó con este objeto á Roma á mi ilustre paisano el Sr. Posada Herrera, cuya ausencia del estadio político deploro y no me explico, á fin de que viese el medio de reanudar las relaciones con Roma. Todos sabeis que á poco tiempo de estar allí recibió el gobierno español lo que se llamó un *memorial de agravios*, que contiene diez y seis puntos, los cuales voy á abandonar en su mayor parte, para fijarme tan solo en los que son pertinentes á la cuestion que discutimos.

Los dos primeros se referian al establecimiento de la libertad de cultos y á la enseñanza. Todos sabeis cómo pienso acerca de aquella innecesaria y trastornadora libertad; pero no voy á entrar en esto. Venia despues otro acerca del matrimonio civil, otro relativo á la supresion de dotaciones á los seminarios y otro de quejas porque no se pagaba al clero. Hasta hace poco tiempo ignoraba yo que el gobierno español hubiese dado contestacion á ese memorial de agravios: no sé si los señores diputados tienen conocimiento de esta contestacion; una casualidad, mejor dicho, la reclamacion de un señor diputado acerca

de este documento le puso en mis manos, y he de deciros algo, porque es muy pertinente en apoyo de mi enmienda, acerca de la mencionada contestacion.

Este documento vino aquí sin firma y sin fecha, pero vino oficialmente, con el sello del ministerio de Estado; y por consiguiente, tenemos todos que reconocerlo como oficial. Este documento estaba inspirado en grandes máximas de tolerancia y en un grande espíritu de benevolencia. Sirva esto de justicia, que no de elogio, al señor ministro que lo haya redactado, que ya digo ignoro quién haya sido, porque ni sé el momento en que se escribió ni tampoco he visto la firma que lo autorizaba.

Con respecto á la libertad religiosa y á la libertad de enseñanza, contestaba aquel gobierno como tenía que contestar dado su espíritu, y dado que era un gobierno que regía por la Constitucion de 1869, disculpándose con los preceptos de esta misma Constitucion, si bien en términos respetuosos y comedidos, como siempre sientan bien á los que á sí mismos se respetan.

Venía despues la contestacion relativa al establecimiento del matrimonio civil, y aquel gobierno hacía á la Iglesia una promesa que estoy seguro que la Iglesia hubiera aceptado con mucho gusto, como la hubiéramos aceptado los que sin vanos alardes, pero muy profundamente, tenemos sentimientos católicos y procuramos portarnos como tales.

Decía, poco más ó ménos, estas palabras:

«Que tratará de ponerse de acuerdo con la potestad eclesiástica, á fin de que la ley de matrimonio civil se modifique en sentido de que el matrimonio católico surta todos los efectos civiles, solo con anotarlo en los registros del gobierno, de modo que el civil quedase solo para los no católicos.»

Si las negociaciones hubieran seguido bajo este espíritu, es bien seguro que se hubiera llegado á un acomodamiento en esta parte religiosa; y siendo así, mucho más fácil sería llegar á un arreglo en la cuestion económica.

Con respecto á los seminarios, decía que «está dispuesto á que se doten los seminarios, y que su dotacion no está suprimida, sino en suspenso». Sin embargo, en el proyecto que se discute desaparece la dotacion para los seminarios, y se le deja á la Iglesia una cantidad muy mermada, sin expresar que es para este objeto; por consiguiente, no se ha cumplido esta promesa que se hacía por el mismo gobierno de la revolucion al contestar á ese memorial de agravios, y yo extraño mucho que en los sentimientos verdaderamente benévolos que el señor



ministro ha manifestado hacia la Iglesia, sobre todo en el preámbulo del proyecto, pueda aparecer, sin embargo, en esto, ménos benévolo que el ministro que contestaba á la Santa Sede.

Con respecto al pago del clero, decia que «está dispuesto á pagar su dotacion al clero y hacer aún algun sacrificio más en este sentido».

Es decir que se le ofrecia más de lo que se le venia dando. ¡Qué diferencia entre esto, señores, y hacer desaparecer una tercera parte de la cantidad que hasta entonces habia recibido! Si hubieran seguido las negociaciones con este espíritu, es bien seguro que á estas horas se habria restablecido esta armonía, por la que sostengo mi enmienda en los momentos actuales; pero, lejos de eso, no parece sino que desde entonces se hace todo lo posible por alejar esta armonía, se hace todo lo posible por alejar esta feliz concordia. En todos vuestros actos lo habeis manifestado así, y hasta para el coronamiento de vuestro edificio habeis ido á buscar aquello que más refractario pudiera ser para el establecimiento de buenas relaciones con la Iglesia.

Si no del banco del Gobierno, si no del banco de la comision, del seno de la mayoría han salido voces que denotan triste espíritu de hostilidad. Hace poco que hemos oido aquí una voz verdaderamente fatídica, la voz del fatalismo filosófico, que, imitando la máxima mahometana de que «No hay más Dios que Dios, y Mahoma es su profeta», parece decir: «No hay más Dios que el hombre, y Krause es su profeta»; pero España, que ha sabido rechazar durante ocho siglos aquel fatalismo musulman, sabrá rechazar tambien este nuevo fatalismo filosófico, por alto que sea el *minarete* desde el cual se pronuncien esas palabras, y por instruido que sea el *muezin* que aquí las lance. En el seno de nuestra sociedad, en el seno del verdadero pueblo español, hay aún, por fortuna, bastante catolicismo para que la verdad católica pueda durar entre nosotros hasta la consumacion de los siglos.

Por esto aquí hace peor efecto que en ninguna otra parte la herejía histórica de que el catolicismo se opone á la marcha de la civilizacion; esto no puede decirse en ningun pais, y mucho ménos en la patria de Ossio, en la patria de los grandes poetas, historiadores, teólogos y filósofos cristianos; en esta patria que en los últimos años ha producido entre nosotros un Balme: en esta patria de un hombre que hace muy pocos dias descendió á la tumba, cuando debiera estar aquí para sostener mejor que

yo los intereses de la Iglesia. Hablo del Sr. Aparisi y Guijarro, y sirva esto de tributo al hombre cuya elocuente voz ha resonado en este recinto.

También he visto con sentimiento que se han expresado ideas y se han presentado enmiendas, en el sentido de que el servicio religioso deban pagarlo aquellos individuos que declaren necesitarlo. Yo no sé cómo puede decirse esto contra un servicio eminentemente social; y por una comparacion, aunque ajena á la alta esfera en que la religion se encuentra colocada, os diré que eso mismo pueden alegar los criminales con respecto á los jueces. «Si no quiero al juez, pueden decir, si es mi enemigo, ¿por qué lo he de pagar?» Y lo mismo podrian decir los librecambistas con respecto á los derechos de aduana: «Si para nosotros son las aduanas un mal, que las paguen los industriales; no queremos contribuir al sostenimiento de este servicio.»

Veo que el señor presidente va á agitar la campanilla...

El Sr. VICEPRESIDENTE (Mosquera): V. S. mismo es juez de su conducta.

El Sr. JOVE Y HÉVIA: Pero se hace una acusacion que debe recogerse. Se dice que alguien puede venir á apoyar los sentimientos religiosos por un género de especulacion politica. Yo rechazo desde lo más profundo de mi conciencia esta acusacion; pero digo que, si de especulacion se tratase, ¿no sería mejor especular con lo que corrige y enseña que con lo que corrompe y degrada? Si la hipocresía es mala en todos sentidos, la peor de todas es la *hipocresía del vicio*.

Si el artículo que se discute, señores diputados, rompe obligaciones sagradas solemnemente contraídas; si el artículo que se discute es rechazado por las dos partes interesadas, que despues de todo son las que mejor deben entender sus intereses; si el artículo que se discute es rechazado por la Iglesia, si es rechazado por los pueblos, si es rechazado por parte de la mayoría, evidentemente debe desaparecer, y por eso os propongo en su lugar la enmienda que espero votareis en este punto. Y paso á la segunda parte, que es más bien una adición: á la cuestion del juramento.

Yo encuentro en esta ley un gran vacío, y este vacío puede hacer que aun eso bien escaso que vosotros concedéis no llegue á poder del clero; el vacío es que no hace desaparecer un obstáculo, que corta completamente las relaciones entre la Iglesia y el Estado; este obstáculo es el *juramento*.

Yo esperaba, señores diputados, que, despues de lo que se ha



bía dicho en la comision, este artículo vendria aquí, porque sabía ademas que este artículo está en el espíritu de mi amigo y maestro el Sr. Pasaron y Lastra, y está tambien en el espíritu del Sr. Gonzalez Gutierrez, y tal vez lo está en el de la mayoría de la comision; y estando en el espíritu de todos, no sé qué inconveniente puede haber en traerle aquí, si se quiere que la ley sea eficaz, si se quiere que surta todos sus efectos; porque no creo, señores, que nadie sostenga aquí ni la justicia ni la necesidad del juramento.

Pudo establecerse el juramento allá en los tiempos místicos, cuando, confundidos los atributos de la religion y los de la gobernacion del Estado, parecia que eran una misma cosa, y los sacramentos hacian veces de leyes. Pudo existir tambien en los tiempos feudales, en que el juramento era el único lazo que unia los diferentes poderes. Pudo existir en todos tiempos, en fin, menos en estos tiempos democráticos, en estos tiempos de continuos cambios de instituciones, y en estos tiempos en que acaso no conviene ligar demasiado lo que se proclama, por lo mismo que muchas veces conviene cambiarlo.

No creo, no, que está dentro del espíritu democrático el que se exija el juramento á nadie, y estoy seguro que mi respetable amigo el eminente republicano Sr. Castelar, que me está escuchando, piensa como yo en este asunto, y que si los señores de la minoría republicana no estuviesen esta noche, como lo están, ocupados en otro sitio, me darian su voto en esta cuestion.

Y que no está dentro del espíritu democrático lo demostráis vosotros mismos con vuestro ejemplo. Nosotros empezamos por no ligarnos por medio del juramento; y aquello que no creemos bueno para nosotros no debemos, siguiendo una máxima de todos conocida, imponerlo á los demas.

Y en cuanto á la utilidad del juramento en estos tiempos de continuos perjurios, ¿quién reconoce ya la utilidad del juramento en materias políticas? Yo no combato el juramento profesional, que eleva la ciencia, ni aquel otro que sirve para inquirir la verdad, porque para esto todos los medios solemnes deben emplearse.

Este juramento no obligaria tampoco, siempre que fuese necesario, para que los sacerdotes percibiesen su haber, porque tenemos una antigua ley española que dice, que el juramento no es válido siempre que influya en el hombre de manera que pueda tener miedo, no prestándole, *de su haber perder*; ésta es la expresion gráfica de la ley; y caso de que no cumpliendo el

juramento se perdiese el haber, tendríamos la nulidad del juramento segun nuestra legislacion antigua. Por esto, señores, en una interpelacion acerca del juramento, en las Córtes de 1871, rogaba yo al gobierno que presentase una ley que aboliese todo juramento político, y por eso ruego á la comision que admita esta adiccion que he presentado, que para nada puede estorbarle, y que ademas considero esencialmente necesaria, y voy á decir por qué.

Cuando se exigió el juramento al clero, haciendo una lastimosa confusion de diferentes funciones, se le quiso aplicar la ley de 9 de Diciembre de 1869, que se habia dado para los empleados.

Verdaderamente no le comprendia; pero, sin embargo, se ha citado esto en diferentes discusiones y ha servido de pretexto para el decreto de 1870; por consiguiente, si algunos creen, y basta que algunos lo crean, que esta ley puede ser aplicada al clero, este precepto legal solo podrá para ellos desaparecer por otro precepto legal tambien. Por eso os digo que pongais en la ley esto que para nada puede perjudicaros, á fin de que no haya nadie que crea que en virtud de una ley anterior puede exigirse al clero el juramento, y á fin de que no haya gobierno que se lo exija.

Y esto está conforme con el espíritu del preámbulo, como he demostrado tambien que lo estaba mi primera enmienda; todo ello está fundado en grandes razones de derecho y de justicia, y yo os argüiré con vuestras mismas palabras, con unas hermosas frases del dictámen de la comision; porque, en cuanto á preámbulos, lo mismo la comision que el Gobierno han hecho, por punto general, gran justicia á la Iglesia; yo hubiera querido que la mitad de los elogios que se tributan en ambos dictámenes, hubieran sido representados por una cantidad metálica; de manera que, dandola mitad en dinero, hubiéramos quedado todos conformes.

Pues estas hermosas palabras del dictámen dicen lo siguiente: «Los grandes principios de justicia y de derecho están por cima de las preocupaciones de partido, y cubren igualmente á los amigos que á los adversarios».

Aplicad esta sana doctrina á la Iglesia, y de seguro admitireis mi enmienda; aplicadla, señores de la comision; no se diga de vosotros que creais hermosos principios para ostentarlos, y despues huís de su aplicacion.

Y para concluir esta peroracion, que confieso os parecerá pesada, voy á hacer un ruego al Gobierno. En la práctica que de



los negocios públicos tengo, he observado en los gobiernos una deplorable propension á convertir en cuestiones de gabinete, en cuestiones *esclavas*, cuestiones que son por su naturaleza *libres*. Yo ruego al gobierno actual que no haga de esto una cuestion de gabinete; yo le ruego que cumpla la palabra empeñada en aquel sitio, cuando se leyeron los presupuestos, de que por cuestiones económicas no haria cuestion de gabinete; éste es un derecho que podemos reclamar las oposiciones y que puede reclamar tambien la mayoría por lo que á ella interesa.

No hagáis cuestion de gabinete esta ley, ni mucho ménos su parte económica, que es la parte fundamental de la ley, y digo que es la parte fundamental para la mayoría de vosotros, que no lo es para mí desde luego que al dictar disposiciones para la Iglesia se prescinde de la Iglesia misma; pero la parte positiva, la parte material de la ley, es esencialmente ésta. No hace mucho tiempo que se ha hecho cuestion de gabinete una cuestion económica, que acaso sin intencion del Gobierno, porque yo respeto siempre las intenciones, solo puede ser útil á M. Frémy y compañía; yo ruego al señor ministro que no haga cuestion de gabinete la presente ley; que no convierta en cuestion esclava una cuestion por su naturaleza libre. No dé lugar con eso á que podamos decir los católicos que todo el peso del Gobierno; toda la influencia política del Gobierno, se trae aquí en contra de lo que forma nuestro credo. He dicho.

El Sr. Vazquez Rojo (de la comision) contestó al señor Jove y Hévia en un extenso discurso, en el que se duele de que el partido alfonsino monopolice una cuestion que es de interes de todos.

En medio de sus elogios al Sr. Jove y Hévia, cree el orador encontrar contradicciones entre que se suponga vigente el Concordato y se hable de la necesidad de celebrar otro nuevo. Trata de atenuar la oposicion del clero y de los pueblos al proyecto, y de demostrar que no es utópica la libertad de cultos. Anuncia que la comision, para aliviar á los municipios de la grave carga de que se quejaba el Sr. Jove y Hévia, admitirá una enmienda para que no se pague más de 10 rs. por habitante; y con respecto al *juramento*, hace la siguiente importante declaracion.

«Decia el Sr. Jove y Hevia que bajo ningun concepto

debía sostenerse la existencia de ese juramento en este país. La comisión se ha ocupado del asunto, y todos sus individuos han estado conformes en que desde el momento en que el pago al clero se haga por los ayuntamientos y por las diputaciones provinciales, desde ese momento no debe existir el juramento. Ya ve S. S. que no puede ser la comisión ni más clara ni más explícita. No ha creído necesario consignarlo en el proyecto; no establecía esto ninguna de las relaciones á que se refería, y de ahí que, después de haber estudiado este asunto, también hubiera resuelto no decir una palabra en él.

El Sr. Jove y Hévia rectificó en los siguientes términos:

El Sr. JOVE Y HÉVIA: Debo empezar felicitándome de haber dado lugar á que por primera vez resuene en el Congreso una palabra tan elocuente como la que acabamos de oír, y debo hacer presente mi gran sentimiento por no poder contestar á los argumentos de S. S., porque el reglamento no me lo permite. Deseo que así conste, porque fuera de aquí se supone muchas veces que algunos razonamientos no pueden ser contestados por la fuerza que en sí tienen, y yo deseo hacer constar que el reglamento no me permite más que rectificar. Á la rectificación, pues, voy á limitarme.

Supone S. S., y supone mal, que nosotros creemos tener autorización exclusiva para la defensa de la Iglesia. ¡Triste servicio haríamos á la Iglesia si tal cosa supusiéramos! Nosotros reconocemos que todos los diputados tienen igual representación para hablar de esta cuestión; creemos más: creemos que, unos por sentimientos religiosos y otros por sentimientos de justicia, votarán la enmienda que he tenido la honra de presentar.

Creía S. S. que yo ignoraba que algunas partes del Concordato no se habían cumplido en tiempos anteriores; pero como aquí solo se trata de la parte económica del Concordato, del pago de sus haberes al clero, como esto discutimos únicamente y esto se cumplió, no tiene lugar el argumento de S. S.

También ha supuesto que no podía hacer yo el argumento de considerar por un lado el Concordato vigente, y por otro pedir que se celebrase uno nuevo. Yo puedo considerar en mi fuero interno, en mis creencias, en mi serie de argumentaciones, yo puedo considerar existente aquello que el derecho considera tal; pero, en el hecho, el Concordato está roto, y vosotros creéis



tener motivos para decir que tambien lo está de derecho, y por eso creo que se debe proceder á celebrar otro; indico que para mí solo está roto de hecho, y que para vosotros está roto en todos conceptos.

Ha supuesto el Sr. Vazquez Rojo que yo creia que los concordatos eran eternos. De ninguna manera: este acto bilateral es reformable, pero reformable por la voluntad de ambas partes; y los contratos de este género, tanto los internacionales como aquellos que se celebran entre diversos poderes, solo tienen un medio de romperse ademas de la voluntad mutua: este medio es la guerra. ¿Confiesa S. S. que existe la guerra contra la Iglesia? Si no lo confiesa, tiene que confesar que está vigente el Concordato; y si no está vigente su parte dispositiva, la obligacion al ménos que el Estado ha contraido no puede el Estado hacer que desaparezca, porque sería juez y parte en una misma causa.

Suponia S. S. que yo hubiese dicho que la libertad de conciencia era una *utopia*. No es eso; lo que yo llamé *utopia* histórica y filosófica es la *Iglesia libre en el Estado libre*. Para la Iglesia, las libertades no son utópicas, porque siempre ha dicho y ha ejecutado aquello que S. S. sabe: *In necessariis unitas, in dubiis libertas*; por consiguiente, la Iglesia en todo lo dudoso deja completa libertad, y solo en la parte dogmática es en lo que está necesariamente ligada.

Que el convenio con los pueblos que aquí se indica estaba ya en el Concordato, y que yo parecia ignorarlo. No lo ignoraba, pero ese convenio era potestativo en la Iglesia, no era preceptivo.

Ha negado S. S. el hecho de que viniesen aquí muchas exposiciones de los pueblos. Yo verdaderamente me admiro de que estas muchas exposiciones, que el señor secretario ha dicho desde la tribuna «pasarán á la comision correspondiente», no hayan pasado, porque no puedo suponer que la comision deje de leer y de enterarse de todo aquello que se relaciona con el asunto cuyo exámen le está cometido.

Que yo pudiese desconocer ciertos argumentos de autoridad que S. S. ha hecho, argumentos de discursos, de oradores, de proposiciones que se hubiesen presentado. Los conozco, sí señor; pero estos mismos argumentos fueron contestados en aquellas mismas sesiones, y de estos argumentos puede decirse aquello de *contra estos siete vicios hay siete virtudes*; por consiguiente, autoridades por autoridades, nunca pueden ser bastantes para la votacion del artículo.

Pero S. S. ha hecho una concesion enmedio de todo, suponiendo que yo no supiese que el Estado venia subsidiariamente en la ley á pagar al clero cuando no puedan hacerlo los pueblos.

Efectivamente, en la ley no venia; aquí el Estado no se obliga á pagar, por el dictámen que tengo en la mano, subsidiariamente. Lo único que se obliga á hacer el Estado es obligar á los pueblos á que paguen, y esto es muy diferente; y siendo esta obligacion de los pueblos, si los pueblos no pueden, no pagarán, pues por mucho que haga el Estado los imposibles no se hacen aquí abajo.

Pero dice S. S. que si se presenta una enmienda en este sentido la aceptará, y esto ya es algo; y aquí reconozco yo la influencia de esos diputados rurales y el temor que inspiran á la comision.

Su señoría me recuerda el estado de la hacienda municipal. ¿Cómo lo he de ignorar si todos los dias estamos oyendo lamentaciones de cuantos tienen que percibir algo de los presupuestos municipales, si los maestros están sin pagar, si el mismo ayuntamiento de Madrid, apesar de los muchos empréstitos que ha levantado, hace más de dos años tiene sin pagar la renta de sus sisas, que es la obligacion más importante que tiene?

Ha dicho S. S. que el partido moderado obligó en algunas y determinadas ocasiones á juramentos políticos al clero. Seria necesario entrar en investigaciones, que el reglamento no me permite, para hacer la debida distincion entre doctrinas y doctrinas. Nuestro partido, que concede una parte de soberanía al rey, puesto que la tiene en union con las Córtes, naturalmente, dadas nuestras doctrinas, puede exigir cierta sumision á esa soberanía que el partido democrático no tiene derecho á exigir; porque así como los partidos tienen la gloria de sus principios, deben tambien aceptar sus consecuencias. De consiguiente; no hay ninguna paridad en este caso.

Acerca de las declaraciones que ha hecho S. S. sobre el juramento, quedaria perfectamente satisfecho si lo que se votase aquí fuesen las declaraciones de la comision; pero, desgraciadamente, aquí lo que se vota es la ley. Y yo tengo que insistir en dos cosas: primera, en que la enmienda que tuve la honra de presentar se vote por partes; segunda, en que el señor ministro nos diga si, bien aceptando la adiccion relativa al juramento que tuve el honor de presentar, ó si, bien aceptando un artículo adicional que podemos presentar á esta ley, quita este cruel estorbo, para que el clero pueda percibir, no ya la parte



que á mi entender le corresponde legítimamente, sino aquella que S. S. le concede por la ley que estamos examinando. Si su señoría me hiciera esta concesion, y si ademas declarase que esta cuestion era libre, creo que por su parte habria hecho todo aquello que tengo derecho á esperar de él.

El ministro de Gracia y Justicia confirmó lo dicho por la comision relativamente al juramento terminando de este modo:

«El artículo adicional no es necesario; bastan las declaraciones de la comision, bastan las declaraciones del Gobierno, porque, despues de estas declaraciones, la Cámara ha de dictar su solemne veredicto. Así, pues, crea el señor Jove y Hévia que nó es verdaderamente necesario, que sería de todo punto superfluo ese artículo adicional, que á nada conduciría, y que, por el contrario, añadiría un defecto más al proyecto de ley, porque son defectos en las leyes todo aquello que constituye redundancia.»

El Sr. Jove y Hévia rectificó de nuevo.

EL SR. JOVE Y HÉVIA: Supone el señor ministro que yo argumento bajo la presion de una ley existente en lo relativo al juramento, y esto no es así; yo argumento bajo la existencia de un hecho terrible y fatal que exige este juramento. Si no hay una ley; sí, como yo creo, la ley que obliga á jurar á los empleados públicos no puede obligar al clero, ¿por qué se le exige, y por qué, no solo se le exige, sino que, en virtud de que no cumple, se le niega el pago de sus haberes? Esto, segun la teoría del señor ministro y de la comision, es completamente injusto; y siendo completamente injusto, se le debe reintegrar al clero de todos los haberes que ha dejado de percibir por no haber jurado.

«Conste, pues, que, segun la comision y el señor ministro, no es necesario derogar el precepto de jurar, porque este precepto no existe legalmente; y por eso, no solo no retiro la enmienda, sino que sigo rogando que se vote por partes; porque, apesar de las declaraciones de S. S., repito que estas declaraciones no se votan; pero mañana pueden venir otros ministros que crean lo contrario, por lo que el derecho del clero quedará amenazado si no se expresa la derogacion del juramento de una manera clara y terminante.

Supone S. S., y supone muy bien, que la mayoría no votará mi enmienda, y por eso deja completamente libre su votación. Yo rogaba á S. S. que declarase completamente libre la votación de toda la ley, porque yo no creo, como S. S., que la ley está dentro del partido radical, puesto que para mí el verdadero intérprete, el núcleo, la base del partido radical es la fracción que se encuentra detrás de estos bancos, entre los cuales, con su elocuente y autorizada voz, se cuenta el señor duque de Veragua, que ha manifestado hoy ser contrario á esa ley.

El ministro de Gracia y Justicia dice que, al hablar del juramento del clero, no hablaba en manera alguna de aquel á que estaba obligado en virtud del decreto del mes de Marzo de 1870, porque ese decreto no se refiere ni es aplicable á los ayuntamientos y diputaciones provinciales, desde el momento que se trasladan á esas corporaciones las obligaciones eclesiásticas.

El Sr. JOVE Y HÉVIA: Solo diré al señor ministro, con respecto al decreto de 1870, que mandó jurar al clero, que no puedo reconocer decretos cuyo resultado pueda ser eludir preceptos legales, como lo es el sostenimiento del culto y del clero.

Leída por segunda vez la enmienda del Sr. Jove y Hévía al art. 1.º, y hecha la pregunta de si se tomaba en consideración, el acuerdo del Congreso fué negativo.



## SESION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE.

Entró á discutirse el art. 1.º (1) del proyecto, despues de desechadas varias enmiendas, consumiendo el Sr. Salaverría el segundo turno en contra.

Su discurso fué como sigue:

El Sr. SALAVERRÍA: Confieso, señores diputados, que no hay nada más desagradable para mí que tener que impugnar un proyecto que, partiendo de las esferas del Gobierno, se somete á esta Cámara. Habitado yo á proponer medidas de esta clase, y á tener que defenderlas, hallo cierta dificultad para impugnarlas; que siempre hay que suponer que, viniendo como vienen del Gobierno, ofrecen la seguridad de que no han de ser propuestas á la Cámara sino despues de un detenido y maduro exámen. Pero este proyecto de ley le encuentro tan contrario á la Constitucion, tan contrario á la equidad y á la justicia y tan contrario al espíritu económico que en él domina, y para mí no existe otro espíritu que el económico, que no puedo ménos de molestar á la Cámara y de llamar la atencion de la comision y del gobierno de S. M., exponiéndole mi juicio, y muy principalmente, aun admitido el proyecto, sobre las dificultades que yo encuentro en su ejecucion. Pero quiero, antes de entrar en la discusion de él, llamar la atencion de la Cámara y fijar la situacion en que es necesario que se coloquen en los debates los señores diputados de otros partidos, cuando hayan de dirigirse á las personas que nos encontramos en estos bancos colocadas á título de unas ideas de todos conocidas.

---

(1) Véase la pág. 52.

A propósito de esta ley, los señores que han hablado desde los bancos de la oposicion federal, lo mismo que desde los bancos de la comision y de la mayoría, y aun creo tambien desde el banco del Ministerio, han querido suponer que en las personas que aquí nos encontramos, y que conservamos nuestra adhesion y nuestro afecto á una dinastía en quien creemos que está la legitimidad constitucional y tradicional, han querido suponer que porque aquí nos encontramos reunidos en un sentimiento comun de adhesión á una dinastía, las ideas que puedan salir de estos individuos, y que en la Cámara puedan emitirse sobre las varias cuestiones de gobierno y administracion, son las ideas de todas las personas que están afectas á esa dinastía, y es necesario establecer las distinciones que necesariamente resultan de los actos y de las ideas que cada cual haya representado en su vida. Esa causa tiene la adhesion de hombres de opiniones muy opuestas en materia política y en materia administrativa; como que hay hombres que acaso estén tan identificados con la Constitucion de 1839 como los mismos radicales, y otros que están en la frontera del Estatuto de 1834, y con arreglo á ese criterio cada cual tiene los puntos de vista correspondientes.

Es necesario que conste, y hago esta declaracion para que cuando el Gobierno y los señores diputados, en el curso de las discusiones futuras quieran saber lo que son en cualquier materia las opiniones de los alfonsistas, no juzguen por las opiniones que emita el Sr. Estéban Collantes, ó el Sr. Pidal, ó el Sr. Bugallal, ó el que tiene la honra de dirigir la palabra al Congreso. Lo que quiere decir que en el partido alfonsino cabe la variedad de opiniones que existen tambien dentro del mismo partido radical, como dentro del republicano y dentro del mismo carlismo, puesto que hay hombres en ese partido que sostienen el principio de la Representacion nacional dentro de la dinastía que ellos creen legítima, y otros que quieren la fórmula absoluta. Por efecto de los antecedentes de los hombres políticos que hemos tenido la desgracia ó la fortuna de haber intervenido en otro tiempo en los negocios, nos encontramos a propósito de esta misma cuestion en posicion muy diferente de conducta: dentro de las opiniones conservadoras que alimentamos el Sr. Estéban Collantes y yo, nos encontramos, a propósito de la cuestion de la venta de los bienes de la Iglesia, en una situacion diferente.

Por ejemplo, á mí me ha tocado mantener que el principio de la amortizacion de tanta propiedad territorial en manos de las



corporaciones, ya civiles, ya eclesiásticas, en los tiempos presentes de la historia, no era conveniente, y que para fomentar la riqueza general había necesidad y conveniencia social de hacer su trasformacion en otra clase de valores, y para realizar estas ideas y satisfacer estas necesidades, suspendiendo antes un acto revolucionario efectuado sin los miramientos debidos á la Santa Sede, había tenido en mi tiempo la suerte, buena ó mala, pero la suerte de proponer en materia de bienes eclesiásticos un convenio á la Santa Sede, para la trasformacion de la propiedad territorial, y estas resoluciones fueron aceptadas por hombres de ideas conservadoras, en desacuerdo con hombres de opiniones tambien conservadoras que no estaban en ese punto conformes conmigo. Esto comprueba que dentro de las opiniones generales que los que nos sentamos en estos bancos tenemos sobre el punto fundamental y cardinal de nuestra creencia, que es la adhesion á una dinastía hoy en la desgracia, aparte de eso, puede haber las apreciaciones sobre los actos administrativos y sobre las resoluciones políticas, á que dan lugar los antecedentes y los puntos de vista de cada cual.

Hecha esta declaracion, voy á entrar en la discusion del proyecto de ley. Yo no he de molestar á la Cámara con un debate académico, porque mis medios y mis estudios no me llevan á eso: he creído siempre que para la buena discusion y exámen de las leyes, no favorece casi nunca el introducir en los debates polémicas puramente de academia, que si bien acreditan la instruccion y el saber de los individuos que las promueven, á favor de la distraccion á que conduce el elevarse á abstracciones puramente filosóficas, las leyes pasan sin exámen y no se trata de la comprobacion práctica, real y posible de su ejecucion.

Pues bien; tratando de la dotacion del clero, saben los señores diputados, y lo sabe mucho mejor que yo el señor ministro de Gracia y Justicia, que hasta 1837 no surgió en España la cuestion constitucional de las obligaciones que habria de tener la nacion para mantener el culto y los ministros de la religion católica.

La Constitucion de 1812 afirmó que la religion católica apostólica romana era la única verdadera y la que profesaban todos los españoles, con prohibicion de todo otro culto.

No dijo nada aquella Constitucion relativamente al sostenimiento del culto y los ministros de esta religion. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos la Iglesia católica tenia asegurada su dotacion independiente en la gran propiedad territorial que poseia y en la tributacion conocida bajo el nombre de diezmo;

y como en aquellos tiempos el Estado no intentó aplicarse ninguno de estos recursos, la Constitucion no tuvo que ocuparse de la subsistencia de los ministros ni del culto de la religion católica; no tuvo mas que afirmar que la religion católica apostólica romana era la de todos los españoles y la única verdadera, como yo creo.

En 1837, cuando coincide la abolicion del diezmo y la enajenacion de los bienes eclesiásticos con la formacion del Código fundamental, por primera vez vemos en la Constitucion española la obligacion que la nacion tiene de mantener el culto y los ministros de la religion católica, que profesan los españoles. Entonces es cuando, por efecto del cambio introducido por las leyes civiles en la manera de subsistir los ministros y el culto de la religion católica, nace el deber que la nacion española tiene de mantener el culto y sus ministros. ¿A título de qué? A título de una carga de justicia, de una obligacion recíproca; á título de abonar, hasta donde fuera posible, á la Iglesia la equivalencia de aquello que á su vez tomaba el Estado.

Pues bien; entonces se presenta por primera vez, como dejo dicho, la cuestion de dotacion de los ministros y culto de la religion católica, y durante el período que media entre 1837 y 1851, los recursos para atender á la Iglesia, la determinacion de sus asignaciones, todo permanece en una completa interinidad; no hay una forma fija de dotacion y subsistencia para la Iglesia católica.

Primero se deja permanente el medio diezmo como recurso para esa dotacion; despues, transitoriamente y con ese mismo objeto, se impone un 4 por 100 sobre la propiedad territorial; con posterioridad, en 1841, cuando el partido progresista viene á confirmar la enajenacion de los bienes eclesiásticos, la declaracion de la propiedad nacional sobre esos bienes y á ratificar nuevamente la abolicion del diezmo, entonces se adopta para la dotacion de la Iglesia, contando con las rentas que aún podian existir de los bienes no enajenados todavía, una contribucion especial de culto y clero; pero todo con un carácter interino, por cuanto el arreglo de las asignaciones personales del clero no estaba hecho. Y continúan las cosas con expedientes anuales de 1837 á 1851, en que los medios de subvenir á la manutencion del culto y clero se resuelvan segun las circunstancias, por decirlo así, de cada uno de los presupuestos, de cada uno de los ejercicios de aquel tiempo.

Viene el año 1851, y entonces se llega á un acuerdo con la Santa Sede para fijar de una vez la dotacion de la Iglesia, así



haciendo el señalamiento del importe de las obligaciones eclesiásticas como el de los medios con que habia de atenderse á esas obligaciones. En el Concordato celebrado entonces se le entregaban definitivamente al clero los bienes que le habian sido devueltos en 1845; se le asignaban otros bienes de naturaleza eclesiástica, pero que no eran de la propiedad del clero secular, como las encomiendas de las órdenes militares; se le asignaba tambien el producto de la Cruzada, y se declaraba, en fin, que para el complemento de la dotacion del culto y clero se establecia una contribucion territorial, pagadera en metálico ó en frutos, realizable por medio de convenios con las provincias, con los pueblos ó con los particulares. De esta manera quedó por aquella ley resuelta la dificultad que por mucho tiempo habia existido, para fijar la dotacion de la Iglesia y los medios de subvenir al culto católico.

El Concordato, hecho para poner de acuerdo los intereses de la Iglesia con los del Estado, habiéndose pactado en él las obligaciones y los derechos que respectivamente se asignaban al Estado y á la Iglesia, ¿es un tratado, es un convenio, es un acto que puede así cambiarse de la manera que nosotros intentamos hacerlo al presente, por medio del proyecto de ley sometido á la deliberacion de las Córtes? Señores, á mi me parece que esto es muy poco formal.

El señor ministro ha calcado su proyecto de ley, y la comision lo viene apoyando tambien, en el concepto de que hay en el Estado libertad de fijar las asignaciones que le parecen á los arzobispos, á los obispos, á los canónigos y á los demas individuos de la Iglesia, y tambien al material. ¿Cree el señor ministro que está en la interpretacion del Concordato la facultad de trasportar al presupuesto municipal ó al provincial, obligaciones que son necesariamente de la nacion ó del Estado?

Porque, señores, lo mismo es el Estado que la nacion para este caso y para todos; y aquí me adelanto á llamar la atencion de los señores diputados sobre esta palabra, que da motivo en el dictámen de la comision para suponer diferencias que justifiquen lo que intenta este proyecto, por cuanto cree que hay diferencia entre el Estado y la nacion, y de esa diferencia deduce que, diciendo la Constitucion que las obligaciones del clero tiene que atenderlas la nacion, no es esto lo mismo que si dijese el Estado. La nacion y el Estado tienen la misma responsabilidad. Ya explicaré yo á la comision y al señor ministro que la obligacion que tiene el Estado por el art. 21 de la Constitucion, respecto al clero y al culto católico, es igual á la que

tiene con los acreedores de la deuda pública, é igual á otra porcion de obligaciones marcadas en la misma Constitucion.

Pero, ¿cree el señor ministro, al facultarse para reducir las categorías eclesiásticas, para disminuir el número de los titulares de los cabildos, para rebajar las asignaciones del material y para otras alteraciones, que tiene una libertad completa sin tratar convenientemente con la Santa Sede? ¿Cree tambien su señoría que el artículo del Concordato que establece que el complemento de la dotacion se ha de hacer con una contribucion que allí se determina, es una disposicion que le permite hacer al Estado lo que quiera, y trasladar, como se hace por este proyecto de ley, las obligaciones que tiene contraidas á donde mejor le parezca?

Yo creo que el señor ministro está profundamente equivocado, como lo está tambien en la explicacion que debe darse al caso cuarto del art. 38 del Concordato. Ese párrafo dice que para atender á la dotacion del culto, ademas de otros recursos que se designan, se establecerá una imposicion sobre la propiedad rústica y urbana, pagadera en metálico, especie ó frutos, pudiéndolo cobrar el clero de las provincias, los pueblos ó los particulares.

Pues bien, este artículo no es mas que la consagracion del derecho que la Iglesia ha creído tener á la tributacion de la tierra. La Iglesia no creyó que debia renunciar á aquel derecho, porque desde el principio de los siglos habia vivido más particularmente con el tributo de la tierra, y bien se comprende que la Iglesia, que no renuncia á los principios, aunque por concordia transija á veces con los hechos, mantuviese en el Concordato el principio de participar de una contribucion sobre la tierra; y como estaba ya constituida por el Estado la contribucion territorial que abrazaba todos los productos de la tierra y que habia venido á reemplazar á la antigua decimacion y á los antiguos impuestos territoriales que el Estado percibia, naturalmente, en las aplicaciones que se hicieron de esta disposicion del Concordato, el señor ministro lo sabe tan bien como yo, se declaró que ese párrafo podia perfectamente quedar satisfecho dando al clero una participacion en la contribucion territorial.

Así se hizo, en efecto; pues cuando en 1851 se formó el primer presupuesto ya arreglado al Concordato, distinguiendo bien las obligaciones eclesiásticas, así del clero catedral y parroquial como del material, administracion diocesana, dotaciones de los seminarios conciliares, llegando este presupuesto á 160



millones de reales próximamente, como que la renta de los bienes devueltos al clero, el producto de las encomiendas y el de Cruzada no llegaban con mucho á la importancia de este presupuesto, se le dió al clero, como una consecuencia del párrafo cuarto del art. 38, una participacion en la contribucion territorial, que fué de 123 millones de reales. Arregladas así las cosas, vino marchando sin dificultad alguna la dotacion de la Iglesia, solo con algunas reclamaciones de parte de su administracion; porque, como una parte de los recursos que se hacian á su presupuesto, procedente de la parte de bienes devueltos al clero, de la Cruzada y de las encomiendas, eran productos eventuales, naturalmente era necesario traer á una liquidacion esos haberes, para ver hasta qué punto esos productos eventuales habian dado los rendimientos calculados, y en su consecuencia aumentar ó disminuir la consignacion sobre la contribucion territorial. Entendióse, pues, la disposicion del Concordato en el sentido de que no habia necesidad de establecer la contribucion especial allí estipulada, habiendo de gravar la tierra, así rústica como urbana y la ganadería, una vez que existia una contribucion general establecida por el Estado; era lo mismo dar al clero una participacion en esa contribucion que el establecer la especial, evitando complicaciones y gastos de administracion.

En 1855, por efecto de la ley de desamortizacion, la parte de la dotacion del clero que se fundaba en el producto de los bienes tuvo que desaparecer, y entonces recayó la dotacion equivalente al producto de esos bienes también sobre la contribucion territorial.

Yo tuve la honra en Setiembre de 1856 de suspender la venta de bienes de la Iglesia mientras que la Santa Sede no conviniera en ella, y por consecuencia de las negociaciones entabladas quedó en 1859 efectuado un convenio con Su Santidad. En ese convenio se determinó que, en equivalencia del producto de los bienes que adquiria el Estado por efecto de aquella convencion, se diera la cantidad necesaria en inscripciones de la deuda pública; y ya desde entonces la asignacion del clero venia á quedar atendida con el producto de las inscripciones intrasferibles, los rendimientos de la Cruzada y la consignacion sobre la contribucion territorial.

Nada ocurrió hasta 1869, en que, sin hacer alteraciones en el presupuesto, por efecto solo de la negativa del clero á jurar la Constitucion, negativa fundada, á mi juicio, en legítimos motivos de dignidad, fué suspendido el pago de sus haberes. Hoy

se nos presenta la novedad segun la cual el Gobierno, declinando la obligacion que el Estado, la nacion, es lo mismo, tiene de pagar el culto y los ministros de la religion católica, la consigna en unos casos en los presupuestos de las provincias y en otros en los municipales, quedando, sin embargo, á cargo del Estado algunas otras atenciones del presupuesto eclesiástico.

No me he de esforzar, porque no haria mas que repetir las razones que han expuesto los Sres. Estéban Collantes, Pidal y Jove y Hévia, en probar la improcedencia de los actos del Gobierno, que rompe de un golpe todas las obligaciones en que se encuentra la nacion para con la Santa Sede y con la Iglesia católica, por efecto del Concordato de 1851 y por la convencion de 1859. Seria ocioso que yo os cansara con demostrar hasta dónde alcanzan, á mi juicio, las obligaciones que la nacion española tiene con la Iglesia católica, y el deber indeclinable en que está de cumplirlas cuando se las impone la Constitucion de 1837, la Constitucion de 1845, la Constitucion, que no se publicó, de 1856, y la Constitucion de 1869, que, no obstante el espíritu anticatólico que encierran algunos de sus artículos, ha mantenido en pie la obligacion del Estado, de la nacion, de sostener el culto y clero de la religion católica, porque esta misma Constitucion no ha hecho mas que una variacion de la anterior, la de quitar la afirmacion que tenian las otras Constituciones, de que la religion católica apostólica romana era la religion que profesaba la nacion española.

Considero tanto más obligado al Estado á pagar el las atenciones de la Iglesia, cuanto que no tiene límite lo que á costa de aquella ha realizado en su propio y exclusivo interes. Si á la inmensa suma de bienes ocupados á la Iglesia se agrega lo que supone el diezmo, á que la Iglesia ha renunciado, dejando al Tesoro amplio el campo de los impuestos territoriales, nada supone ese miserable presupuesto que el Gobierno reduce á miserables proporciones, ni siquiera para pagarlo, sino para echarlo sobre el exhausto y más pobre erario municipal y provincial.

Yo mantengo que la obligacion de pagar las atenciones de la Iglesia, segun el Concordato, es exclusiva del Estado, que no la puede declinar en nadie sin consentimiento de la Iglesia, á no cometer un acto de violencia é injusticia evidente.

Pero, en el supuesto de que sea constitucional, justo y político, lo que se propone, ¿tienen los presupuestos provinciales ni locales recursos para levantar las cargas que se les van á imponer?



¿No se va de seguro á prolongar, haciéndola perpetua, la miseria á que en la actualidad los teneis condenados?

La comision, como el Gobierno, para declinar en las provincias y los pueblos el pago de las obligaciones eclesiásticas, supone que en la contribucion de consumos encontrarán los recursos suficientes.

¡Cosa rara, señores! Los suprimidores de esa contribucion, los que la lanzaron sus anatemas, esos hoy, para todo lo que no quieren pagar, para exigir nuevos tributos á los pueblos, ¿qué creéis que les recetan como una especie de mina rica é inagotable? La contribucion de consumos.

Yo diré más adelante lo que se me ocurre á este propósito.

He examinado el expediente que ha formado la comision para presentar este proyecto, y lo digo con sentimiento, tratándose de una cuestion de esta importancia, no existe un estado, un cuadro, un desenvolvimiento que compruebe la posibilidad de ejecutar el proyecto; no hay un estado para que podamos saber de qué manera y en qué correspondencia se encuentran los recursos de que los pueblos pueden usar con las cargas que quieren imputárseles. Llegaré á examinar este punto, valiéndome de documentos oficiales que he podido reunir de épocas anteriores, y expondré á la Cámara las dificultades que se han de tocar; demostraré que en la mayor parte de las provincias quedarán indotadas las atenciones sagradas de la Iglesia.

He manifestado antes que la obligacion de pagar el culto y clero es de la nacion, y no es ni puede ser de la provincia ni del municipio. ¿Cómo ha de ser de la provincia, si la provincia es una entidad administrativa completamente artificial, una entidad que puede desaparecer mañana por un organismo administrativo nuevo que queramos establecer? ¿Si puede haber una idea de método de administracion que suprima la provincia, porque tales pueden ser los medios de comunicacion del centro con las localidades que hagan innecesarios estos otros centros secundarios? De consiguiente, no existe la personalidad de la provincia para trasmitirle una obligacion del carácter y permanencia como es la obligacion que el Estado ó la nacion tiene con la Iglesia.

Tenemos todavia en estas relaciones de la obligacion que ha contraido la nacion con el clero otras consideraciones á que atender. Por efecto de las convenciones celebradas con la Iglesia, ésta es poseedora de un capital de 1.400 millones de reales en inscripciones del 3 por 100. Este capital no se puede anular,

es una obligacion con la garantía del artículo que coloca la deuda pública bajo la salvaguardia de la nacion. El carácter de las inscripciones intrasferibles no altera en nada los derechos y las obligaciones de la deuda pública; y, señores, ¿no recuerdan todas las personas que han estado en los negocios en tiempos anteriores que, cuando se ha dispuesto en 1855 la venta de los bienes eclesiásticos y su conversion en deuda intrasferible del Estado, se le decia al clero lo mismo que hemos dicho á los ayuntamientos y á las corporaciones, que les entregábamos un valor sagrado, el primer valor que puede existir en la nacion? ¿Pues qué valor es éste que en un momento y de una manera lateral destruye el proyecto actual del Gobierno, cancelando estas obligaciones? Porque, aun cuando luego el proyecto viene á querer pagar con inscripciones todas las dotaciones, ya diré yo lo que son esas inscripciones de la deuda pública que han de pagar las provincias y los pueblos.

El clero tiene próximamente 1.400 millones de reales en inscripciones de la deuda pública, que son tan sagradas como los títulos al portador, tan sagradas como las inscripciones nominativas trasferibles, tan sagradas como la deuda trasferible ó intrasferible al portador ó nominal, porque toda ella tiene los mismos derechos; y de consiguiente, el trasferir el pago de las inscripciones dadas por efecto de convenciones anteriores en los ayuntamientos ó diputaciones es, ni más ni ménos, que si hiciésemos cualquier acto parecido con los poseedores de la deuda pública, con los poseedores de inscripciones nominales ó de títulos al portador de la renta pública. Creo que no podemos destruir los derechos que tiene el clero por virtud de las inscripciones que se le han emitido en conmutacion de sus bienes, y que la primera partida del presupuesto de dotacion del clero deben ser estas inscripciones pagadas por el Tesoro, que son una obligacion del Estado por la recepcion que ha hecho de un capital equivalente á su importe; y sobre lo que falte, despues de tomar en cuenta ese capital, hasta el complemento del presupuesto, es sobre lo que girará la discusion del método ó de los medios de atender á esa obligacion.

¿Y han meditado el Gobierno y la comision la trascendencia que tiene el decir que con inscripciones de la deuda del Estado se va á trasferir esa obligacion á la provincia? Yo creo que no han debido fijarse en esto; creo que no se han fijado en lo que es una inscripcion de la deuda pública. Una inscripcion de la deuda pública es un documento de tal naturaleza que yo no concibo cómo puede decir el Estado que varía el domicilio de



su pago y que lo traslada á los ayuntamientos y diputaciones. La inscripcion de la deuda pública (aquí tengo un ejemplar) dice: *El Estado, y en su nombre la junta de la deuda pública, reconoce á favor de N la suma de tantos reales por capital y tanto de renta al 3 por 100.*

Yo pregunto: ¿en virtud de qué operacion aritmética se dirá aquí que la capitalizacion de un curato es ésta ó la otra? ¿Por qué se hace esta capitalizacion al 3 por 100? ¿Dónde existe aquí el capital? Yo no recuerdo haber visto que en ningun país del mundo se haya usado de una forma de esa naturaleza para pagar una obligacion que tiene el Estado y que quiere trasferir á otras corporaciones. Yo me hubiera explicado, en el sistema del señor ministro, que hubiese dicho: La asignacion convenida para tales y tales cargos eclesiásticos, que hoy se pagan por el Tesoro, se satisfará en adelante por el provincial ó municipal en tales ó cuales fechas. Mas ¿para qué dar con este objeto una inscripcion de la deuda? ¿Qué capital va á resultar? El obligado es el Estado, y, sin embargo, el que ha de pagar es la diputacion y el ayuntamiento.

No concibo el método que se ha adoptado en este particular; porque, repito, la inscripcion de la deuda pública dice que el Estado, y en su nombre la junta de la deuda pública, reconoce tal capital que se ha entregado al Tesoro al respecto de tanto. La credencial de un canónigo, de un párroco ó de un obispo ¿puede constituir una inscripcion en el gran libro de la deuda pública?

Entiendo que se ha padecido una gran equivocacion en la fórmula que ha adoptado el Gobierno, como expresion de las ideas que resaltan en su proyecto, y con las que yo no estoy de acuerdo. No hay razon para que se haga por el Estado la cancelacion de las inscripciones que en el gran libro están consignadas, y que están emitidas por virtud de un tratado y en cambio de un capital efectivo que recibió el Estado; inscripciones que, de ser trasferibles, estarían en poder de la universalidad de los acreedores, y de seguro no se habría atrevido el Gobierno á consignar su pago en las cajas de las diputaciones ni de los ayuntamientos.

Pues si nos fijamos en la pretension de representar el resto de lo que importa el presupuesto eclesiástico, fuera de algunos artículos, por inscripciones nuevas que hayan de pagar tambien los pueblos, la fórmula es peregrina. ¿En qué país del mundo ha visto el Gobierno cosa semejante? ¿En dónde se ha practicado, ni se practicará, que el título de la deuda de la nacion lo

pague el ayuntamiento ni la diputacion provincial? Lo lógico en este irregular é injusto procedimiento sería que, habiendo una deuda provincial y municipal que está representada por documentos análogos á los de la deuda del Estado, las diputaciones y ayuntamientos dieran al clero inscripciones de su propia deuda.

Lo que hay de verdad en todo este proyecto, es querer descargar el presupuesto del Estado de los 160 millones de reales que representaban las atenciones de la Iglesia, declinando y alejando del Tesoro público su pago, para poder presentar la posibilidad de la nivelacion del presupuesto general.

En esta parte el Gobierno, procediendo bajo el punto de vista de obtener economías en todo, y más principalmente en la dotacion del clero, ha quedado muy inferior á lo que se consignaba en el presupuesto del gobierno de 11 de Mayo último, cuyo presupuesto presentaba la rebaja de una tercera parte de la partida presupuesta para el clero, lo cual era una economía superior á la baja general que presenta el señor ministro actual en este presupuesto. Ya el pensamiento de rebajar la dotacion del clero existia por efecto de necesidades que yo no desconozco, y se propuso la rebaja en el año 1869 de una cantidad aproximada á la reduccion que ahora aparece en el proyecto de ley que se discute; pero allí se llevaba el pensamiento de tratar con la Santa Sede el arreglo de las asignaciones del clero, porque el ministro que presentó esa rebaja estaba en la idea de que debía tratarse con la Santa Sede cualquiera modificacion que hubiera de hacerse en la dotacion del clero. Examinando este presupuesto y la exposicion de motivos, encuentro la explicacion de la gran diferencia en que aparece el presupuesto actual comparándole con los anteriores, y he visto que donde hace recaer el señor ministro las bajas es en la organizacion y asignacion del clero catedral. Es necesario tambien tener en cuenta que no son 31 millones de pesetas á lo que el actual ministerio reduce este presupuesto, sino que hay que aumentar por otras obligaciones que figuran en el presupuesto eclesiástico, y se han llevado al presupuesto general, otras 2.938.000 pesetas.

De manera que para los efectos de esta comparacion no hay que considerar que el presupuesto eclesiástico está reducido á 31 millones de pesetas, sino á 33.080.000 pesetas. Teniendo en cuenta la parte que ha de satisfacerse con los fondos de Cruzada, la que han de pagar las diputaciones provinciales, la que se ha de satisfacer con cargo á la obra pia de Jerusalem, y esa



misma cantidad de dos millones que viene al presupuesto general, porque así es como se puede parificar un presupuesto con otro, tendremos que considerar, no un presupuesto de 31 millones de pesetas, sino de 33 millones y pico.

Y todavía tengo una duda, acerca de la cual me he de permitir hacer una pregunta al señor ministro de Gracia y Justicia y á la comision. El clero de las Provincias Vascongadas ¿está comprendido en las cantidades que, segun este proyecto, han de pagar las provincias y los pueblos? He hecho esta pregunta por una cuestion de cuenta; porque, si no lo está, ese presupuesto, que aparece con 31 millones de pesetas, y que yo digo que es de 33 millones, vendria á convertirse en un presupuesto de 34 á 35 millones de pesetas. Siendo esto así, la cuestion cambia mucho y no entraña una rebaja tan grande como á primera vista parece.

El procedimiento que el Gobierno ha seguido para determinar la dotacion del culto y del clero ha sido el que se explica en la exposicion de motivos de este proyecto. Su señoría ha partido de la proporcionalidad que existe entre la poblacion y lo que hasta ahora ha costado el clero en España, comparando este resultado con los datos que respecto de este punto ofrecen Francia, Bélgica y Portugal. Yo creo que no se puede proceder siempre en cuestiones estadísticas por los términos medios, porque esos términos medios suelen conducir á resultados absurdos. En el momento en que se ponen en relacion los términos medios con los términos extremos, la disparidad es grande, y en ocasiones estos términos medios son, como acabo de decir, absurdos; porque para determinar esta clase de datos hay que tener en cuenta cierta clase de consideraciones que justifican la disparidad que puede existir en un caso dado entre un pais y otro que se toman para la comparacion. No pueden establecerse esas comparaciones entre España y Francia; y ya que de comparaciones se trataba, en vez de comparar su señoría el coste del clero nacional con el coste del clero de otros paises, podia haber buscado los datos, comparando entre sí las provincias de España respecto del importe del clero con relacion á su poblacion, y muy especialmente las provincias del Norte con algunas de Andalucía.

Pero es el caso que el señor ministro de Gracia y Justicia, para reducir las dotaciones del alto clero y el número de diócesis, se ha fijado en lo que sucede en Francia, sin tener en cuenta la diversidad de circunstancias. ¿La poblacion está igualmente agrupada? ¿Las comunicaciones son igualmente

faciles? Y sin saber cuáles son y dónde quedarán situadas las metropolitanas que deja en su proyecto el Gobierno y las sufraganeas, cuáles los obispados que han de subsistir y dónde, qué catedrales quedarán y cuáles, ¿cómo vamos á votar un presupuesto de esta clase á ciegas? De una manera anónima vamos á votar 38 diócesis y cinco metropolitanas, y únicamente sabemos el número de individuos que han de constituir esas iglesias. Vamos á votar, como digo, anónimamente esas iglesias metropolitanas y esos obispados; pero no tenemos conocimiento ni de las localidades en que han de establecerse, ni si han de bastar para satisfacer todas las necesidades de la Iglesia.

Nosotros estamos aquí discutiendo de memoria. De todos modos, lo cierto es que la mayor rebaja que se obtiene en el presupuesto del clero se encuentra en lo que se refiere á los arzobispados, obispados y catedrales; porque con relacion al clero parroquial y á los gastos del culto, el mismo señor ministro dice en su exposicion que introduce pocas novedades.

Pues bien, no discuto las razones que el señor ministro de Gracia y Justicia haya tenido para reducir las diócesis, ni quiero ocuparme de cómo y dónde han de establecerse: adopto para la discusion el método que en él se establece, y paso á ocuparme de la manera de satisfacer la dotacion. Dica el señor ministro de Gracia y Justicia que el clero catedral y los demas gastos de este carácter se pagarán por las diputaciones provinciales, repartiéndose estos gastos segun la importancia de la poblacion de cada una de ellas.

¿Quién va á hacer esta reparticion? ¿La va á hacer la administracion? Naturalmente debe ser así, porque yo supongo que no se congregarán los representantes de las diputaciones provinciales para establecer ese repartimiento. Y una vez hecho el repartimiento y fijadas las cuotas á las provincias, ¿qué caja va á recibir los fondos de las provincias? ¿En dónde estará el Tesoro para los fines del cumplimiento del proyecto? Porque sobre todas estas cosas hay que llamar la atencion, para ver de qué modo y hasta qué punto puede ser posible y práctico el proyecto: porque si la administracion hace ese repartimiento, si la administracion se encarga de recaudar las cuotas de cada provincia, y despues, segun la importancia de cada diócesi, entrega los fondos á quien corresponda, vendrá á resultar que eso que cree el Gobierno que es la descentralizacion del clero del Estado no es tal cosa, puesto que el clero catedral ha de cobrar por conducto de las cajas del Tesoro y por la intervencion



de los agentes de la administracion. ¿Va á haber un Congreso, mayor ó menor, de diputados provinciales para las operaciones del repartimiento? Á mí me parece que es un poco molesto y complicado: lo natural será que la administracion establezca ese repartimiento.

Creo que todo esto va á ser una complicacion: creo que sería muy conveniente que, en caso de prevalecer lo que intenta el Gobierno, se dictasen las reglas para hacer esto posible, y que supiéramos hasta qué punto es practicable esta idea. Porque no basta decir que se quiere descentralizar el clero del Estado; no sé qué descentralizacion es esa, porque por percibir el clero en virtud de convenios y de concordatos, por percibir una parte de esa asignacion en inscripciones de la deuda pública, que son el sagrado de las obligaciones del Estado, y por percibir por contribucion directa aquella cantidad que en el Concordato existe, no sé qué dependencia tiene el clero del Estado; y la prueba es que el clero, cuando llega un acto político, como el juramento que se le ha exigido y ha creído que no debía hacerlo, el hecho de cobrar del Tesoro no le ha obligado á humillarse ante las exigencias del Estado, lo cual prueba que la percepcion de la asignacion no es lo que constituye la dependencia del Estado.

Ademas, teniendo el Estado, como tiene si se reserva, porque no dice nada el proyecto, el derecho de nombramiento de los eclesiásticos dentro de las reglas canónicas, si quiere descentralizar, ¿cómo se desprende el señor ministro de esa atribucion? Precisamente ha de existir más influencia en el Estado al conceder esas investiduras que con pagar el Tesoro sus asignaciones. Compadezco á los desgraciados prelados y eclesiásticos que hace ya treinta meses que la generalidad de ellos no han cobrado nada, mientras han cobrado algunos, sin conocerse las razones para esa distincion. Por esta ley no cobrarán mas que aquello que puedan percibir, si acaso, en las diócesis de las provincias cuyas obligaciones eclesiásticas sean de escasa importancia; que lo que es en aquellas diócesis en que tengan que vivir por traslacion de los fondos de otras partes, me parece que ya pueden renunciar á todo cobro.

Y si venimos de examinar el presupuesto eclesiástico respecto á la dotacion del clero catedral al clero parroquial, señores, para mí la falta de preparacion con que creo que se ha presentado el proyecto no tiene disculpa ninguna.

El presupuesto del culto y clero parroquial se deja en la situacion en que estaba antes; se echa á los municipios esta obli-

gacion, y se dice que podrán los pueblos levantarla, porque, teniendo los recursos de la contribucion de consumos, pueden atender á ella.

Aquí, señores, ha procedido el Gobierno, y lo mismo la comision, sin tener en cuenta, que han incurrido en una equivocacion tan palmaria que yo creo que se ha de convencer de ella inmediatamente el Congreso.

El Gobierno y la comision, al establecer la cuenta de lo que es el presupuesto municipal y lo que es la contribucion de consumos, la toma en general, en su totalidad, y dice: la contribucion de consumos daba al Estado 180 millones de reales, y siendo el presupuesto eclesiástico 128 millones, cabe dentro de esta cantidad el mantenimiento del presupuesto eclesiástico.

La contribucion de consumos, señores diputados, se hacia efectiva casi en su mitad en las ciudades que tienen poco clero parroquial; de manera que sobre los pueblos pequeños, que han tenido una tributacion por la contribucion de consumos de 84 á 90 millones de reales, va á pesar casi todo el presupuesto parroquial. La universalidad de los ayuntamientos, fuera de cuarenta y cuatro capitales de provincia, pues no se puede contar con las Provincias Vascongadas, Navarra y Canarias, han recaudado próximamente la mitad de los productos de esa contribucion: casi todo el presupuesto parroquial pesa tambien sobre los pueblos, pues las ciudades tienen poca importancia en ese presupuesto; luego ¿cómo han de poder cubrir los pueblos con 80 ó 90 millones, que era la cantidad que sacaban de los consumos para el Estado, cómo han de cubrir todas las obligaciones que les impone el sostenimiento del culto y clero parroquial?

Si se viene tambien á encontrar la correspondencia de lo que toca á cada provincia por las obligaciones del clero parroquial y lo que es la importancia de la contribucion de consumos en los pueblos, la disparidad, señores, es grande, porque hay treinta provincias con un deficiente inmenso, y que el Gobierno y la comision no han tenido en cuenta. Y en este momento me dirijo al Sr. Gil Sanz, que el otro dia nos decia que el año 41 se habia localizado el pago del clero parroquial. No se localizó: no podian hacerlo aquellas Córtes; no se puede hacer porque es necesario coger la dotacion del presupuesto de la Iglesia en su conjunto. No cabe localizacion, porque es establecer una desigualdad y una imposibilidad, de que en muchos pueblos y en muchas provincias se pueda cumplir la obligacion. Es un retroceso lo que el Gobierno hace.



si alguna ventaja ha tenido para el clero la reforma de las dotaciones de acuerdo con el Concordato, ha sido la de destruir las grandes desigualdades que entre las dotaciones de los eclesiásticos existían; porque saben los señores diputados que, mientras había mitras, canonicatos y prebendas que tenían grandes dotaciones, existían otros canonicatos y curatos que no tenían lo necesario para vivir, y el Concordato, destruyendo estas grandes desigualdades, ha hecho más equitativo el presupuesto eclesiástico. Así es que la universalidad del clero parroquial se encuentra satisfecha con el sistema de dotación que desde entonces existe, porque la generalidad de los curatos, con un pie de altar insignificante y con una pequeña intervención en el diezmo en otro tiempo, no llegaban á tener la asignación de 3.000 rs., que en la actualidad tienen los curatos de entrada.

Es á favor de la centralización del presupuesto eclesiástico como ha tenido ventajas la universalidad del clero parroquial, y aun también el catedral en las diócesis pobres, y con el sistema que predomina en este proyecto de ley van á nacer otra vez las desigualdades naturales, y los párrocos de aldeas que cuentan solo con 50 vecinos no van á tener medios de subsistencia.

El Sr. VICEPRESIDENTE (duque de Veragua): Señor diputado, han pasado las horas de reglamento, y si V. S. tiene que extenderse algún tanto, podrá continuar esta noche.

El Sr. SALAVERRÍA: Como el señor presidente guste.

El Sr. VICEPRESIDENTE (duque de Veragua): Se suspende esta discusión, que continuará á las nueve.

Continuando la sesión á las nueve y cuarto de la noche, dijo

El Sr. PRESIDENTE: Continúa la discusión pendiente, y el Sr. Salaverría en el uso de la palabra.

El Sr. SALAVERRÍA: Esta tarde, señores diputados, he tenido el honor de exponer á vuestra consideración la inconstitucionalidad, en mi entender, del proyecto sometido á vuestra deliberación; porque, obligando la Constitución á la nación á cumplir las atenciones del culto y de los ministros de la religión católica, no creo que es constitucional declinar en los pueblos y en las provincias esa obligación que tiene el Estado.

He expuesto tambien la injusticia de este proyecto por cuanto, teniendo la nacion la obligacion de indemnizar á la Iglesia de lo que eran sus propiedades, aplicadas á la conveniencia del Estado, y que eran los medios de existencia de la Iglesia, con antiguas contribuciones que por siglos tuvo la misma sobre la tierra, el diezmo, utilizándolas el Estado para crear una gran contribucion territorial, lo regular, lo justo, lo formal, puesto que existen pactos y concordatos con esa altísima institucion, es cumplir leal y fielmente lo que la nacion ha estipulado.

He probado tambien, señores, que por la forma de ejecucion que trae este proyecto hay condiciones que, en mi concepto, son absurdas; y á este adjetivo le doy las propiedades que tiene en el lenguaje cuando se entabla una discusion en el sentido, de que hay un fondo irregular que no entra en las condiciones del lenguaje y de la lógica; que se usa en una discusion científica, ó en una discusion legal, ó en una discusion práctica de negocios, cuando no hay propiedad en el uso de los términos; y he referido lo absurda que es una cosa, de que en mi concepto no hay ejemplo en ningun tiempo, ni le ha de haber, la de que, dando la nacion inscripciones intrasferibles de su deuda, esas inscripciones sean una letra á pagar por trimestres, por semestres, ó como se quiera establecer, por el ayuntamiento A ó por la diputacion Z. Esto es absurdo: el título de la deuda pública obliga al Tesoro público; las cajas del Tesoro público deben pagar las inscripciones de la deuda pública. Si se quiere echar á otras cajas que las del Estado las atenciones del culto y clero, dígase francamente.

Yo me explico la actitud y los juicios de los señores que se sientan en la izquierda de la Cámara. Los unos creen que no hay obligacion alguna en el Estado, ni en los ayuntamientos, ni en las diputaciones provinciales, para atender al culto y clero, y que quieren referir esa obligacion á un acto completamente voluntario de los que profesamos esa religion. Puede haber quien crea que, por efecto de consideraciones políticas, no debe referirse la dotacion del clero á nada que se relacione con el Estado, y que queriendo establecer una correspondencia entre el cura párroco en el pueblo con el ayuntamiento, y del obispo y cabildo catedral en la provincia con la diputacion, diga que es una atencion municipal ó provincial; pero, francamente, que se diga esto y no se venga á este método irregular y extraño de que el Estado emita un documento, que es el más importante y más solemne de los que constituyen la obligacion de un pueblo con sus acreedores, que es el título de la



deuda pública, se entregue ese título á un cura, á un cabildo, á un obispo, y se le diga: este título le vas á realizar por semestres, por trimestres ó por mensualidades en la aldea, en la capital de la provincia ó en otra parte, con fondos de que el Estado, el obligado, no responde, esto es lo que, en mi concepto, no tiene formalidad alguna.

Yo me coloco en el terreno de los sistemas, pero quiero que dentro de los sistemas haya claridad, lógica y orden. Y esta tarde he probado que habia en este proyecto una irregularidad de tal magnitud que, cuando venimos á examinar lo que es el presupuesto diocesano, vemos que se hace un repartimiento entre las provincias segun su poblacion, y que de este repartimiento ha de salir el fondo para atender á este presupuesto, que tiene el carácter de colectividad, de solidaridad, porque abraza el conjunto de las provincias de España, al paso que el presupuesto municipal tiene la contradiccion de ser un presupuesto absolutamente local. Y decia yo esta tarde: ¿quién va á hacer el repartimiento? ¿Va á haber un Congreso de las diputaciones provinciales para establecer ese repartimiento? Señores, me parece que es un mecanismo sumamente complicado.

Á última hora me quedaba probando lo que era el llevar á los pueblos las atenciones del presupuesto parroquial en el culto y en el personal del clero. La comision y el Gobierno parten de que los pueblos cuentan para atender á esta obligacion, con los recursos que en otros tiempos sacaba el Tesoro del impuesto de consumos. Esta tarde he dicho ya que hay una equivocacion en la manera de proceder del Gobierno y de la comision; porque media mucha diferencia, cuando se discuten estas cosas, haciendo cuentas de totalidad ó haciéndolas de parcialidad.

No negaré que la contribucion de consumos producía al Estado de 170 á 180 millones de reales, pero esta contribucion se realizaba en las ciudades y en los pueblos; próximamente la mitad de esa contribucion se obtenia en las ciudades; y si se hace la cuenta de lo que importa el clero parroquial de las ciudades, se ve que, mientras el haber de éste es insignificante, los valores de la contribucion eran muy grandes. Por el contrario, en los pueblos es donde está la gran importancia del clero parroquial, y en ellos, si se desciende á un exámen parcial por provincias y pueblos, se toca la insuficiencia de la contribucion para cubrir los haberes del clero parroquial. De esto viene á resultar que por 82 á 90 millones de reales que cobraba la Hacienda como contribucion de consumos, impone ese pro-

yecto á los pueblos 108 millones y más de reales. Se dirá que tienen la ayuda de la Cruzada, y de aquí hago yo una observacion práctica. La contabilidad necesaria para que el centro que hace la impresion y tirada de ese documento lo distribuya por diócesis ó provincias, de allí á los pueblos, imputar al ayuntamiento el producto, recoger sus recibos, complicar la cuenta municipal con las atenciones eclesiásticas, todo el número de operaciones que esto supone es ocasionado á confusiones y distraccion de fondos.

Pero lo mismo me da que tengan como ayuda los pueblos los 12 ó 14 millones de la Cruzada sobre los consumos, para la cuestion que yo planteo, que es que no corresponde lo que los pueblos han pagado á la Hacienda por los consumos con la importancia del presupuesto parroquial; y ya en el conjunto del presupuesto me encuentro con un déficit de más de 20 millones de reales, en el supuesto de que la relacion de la contribucion de consumos sea tan proporcional á las atenciones eclesiásticas de cada pueblo, que quepa una division, una aplicacion perfecta y exacta entre los ingresos de los consumos y las obligaciones del culto; pero si esto no puede resultar, ¿en qué estado dejamos al clero parroquial?

Esta tarde expuse que los defectos que tenía la antigua dotacion de la Iglesia, con el diezmo y la propiedad territorial, era que, mientras habia un canónigo, una dignidad de Toledo, de Valencia, de Sevilla con grandes rentas, se encontraba un canónigo de Tarazona, ó Jaca, ó Santander con una dotacion insignificante; y mientras habia un eclesiástico con una renta mayor que un alto dignatario civil ó judicial, se encontraba la universalidad de los curas, como sucede en todas las provincias del Norte, cobrando 70 á 80 ducados. Y yo hablo de esta materia porque la conozco; porque en mi juventud, por razon de mis empleos, he intervenido en las operaciones para el pago de esos eclesiásticos, y he visto la situacion que tenian. Y así es que, despues de la trasformacion del sistema de dotacion por virtud del Concordato, la universalidad del clero se encontró mucho mejor que antes. Y no habreis visto que desde 1851 hasta la fecha haya venido reclamacion de corporaciones de la Iglesia para pedir la alteracion del sistema de dotacion.

Lo único que ha ocurrido, y yo satisface, fué algun pequeño aumento al clero catedral por razon de la carestia de la vida en ciertos pueblos. Puedo discutir con el ministro y la comision, pueblo por pueblo, provincia por provincia, diócesi por diócesi, los efectos de este proyecto, porque tengo datos que no he



visto por el expediente que los hayan tenido presentes ni la comision ni el Gobierno. Podia, con aquellos en la mano, preguntar al Sr. Pasaron y Lastra, diputado por Guadalajara, cuánto importan en su provincia las atenciones del clero catedral, benefical y parroquial; cuánto importó para el Tesoro la contribucion de consumos. Y la misma pregunta puedo dirigir al Sr. Gil Sanz y al Sr. Valera, y á cada uno de los individuos de la comision.

El estudio que he hecho con estos datos y el proyecto, me persuade de que se coloca á la nacion y al clero y á las Córtes en una mala situacion: en la de hacer un proyecto que ha de traer resultados fatales.

Hablo con más calor del que me es habitual: esto os probará lo hondo de mi conviccion, porque os he dado el testimonio, enmedio de la posicion política que ocupo en estas Córtes, de concurrir con gran voluntad á facilitar todas las soluciones presentadas por el Gobierno; cabiéndome la satisfaccion, sin ejemplo quizá en la historia parlamentaria de España, de que, en una comision á que tengo el honor de pertenecer, cuatro dictámenes de los ocho ó 10 que haya de emitir están hasta redactados por mí, sacrificando conceptos y juicios para que marche la discusion de presupuestos sin dilacion ni dificultades.

Pero me encuentro con esta cuestion, que es una complicacion, y tengo por necesidad, y con sentimiento, que insistir en consideraciones, que os molestarán por triviales quizás, pero son las que han de servir para resolver la cuestion.

Podríamos hacer la cuenta sobre todas las provincias de lo que va á ser este proyecto, comparando en cada una el coste del clero parroquial y la contribucion de consumos; y si teneis en cuenta que el Gobierno pide á las provincias y los pueblos una participacion en sus presupuestos de 60 millones, sustituida por la comision, por inconvenientes reconocidos, con un aumento en el impuesto territorial, pero privando á los pueblos y á las provincias de toda participacion en esa contribucion territorial, señores, la imposibilidad de cumplir la ley que discutimos es de toda evidencia.

Por consiguiente, como llevo dicho, los pueblos, para satisfacer los 27 millones de pesetas de su presupuesto eclesiástico, solo pueden contar con 20 ó 22 millones de pesetas, que pudieron pagar al Tesoro en tiempos de buena administracion y de gran fuerza en el poder, para la exaccion de los impuestos.

Fijémonos en algunos casos concretos; yo voy á presentar

dos provincias, que tomo á la casualidad: la de la Coruña (y tomo no la más notable) tendrá por obligacion del clero parroquial 3.700.000 rs., pues la contribucion de consumos que pagaban los pueblos de esa provincia, sin la capital, porque la capital pagará á los curas suyos, puesto que por la organizacion de estos presupuestos se hace completamente municipal, local, el pago del clero parroquial, y no es el acervo común del Tesoro que habia anteriormente el que responde, pues allí los consumos daban 2.200.000 rs.

Ya pueden prepararse los diputados de la Coruña á que suelte la provincia, sobre lo que daba de consumos, millon y medio para su clero parroquial. Pues vengo á la de Búrgos, que tengo el honor de representar, y esa provincia tiene de clero parroquial 6.700.000 rs., y la contribucion de consumos daba próximamente tambien en los pueblos dos millones. ¿Y con qué derecho el Estado, que ha tomado de esa provincia muchos centenares de millones que tenia el clero, y que se ha utilizado de ellos, con qué derecho viene á decir que esa provincia levante la carga del presupuesto de su clero? Esa provincia dirá al Gobierno: entrégame los bienes que tenia aquí el clero, y cargaré con esa obligacion.

Y vamos á la provincia de Leon. Le sucede lo mismo: es una provincia que tiene seis millones de gastos de clero parroquial, y no pagaba dos millones de contribucion de consumos. Y tengo aquí una lista en que constan al pie de 24 provincias que se encuentran en una situacion análoga; y las otras están, como suele decirse, ras con ras. Y si viene el Tesoro á decir que se le han de dar las cuotas proporcionales, ó que no dándosele ese tributo no han de poder participar los pueblos en la contribucion territorial, yo pregunto al Congreso y al Gobierno: ¿cómo van á levantar esa carga? Estas cosas no pueden hacerse en la combinacion de un gabinete; este proyecto adolece del defecto de la no intervencion del ministerio de Hacienda. Pues qué, señores, ¿esta cuestion de dotacion del clero se ha abordado, se ha resuelto nunca en una forma como se ha resuelto en estos momentos? En aquellos tiempos de los Calatravas, de los Argüelles, de los Lopez, cuando se trataba de hacer modificaciones en la dotacion del clero, ¿qué juntas no se constituian, qué informaciones no se hacian, qué experiencias no se obtenian?

Y aquí, de la noche á la mañana, sin informaciones, sin datos, se nos presenta de pronto un proyecto que yo digo, y no extraña la Cámara que hable con calor habiéndome visto tan suave y tan condescendiente en otras cosas, que yo digo que



es imposible que pueda realizarse; porque yo me explico las fórmulas de todos los señores de la izquierda de la Cámara, pero no me explico que, queriendo atenderse á la obligacion que la nacion tiene contraida por la Constitucion de pagar este presupuesto, venga á hacerse de una manera que sea completamente estéril la dotacion de la Iglesia, y que ademas sea una especie de sarcasmo, porque esas 24 ó 30 provincias que se encuentran en disparidad de millones entre la obligacion del clero y lo que representa su tributacion de consumos, es imposible que cumplan con esa carga. La justicia exige que, si se quiere llevar á los pueblos esa carga, que se les entregue á esas provincias las equivalencias de los bienes que tenía allí el clero. Y, señores, todo esto ¿por qué resulta? ¿Por qué? Porque cuesta trabajo la confesion de una palinodia, y en el mundo hay que hacer palinodias.

Todo lo que está pasando aquí en la combinacion del presupuesto, en esta organizacion de la Iglesia, no tiene mas que una explicacion. Habeis hecho imprudentemente la abolicion de un impuesto que el Estado tenía á título de consumos; habeis hecho la abolicion del impuesto de la sal; habeis hecho otra porcion de declaraciones, en cuya virtud la renta pública ha perdido de 400 á 500 millones; eso os ha llevado al extremo de tener que pedir cinco años de espera á los acreedores de la deuda pública; eso os lleva al extremo de tener que llevar al presupuesto provincial y municipal, tan necesitado que todos los dias estais oyendo las quejas de los maestros, el gravámen nada ménos que de un presupuesto de 31 millones de pesetas, cuando no tiene absolutamente recursos, cuando no tiene hacienda y cuando está aún en vias de discusion el cómo se ha de organizar ese presupuesto municipal, porque es necesario que venga aquí un debate sobre el presupuesto de ingresos del Estado para saber si los pueblos han de tener participacion en la contribucion territorial ó no la han de tener, si podrán desenvolverse en la esfera de la contribucion indirecta ó no.

De manera que estamos procediendo, para imputar á los pueblos las atenciones de la Iglesia, sin haber tenido el presupuesto del Estado definido y sin saber qué va á ser del presupuesto provincial y municipal.

Decia que toda esta complicacion es efecto de resistir una palinodia, y la palinodia, si no se canta claramente, se canta por boca de otro. Nosotros, como poder del Estado, no queremos que éste use de los impuestos indirectos (uso este título para no ofender los oidos de los que no les gusta el nombre de consumo), y

nosotros les decimos á los pueblos: yo, que no puedo, que no quiero esa contribucion, con ella paga al cura, y con esa contribucion me darás ademas las cuotas proporcionales que te he pedido; y si he de renunciar á ellas, no tomareis nada sobre la contribucion territorial. De esta situacion violenta tiene que nacer un antagonismo de intereses entre el Estado y los pueblos, que con el tiempo será ocasion á graves disgustos.

Señores, los que creéis que hay una Hacienda municipal y una Hacienda del Estado, y que ha de subsistir con imposiciones distintas, ¿creéis que partís de un principio exacto? Pues padeceis una alucinacion. Los impuestos tienen una misma fuente, que es la riqueza; la misma ley que rige en los impuestos del Estado rige en los impuestos municipales, y tiene que obedecer á las condiciones de proporcionalidad, equidad y demas que hacen los impuestos aceptables.

El impuesto se asienta siempre dentro de las leyes de la justicia distributiva sobre la masa general de la riqueza social: de ella toma aquel tanto razonable para no esterilizarla y anularla, y sus productos deben ir á alimentar por un lado las necesidades del Estado, por otro las de la provincia y el municipio.

Creuyendo el Gobierno que iba á hacer como ninguno una baja en los presupuestos, resulta que, como esta tarde he indicado como de pasada, es ménos económico que los conservadores de la revolucion, porque los conservadores de la revolucion traian en el mes de Mayo un presupuesto de 39 millones de pesetas, que es la totalidad del presupuesto eclesiástico, y le imputaban una baja de la tercera parte, que importaba 13 millones de pesetas, mientras la que hacen los radicales es de cinco millones próximamente.

Ya voy á dejar, señores, porque estoy cansando á la Cámara, voy á dejar estas consideraciones puramente económicas, y me voy á permitir algunas indicaciones que me ha sugerido el discurso brillante, como todo lo que hace el señor ministro de Gracia y Justicia con su inteligencia é ilustracion, y que le oí á S. S. la otra noche.

El señor ministro decia: «Este no es un proyecto esencialmente económico; tiene más bien fines políticos». Si es económico ó no lo es, ya lo veis; si es realizable en la esfera financiera este proyecto, ya veremos cómo responden los diputados de 34 provincias, á quienes me propongo preguntarles qué es lo que creen que van á votar para que tengan conciencia de lo que votan. Pues bien, el señor ministro cree, primero, que se



descentraliza al clero con este sistema. Esta tarde he hecho también de pasada alguna indicación, y ya he dicho al señor ministro que la cuestión de cobrar del Tesoro público no le pone en dependencia del Estado, porque hace cuatro años que hay desacuerdo entre el clero y el Estado, y acepta la miseria en que vive (porque es necesario recorrer esas aldeas), apesar de tener su haber en la mano del Tesoro público.

Si el Ministerio quiere dar independencia al clero, el señor ministro de Gracia y Justicia debía abandonar el nombramiento de canónigos, de párrocos, etc., etc., todos aquellos nombramientos que, según el Concordato, tiene el Gobierno la facultad de hacer. ¿Y qué independencia puede tener ese clero parroquial, que cree el señor ministro que era necesario ponerlo en más relación con sus feligreses? Pues qué, ¿el clero no vive en relaciones con sus vecinos? ¿Con quién se comunica el clero de la aldea en la soledad de los campos? El párroco será más independiente cuando tenga que recibir del alcalde ó del concejal su haber, que cuando lo percibía del Tesoro nacional; cuando ese párroco recibe de la nación lo que no es más que indemnización de un derecho que le debe el Estado por la Constitución actual, por la anterior y por todas, ¿cómo este párroco ha de tener al frente del alcalde ó del ayuntamiento menor independencia que cuando va á depender de ellos, á quienes acaso tendrá que reconvenir en el ejercicio de su ministerio por sus actos públicos ó privados?

No tendrá nunca más independencia que la que tiene el pobre maestro de escuela, la que tienen la mayor parte de los médicos, que están reclamando todos los días en el gobierno político que les paguen los pueblos sus obligaciones; la independencia que tienen los acreedores de los ayuntamientos que tienen los créditos, los fondos y las imposiciones que han hecho para las atenciones municipales; la independencia del hambre; esa es la independencia que va á tener el clero.

Señores, voy á presentar una consideración final, porque estoy cansando demasiado á la Cámara.

Yo he tenido la honra en mi carrera pública, y como miembro de un gabinete, de establecer con la Santa Sede el convenio de 1859, en cuya virtud los bienes que poseía la Iglesia fueron adquiridos por el Estado; y yo, para proceder de aquella manera, participaba de las opiniones que han participado muchos hombres políticos de diferentes partidos, hombres de escuela más ó ménos avanzada, hombres de régimen absoluto, que consideraban que, al grado que había llegado la acumulación de

la propiedad territorial, así eclesiástica como civil, era necesaria la trasformacion de esa propiedad.

Por eso yo, partidario de esa opinion en esos tiempos, me he apoyado en esas doctrinas; pero con una diferencia respectó de la escuela progresista, cual es la de que esa reforma podia hacerse, por lo que á la Iglesia afecta, sin necesidad del acuerdo con la Santa Sede, y yo, como todos los hombres que participan de mis opiniones, creia que era necesario contar con ella; contamos con esa aquiescencia, la obtuvimos, y tengo la satisfaccion de que la enajenacion de los bienes de la Iglesia, hecha despues de esa concordia, obtuvo en sus resultados ventajas que no se lograron con las enajenaciones anteriores, efectuadas contra la voluntad y sin el beneplácito de la Iglesia.

Nosotros hemos hecho esto; hemos vendido los bienes de la Iglesia, porque hemos considerado, y yo he sido de esta opinion, que la propiedad corporativa territorial, en la importancia que habia alcanzado al cabo de los siglos, necesitaba una trasformacion, porque el desenvolvimiento de la riqueza territorial exigia esta reforma. Creo que los resultados de ese acto están á la vista, y tengo para mí que la nacion es infinitamente más rica, tiene mayores productos, alimenta una mayor poblacion, despues que se ha consumado la desamortizacion de la propiedad territorial, que en otros tiempos.

Yo, señores, no reniego de mis actos, y por eso decia al principio de mi discurso que cuando los señores diputados de distintos lados de la Cámara, tomando opiniones de estos bancos, quieren suponer que algunas formas, que algunas ideas que puedan salir de ellos son las que constituyen las opiniones de todos, aunque en lo esencial, en lo fundamental están conformes, incurrén en una grave equivocacion.

Hemos enajenado la propiedad de la Iglesia, y despues el Concordato de 1851 y el arreglo de 1859 nos ha dado el saneamiento de la enajenacion de la propiedad hecha en tiempos pasados, y habia tranquilidad en la posesion de estos bienes; hemos enajenado tambien la propiedad de las corporaciones municipales, de las corporaciones de beneficencia, y desgraciadamente los tiempos vienen de modo que á esas corporaciones no les pagamos integramente lo que les debemos; les sujetamos á contribuciones directas, les pagamos sus rentas en papel, y el hecho es que las corporaciones, que representan un fin social interesante á la generalidad del pais, se encuentran con que la indemnizacion que el Estado les prometió no se paga. Pues yo



presento á la consideracion del señor ministro, de la comision y de la Cámara la siguiente pregunta:

Habiendo enajenado en estos últimos treinta años la propiedad de las corporaciones, que sobreviven á los individuos, que tienen tradiciones de intereses, que tienen tradiciones de doctrina y de ideas, ¿puede dejarse expuesta esta propiedad á las quejas, á los resentimientos de esas corporaciones que ayer fueron su dueño, propiedad de que el Estado se hizo cargo á condicion de pagarles á las corporaciones su equivalencia? ¿Considera el señor ministro, considera el Gobierno, considera la Cámara la perturbacion que, á favor de los vientos que corren al presente y correrán por mucho tiempo en las sociedades modernas, esas corporaciones no puedan un dia levantarse y decir: Esta tierra, esta casa era mia: me lo tomó el Estado diciéndome que me iba á pagar; no me ha pagado; tú, comprador, reclama del Estado el valor de esa propiedad, que es mia? ¿No sería esto exponernos á una gran perturbacion para lo futuro?

Claro es, señores, que cuando yo hago estas consideraciones no me voy á colocar bajo el punto de vista de eso que se ha dado en llamar idea socialista; pero son consideraciones políticas que se deben tener presentes, porque, para que las reformas sean aceptables, permanentes y seguras, es necesario conciliar los intereses antiguos con los modernos; si quedan lastimados los intereses antiguos, no lo duden los señores diputados, andando el tiempo, á favor de cualquier circunstancia y cualquier incidente, las cuestiones se promoverán de nuevo; y yo, por satisfacer una consideracion de conciencia, me he permitido hacer esta observacion á la Cámara y al Gobierno para que alejen las justas quejas de la Iglesia.

He molestado mucho tiempo la atencion de la Cámara, y no quiero continuar; me siento, por lo tanto, esperando la contestacion del Gobierno y de la comision, y dispuesto á ampliar, si fuere necesario, cuando llegue la discusion de los artículos, las observaciones que he tenido el honor de hacer.

Al discurso del Sr. Salaverria contestaron el ministro de Gracia y Justicia, con cierta latitud, y el Sr. Gil Sanz, en nombre de la comision.

El Sr. Montero Rios, antes de entrar en materia, dijo que la confirmacion de que el proyecto en realidad no era tan malo, la encontraba en que el Sr. Salaverria, más bien lo habia calificado con dureza, que no combatido de una

manera contundente; pero el discurso mismo del ministro probó lo contrario, pues se detuvo á refutar algunos cargos, que no es necesario exponer, porque al rectificar el Sr. Salaverría los indica claramente antes de contestarlos, como ocurre igualmente con lo dicho por el Sr. Gil Sanz.

El Sr. Salaverría rectificó en estos términos:

El Sr. SALAVERRÍA: Debo al señor ministro de Gracia y Justicia una satisfaccion, y es que, si en alguno de los calificativos que yo he podido hacer del proyecto que se discute encuentra alguna inconveniencia, siquiera para las reglas de la buena cortesía parlamentaria, yo le suplico que considere que son los términos precisos de que nos valemos los diputados en el calor del lenguaje. Sabe S. S. toda la consideracion que tengo á su persona y á su capacidad; y no solamente á S. S., á ningun otro compañero de la Cámara le dire yo una cosa que le pueda lastimar.

El señor ministro de Gracia y Justicia, como habrá observado la Cámara, se ha ocupado en la primera parte de su contestacion á mi discurso, de la situacion más ó ménos armónica en que nos podemos encontrar los individuos que á título de una idea nos sentamos en estos bancos. Eso no implica absolutamente nada. Si mañana, por razones que no he de exponer aquí, S. S. y sus amigos, ú otros señores que ocupan otro lugar en esta Cámara, se sentaran en estos bancos en condiciones de inferioridad numérica, como nos encontramos nosotros aquí, podría resultar, dentro de las opiniones comunes y fundamentales, diferencias que nacen del temperamento, de las creencias, hasta de la responsabilidad que en la gestion de los negocios públicos haya tenido cada uno; así es que el señor ministro me ha venido arguyendo de una manera con que no puede argüir al Sr. Estéban Collantes. A mí me acusa de que he contribuido como ministro á la enajenacion de los bienes de la Iglesia. Por encontrarme yo en esta situacion excepcional, es por lo que hacia ver esta tarde las diferencias que podian existir entre los que aquí nos sentamos; nada arguye, porque hay una cosa en que estamos de comun acuerdo el Sr. Estéban Collantes, el Sr. Pidal y el que en este momento dirige la palabra al Congreso, y es en que todos los conservadores creen necesaria una inteligencia, una concordia con la Santa Sede para todas estas cuestiones y resoluciones.

Que yo haya sido partidario de la desamortizacion eclesiástica



tica cuando esa propiedad habia llegado á ser muy considerable, como lo fué á fines del siglo pasado; que yo haya sido partidario de la trasformacion de esa propiedad, no arguye para que otras personas de mis opiniones y adhesiones dinásticas hayan tenido otras creencias.

No hay contradiccion de mis opiniones de hoy y el convenio de 1859, á que concurri como gobierno, porque he dicho en mi discurso, y ésta es la opinion que han sostenido personas de escuelas políticas distintas de las mías, que la facultad de adquirir bienes inmuebles puede concederse á las corporaciones dentro de ciertos límites; pero cuando esos bienes son muy numerosos, en perjuicio del interes social, es necesario trasformarlos, es necesario dar otro carácter á esa propiedad; y los señores diputados saben que desde los primeros siglos, cuando se empezó á organizar la antigua monarquía, se ve que las Córtes y los publicistas de aquellos tiempos consignan ese juicio á propósito de aquella manera de ser la propiedad territorial, en el sentido de que era necesario que las corporaciones ni amortizasen ni mantuviesen una propiedad tan inmensa.

De manera que, despues de haberse trasformado la propiedad eclesiástica, el que reconociéramos en el Concordato adicional de 1859 el derecho que la Iglesia tiene de adquirir bienes inmuebles no arguye ninguna inconsecuencia. Podrán venir los tiempos, podrá tener entonces la Iglesia una gran propiedad, y del mismo modo que los hombres de la escuela liberal en sus distintas fracciones, segun la manera como entendemos la libertad, del mismo modo que en los siglos anteriores se ha reconocido la necesidad de cambiar la naturaleza de esa propiedad, de acuerdo con la Santa Sede, del mismo modo podrán hacer los hombres que despues de nosotros vengan un arreglo entre las dos potestades para enajenar esos bienes, si lo juzgasen conveniente.

El señor ministro me ha argüido de que, habiéndose estipulado en el convenio de 1859 la facultad al clero de representar todo el haber de su presupuesto en inscripciones de la deuda pública, sin embargo, no se hizo esta permutacion. No sé qué reclamaciones pudieran hacerse al ministro de Gracia y Justicia; pero yo puedo asegurar á S. S. que en mi tiempo jamas fué planteada por los señores obispos esa pretension, y que no me hubiera ofrecido dificultad alguna el convertir en deuda pública una seccion del presupuesto, la de dotacion del clero, porque entonces hubiera desaparecido la seccion que en el presupuesto de Gracia y Justicia se llama de obligaciones eclesiásticas.

Está en esa parte tan equivocado el señor ministro, que desde aquella época, tanto en los presupuestos anteriores como en los posteriores á la revolucion y en el que está sometido al examen del Congreso, se ha consignado una disposicion que dice que se trasferirá al capítulo de la deuda pública la cantidad que importan los créditos correspondientes al presupuesto eclesiástico, que se paguen en aquella forma. Para el Estado, ésta era una cuestion de cuentas; no importaba que se consignasen en el presupuesto de Gracia y Justicia, seccion de obligaciones generales, 160 millones que se habian de pagar al clero, ó que se consignaran en el capítulo de la deuda consolidada. Por lo tanto, no habia ninguna dificultad, créalo su señoría, no la hubiera habido si se hubiese planteado; y voy á dar á S. S. una prueba de cuáles son mis opiniones en esta materia.

En 1855, cuando se presentó la ley de desamortizacion del señor Madoz, un periódico conservador escribió un artículo, que produjo gran sensacion en Madrid, presentando las consecuencias que tendria para el Tesoro el convertir la propiedad territorial en títulos del 3 por 100, cuando esos títulos valian á 33 en la Bolsa, y sacaba la diferencia entre la renta que esos bienes representaban y la que por la emision de tres capitales tendria que pagar el Tesoro. Pues bien; yo, que estaba entonces en la administracion pública, contesté á ese artículo, y presenté la cuenta bajo el punto de vista del Tesoro público, haciendo ver que el Tesoro no perdía nada en dar en títulos de la deuda pública 100 millones de reales, si bajaba esos 100 millones del presupuesto eclesiástico; se hizo la cuenta, y cuando tanto se quiso alarmar con este argumento por la presentacion del proyecto de ley de desamortizacion, quedó todo el mundo tranquilo con este raciocinio, que comprenden todos los señores diputados.

Dice el señor ministro que se hizo el convenio de 1859 comprando los bienes á los obispos al precio que quisieron. Su señoría está muy equivocado. Todas las operaciones del desenvolvimiento del convenio del año 59, lo mismo que las del Concordato de 1851, en su parte más importante, se han hecho siempre de acuerdo con el Nuncio, concertándose la ejecucion con los ministros de Hacienda y de Gracia y Justicia, en la parte que les concernia. Al efecto se dió un decreto, cuya fecha precisa no recuerdo, en el que se estableció la manera de conmutarse los bienes por inscripciones intrasferibles; se fijó cómo habia de hacerse, y se dispuso que se hicieran las correspondientes deducciones por cargas y demas gravámenes que afec-



tasen á los bienes, para dar al clero lo que resultara de esa liquidacion. De consiguiente, de esa observacion que me ha querido hacer el señor ministro no se desprende nada que pueda perjudicar á mi argumentacion.

Yo no he debido explicarme bien á propósito de las inscripciones, porque lo que yo he querido hacer comprender es que las inscripciones de la deuda publica emitidas, que son una propiedad del clero adquirida á título oneroso en compensacion de sus bienes, es un crédito vivo y legítimo, y que aunque sea intrasferible, aunque sea nominal ó al portador, en cualquiera de las manifestaciones que tiene la deuda, es una obligacion del Estado, que tiene siempre la misma consideracion y el mismo valor. Así es que nosotros hemos procurado convencer á los pueblos y á todas las corporaciones á quienes hemos dado títulos de la deuda en equivalencia de sus bienes, que les dábamos el título más sagrado que podian recibir. Por lo tanto, si no se han de cancelar, si no se han de pagar por el Estado, ¿qué les hemos dado? Mañana podria decirse lo mismo á las corporaciones civiles. En su consecuencia, no importa que se les haya pagado mejor ó peor; lo que hay que sostener son los principios, y el argumento que hago respecto á estas inscripciones puede aplicarse tambien á las que hayan de emitirse por resto de la dotacion del clero.

Y sobre esto insisto, señor ministro: no sé que se haya practicado en ninguna parte, ni es mi ánimo que imitemos servilmente lo que hacen los demas paises; creo que debemos aspirar á la originalidad, y tendria mucha satisfaccion en que nos copiasen los extraños; pero encuentro yo tan irregular que se emitan por el Estado títulos de la deuda para domiciliar el pago en una Hacienda independiente de la del Estado, porque ni los ayuntamientos ni las provincias tienen la misma responsabilidad que el Estado, que no concibo cómo quiere introducirse semejante sistema. Si de estas discusiones resulta que los pueblos y las provincias tienen que cargar con el presupuesto eclesiástico, desearia, por lo ménos, que se buscara otra forma. Acostumbrado el señor ministro á los debates parlamentarios, y considerando que siempre conviene tirar algun golpe que pueda herir al contrincante para alejarle del argumento capital, cuando yo vengo huyendo aquí de todo lo que es discusion retrospectiva, de todo lo que pueda parecerse á cargo, porque yo estoy consagrado esta legislatura á discutir técnicamente todas las cuestiones, ha venido á hablar de la Caja de depósitos. Señor ministro, S. S. es muy ilustrado, y yo creo que solo in-

ducido por una noticia equivocada ha podido hacer ese argumento.

Cuando se creó la Caja de depósitos se dijo, y eso consta en el decreto de su creacion y en su reglamento, que se establecía para recibir imposiciones de dinero con un interés, y que los fondos que en ella ingresaran se emplearian en la deuda flotante. Por eso se daba un interes: pues qué, ¿habia de recibir fondos y dar un interes por ellos para tener ociosos los capitales en la Caja, si el objeto era aplicarlos á las necesidades del Tesoro y á la deuda flotante? De consiguiente, ese argumento es impertinente cuando se trata del presupuesto eclesiástico. Cuando quieran establecerse discusiones de este género, bien sean del tiempo de mi administracion, bien de la de amigos míos que no estén aquí para defenderse, ya lo he dicho, yo estoy dispuesto á entrar en ellas.

Para que se vea la rectitud con que discuto, voy á hacer una concesion al señor ministro y á la Cámara. Por la lectura que yo habia hecho referente á la manera de repartir el presupuesto provincial, habia incurrido en un juicio que el señor ministro aclara con su discurso; yo creí que el repartimiento y la recaudacion se iba á hacer entre todas las provincias de España, y he visto que estaba equivocado, pues solo ha de ser entre las que compongan cada diócesi. Yo creia que era el repartimiento en todas las provincias; ahora veo que el repartimiento, es dentro de las provincias de cada diócesi, por los pueblos que entran en ella.

Por lo tanto, en esta parte las observaciones que yo hacía pierden una gran parte de su importancia; aunque en menor escala, quedan las mismas dificultades. Esta declaracion que hago me da derecho para que la Cámara y el Gobierno tengan en cuenta mis argumentos.

Pero en lo que S. S., como la comision, se equivocaban más sustancialmente, es en considerar que la contribucion de consumos puede responder del presupuesto parroquial. Es necesario que S. S. pruebe que con la contribucion de consumos, en un todo igual á la de otros tiempos, ya sea para el Tesoro ó ya para los pueblos y provincias, los últimos pueden atender á sus gastos anteriores y á los que nuevamente se les impone por este proyecto.

Estas cuentas no se pueden hacer para una sola localidad, porque cada pueblo tiene diferencias concretas, y no quiero insistir sobre este punto, porque no quiero molestar más á la Cámara, ni tengo duda ninguna de que, si nosotros ponemos en



un nomenclátor lo que se pagaba por consumos al Tesoro y al frente la dotacion del presupuesto eclesiástico, la mayor parte de los pueblos que están en él, casi todos, resultan con una grandísima diferencia, y hablo de Búrgos, de Santander, de Leon, de Astúrias, de todas las provincias de Galicia; en fin, treinta ó más, que ya le demostraré á S. S. que se hallan en déficit. Para salir al encuentro de la dificultad, el señor ministro dice que acepta la enmienda para salvar esa irregularidad. Pues enseguida sale una cuestion: ¿quién abona la diferencia? ¿La va á pagar el Tesoro público? Pues entonces nos encontramos amenazados de un empréstito en el presupuesto para la dotacion completa del clero; y, por tanto, en vez de aclarar una cuestion de esa clase, se la va á oscurecer más.

Yo habia dicho que no existian datos, porque habia examinado el expediente presentado á las Córtes, y no encontré los datos allí. Yo sé que existen esos datos de 1867, á que ha aludido S. S., pero no son adecuados para la cuestion; son datos de generalidad, y estas cuestiones, que parece que son francas y fáciles en totalidad, cuando se descomponen, se encuentra uno que se hacen imposibles, y éste es el gran problema que tenemos en esta cuestion.

Parte de la contestacion que debo al señor ministro va tambien dirigida á las observaciones que ha tenido la bondad de hacerme tambien el Sr. Gil Sanz; yo debo decir á S. S. que esta tarde no he abogado por el restablecimiento del diezmo: lo que he dicho es que el derecho á una imposicion territorial convenida en el Concordato, tomaba su origen del antiguo diezmo, creyendo que era más bien un principio que no un hecho, por cuanto el clero no ha querido usar de él. Vuelvo á decir ahora al Sr. Gil Sanz que en el año 37, ya fué un hecho por los actos de los poderes públicos la enajenacion de los bienes eclesiásticos y la abolicion del diezmo, como impuesto para la Iglesia.

La nacion, el Estado, es toda la colectividad de españoles. Hablando de sus obligaciones, son distintas de las obligaciones locales y las provinciales, y así es que en el lenguaje que aquí usamos todos los dias en los documentos se dice Hacienda nacional, Hacienda del Estado, para distinguirla de la municipal y provincial y aun privada.

Rectificó el ministro de Gracia y Justicia, insistiendo en que habia cierta contradiccion entre las opiniones del

Sr. Salaverría, partidario de la desamortización, y lo prescrito en el art. 3.º del convenio de 1859, con lo cual dió lugar á unas breves frases del Sr. Salaverría, que rectificó en esta forma:

El Sr. SALAVERRÍA: Cuando se hizo ese convenio y se aceptaba para la Iglesia el principio de que pudiera adquirir bienes inmuebles, como que no estaban derogadas las leyes que se habían dado respecto á las adquisiciones de manos muertas, claro es que la Hacienda hubiera aplicado aquella legislación que venia de los tiempos antiguos de la monarquía.

El Sr. SALAVERRÍA pidió la palabra para consignar el segundo turno en contra del art. 3.º (1) del proyecto de ley; pero no habiendo hablado nadie en pro, el señor vicepresidente Mosquera se negaba á concedérsela, razón por la que el Sr. Abarruxa dijo algunas frases en pro del artículo, para que el Sr. Salaverría pudiera tacer en el debate.

El Sr. SALAVERRÍA: Hebiera sido extraño que, habiéndose hecho un discurso en contra de este artículo, con el silencio de la comisión y de la mayoría concluyere el debate. De este modo, no habría cosa más fácil que extirpar la discusión de las leyes, pues con pronunciar la oposición un discurso en contra y con no contestar nada los individuos de la comisión, el debate habría terminado. Yo no voy á hacer un discurso en contra; he oído el que ha pronunciado el señor ministro de Gracia y Justicia, y estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho acerca de las partidas que se incluyen en este artículo: solo voy á hacer unas observaciones que proponen al Congreso lo que dije á esta anterior; que en ese proyecto hay irregularidades en la manera como está redactado, que van á producir muchas dudas.

El proyecto viene á descomponer al antiguo presupuesto de obligaciones eclesiásticas que estaba reunido en el presupuesto general del Estado, sección de Gracia y Justicia, en cuatro grupos: el grupo del art. 3.º, formado con un cierto número de obligaciones eclesiásticas que van á gravar á una por-



## SESION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE.

El Sr. Salaverría pidió la palabra para consumir el segundo turno en contra del art. 2.º (1) del proyecto de ley; pero no habiendo hablado nadie en pro, el señor vicepresidente Mosquera se negaba á concedérsela, razon por la que el Sr. Abarzuza dijo algunas frases en pro del artículo, para que el Sr. Salaverría pudiera terciar en el debate.

El Sr. SALA VERRÍA: Hubiera sido extraño que, habiéndose hecho un discurso en contra de este artículo, con el silencio de la comision y de la mayoría concluyera el debate. De este modo no habria cosa más fácil que evitar la discusion de las leyes, pues con pronunciar la oposicion un discurso en contra y con no contestar nada los individuos de la comision, el debate habria terminado. Yo no voy á hacer un discurso en contra: he oido el que ha pronunciado el señor ministro de Gracia y Justicia, y estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho acerca de las partidas que se incluyen en este articulo: solo voy á hacer unas observaciones que probarán al Congreso lo que dije el dia anterior; que en ese proyecto hay irregularidades en la manera como está redactado, que van á producir muchas dudas.

El proyecto viene á descomponer el antiguo presupuesto de obligaciones eclesiásticas, que estaba refundido en el presupuesto general del Estado, seccion de Gracia y Justicia, en cuatro grupos: el grupo del art. 2.º, formado con un cierto número de obligaciones eclesiásticas que van á gravar á una par-

---

(1) Véase la pág. 52.

te de los fondos de Cruzada, otras obligaciones que van al presupuesto provincial, otras al municipal, y, por último, un grupo de obligaciones en el artículo adicional, que vienen á formar parte del presupuesto general del Estado.

Pues bien; no se concibe que existan en una nación fondos, manejo de fondos que no estén encerrados, ó en el presupuesto del Estado, ó en el presupuesto provincial, ó en el presupuesto municipal, siempre que intervenga la administración en la dirección de esos fondos; y yo pregunto al señor ministro y á la comisión: estas 332.322 pesetas que han de salir de los fondos de Cruzada, ¿en qué presupuestos van á figurar? No será en los presupuestos provinciales, porque no lo determina el proyecto de ley; ni en los municipales, ni en el del Estado, porque tampoco lo dice. El manejo de estos fondos, la ordenación de estos pagos, la liquidación de estos derechos, ¿quién las va á hacer?

Lo que yo pido al Gobierno y á la comisión es que refiera á algun presupuesto estos servicios, ó que desaparezca este artículo 2.º y vengán á comprenderse en el artículo adicional, como las demás obligaciones del Estado, las que en dicho artículo se consignan, atrayendo al Tesoro público, como medio de pago, la participación que se da en la Cruzada; porque de otra suerte vamos á tener lo que en el lenguaje de la Hacienda se llama una contabilidad oculta: no se va á saber quién va á manejar estos fondos, no se va á saber quién va á ser el cajero que recaude estos fondos; no va á ser el cajero provincial, ni el cajero municipal, ni el del Tesoro público, porque la obligación no está referida á ningún presupuesto. ¿Quién, pues, los va á recaudar?

Por consiguiente, no es que yo combata las partidas que se consignan en el art. 2.º, porque yo creo que existe la obligación del Estado á satisfacerlas, sino que deseo que tengamos orden y que sepamos en dónde figura esta partida. Desde luego anuncio al Gobierno y á la Cámara que existe una contradicción tan evidente entre este artículo y el que dice que los productos de Cruzada se dejarán á los ayuntamientos, como que no se concibe que haya espacio en España donde haya ingresos de Cruzada, que no sean de los ayuntamientos, porque estas corporaciones existen en todas partes. Por consiguiente, según el artículo del proyecto de ley que deja á los ayuntamientos el producto de Cruzada, ellos van á recaudarlo y ellos lo van á aplicar. Mas ¿cómo van á venir los ayuntamientos á entregar estas 332.322 pesetas para que podamos pagar al Nuncio, para que podamos pagar al Tribunal de la Rota y para





que podamos cubrir todas las demas obligaciones consignadas en el art. 2.º

Ademas, por las enmiendas que admite la comision, y esto prueba que hay aquí un espíritu contradictorio que no obedece á sistema alguno, nos encontramos con que la comision declara que la colegiata de San Isidro de Madrid debe ser sostenida con los fondos municipales. ¿Cómo es esto? Para tener colegiatas subvencionadas con los fondos municipales, los ayuntamientos de España no necesitan que les demos permiso: desde el momento en que los ayuntamientos estan en posesion de su derecho de autonomia, tienen la facultad de incluir en su presupuesto las cantidades que tengan por conveniente, para sostener las colegiatas y los institutos que tengan á bien. Por consiguiente, tambien puedo decir: ¿quién va á recaudar, quién va á recibir el dinero del ayuntamiento de Madrid para sostener la colegiata de San Isidro?

Esto, señores, es una cuestion de órden. No sé si he acertado á explicar mi idea para que la comprenda la Cámara. Yo creo que la comision puede referir esta obligacion al artículo adicional en que se dice, que son obligaciones del presupuesto general del Estado, un número de ellas hasta cerca de tres millones de pesetas; puede incluir, digo, en este grupo esta obligacion de 332.322 pesetas, y que luego el Estado vea de qué manera percibe de los ayuntamientos la participacion que tenga en la bula de Cruzada, y del ayuntamiento de Madrid la cantidad necesaria para el mantenimiento de la colegiata de San Isidro.

Ademas, por la circunstancia de ser yo individuo de la comision de presupuestos, sé que en los presupuestos generales del Estado, venía incluida en su totalidad la partida del producto de Cruzada, sin tener en cuenta, al presentarse el último presupuesto, que el producto de la Cruzada por este proyecto de ley, habia de ayudar á los presupuestos municipales para cubrir los servicios de la Iglesia; y hemos tenido que quitar del presupuesto general del Estado, en la subcomision de presupuestos, esta partida. Pues si han de pagarse estas cantidades con parte del producto de la Cruzada, nosotros tenemos que reponer en el presupuesto general del Estado esas 332.322 pesetas, porque yo supongo que han de figurar en el presupuesto general del Estado. De aquí el pedir yo estas explicaciones al señor ministro, que no tienen por objeto impugnar el pensamiento del Gobierno.

El ministro de Gracia y Justicia, al contestar al señor

Salaverría, dijo que los fondos de Cruzada y del indulto cuadragésimal no habían figurado nunca en ningún presupuesto, dando con esto lugar á la siguiente rectificación:

El Sr. SALAVERRÍA: Es más bien para aclarar, porque no hay que rectificar. Estamos de acuerdo, completamente conformes el señor ministro de Gracia y Justicia y yo; solo que el señor ministro supone una cosa que yo creo que no es muy exacta. El indulto cuadragésimal ha sido un fondo de que han dispuesto libremente los obispos, desde que se hizo el Concordato, en cuya virtud se les entregaron libremente esos productos; pero todo lo referente al fondo de Cruzada, ha figurado en el presupuesto, como que en el presupuesto de ingresos está el producto bruto total de Cruzada: recorra S. S. todos los presupuestos de España, desde el año 38 ó 40, en que hay más regularidad, y desde el coste de impresion de las bulas, los gastos de administracion, el premio de los administradores y toda la administracion posterior que ese fondo hubiera de tener, segun la obligacion á que se consagrara, lo verá en los presupuestos y en las cuentas generales del Estado; y para convencer á S. S. de la razon con que presento esta observacion, le diré, que precisamente estos conceptos que el señor ministro quiere colocar, segun el proyecto, fuera del presupuesto del Estado, fuera del presupuesto municipal y fuera del presupuesto provincial, estaban en el presupuesto presentado en 11 de Mayo por el Sr. Camacho, en correspondencia con los anteriores presupuestos; por consiguiente, yo, al decir esto, no impugno el artículo.

El señor ministro dice que estos fondos los recibirá el ministerio de Gracia y Justicia, y los aplicará. Yo no tengo duda de la aplicacion; pero ¿es que el ministerio de Gracia y Justicia, sin la relacion con el presupuesto del Estado y sin la obligacion de la rendicion de cuentas ante el Tribunal de este nombre, está autorizado para manejar fondos públicos ni para aplicarlos? Esta es la observacion que tenía que hacer; y de aquí el que yo crea que, sin alterar el pensamiento del señor ministro, se deben traer al capítulo de las obligaciones generales del Estado, estos conceptos comprendidos en el art. 2.º, y deberá incluirse en el presupuesto de ingresos esta misma cantidad, como participacion del Estado en los productos de Cruzada, con los cuales se va á cubrir; ésta es meramente una cuestion de orden.



Lo que yo no quiero es que haya manejo de fondos en ningún ministerio mas que en las tesorerías, con arreglo á la ley de contabilidad y al juicio final del Tribunal de Cuentas, como sucede con las diputaciones y ayuntamientos con arreglo á la misma ley, porque yo quiero que se concluya con lo que se llama ramos especiales en todos los ministerios, para evitar complicaciones como las que todos los días resultan. Repito que no impugno el artículo, y que es meramente una cuestion de orden, porque yo no sé qué pagador ó tesorero puede haber en el ministerio de Gracia y Justicia para manejar fondos cuando lo prohíbe la ley de contabilidad.

Rectificó el Sr. Montero Rios, manifestando que, cuando habia indicado que los productos de Cruzada no figuraban en los presupuestos, habia querido expresar que solo aparecian en ellos los productos líquidos, deducidas ya las pensiones y gravámenes que se pagaban de estos fondos.

Hablando despues de quién administrará estos fondos, dijo que no será el ministro de Gracia y Justicia y sí el ordenador general de pagos de este ministerio, y añadió que el fundamento de este método estriba en el principio de descentralizar de tal manera las obligaciones eclesiásticas, que todos los recursos permanentes con que la nacion haya de contribuir al mantenimiento del culto y clero, dejen de figurar en el presupuesto general del Estado, y sea satisfecho por cuenta de los presupuestos provinciales y municipales.

El Sr. Salaverría rectificó de nuevo.

El Sr. SALAVERRÍA: Cuando la Cruzada se manejaba por una administracion especial, sin estar centralizada como todos los ramos del Estado en un centro comun, los productos de Cruzada tenian gravámenes determinados: habia una porcion de pensiones por servicios en el ramo, por consignaciones establecidas sobre esos fondos, etc.; pero desde el año 40 ó antes, todas esas pensiones que gravaban esos fondos entraron en la legislacion general: las pensiones sufrieron las clasificaciones correspondientes, y vinieron á figurar en clases pasivas las que tenian el carácter de tales derechos pasivos, con arreglo á la legislacion vigente. Pero desde que el fondo de Cruzada

está incluido en el presupuesto, las obligaciones á que con su producto se ha de atender están en el presupuesto tambien. Ahora separa el señor ministro un grupo de esas obligaciones que van á satisfacerse y ordenarse por el ministerio de Gracia y Justicia, y digo yo: como el ministerio de Gracia y Justicia ha de estar sujeto, en cuanto al manejo de fondos, á las mismas condiciones que todos los departamentos ministeriales, ¿no se podria hacer lo que con otros ingresos que el Tesoro tiene, para atender á ciertos servicios que comparte con las provincias ó los pueblos? En el ministerio de Fomento, por ejemplo, hay una porcion de servicios á que el Estado atiende en participacion con las provincias y los pueblos, y no dejan por eso de figurar en el presupuesto del Estado y de estar sujetos á las reglas generales de contabilidad, los fondos á esos servicios afectos. Yo no concibo que haya una renta del Estado manejada por el ministerio de Gracia y Justicia, por medio de su ordenador de pagos, y un cajero cuya personalidad yo no me explico bien dentro de las leyes de contabilidad. Pero el señor ministro dice que mi idea rompe por completo el sistema que se ha propuesto seguir en la ley: yo no tengo más que decir: mi observacion está hecha; la Cámara resolverá.



## SESION DEL DIA 2 DE DICIEMBRE.

Al discutirse el art. 3.º(1) del proyecto de ley, y teniendo pedida la palabra en contra los Sres. Salaverría y Jove y Hévía para consumir los turnos segundo y tercero, dijo

El Sr. VICEPRESIDENTE (Mosquera): El Sr. Salaverría tiene la palabra en contra.

No estando en el salon el Sr. Salaverría, dijo

El Sr. VICEPRESIDENTE (Mosquera): El Sr. Jove y Hevia tiene la palabra en contra.

El Sr. JOVE Y HÉVIA: Creo que el Sr. Salaverría vendrá de un momento á otro. Si el señor presidente tiene la bondad de aguardar unos momentos para ver si viene...

El Sr. VICEPRESIDENTE (Mosquera): No perderá su derecho el Sr. Salaverría si viene á tiempo; mientras tanto, puede usar de la palabra S. S.

El Sr. JOVE Y HÉVIA: Yo, señores diputados, no me propongo, ni mucho ménos, hacer un discurso en esta ocasion, porque presentada ya por nosotros la protesta acerca del contenido de toda la ley, á causa de que no ha sido hecha de acuerdo con ambas potestades, solo cuestiones de detalles pueden hacerme llamar por un momento la atencion de la Cámara; y voy á combatir este artículo, no por lo que contiene, puesto que es una distribucion de los fondos votados en artículos an-

---

(1) Véase la pág. 53.

teriores, sino que voy á combatirlo precisamente por lo que omite; porque ni en este artículo ni en ninguna otra de las disposiciones de esta ley, he encontrado nada que se consigne para la conservacion y reparacion de los templos.

En todos los presupuestos anteriores á la revolucion se consignaba una cantidad, que no bajaba de cuatro millones, con destino á la reparacion y conservacion de los templos; y esta cantidad era tan exigua que se la estaban siempre disputando las provincias, porque no bastaba á llenar las necesidades de todas. Muy pequeña parte de esta cantidad ha tocado á la provincia á que pertenezco; pero al ménos teníamos el consuelo de saber que nuestros vecinos y hermanos los leoneses estaban con ella reparando, el grandioso monumento que adorna su ciudad, su magnífica catedral.

¿Con qué vais hoy, señores, á conservar y reparar, no solo las grandes glorias de arte que nos legó el pasado, sino tambien las pequeñas iglesias de las aldeas, donde el pobre recibe el único alimento de su alma, y en sus pórticos la única instruccion que le es dado alcanzar, que le eleva muchas veces á los más altos grados de todas las carreras y que en algunos casos le ha traído hasta á estos mismos bancos? Ya supongo lo que me vais á decir: me direis sin duda que todos los templos, todas las iglesias quedan entregadas á la piedad de los fieles, y que no es verdad, como nos decia el sábado un orador tan florido como requiere su título, acerca de que el fervor de los fieles católicos no llegaba hasta su bolsillo. Yo confieso que este orador estaba tan equivocado en esto como cuando dudaba por primera vez, del espíritu de religiosidad de una dinastía que ha dejado por donde quiera que ha pasado pruebas evidentes de su generosidad, en la dotacion de templos y en el socorro y en la proteccion del desvalido. La generosidad y el ardor de los católicos españoles está consignada en nuestros días, en esa magnífica catedral de Cádiz, que últimamente se ha levantado, en el templo del barrio de Salamanca, en la reparacion del de Santo Tomás, en las larguezas con que siempre ha socorrido al necesitado y en aquellas con que se acude á cada instante para el Padre comun de los fieles. La generosidad de los católicos españoles, los esfuerzos que hacen para sostener sus ideas y para levantar muy alto el estandarte de la fé, no necesitan demostracion aquí: está mucho más alta que sus bolsillos; son muchos los que en España han llegado hasta privarse del alimento más necesario, para contribuir al socorro de los templos; muchos los obreros que en ellos trabajaron gráti-



« Pero es menester tener presente, que el Estado arrebató á la Iglesia aquellos mismos predios que servian para estas reparaciones, y que lo mismo las grandes catedrales que la última aldeas tenian tierras y otras fincas, que les habian sido donadas para la conservacion y reparacion; fincas que el Estado les ha arrebatado, teniendo por lo mismo el deber de hacer por su cuenta las reparaciones y obras de conservacion. »

« Yo creo, señores, que lo mismo por parte del señor ministro que por parte de la comision, no habrá sido esto más que un olvido: espero que lo habrán de reparar; no creo que dejen abandonados los templos y las pequeñas iglesias de nuestros campos; no puedo creerlo, porque vuelvo á decir que es una obligacion contraida por el Estado al apropiarse los bienes que las iglesias tenian destinados para este objeto. »

« Yo ruego á los señores de la comision que me contesten así: casi estoy esperando que así habrán de contestarme, y lo mismo diria del señor ministro si estuviese presente; porque, si no, ¿qué se diria de vosotros? Se diria que, sin ser Sansones, queriais derribar las columnas del templo, y que necesariamente, ó habíais de ser aplastados por sus ruinas, ó no faltaria alguna Dalila que aniquilase vuestras fuerzas, y esa Dalila seria la opinion pública de este católico pueblo. »

El Sr. Gonzalez Gutierrez manifestó, en nombre de la comision, « que ésta se hallaba dispuesta á examinar benévola y á admitir una enmienda que el Sr. Jove ú otro señor diputado, quiera presentar á la deliberacion de la Cámara, siempre que considere que los pueblos de cada diócesi son, segun el espíritu de la ley, los que deben contribuir á sufragar este gasto; y si entiende ademas que hay monumentos sagrados que lo son tambien de arte, puede ser este asunto encomendado al ministerio de Fomento. Bajo este criterio, cualquiera enmienda que venga formulada como he dicho hallará buena acogida en la comision. Tengo, por lo tanto, sumo placer en mostrarme tan deferente, de acuerdo con mis compañeros de comision, á las palabras del Sr. Jove y Hévía. »

El Sr. VICEPRESIDENTE (Mosquera): El Sr. Jove y Hévía tiene la palabra para rectificar.

El Sr. JOVE Y HÉVIA: Más que para rectificar, para felici-

tarme de las palabras que han salido del banco de la comision, y para decir que, aunque creo que esta obligacion corresponde al presupuesto general del Estado, es tanto mi deseo de que las iglesias tengan dotacion para que se conserven y reparen, que me he de poner de acuerdo con la comision á fin de presentar una enmienda que pueda ser aceptada, como espero que lo será, por los generosos y católicos sentimientos de todos los individuos de la comision, y particularmente del Sr. Gonzalez Gutierrez, que ha tenido la bondad de contestarme.

El Sr. Salaverría consumió en esta forma el tercer turno:

El Sr. VICEPRESIDENTE (Mosquera): El Sr. Salaverría habia pedido la palabra; si S. S. piensa ser extenso, suspenderé la discusion.

El Sr. SALAVERRÍA: Voy á ser sumamente breve.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Mosquera): En ese caso, tiene S. S. la palabra.

El Sr. SALAVERRÍA: El Sr. Jove y Hévia se ha anticipado á lo que principalmente me proponia yo manifestar á la Cámara y rogar tambien á la comision; solo que advierto que la comision admite ó indica la posibilidad de admitir una enmienda para atender á la reparacion extraordinaria de templos, y yo queria llamar la atencion de la comision sobre la insuficiencia, en mi concepto, á que queda reducido el material de las catedrales, porque en ese presupuesto hay una baja muy considerable en lo que era la dotacion ordinaria de las catedrales.

Yo creo, señores, que con dos millones de reales, que me parece es la cifra del material de un número de templos tan inmenso, es insuficiente de toda insuficiencia; y que cuando en el presupuesto general del Estado hay una dotacion de cuatro millones de reales para la conservacion de los Palacios reales, que solo son tres ó cuatro edificios, me parece que 56 catedrales y un número de colegiats que tienen tambien otras condiciones de necesidad para ser atendidas cual corresponde, con dos millones de reales, repito, es de toda evidencia que no hay medio suficiente para atender á todos esos objetos, y yo quisiera ver si el señor ministro encontraba medio de dejar en el material del clero catedral, la partida que anteriormente existia, ya que en el personal se reduce á ménos de la mitad. Se trata de una cantidad relativamente insignificante: el Congreso y el Gobierno comprenden que con 30.000 pesetas que se



destinan al culto y al material de la conservacion de esos edificios, es de toda imposibilidad que se atienda á esa necesidad; por lo tanto, entiendo que se deben consignar las 985.000 pesetas que existian antes en el presupuesto para esa atencion.

Contestando al Sr. Salaverría, dijo el ministro de Gracia y Justicia que la conservacion y reparacion de templos no estaba incluida en el artículo que se discutia, pues los que sean artísticos quedarán á cargo del ministerio de Fomento, y los que no, al de los pueblos donde radiquen.

El Sr. SALAVERRÍA: Acogiendo la indicacion que ha hecho el señor ministro, espero que en un artículo adicional habrá ocasion de consignar este principio y de representarlo con alguna cifra, porque creo que la cifra, para lo que es el gasto de conservacion (y no trato ahora de las reparaciones extraordinarias de los templos, porque esto entra en el capítulo de imprevistos), creo que la cifra, que es para los gastos de conservacion permanente de templos, la podríamos fijar de la misma manera que se fija en el presupuesto la partida de conservacion de los Palacios reales. De esa manera creo que podremos venir á un acuerdo.

Rectificando dijo el ministro que los gastos ordinarios de conservacion, figuraban ó debian figurar entre los del culto, y que él se referia á los extraordinarios de reparacion.

El Sr. SALAVERRÍA: Con esta explicacion que acaba de dar el señor ministro habrá observado la Cámara, que ya en los gastos del culto están comprendidas las obras de conservacion de los edificios. Bien; pues yo digo al señor ministro que con 500.000 pesetas no pueden hacerse el culto y las obras de conservacion necesarias en los edificios, y que, por lo menos, que en este presupuesto coloque la partida de un millon de pesetas que próximamente tenian los presupuestos anteriores. ¿Qué influencia puede tener en este presupuesto una partida de un millon de pesetas, repartido entre las 49 provincias, ese aumento que yo propongo de dos millones para conservacion de los edificios? Creo que no habia de constituir una gran violencia, ni en el Gobierno ni en la comision, el que en un proyecto de esta naturaleza se fijase esa cantidad, como se fija en el presupuesto cuando se trata de la conservacion de los Palacios reales.

### SESION DEL DIA 3 DE DICIEMBRE.

Puesto á discusion el art. 10 (1) del proyecto de ley, se dió lectura á la siguiente enmienda del conde de Toreno:

«Los diputados que suscriben tienen la honra de proponer la siguiente enmienda al proyecto de ley fijando el presupuesto de obligaciones eclesiásticas y las relaciones económicas entre el clero y el Estado:

«Pedimos al Congreso se sirva declarar, que el final del artículo 10, donde dice «por los medios que se establezcan en los reglamentos», se sustituya con el siguiente párrafo: «Aplicando al efecto los medios establecidos para el cobro de las contribuciones.»

Palacio del Congreso 2 de Diciembre de 1872.—El conde de Toreno.—P. de Jove y Hévia.—Alejandro Pidal y Mon.—S. Álvarez Bugallal.—Pedro Salaverría.—Agustin Estéban Collantes.—Domingo Carames.»

El Sr. VICEPRESIDENTE (Mosquera): El señor conde de Toreno tiene la palabra para apoyar su enmienda.

El Sr. Conde de TORENO: Señores diputados, confieso que nunca me he levantado en este sitio con ménos ánimo para terciar en el debate: desde luego reconozco que lo mucho que este proyecto se ha discutido ya, hace difícil el decir nada nuevo, ni nada que pueda llamar la atencion de la Cámara.

Pero hay más: ha ocurrido esta tarde algo que verdaderamente, si no fuese porque yo entiendo que la mayoría del Congreso, no piensa como el señor diputado que ha dicho lo que

(1) Véase la pág. 55.



voy á repetir, obligaria á los individuos que disentimos, en cuanto á este proyecto se refiere, á enmudecer mientras estuviera sometido, la discusion de la Cámara. El Sr. Gil Sanz, contestando á una indicacion del Sr. Navarrete, decia á su vez que se parecian los individuos de la Cámara que tomaban parte en esta discusion, para oponerse al proyecto, á aquellos pobres desgraciados que, por ganarse el sustento, iban á los teatros á hacer el oficio de *claque*. Yo no sabia esto que ha dicho el Sr. Gil Sanz: ignoraba que la *claque* se dedicara á ir á silbar las obras; generalmente estos individuos son pagados para ir á aplaudirlas; y si yo me condujera y discutiera con la mayoría con la poca consideracion, con que el Sr. Gil Sanz lo hace con la minoría, yo diria que la *claque* quien la ejerce es la mayoría. Pero yo no lo digo; no tengo costumbre de ser descortes con nadie, y ménos en este sitio, que me infunde grandísimos respetos, y cuyos individuos me merecen grandísima consideracion. (Bien, bien, en los bancos de la izquierda.)

El Sr. VICEPRESIDENTE (Mosquera): Señor diputado, la comparacion del Sr. Gil Sanz no tiene la intencion que su señoría supone: era contestando á otra; porque, si no, la presidencia no lo hubiera tolerado.

El Sr. Conde de TORENO: Deferente siempre con la presidencia, y más cuando la ocupa S. S., á quien estimo particularmente, termino este punto y me conformo con la indicacion de S. S. Confieso que estaba ofendido, y que le dado rienda suelta á la molestia que me habian causado las palabras del Sr. Gil Sanz; me alegro de haberme equivocado, no por lo que á mí pueda tocarme, sino por lo que toca al Parlamento español.

No es esto solo, señores diputados, lo que me coloca en una situacion difícil al venir á terciar en este debate: soy poco aficionado á levantarme en este sitio; reconozco las escasísimas condiciones que para ello tengo, y por esto acostumbro á molestar á la Cámara las ménos veces, el menor tiempo que me es posible. Así es que cuando ayer presenté mi enmienda á la Mesa, y despues de recibir un recado de atencion de la comision con el objeto de ver si podiamos entendernos, y que mis deseos pudieran satisfacerse hasta donde fuera posible, yo me llené de alegría: me evitaba el molestar á la Cámara, y obtenia á la vez que este proyecto, que al fin y al cabo se ha de aprobar, se mejorase un tanto.

Sabe bien el respetable individuo de la comision que la preside, que yo hice todo lo que creí posible, dentro de mis

principios, para venir á una avenencia y evitar el molestar á los señores diputados con la discusion de esta enmienda, supuesto que la comision, con algunas pequeñas variantes, estaba dispuesta á admitirla.

Pero despues han cambiado las circunstancias, y segun he entendido, más que por lo que la cosa es en sí, por una cuestion más bien de amor propio, de celos de la mayoría respecto de esta minoría y de sospechas de que, cuando los moderados, los alfonsinos, se interesan tanto en este proyecto ó procuran que se introduzcan estas enmiendas, dentro de ellas hay un mundo, hay cosas tan grandes, tan oscuras y tan incomprensibles para los señores diputados, que temen verse sorprendidos con la menor indicacion, con la menor palabra. Así lo indicaba ayer el Sr. Vazquez Gomez. Segun he oido, decia que, mientras no se admite ninguna enmienda de los radicales, las enmiendas de los moderados parecia que tenian el privilegio exclusivo de que fueran admitidas por la comision. Y ahora, en cambio, la enmienda más insignificante, que más bien tiende á aclarar el proyecto que á otra cosa, es desechada por la comision, haciendo, á mi juicio, hasta cierto punto un desaire á su respetable presidente.

Antes de tratar el asunto, supuesto que al ocuparme de él pudiera alguien figurarse que trataba de mejorar el proyecto, porque en algun modo le admitia y solo deseaba procurar que se mejorase un tanto, debo declarar que no lo acepto, que me parece deplorable en todos sentidos; deplorable para el clero, deplorable para la religion, deplorable para el pais, deplorable para los partidos todos, y más que para ninguno para el partido radical, que lo patrocina. Pero ya, señores, que tengo la triste conviccion de que este proyecto va á ser aprobado, y que sobre el pais y sobre el clero va á pesar, yo deseo en bien de todos, en bien hasta del mismo partido radical, que se mejore todo lo que sea posible; porque yo en estas cuestiones, y los señores diputados que han sido compañeros míos en las últimas Córtes no lo ignoran, no quiero para nada introducir el espíritu de partido, y si algunos creen que yo trato de despertar celos y rivalidades de partido á partido en cuanto á mi mayor ó menor anhelo para mejorar la situacion del clero, debo decir que yo lo único que deseo es que esa clase respetable se vea atendida y colocada en la situacion que de todo derecho le corresponde.

Ademas, siendo así que una enmienda presentada por algunos señores diputados de la mayoría, referente á establecer un



tipo máximo en cuanto á lo que los pueblos, ó mejor dicho los individuos que componen los pueblos, habian de pagar en concepto del culto y clero, ha sido aceptada, y que esta base para cuyo logro, por deseo tambien de algunos individuos de la mayoría, procuré yo en union suya dar algunos pasos cerca del ministro de Gracia y Justicia, si bien no coloca en una situacion ventajosa ni al clero, ni á los pueblos, ni á nadie, mejora algun tanto la situacion de todos ellos; una vez aceptada, es cuando creo yo que se está en el caso de colocar en el proyecto las disposiciones necesarias, para que no sea irrisoria la suposicion de que los ayuntamientos, los pueblos ó los individuos habrán de pagar en concepto de contribucion de culto y clero las cantidades que les corresponden, y de ahí mi enmienda.

Se ha dicho, señores, en el preámbulo, y tambien aquí, que el punto de partida de todo el proyecto de ley era uno de los casos establecidos en uno de los artículos del Concordato.

En mi entender, ya que se ha escogido ese caso de ese artículo, de que el clero nunca quiso aprovecharse, digo: ya que lo habeis aceptado, ya que lo tomais como punto de partida, ¿por qué no aceptais la totalidad? ¿Por qué no lo estableceis todo él? ¿Por qué no admitís la parte que pueda haber de bueno para el clero, y tan solo sí lo que puede ser odioso para el clero? Y esto es lisa y llanamente á lo que mi enmienda se reduce: mi enmienda se reduce á decir que lo que han de pagar los pueblos y los ayuntamientos por razon de culto y clero sea exigible por los medios, únicamente por los mismos medios por los que el Gobierno puede hacer efectivo el cobro de sus contribuciones. Entiendo yo que estos medios, supuesto que son los que el Estado tiene establecidos para hacer efectivas sus contribuciones, han de ser al mismo tiempo los más equitativos y ménos molestos á los pueblos en lo posible, y los más eficaces y seguros para no hacer ilusorio el pago de esta atencion tan sagrada y respetable, para todos los que como yo opinan, y hasta para el mismo Sr. Montero Rios, é indudablemente para la mayoría de esta Cámara.

Este caso cuarto del artículo á que me refiero del Concordato no era mas que un medio supletorio, medio que nunca aceptó el clero, deseoso de no ser molesto á los pueblos, y hoy se le va á colocar frente á frente de los pueblos; y yo tengo la seguridad, que parece no debiera tener cuando propongo lo que indico, de que el clero no va á cobrar; yo creo, por lo que me enseñan los ejemplos y por lo que entiendo que es el clero español, que

antes que producir un conflicto con cualquiera de sus convecinos, ni dar lugar á inconvenientes, de cualquiera clase que sean, el clero preferirá, como ha preferido ya, morirse de hambre antes de hacer algo, que pueda rebajar la autoridad de su ministerio; yo estoy seguro de que si hubiera aquí, como decia un ilustre orador, intencion de descatonizar España por este medio, se equivocaria el que esto deseara, y no creo yo que lo entienda ni lo desee el Sr. Montero Rios: están en un error los que eso creen; y si al clero le fuese necesario dar ejemplos de todo género, ejemplos de abnegacion, de sacrificio y de sufrimiento, y este proyecto quisiera ponerle en situacion de experimentar su celo y desprendimiento, lo que se conseguiria seria darle mayor importancia, porque estoy persuadidísimo, porque estoy seguro de que de ninguna manera, de ninguna suerte el clero habia de hacer nada en este terreno que pudiera colocarle enfrente de sus convecinos, de aquellos que todos los dias están necesitando de su amparo, de su proteccion, de sus consejos. Eso ha sucedido desde la revolucion acá, y esto sucederá en adelante, mientras no se le coloque en situacion de que dignamente pueda percibir lo que de derecho, y solo de derecho, le corresponde.

Pero, señores, en el artículo se dice que en los reglamentos se proveerá á todo esto. Yo no puedo ménos de reconocer que es competencia del Gobierno, que lo es del señor ministro de Gracia y Justicia el redactar y extender estos reglamentos; pero desde el momento en que para ellos se reserva un asunto tan importante, que á mi juicio debia estar consignado en la ley, creo yo que se concede, hasta cierto punto, una autorizacion al Gobierno; y á no ser porque las Córtes quieran concedérsela, no tendria derecho para hacer que en los reglamentos se tratara este asunto. Nosotros somos los que le vamos á hacer la gracia al señor ministro de Gracia y Justicia de que en los reglamentos establezca lo que en realidad, y para que la ley tuviera toda la fuerza y todos los detalles que debiera tener, necesitaba estar consignado en ella.

Yo no sé dónde he oido que el señor ministro de Gracia y Justicia, convencido de su actividad, de su celo y de su deseo de terminar este asunto, que al parecer le preocupa, y es natural, en gran manera, dice que no pasarán quince dias sin que los reglamentos estén terminados; es decir que á los quince dias de aprobada esta ley estará todo admirablemente organizado, y que no habrá nada que desear en esta parte, que es de la que me ocupo, y los párrocos no tendrán dificultad de



ningun género, para la cobranza de aquello que se les debe pagar.

Señores, yo siempre he sido enemigo de las autorizaciones, y aquí veo una autorizacion, siquiera sea en una esfera pequeña; he sido siempre enemigo de las autorizaciones, no solo con los gabinetes á quienes no he apoyado, sino aun con aquellos á cuyo lado he estado, y me he opuesto constantemente á las autorizaciones porque, sépanlo todos los individuos de la mayoría que son nuevos en esta casa, generalmente las autorizaciones no las suelen aprovechar aquellos á quienes se conceden. Yo recuerdo, señores, una autorizacion, célebre hasta cierto punto, en que alguna parte tuve que tomar, porque era individuo de la comision: yo me negaba y me negué hasta el fin á la autorizacion; yo discutia con el señor presidente del Consejo de ministros sobre aquella autorizacion, y le decia: «No es posible concederle á V. la autorizacion que pide, no la va V. á disfrutar; será otro gabinete el que se aproveche de ella»; y aquel presidente del Consejo de ministros, vigoroso, lleno de vida, creyendo que no habia de faltar nunca de ese puesto, me decia: «Descuide V., que no sucederá; y si llegase á suceder, yo veria la forma de que la autorizacion no la aprovechara nadie». Y discutia yo con aquel presidente del Consejo sin ceder un punto: la Cámara concedió la autorizacion; á los pocos dias aquel presidente del Consejo murió, y la autorizacion quedó en pie, y los ministros que le sucedieron la hubieran aprovechado como hubieran tenido por conveniente, si no hubiera tenido lugar la revolucion del año 68.

Tengan, pues, entendido los individuos de la mayoría que ese gobierno es muy fácil que muera, no por muerte natural, como entonces ocurrió, sino por cualquiera de esos eventos que en politica pueden ocurrir; y es muy fácil que esa autorizacion para los reglamentos no la aproveche el gabinete que se sienta en ese banco, y venga acaso un gabinete conservador, y sirvan los reglamentos de arma de combate contra los radicales, estableciéndose en ellos lo bastante para desvirtuar en absoluto lo que en esta ley se previene.

Pero, señores, la concesion que anoche se hacia, que hoy ya no se acepta, es doblemente grave, porque hasta cierto punto implica el que en los reglamentos no se concederán tantas seguridades como en mi enmienda se piden; y de ahí el que estos reglamentos, desde mi punto de vista, sean doblemente sospechosos, porque creia yo que, reconociendo, como reconoce el señor ministro de Gracia y Justicia, que al clero no se le

paga un servicio, por más que diga y sostenga que hayan de pagarse los servicios con relacion á los que prestan, sin embargo, en su preámbulo reconoce el derecho que tiene el clero á una indemnizacion, y, por lo tanto, creia yo que la garantía que se pide en la enmienda, reducida á la aplicacion para el cobro de esta contribucion de los mismos medios que tiene el Gobierno para hacer efectivas las suyas, implicaba tambien que en último término, si aquellos medios de que dispone para la cobranza de las contribuciones, aplicados á la relativa al clero, no bastaran, el Gobierno, en último término, que reconoce la deuda que existe con el clero, en calidad de indemnizacion, habia de venir en ayuda del clero y no le habia de dejar perecer, adeudándole cantidades que él mismo reconoce deberle.

De ahí el que yo sienta que no se encuentre en su banco el señor ministro de Gracia y Justicia, porque podria decirnos algo que no sepamos, y que acaso sería satisfactorio para los que opinamos de cierta manera, y aun para los que opinan de otra.

Entiendo que, cuando se discuten proyectos de esta gravedad, conviene que, cualquiera que sea la intencion, el deseo y el propósito de los ministros, se sepa claramente por todos, así por los que le apoyan como por los que le combaten; porque los que le apoyan lo harán con más fé, y los que le combaten lo harán con más franqueza y más conocimiento de causa, sabiendo sus intenciones que no viéndose obligados, como yo me veo en este momento, á inducir cuál será el pensamiento del Gobierno para el caso en que no baste lo que propone esta ley para que se pague al clero. ¿Qué piensa hacer el Gobierno en ese caso extremo? ¿Va á pagar él lo que se debe al clero? Yo entiendo que debe hacerlo así; y no soy yo solo quien lo dice, lo dicen tambien muchos diputados de la mayoría que han apoyado otras enmiendas, y á quienes he oido en otro sitio, si no tan público como éste, público tambien, expresarse en el sentido de que conviene, por interes del pueblo, por interes del país, que el Estado siga pagando al clero, como ha venido, es decir, como debiera haber venido verificándolo hasta ahora.

Señores diputados, yo no estoy acostumbrado á abusar de la atencion de la Cámara, y mucho ménos lo haria hoy, cuando realmente comprendo que está fatigada despues de una tan extensa discusion sobre este asunto: voy, pues, á terminar; pero antes, veo al Sr. Canalejas que está hablando con el señor presidente, y como he dicho al principio de mi discurso que



acostumbro á ser siempre cortés, y muy particularmente en este sitio, ya que no tuve ocasion, porque no creí prudente interrumpir la solemnidad del debate sobre la totalidad de este proyecto, para hacerme cargo de una alusion que me dirigió el Sr. Canalejas, en estos momentos en que tercio en este mismo debate, podria el Sr. Canalejas estimar que era descortesía de mi parte el silencio, y voy á recoger la alusion, que contestaré en poquísimas palabras, con las que daré fin á mi pobre discurso.

El Sr. Canalejas vino al Congreso y pronunció un discurso sobre la contestacion del mensaje, discurso anunciado anteriormente, como no podia ménos de anunciarse un discurso del señor Canalejas, que vino á este sitio precedido de una gran fama, que realmente ha justificado despues, asombrándonos á todos con su elocuencia.

Se dijo que el Sr. Canalejas venia decidido á promover con este discurso un verdadero cisma en estos bancos; pero no ocurrió nada de esto, y el Sr. Canalejas se reservó para mejor ocasion, y esta ocasion llegó en la discusion de la totalidad de este proyecto, en la cual intentó S. S. un verdadero imposible, cual es, el de hacer ver que las ideas del Sr. Pidal están en desacuerdo con las del Sr. Estéban Collantes y las mías.

No, Sr. Canalejas: nosotros tenemos un punto de reunion que no sé si tiene S. S. con sus amigos; nosotros, aun cuando podamos dividirnos en cuestiones de apreciacion, en el momento en que se habla de cuestiones concretas en que haya hablado el Padre Santo, en el momento nos sometemos á su decision, siempre que se trate de cuestiones religiosas, de cuestiones puramente eclesiásticas. De aquí que estemos siempre que sea necesario perfectamente unidos; porque, poniéndonos de acuerdo en un punto tan esencial, es indudable que, cuando haya que resolver cualquier cuestion, como nosotros creamos que debe entender en ella la autoridad del Padre Santo, con una palabra suya estamos perfectamente de acuerdo. ¿Le sucede esto al Sr. Canalejas con sus amigos?

Precisamente le sucede lo contrario; entre S. S. y su partido no existe ese punto de confluencia; no hable, pues, el Sr. Canalejas de divisiones en estos bancos, en esta cuestion ni en ninguna otra, pero principalmente en ésta, porque se encontrará S. S. con que no hay semejante division; siempre que se trate de llevar á la práctica cualquier cuestion eclesiástica estaremos unidos el Sr. Pidal, el Sr. Estéban Collantes y yo, que, segun dice el Sr. Canalejas, soy partidario de la escuela

del conde de Montalembert y de monseñor Dupanloup. Ciertamente que yo profeso esas doctrinas, y no soy yo solo el que de entre nosotros las profesa; pero yo no las tengo por desaprobadas por la Iglesia, y yo quisiera que el Sr. Canalejas, con su gran erudición y con los grandes conocimientos que yo le reconozco en todas materias, y sobre todo en esta, me señalara el punto donde las doctrinas del conde de Montalembert y de monseñor Dupanloup han sido desaprobadas por el Papa; yo creía, por el contrario, que las doctrinas de Montalembert y los servicios que prestó á la Iglesia, habían sido repetidas veces reconocidos por Su Santidad en cartas, breves, y por todos los medios que posee y acostumbra á usar el Papa.

Pero hay más todavía, Sr. Canalejas: si S. S. me llegara á probar que algunas doctrinas del conde de Montalembert no habían sido aprobadas por Su Santidad, no las aceptaría como las acepto: yo soy partidario de esa escuela porque entiendo que está perfectamente asentada dentro del dogma católico, y que las doctrinas del conde de Montalembert no se diferencian de otras sino en cuanto á sus apreciaciones puramente políticas, pero que no se oponen en lo más mínimo ni amenguan para nada las atribuciones del Papa.

Creo haber cumplido con un deber, y ruego á la Cámara que me dispense por el rato que la he entretenido, y que si estima que hay en este artículo por lo menos oscuridad, ya que no acepte la enmienda de este alonsino porque es de un alonsino, no sea que tras de sus palabras haya alguna cosa tan tenebrosa, rara y peligrosa que pueda introducir grandes dificultades, pues al parecer éste era el temor que, según me han referido, predominaba ayer á las altas horas de la noche, vea de buscar una fórmula, aunque sea radical, por la que se aclare de alguna manera el proyecto en esta parte, y se determine la manera como el clero ha de cobrar.

La última parte del discurso del conde de Toreno dió lugar á que usase de la palabra, para alusiones personales, el Sr. Canalejas, que á su vez hizo hablara con el mismo objeto el Sr. Pidal, á consecuencia de haber dicho el diputado radical que el Conde había escrito en una revista político-religiosa que tenía un sentido muy liberal, tan liberal, que dudaba que el Sr. Pidal pudiera aceptar ni una sola idea de las que en aquella revista se sustentaron.



Contestando á esta alusion, dijo

El Sr. PIDAL Y MON: Señores diputados, el Sr. Canalejas, recordando sin duda aquella célebre máxima de aquel hábil político con quien tantos puntos de contacto tiene S. S., la máxima de Maquiavelo *Divide et imperabis*, ha tratado de introducir la division en las filas de esta pobre, y pequeña, y exigua minoría que defiende aquí la sagrada causa de la legitimidad y del derecho, con ánimo de ver si le sucede lo que al partido en que milita el Sr. Canalejas.

El Sr. Canalejas es muy hábil; pero la realidad de nuestra union es tan incontrastable, es tan fuerte, nuestra posicion es tan inexpugnable, que sus argumentos se estrellan contra nuestra fortaleza, y las flechas que nos arroja, rotas contra la dureza de roca de nuestra posicion, sus puntas, caen al suelo, quedando al pie de ella como trofeo y testimonio de su inquebrantable dureza.

Dice S. S. que la mayoría de esta Cámara se agrupa en torno de la bandera de la libertad, de la lógica y del derecho.

Señor Canalejas, ¿es posible que diga S. S. eso?

¿Es posible que diga S. S. que está unido con la mayoría de esta Cámara con el vínculo de la libertad, de la lógica y del derecho?

Acepta S. S., y diga terminantemente sí ó nó, la libertad y el derecho en el mismo concepto jurídico, político y filosófico que le acepta la escuela individualista que forma la mayoría de esta Cámara?

¿Es para S. S. la libertad la facultad de obrar ó de no obrar, ó la determinacion del sér á realizar su esencia en la vida?

¿Es para S. S. el derecho aquella ley en virtud de la cual, se desarrollan todas las facultades que pueden definirse, la coexistencia de todas las libertades, ó es aquella otra ley condicional que envuelve, que comprende, que abarca á todos, absolutamente á todos los séres, animales, vegetales y minerales, á todos los séres, en fin, contenidos en el Sér Supremo, absoluto é infinito?

¡Bajo la bandera de la lógica! Pero ¿de qué lógica, Sr. Canalejas? ¿De una lógica puramente formal que no marca mas que las leyes propias del conocer, ó de una lógica esencial y fundamental que marca y determina las leyes propias del ser al mismo tiempo que las del conocer?

Es necesario, señores, penetrar en la esencia de las cosas para ver lo que en el fondo significan esas palabras: ¡Derecho! ¡li-

bertad! ¡lógica! ¿Qué quieren decir estas palabras? ¿Las entenderá lo mismo el partido radical, que en su mayoría es individualista, que S. S., que pertenece á una escuela esencialmente socialista?

Me pregunta S. S. si estoy conforme con el contenido de una Revista publicada por el marques de Pidal y por el conde de Toreno. Si alguna cosa hay allí con la que yo no estoy, no puedo estar nunca conforme, es con los artículos que escribió en ella S. S. Y claro es que en una Revista en que podía escribir S. S. y el marques de Pidal y el conde de Toreno, claro es que ha de haber muchas cosas que yo no puedo aceptar. En lo que escribieron el marques de Pidal y el conde de Toreno podrá haber algo accidental con que yo no esté conforme; pero en lo fundamental, ¿cómo he de rechazarlo como esencialmente malo si se publicaba previa censura eclesiástica? Y estando de acuerdo en lo esencial, en el dogma, claro es que todos estamos unidos, porque todos profesamos el lema del ilustre obispo de Hippona: *In necessariis, unitas; in dubiis, libertas; in omnibus, charitas.*

No tengo más que decir.

Rectificó el Sr. Canalejas, echando en cara al Sr. Pidal el defecto de llevar á los debates del Parlamento discusiones filosóficas, y suponiendo un gran cambio en las ideas políticas del diputado alfonsino, de quien dijo que antes era acérrimo adversario de las doctrinas liberales.

El Sr. Pidal rectificó á su vez en estos términos:

EL SR. PIDAL Y MON: Señores, yo no he traído la libertad ni la lógica en su concepto filosófico á este debate; el que la ha traído ha sido el Sr. Canalejas, que ha dicho que ese era el pabellon bajo el cual se acogían los ejércitos radicales. Yo he querido demostrar que, si á ese pabellon se pueden acoger el Sr. Canalejas y esta mayoría, ha de ser un pabellon necesariamente ecléctico, un pabellon profundamente doctrinario y sincretista.

Respecto á que si yo pensaba como los señores marques de Pidal y conde de Toreno en la cuestion de las relaciones de la Iglesia y del Estado, he de decir á S. S. que, tanto el marques de Pidal como el conde de Toreno, con un conocimiento mucho más profundo que el mio, de S. S. y de las personas que con S. S. militan, me dijeron muchas veces: «¿Crees tú que los



revolucionarios, si triunfan, reconocerán nunca la libertad de la Iglesia? ¿Crees tú que van á dejar á la Iglesia libre dentro del Estado libre?» Y yo, cándido como soy, les contestaba: «¿Y por qué no, si tales son sus principios?» Y remontándome á la altísima esfera de los principios filosóficos, yo combatía el sistema liberal desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista trascendental, desde el punto de vista metafísico. Y me decían: «Pierdes el tiempo. El día en que ellos triunfen no reconocerán esos principios, y se aprovecharán de lo que tú has proclamado para negarte hasta el derecho comun; derecho que no te concederán nunca». Y en efecto, señores, vino la revolución de Setiembre, y en vez de la Iglesia libre en el Estado libre, en vez de la libertad de enseñanza, en vez de la libertad de asociación y de todas las demás libertades, cometió la serie más inicua de tiranías que cometerse pueden, que es las que se cometen con la máscara y al grito de la libertad.

Entonces fué cuando yo no pude ménos de exclamar: «¡Qué infame turba de sofistas habeis traído aquí!» y abominé de los políticos, y volví la vista á los filósofos, hambriento de verdad y consecuencia, cuando ví al Sr. Canalejas abandonar el tripode del filósofo, descender de la cátedra y del Ateneo, para venir á formar parte de la mayoría radical. He visto más todavía, Sr. Canalejas: he visto á S. S. desechar la fórmula liberal «la Iglesia libre en el Estado libre» para sentar el principio cesarista de las iglesias nacionales, convirtiéndose así en Papa reformador de la Iglesia católica.

Explicó el Sr. Pasaron y Lastra, que en nombre de la comision fué el encargado de contestar al conde de Toreno, lo que habia ocurrido en cuanto á la aceptacion de la enmienda, y despues entró en consideraciones acerca de la índole de ésta, que, á su juicio, ataba de pies y manos al Gobierno.

Expresó su sorpresa por lo combatido que era el proyecto por todos los lados de la Cámara, y sobre todo se admiró de los consejos que, en bien del partido radical y del Gobierno, habia dado el Conde, en su discurso, á la mayoría.

El conde de Toreno rectificó al Sr. Pasaron y al Sr. Gil Sanz, que habia explicado satisfactoriamente las palabras de que el diputado alfonsino se habia hecho cargo al principiar su discurso.

El Sr. Conde de TORENO: He llegado un poco tarde, y eso ha hecho que no haya oido el principio del discurso del señor Pasaron; mas me han indicado lo que S. S. ha tenido á bien decir: se ha referido á lo que, con respecto á mi enmienda, ha ocurrido en la comision; y, aunque no sé precisamente lo que S. S. ha dicho, estoy seguro de que es la verdad, porque no puedo dudar ni un momento de que S. S. haya dicho en lo más mínimo nada, que no sea perfectamente exacto, así como su señoría no puede negar que lo que he dicho esta tarde lo es tambien; quizás añadiría S. S. algun detalle que á mí se me hubiese olvidado, y, por tanto, no tengo por qué ocuparme más de esto. Voy, pues, á rectificar brevemente, como acostumbro á hacerlo siempre, porque creo que las rectificaciones largas son pesadas y muy molestas para la Cámara.

Decía el Sr. Pasaron que yo queria atar de pies y manos á los ayuntamientos porque les queria colocar en la situacion de los ayuntamientos desfalcadores; que yo no habia visto las disposiciones que sobre este punto existen, y por esto decia su señoría que yo mantenía la enmienda. Está en un error el señor Pasaron; yo he visto con algun detenimiento las disposiciones que hay sobre este punto, y yo no creo que con mi enmienda se ate de pies y manos á los ayuntamientos; decia lo contrario. (*El Sr. Pasaron: Al Gobierno.*) Dice S. S. que es al Gobierno á quien se referia al manifestar la idea de atar de pies y manos. Yo diré á S. S. que, si bien es cierto que yo estoy en la oposicion, en una de las oposiciones radicales á este gobierno, sin embargo de esto, la conducta de esta minoría, constantemente, en todas las discusiones, en todas las cuestiones que más ó ménos pueden afectar al Gobierno y dificultar su marcha en momentos dados, ha sido tal que jamas ha procurado atar de pies y manos ni á este gobierno, ni á ningun otro, y apelo sobre esto á la buena fé del Sr. Pasaron, que ha sido constantemente compañero mio en esta Cámara desde que yo formé parte de estas últimas Cámaras de la revolucion; siempre, constantemente habrá visto que acaso esta minoría ha sido la que con más lealtad ha facilitado el camino á todos los gobiernos de la revolucion, y acaso más que el mismo partido de S. S.; cuando



S. S. y sus amigos se sentaban en estos bancos, recuerde su señoría que entonces, en las cuestiones de gobierno, nosotros apoyábamos al ministerio con nuestra conducta siempre parlamentaria, aun cuando siempre votáramos enfrente, mientras SS. SS. le combatían acaso por otros medios. Y lo mismo ha ocurrido este mismo año; se han salido en una ocasión de la Cámara las oposiciones de distintos matices políticos, para que una ley no llegara á aprobarse, y nosotros hemos permanecido aquí, facilitando el que llegara á ser ley; ¿y lo hacíamos por facilitar su aprobación? No, pero nuestro mayor interés siempre es mantener los principios y nuestra línea de conducta en cierto orden de ideas y de procedimientos, para que no se nos pueda echar en cara algún día, si acaso (no sé si podrá ocurrir, pero yo lo espero) se cambiaran los papeles y nos encontráramos en el lado derecho de la Cámara.

Decía S. S. que es muy extraño que yo haya venido aquí á dar consejos á los radicales; que yo les decía que no aprobaran este proyecto, que les iba á ser perjudicial (yo me refería entonces al artículo), y que les aconsejaba que siguieran otro camino. Y dice S. S. que esto es muy extraño, porque parecía natural que nosotros deseáramos la desaparición de ese gabinete; y á eso tengo que rectificar, diciendo á S. S. que esa creencia de que el proyecto va á ser perjudicial al partido radical, no es mía. Pues qué, ¿no se ha repetido esto aquí por distintos diputados del partido á que S. S. pertenece, y que no quiero nombrar ahora para que no se den por aludidos y se alargue con este motivo todavía más la discusión de este artículo? Pues qué, ¿su señoría mismo no confesaba hace poco que había ocurrido esto mismo? Por otra parte, ¿cree S. S. que tenemos interés en que desaparezca el Gabinete? En manera alguna.

Pues qué, ¿nosotros en alguna forma hemos de poder ir á ocupar ese banco? Hemos de ir á ocupar el banco de S. S. y sus amigos? Pues si no tenemos ese interés, si nuestro interés es muy distinto, ¿cómo quiere S. S. que nosotros no nos alegremos de todo corazón de que ese gabinete permanezca en ese sitio por mucho tiempo, todo el tiempo que la situación revolucionaria con todas sus consecuencias pueda mantenerse en pie? Ese es nuestro deseo; y si para eso tuviéramos que hacer algún sacrificio, lo haríamos: está convencido de ello, no solo el señor Pasaron, sino también el Gobierno, que creo que no lo puede poner en duda ni un momento.

Yo no quiero apremiar á los ayuntamientos; yo no quiero colocarlos en una situación difícil. ¿Como he de querer yo eso,

representante de un distrito en el que estoy tan interesado como el que más? ¿Cómo he de querer yo eso, si sus ayuntamientos son los que en peor condicion se han de ver colocados, y su situacion ha de ser muy difícil? Lo que yo quiero es que se ponga en claró la imposibilidad de que se cumpla lo que se dispone en ese artículo: por una parte, porque no se hará, si no se emplean medios enérgicos, efectiva la contribucion de culto y clero, y por otra, si se establecieran éstos, se verian los ayuntamientos verdaderamente agobiados y cogidos entre la espada y la pared; para poder salir adelante; y de ahí el que yo deseara que se dieran algunas explicaciones sobre si, en caso de no pagar los ayuntamientos porque el estado de sus fondos no lo permitiera, el Gobierno estaba dispuesto á cumplir esas atenciones, que á él en primer término le corresponden.

Me parece que he rectificado los puntos más importantes á que se ha referido el Sr. Pasaron en su discurso, y, cumpliendo mi propósito de ser breve, voy á terminar.

No veo al Sr. Gil Sanz en su puesto; pero aun cuando no esté, cúmpleme decir que sus explicaciones referentes al incidente promovido por su discurso de esta tarde, me han satisfecho perfectamente. Comprendo que acaso haya habido por mi parte una mala inteligencia, ó bien que S. S., molestado por las palabras del Sr. Navarrete, dijera algo que no estuviera en su ánimo.

Después de las rectificaciones brillantísimas de mi amigo el Sr. Pidal, ¿qué he de decir yo al Sr. Canalejas? Me parece que no queda nada por decir; no deseo tampoco suscitar de nuevo una cuestion entre S. S. y yo, porque todos los puntos han sido contestados brillantemente por el Sr. Pidal. Si yo entrara en cierto orden de consideraciones, temeria tambien volver á suscitar un debate sobre esta cuestion incidental, y no lo deseo; por consiguiente, quedo satisfecho con lo que ha dicho el señor Pidal esta tarde, porque realmente entre S. S. y yo existe perfecta unidad de miras, y doy por mias todas las palabras que ha pronunciado mi querido amigo el Sr. Pidal. He dicho.

La enmienda fué desechada.



Se leyó el art. 11 (1) del proyecto de ley, y á continuación la siguiente enmienda del Sr. Jove y Hévia:

«Los diputados que suscriben, si bien siguen creyendo que corresponde al Estado la satisfaccion de todas las obligaciones eclesiásticas, tales como resultan del Concordato de 1851 y Convenio de 1859:

Considerando que están aprobados ya los principales artículos del proyecto de ley de obligaciones eclesiásticas y relaciones económicas entre el clero y el Estado, y con objeto de mejorarlo en lo posible, tienen la honra de proponer al Congreso la aprobacion de la siguiente adición al art. 11 del mencionado proyecto de ley:

«Las rentas de los beneficios y piezas eclesiásticas vacantes, mientras lo estén, se dedicarán á las atenciones del culto, entre las que tendrán preferencia la conservacion y reparaciones extraordinarias de los templos católicos. Si dichas rentas vacantes no bastasen para la mencionada conservacion y reparacion, los ayuntamientos de cada diócesi, quedan obligados á contribuir á prorata con las cantidades necesarias á este fin; todo sin perjuicio del auxilio que los referidos templos puedan recibir del Estado por su carácter monumental ó histórico.

Palacio del Congreso 2 de Diciembre de 1872.—Plácido de Jove y Hévia.—El conde de Pallares.—Domingo Carames.—El conde de Toreno.—German Gamazo.—Alejandro Pidal y Mon.—Agustin Estéban Collantes.»

El Sr. VICEPRESIDENTE (Mosquera): El Sr. Jove y Hévia tiene la palabra para apoyar su enmienda.

El Sr. JOVE Y HÉVIA: Señores diputados, la enmienda que con otros dignos compañeros he tenido la honra de firmar, no es mas que la consecuencia de la discusion que sostuve ayer tarde y el cumplimiento de la promesa que hice á la comision. Comprendiendo perfectamente la ley de las mayorías, y sabiendo que no se debe perder lo ménos por aspirar á lo más, he tratado de salvar algo en este naufragio en que, á mi modo de ver, iba á perecer la reparacion y la conservacion de los templos.

Todos sabéis que yo hubiera querido que este arreglo, como cualquiera otro relativo á la Iglesia, se hubiera hecho por me-

---

(1) Véase la pág. 55.

dio de la armonía entre los dos poderes, única manera que yo creo justa y que yo considero legal. Todos sabéis que hemos protestado contra esta irregularidad. Ayer me habeis oído que, en cumplimiento de las disposiciones del Concordato, ó mejor dicho, en cumplimiento del desarrollo de ese mismo Concordato, pedia yo que se conservasen los cuatro millones que en anteriores presupuestos se destinaban á la conservacion y reparacion de los templos. La comision se opuso á ello, pero no se negó absolutamente á sentar el principio de la obligacion de esta conservacion y reparacion.

Como para mí antes que todo es salvar los principios, deseaba que éstos se salvaran, si bien no se pudiesen salvar todos los templos, y al efecto he presentado un temperamento que salva ese principio y está dentro del criterio que la comision ha manifestado; por lo cual creo que sin mas amplias consideraciones, puesto que la Cámara sabe el contenido de la enmienda, toda vez que se ha dado lectura de ella, y la comision la conoce desde que ayer tuve la honra de leérsela, espero, digo, que será admitida, y habré conseguido, si no todo aquello que era mi íntimo deseo, al ménos lo que podia conseguir dada la posicion en que me encuentro en esta Cámara.

El principio de la obligacion de conservar los templos queda consignado. Las piezas y beneficios vacantes producirán poco durante algunos años, porque se disminuyen plazas; pero queda el recurso subsidiario de los pueblos, y lo que el presupuesto general concede á ciertos templos como obras monumentales ó de recuerdos históricos.

El Sr. Pasaron y Lastra manifestó, en nombre de la comision, que ésta habia examinado detenidamente la enmienda de que acababa de darse lectura, para traerla á discusion, y no encontraba inconveniente alguno en admitirla.

Leida de nuevo la enmienda, y habiéndose preguntado si se tomaba en consideracion, se acordó afirmativamente.

El artículo, discutido despues en union de la enmienda, quedó aprobado.



Se leyó otra enmienda del Sr. Salaverría al art. 11 (1), que decía así:

«Pedimos al Congreso se sirva admitir al art. 11, como punto de un párrafo segundo, la adición siguiente:

«Los ayuntamientos quedan obligados á sostener, además de los gastos del culto, los de conservación de los templos parroquiales. Asimismo satisfarán los gastos que ocasionen las reparaciones extraordinarias de aquellos.»

Palacio del Congreso 2 de Diciembre de 1872.—Pedro Salaverría.—Alejandro Pidal y Mon.—Antonio Ramos Calderon.—Miguel Corona.—Domingo Carames.—El conde de Toreno.—Claudio Alba.»

El debate á que dió lugar esta enmienda fué como sigue:

El Sr. VICEPRESIDENTE (Mosquera): El Sr. Salaverría tiene la palabra para apoyar su enmienda.

El Sr. SALAVERRÍA: Señor presidente, yo he presentado á este artículo dos enmiendas: una que se refiere á la conservación de los templos, de las iglesias catedrales, y otra, que es de la que se ha dado lectura por el señor secretario, relativa á la conservación de los templos parroquiales; y yo quiero que me diga la Mesa qué se ha hecho de la primera enmienda que he presentado, que se refiere á la conservación de los templos catedrales.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Mosquera): Hay una enmienda más del Sr. Salaverría, que dice así:

«Además de las cantidades que por el art. 3.º se señalan para el culto de las iglesias metropolitanas y sufraganeas, las provincias contribuirán con lo que sea necesario anualmente para la conservación de los templos catedrales, contribuyendo las provincias en la proporción y formas que prefija el artículo. 7.º»

El Sr. SALAVERRÍA: Es otra enmienda.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Mosquera): No, señor; es la misma.

El Sr. SALAVERRÍA: Está bien; yo había reclamado la prioridad para esa segunda enmienda, porque las he presentado

---

(1) Véase la pág. 55.

en el orden mismo en que se halla redactado el proyecto de ley, porque en éste se habla primero de las atenciones diocesanas, y esa enmienda de que no se ha dado lectura por el señor secretario, y que acaba de leer el señor presidente, tiene prioridad en el orden de la discusion.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Mosquera): Es igual, Sr. Salaverría; las dos se refieren al mismo artículo. Se ha dado ya lectura de una de ellas, y S. S. puede apoyarla, sin perjuicio de que despues lo haga de la otra.

El Sr. SALAVERRÍA: Pues yo quisiera principiar por la primera.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Mosquera): Pues ya no puede ser, porque es el orden fijado por la Mesa, y se alteraría el orden de la discusion.

El Sr. SALAVERRÍA: Pues bien, señores; la enmienda del Sr. Jove y Hévia, que ha sido aceptada por la comision, y con la cual yo estoy conforme, encierra un principio que, tratando de dotar la conservacion de los templos catedrales, viene á ser completamente ineficaz en una porcion de tiempo; porque saben los señores diputados, y sabe la comision, que se señala una dotacion incompleta para todo el personal del alto clero con las asignaciones que vienen comprendiéndose en ese proyecto de ley, y que habrá, por tanto, de completarse esa dotacion con los haberes que se recauden por vacantes hasta tanto que el personal quede dentro de las asignaciones que se establecen por el proyecto.

Por consiguiente, si los templos catedrales van á esperar para su reparacion á que haya fondos de vacantes, como el producto de éstas ha de acumularse para completar las asignaciones del alto clero, creo que el pensamiento de la enmienda del Sr. Jove y Hévia queda hasta cierto punto ineficaz.

Este proyecto de ley dice que se irán acumulando á los cargos eclesiásticos que han de subsistir, los haberes que por razon de vacantes vayan sobrando, porque es necesario tener presente que el presupuesto que el señor ministro de Gracia y Justicia ha presentado á las Córtes, reduce en una mitad las asignaciones del clero catedral; pero esta cantidad alzada que se da al clero catedral, se reparte entre el personal existente hoy, y á medida que vaya desapareciendo ese clero y á medida que llegue á hacerse la supresion de las diócesis, vendrá á obtenerse la dotacion definitiva del clero catedral que haya de subsistir, dadas las condiciones de esta ley.

Pues si el personal entra á percibir las vacantes, claro es



que en el clero catedral no puede haber fondos para la reparacion de los templos; y de aquí el haber yo presentado una enmienda que diga que, además de las atenciones del culto, que el señor ministro de Gracia y Justicia, en una primera contestacion que me dió ayer, consideraba que eran diferentes de la reparacion de los templos, y que despues en otra contestacion lo aclaró, que además de las atenciones del culto será deber de las diputaciones provinciales atender á la reparacion ordinaria de los templos catedrales, sin tener en cuenta el fondo de las vacantes; porque si se atiende á esto, como está antes el personal, no habrá fondos para la reparacion de los templos, y por eso he presentado la otra enmienda.

En cuanto á la de que se ha dado lectura, y en cuya discusion se quiere que entre primero, tiene por objeto simplemente el que las obras ordinarias y extraordinarias que requieran los templos parroquiales las costeen los ayuntamientos. En el proyecto de ley solo se habla de las atenciones del culto, y conviene consignar esto con la claridad correspondiente, porque ayer á primera hora, cuando se discutió este asunto, se ha creido que era una cosa diferente el culto de los gastos de conservacion de los edificios, y despues se dijo que era una misma cosa; de consiguiente, ahora que estamos á tiempo, conviene dejarlo con la claridad debida.

Yo no sé si los señores de la comision y el Gobierno han examinado las enmiendas que he tenido la honra de presentar á este artículo; yo no sé si los señores de la comision las aceptan ó no; yo desde luego, aunque se haya aceptado la enmienda del Sr. Jove y Hévía, declaro que, si ha de esperarse á que los templos catedrales se hayan de sostener de los fondos de vacantes, como no pueden existir esos fondos, insisto en la enmienda que he tenido el honor de presentar, y en reclamar y en suplicar á la comision y al Gobierno que, si está en su ánimo que los templos de catedrales tengan los gastos de reparacion necesarios, en el caso de aceptar la enmienda, ya que no la redaccion del artículo, deseo que este punto quede aclarado por lo ménos en la discusion, á fin de que se entienda que las provincias atenderán á la conservacion ordinaria de los templos, porque hay otra enmienda además de la que se ha leído...

El Sr. VICEPRESIDENTE (Mosquera): Señor diputado, los templos catedrales han de ser objeto de la otra enmienda que ha de discutirse despues.

Ahora discuta S. S. y discuta la comision, porque es lo que

va á votarse, lo relativo á los templos parroquiales; porque de lo contrario sería alterar el orden de la discusion.

El Sr. SALAVERRÍA: Bueno, pues yo espero que me diga la comision qué es lo que opina sobre la enmienda que he tenido el honor de apoyar.

El Sr. Pasaron y Lastra, en nombre de la comision, dijo que ésta no podia admitir la enmienda del Sr. Salaverría, y que lo único que habia podido hacer lo habia hecho adoptando la del Sr. Jove y Hévia.

El Sr. SALAVERRÍA: Yo no quiero cansar á la Cámara; pero se concibe perfectamente una cosa: el clero parroquial no puede tener vacantes, porque los servicios eclesiásticos tienen que ser constantes, y si no es un cura efectivo, habrá otro que le sustituya, y hay que darle una asignacion, y no puede quedar vacante en el fondo municipal, que tiene la obligacion de hacer los gastos ordinarios que se necesiten para la conservacion de los edificios, y aun los gastos extraordinarios. De consiguiente, yo no me doy por satisfecho, en medio de estar en el espíritu de mis ideas la enmienda del Sr. Jove y Hévia, porque, á título de economías del personal, no puede haber fondos para aquella atencion, porque el clero parroquial es necesario, y, ó hay que dar al cura efectivo ó al ecónomo su asignacion; en el clero catedral, como he dicho anteriormente, tampoco hay vacantes, porque hay que cubrir acumulando los sobrantes por muerte, al personal que sobrevive; y ésta es una observacion que hago á la comision y al Gobierno.

El Sr. PASARON Y LASTRA: Pido la palabra para rectificar.

El Sr. JOVE Y HÉVIA: Pido la palabra para una alusion personal.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Mosquera): No ha sido aludido su señoría, sino la enmienda que ha apoyado.

El Sr. JOVE Y HÉVIA: He sido aludido dos ó tres veces, y acusado hasta de ineficaz.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Mosquera): La enmienda está ya votada y los acuerdos de la Cámara no son motivo de discusion.

El Sr. JOVE Y HÉVIA: Yo me creo en el caso de dar una explicacion.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Mosquera): Bien, Sr. Jove y Hévia; despues que rectifique el Sr. Pasaron, veremos si se



está en el caso de que use S. S. de la palabra. Ahora la tiene el Sr. Pasaron.

Rectificó el Sr. Pasaron y Lastra, y después dijo

El Sr. JOVE Y HEVIA: Debo decir, para que siempre aparezcamos tan unidos como lo estamos, que hubiera aceptado con más gusto las enmiendas del Sr. Salaverría; pero he presentado la mía, porque había prometido á la comisión hacerlo dentro del criterio de las concesiones que ayer me había hecho; y, hombre práctico ante todo, deseo solo lo posible, porque sé que amenudo lo mejor es enemigo de lo bueno.

La enmienda fué desechada.

Se discutió después otra enmienda del Sr. Salaverría al mismo art. 11 (1), que decía así:

«Pedimos al Congreso se sirva admitir al art. 11 la siguiente adición:

«Además de las cantidades que por el art. 3.º se señalan para el culto de las iglesias metropolitanas y sufraganeas, las provincias contribuirán con lo que sea necesario anualmente para la conservación de los templos catedrales, contribuyendo las provincias en la proporción y formas que prefiere el art. 7.º»

Palacio del Congreso 2 de Diciembre de 1872.—Pedro Salaverría.—Alejandro Pidal y Mon.—Antonio Ramos Calderon.—Miguel Corona.—Domingo Carames.—El conde de Toreno.—Claudio Alba.»

El Sr. SALAVERRÍA: He dicho lo bastante. Dice la comisión que no admite esta enmienda. Pues yo siento mucho que la comisión y el Gobierno dejen para la dotación del culto de 56 catedrales y la conservación de esos templos dos millones de reales, cuando solamente para la conservación de tres ó cuatro palacios que tiene el monarca se señalan cuatro millones de reales. Y no digo más.

Se desechó la enmienda.

---

(1) Véase la pág. 55.

Se puso á discusión el art. 13 (1), y el Sr. Pidal lo combatió en estos términos:

El Sr. PIDAL Y MON: Señores diputados, permitidme como por vía de exordio, no al discurso, porque no pretendo hacerlo, sino á las breves palabras que he de tener el honor de dirigiros, que de las gracias al Sr. Carvajal por las frases benévolas, por los principios dignísimos que ha desenvuelto en la enmienda que acaba de retirar. Ye le digo al Sr. Carvajal: no vacile S. S. en la senda que ha emprendido; esté seguro que la Iglesia católica no ha condenado, no condenará nunca la libertad.

No, Sr. Carvajal: la Iglesia no condena la libertad; antes, por el contrario, elevándola á celestiales alturas, la pone en su mayor perfeccion en el mismo seno de Dios, el sér más perfecto á la par que el más libre del universo; y descendiendo desde allí á la criatura, la reconoce en el ángel y la proclama en el hombre, de cuyo libre albedrío hace depender el dominio del hombre sobre la tierra y los dogmas más augustos y sublimes de inmortal doctrina.

Lo que la Iglesia condena, lo que la Iglesia rechaza, lo que la Iglesia anatematiza es el liberalismo filosófico, que niega toda verdad objetiva ménos la matemática, y aquel liberalismo político que, al mismo tiempo que concede libertad á todos los errores, solo tiene opresion para la Iglesia; liberalismo personificado aqui por Romero Ortiz, y personificado tambien en este proyecto.

Lo mismo sucede con la democracia. La democracia de su señoría no es la que rechaza la Iglesia.

La democracia que la Iglesia condena es la falsa democracia; es la democracia que, no respirando mas que odio y encono contra la Iglesia, no sabe respetar el noble sentimiento de caridad que la anima en todos sus actos, y llega hasta el vergonzoso extremo de insultarle porque eleva al pobre á sus altares, calificando al pobre de holgazan, insultando su miseria, sin conocer que la pobreza, cuando va acompañada de la resignacion y de la caridad, es una de las flores más hermosas que esmaltan la guirnalda de la virtud que circunda las sienes de

---

(1) Véase la pág. 55.



la santidad realzada por la desgracia. Pero si, en lugar de la democracia autoritaria, quiere S. S. significar la democracia liberal, aquella democracia que tiene por base la dignidad humana, la igualdad de naturaleza y la libertad, ¡ah! esté seguro S. S. que esa democracia no la ha condenado nunca la Iglesia; ¡y cómo la había de condenar si nació en el seno de la Iglesia! de la Iglesia, que ha venido á redimir al hombre de la servidumbre pagana; de la Iglesia, que, enemiga de todas las tiranías, protegió siempre al débil contra el fuerte, extendiendo siempre sus manos bienhechoras entre el opresor y el oprimido; de la Iglesia, que la protegió contra el cesarismo y el feudalismo; de la Iglesia que, tomando sus ministros del pueblo, los sublimó hasta la cumbre del Pontificado; de la Iglesia, que convirtió la antigua esclavitud y la servidumbre de la Edad Media en la igualdad ante la ley y ante la naturaleza. Esa democracia es hija de la Iglesia, y de la union sincera con la Iglesia ha de formarse, sino ha de desaparecer la Europa en catáclismo horrendo, el troquel que modele el porvenir de las naciones del continente latino. (*El señor presidente agita la campanilla.*) Señor presidente, es un ligero exordio...

El Sr. PRESIDENTE: La campanilla es para que dejen á S. S. libre, para que no le interrumpieran.

El Sr. PIDAL Y MON: Es tan árido y tan triste el campo en que se mueve el debate, ofrece tan pocas flores á la imaginación, que, cuando luce el sol de la elocuencia alumbrando nuevos horizontes, el ánimo se ensancha, el espíritu se dilata y parece que quiere volar á regiones más puras, y salir de este campo estéril donde nos encontramos sumidos entre el polvo de las ruinas del vetusto regalismo.

Entrando en la cuestión he de decir que, entre las muchas cosas que me han llamado la atención en la discusión de este proyecto, una de ellas ha sido los nombres que aquí se han invocado. Entre ellos, el señor ministro citaba el del ilustre Tocqueville, y decía que había tomado sus ideas de este autor, habiendo sido un texto suyo el que, como el eslabon del pedernal, había hecho brotar la idea del proyecto del entendimiento del señor ministro.

Voy á leer el párrafo á que se refería, porque es muy breve. Dice Tocqueville:

«Lo que contribuía sobre todo á dar al clero antes del 89 las ideas, las necesidades, los sentimientos y hasta las pasiones del ciudadano era la propiedad territorial. Los pueblos que quitan al clero católico toda participación en la propiedad territorial

y trasforman sus rentas en salarios se privan de un grande elemento de libertad.»

Esto era lo dicho, señores, por Tocqueville, y en esto es en lo que se funda el señor ministro, para privar al clero de que posea propiedad territorial. La comision no quiere que el clero tenga propiedad territorial, pero no le prohíbe que adquiera, sino que le obliga á enajenar; y esto, señores, es un ataque de tal manera al derecho de propiedad, que no se ha atrevido á hacerlo hasta ahora nadie, porque aun los mismos regalistas del siglo pasado, el mismo Campomanes, nunca ha pretendido que se pudiesen enajenar los bienes del clero, sino que se pudiese limitar su adquisicion; de manera, señores, que, en la senda del regalismo, el señor ministro y la comision todavía van mucho más allá que Campomanes y Chumacero. Pero yo le pregunto á la comision: ¿tiene derecho á adquirir la Iglesia, sí ó no? Si no lo tiene, decidlo claramente; pero si se le concedeis, concedédselo con todas sus consecuencias: no la obligueis á enajenar, haciéndola que venga á convertir la propiedad en un papel que ha de estar sujeto á la opresion de un ministro, que Dios sabe si llegará un día en que pueda serlo un Romero Ortiz.

Pero ademas si, como decís, el catolicismo está muerto, ¿por qué teméis que adquiera? Si no está muerto, si creéis que vive con vida propia y benéfica, ¿por qué ese temor de que llegue á adquirir? ¿Tan risueña es la perspectiva que se os ofrece, tan poco cuidado os infunden esas masas socialistas, producto del industrialismo que sustituye el pauperismo moderno, que no os consuela, que no os alegra, que no os infunde una especie de esperanza para el porvenir, el que haya una institucion que pueda dar al pobre el pan espiritual al mismo tiempo que el material? ¿Tan fuertes os creéis, que solo por medios burocráticos creéis que vais á contener la invasion del socialismo, que avanza y que ha de concluir por tragarnos á todos? Menester es que os decidais; y aunque por cualquiera de los dos caminos que están á vuestro alcance os sale una de estas conclusiones al paso, teneis que tomar una de las dos: no podeis quedaros sentados en medio.

Y no quiero entrar en otro orden de consideraciones, que podrian calificarse como puramente eclesiásticas: ¿no saben los señores de la comision ¡pues no lo han de saber! que por el capítulo XXIV del Concilio de Trento están excomulgados los obispos que enajenan los bienes espiritualizados? Yo bien sé, señores, que éstos no son argumentos propios de este sitio; pero no me culpeis á mí, culpád á la comision, que me



obliga con sus disposiciones á emplearlos; culpád al proyecto.

De consiguiente, señores diputados, yo os lo ruego, no en nombre de la escuela neocatólica, que ni represento ni conozco, sino en nombre de la justicia y del derecho, por lo que tenéis de demócratas, no deis vuestra aprobacion á este artículo.

## SESION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE.

En este dia se aprobó definitivamente en votacion nominal el proyecto de ley, cuya discusion habia terminado en la sesion de la noche del dia 3, siendo 141 los diputados que votaron afirmativamente y 84 los que lo hicieron en contra, que fueron los siguientes:

Moreno Rodriguez.	Carvajal.
Morayta.	Pascual y Casas.
García (D. Bernardo).	García Ruiz (D. Gregorio).
Gutierrez Agüera.	Piñol.
Ulloa (D. Augusto).	Valdes (D. Daniel).
Cortijo.	Gamazo.
Pascual y Orriós.	Sanz y Posse.
Suñer y Capdevila.	Romero Ortiz.
Corominas.	Conde de la Almina.
Gonzalez Janer.	Chacon (D. Ricardo).
Tutau.	Marques de Campo Sagrado.
Calzada.	Pidal y Mon.
Yagüe.	Guitian.
Conde de Toreno.	Perez de Guzman.
Jove y Hévia.	Jimenez Mena.
Vazquez Gomez.	Robert.
Gil Berges.	Sorní.
Cabello.	Navarrete.
Cisa.	Hilario Sanchez.
Somolinos.	Lapizburú.
Nouvilas.	Martra.
Roldan.	Soler y Pla.



Fantoni.	Fernandez Cuervo.
Prefumo.	García Monfort.
Vazquez Lopez.	Zugasti.
Álvarez Bugallal.	Molini.
Salaverria.	Sampere.
Marques de Manzanedo.	Rusca.
Carames.	Baltá.
Estéban Collantes.	Figuerras.
Conde de Pallares.	Mola.
Isabal.	Escuder.
Quiroga Gomez.	Marques de la Florida.
Martinez Villergas.	Orense (D. Antonio).
Rais.	Castelar.
Salmeron (D. Nicolas).	Pla y Mas.
Gonzalez (D. José Fernando).	Blanc.
Aura Boronad.	Sanchez Yago (D. Domingo).
Palanca.	Moran (D. Miguel).
Bartolomé y Santamaría.	Muñoz Nougues.
Carrion.	Arroyo.
Sicilia.	García Martinez.

Carvajal.	Morano Rodriguez.
Pascual y Casas.	Morales.
García Ruiz (D. Gregorio).	García (D. Bernardo).
Piñol.	Gutierrez Agüero.
Valdes (D. Daniel).	Ulloa (D. Augusto).
Camazo.	Cortijo.
Sanz y Posse.	Pascual y Orjies.
Montero Ortiz.	Suñer y Capdevila.
Conde de la Almirante.	Corominas.
Chacon (D. Ricardo).	Gonzalez Janer.
Marques de Campo Sagrado.	Tutau.
Pidal y Men.	Calzada.
Gutierrez.	Yarrie.
Perez de Guzman.	Conde de Torano.
Jimenez Mena.	Lore y Hevia.
Robert.	Vazquez Gomez.
Sordi.	Gil Berges.
Navarrete.	Capello.
Hilario Sanchez.	Cian.
Lapizburu.	Somolinos.
Martín.	Nouyias.
Soler y Pla.	Bolten.

## PROYECTO DE LEY,

APROBADO DEFINITIVAMENTE POR EL CONGRESO, FIJANDO  
EL PRESUPUESTO DE OBLIGACIONES ECLESIASTICAS Y LAS  
RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE EL CLERO  
Y EL ESTADO.

## AL SENADO.

El Congreso de los diputados, tomando en consideración lo  
propuesto por el Gobierno de S. M., ha aprobado el siguiente

### PROYECTO DE LEY.

Artículo 1.º La nación contribuirá anualmente á la Iglesia,  
desde 1.º de Enero de 1873, con la cantidad de 31.291.958 pese-  
tas, para sus atenciones permanentes.

Esta cantidad se distribuirá en la forma que se expone en  
los artículos siguientes.

Art. 2.º Las partidas que á continuación se expresan cons-  
tituyen las obligaciones generales eclesiásticas, y se satisfarán  
por cuenta de las limosnas de Cruzada:

	Pesetas.
1.ª Para las fábricas de San Pedro y San Juan de Letran en Roma.....	93.922-50
2.ª Para el Nuncio de Su Santidad, siempre que resida en España desempeñando las funciones de su cargo.....	30.000
3.ª Para gastos del personal y material del Tri- bunal de la Rota.....	74.500
4.ª Para gastos del personal y culto de la cole- giata de Covadonga.....	37.200



	Pesetas.
5. <sup>a</sup> Para gastos del personal y culto de la capilla de los Reyes Católicos de Granada.	27.000
6. <sup>a</sup> Para gastos del personal y culto de la capilla Muzárabe de Toledo.....	30.000
7. <sup>a</sup> Para gastos del personal y culto de la capilla de San Fernando en la catedral de Sevilla.....	29.000
8. <sup>a</sup> Para gastos del personal y culto de la colegiata de San Isidro de Leon.....	37.167-50
9. <sup>a</sup> Para la ofrenda al apóstol en Santiago.....	5.000
10. Para gastos reproductivos del personal y material de la bula de Cruzada é indulto cuadragesimal.....	69.700
Total.....	433.490

Se sostendrá tambien la colegiata de San Isidro de Madrid, á condicion de que los gastos de personal y culto, importante 37.725 pesetas, se pagarán por su ayuntamiento.

Art. 3.º Para el pago de las partidas que á continuacion se enumeran, y que constituyen las obligaciones provinciales y municipales eclesiásticas, se emitirán láminas de la renta del 3 por 100 consolidado por un capital cuyo interes anual equivalga á la suma de ellas.

#### OBLIGACIONES PROVINCIALES.

	Pesetas.
1. <sup>a</sup> Para el metropolitano primado.....	30.000
2. <sup>a</sup> Para gastos de administracion y visita del metropolitano primado.....	5.000
3. <sup>a</sup> Para los demas arzobispos metropolitanos..	90.000
4. <sup>a</sup> Para gastos de administracion y visita de los metropolitanos á que se refiere la partida anterior.....	116.000
5. <sup>a</sup> Para el personal de todos los cabildos metropolitanos.....	263.000
6. <sup>a</sup> Para el clero catedral metropolitano benéfico.....	120.000
7. <sup>a</sup> Para el culto de todas las iglesias catedrales metropolitanas.....	87.500
8. <sup>a</sup> Para los obispos sufraganeos.....	412.500

Pesetas.

9.º Para el obispo auxiliar de Madrid.....	12.500
10. Para los gastos de administración y visita de los obispos sufraganeos.....	99.000
11. Para el personal de los cabildos catedrales sufraganeos.....	1.122.500
12. Para el clero catedral benefical de las iglesias sufraganeas.....	396.000
13. Para el culto en las iglesias catedrales su- fraganeas.....	412.500
14. Para la enseñanza del clero.....	210.240
<b>Total.....</b>	<b>3.276.740</b>

El Gobierno establecerá en el reglamento respectivo la proporción en que ha de ser distribuida á cada diócesi esta última partida.

## OBLIGACIONES MUNICIPALES.

Pesetas.

1.º Para el personal de párrocos.....	17.111.843
2.º Para el personal de coadjutores perpetuos parroquiales.....	2.428.350
3.º Para culto de las iglesias parroquiales.....	7.504.790
4.º Para 288 conventos de religiosas dedicadas á enseñanza y beneficencia.....	483.920
<b>Total.....</b>	<b>27.528.903</b>

Art. 4.º Se satisfarán por cuenta de la obra pía de los Santos Lugares de Jerusalem las dos partidas siguientes:

Pesetas.

1.º Para el noviciado de las hijas de la caridad de Madrid.....	18.850
2.º Para el culto del templo de las hijas de la caridad de Barbastro.....	250
<b>Total.....</b>	<b>19.100</b>

Art. 5.º Las láminas mencionadas en el art. 3.º de esta ley se expedirán á nombre de cada uno de los oficios y corporaciones eclesiásticas, á que se refieren las distintas partidas señaladas para las obligaciones provinciales y municipales. Cada



oficio ó corporacion recibirá tantas láminas cuantos sean los conceptos á que corresponda su dotacion.

Cada lámina representará un capital proporcionado á la parte de la suma señalada en la respectiva partida que corresponda al oficio ó corporacion á cuyo favor se expida, tomando como base para la distribucion que ha de hacerse, la cantidad que venia señalada á cada partícipe en los presupuestos hasta aquí vigentes.

Si los pueblos tuvieran que satisfacer para cubrir las obligaciones eclesiásticas, objeto de esta ley, cantidad que exceda del tipo máximo de 2 pesetas 50 céntimos por habitante, el Tesoro público les reintegrará la diferencia en la forma más conveniente, á juicio del Gobierno.

Art. 6.º Los intereses de las láminas expedidas se pagarán por trimestres vencidos á los poseedores de los oficios eclesiásticos y á las corporaciones á quienes corresponda ó á sus poderhabientes.

Art. 7.º Las diputaciones provinciales pagarán los intereses de las láminas correspondientes á las partidas que constituyen las obligaciones provinciales eclesiásticas. Para ello las distribuirán entre sí proporcionalmente á la parte que representan en cada diócesi, calculada por el número de habitantes.

Art. 8.º Los ayuntamientos satisfarán los intereses de las láminas que se expidan por las obligaciones municipales eclesiásticas correspondientes á sus respectivas demarcaciones.

Art. 9.º Los ayuntamientos percibirán el importe recaudado en sus demarcaciones por limosnas de Cruzada, con deducion de la cantidad necesaria para el pago de las atenciones que se fijan en el art. 2.º de esta ley.

Art. 10. El Gobierno compelerá á las diputaciones provinciales y ayuntamientos morosos, al pago de sus obligaciones eclesiásticas, por los medios que se establezcan en los reglamentos.

Art. 11. Las cantidades señaladas en el art. 3.º no sufrirán disminucion, aunque se reduzca el número de oficios ó corporaciones eclesiásticas actuales, ó el de individuos de éstas, habiendo de canjearse en tal caso las láminas que ahora se emitan, por otras que se expidan á favor de los oficios ó corporaciones que definitivamente hayan de existir.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior:

1.º Las cantidades señaladas á los conventos de religiosas que lleguen á extinguirse, cuyas láminas serán amortizadas en beneficio de los ayuntamientos respectivos.

2.° Las cantidades señaladas para el culto y clero de cada parroquia, si por resultado de la reforma de la actual division parroquial llegara á aumentarse la parte que por aquellos conceptos les corresponde ahora, hasta más del 50 por 100, en cuyo caso se suprimirá lo que exceda de dicho 50 por 100 á favor del ayuntamiento respectivo.

Las rentas de los beneficios y piezas eclesiásticas vacantes, mientras lo estén, se dedicarán á las atenciones del culto, entre las que tendrán preferencia la conservacion y reparaciones extraordinarias de los templos. Si dichas rentas vacantes no bastasen para la mencionada conservacion y reparacion, los ayuntamientos de cada diócesis quedan obligados á contribuir á prorata con las cantidades necesarias á este fin, todo sin perjuicio del auxilio que los referidos templos puedan recibir del Estado por su carácter monumental ó histórico.

Art. 12. Los canónigos y beneficiados de las iglesias catedrales nunca podrán percibir una cantidad superior á la que hasta ahora les estaba señalada, quedando, en el caso de reduccion del número anteriormente previsto, el resto de la dotacion que represente la lámina expedida á nombre de la corporacion respectiva, á disposicion del ordinario de la diócesis, para invertirle en las atenciones de la misma.

Art. 13. Las sillas episcopales, iglesias y cabildos catedrales y parroquias, así como las congregaciones y órdenes religiosas existentes en la actualidad ó que en lo sucesivo se fundaren con arreglo al art. 17 de la Constitucion, podrán adquirir libremente toda clase de bienes, pero con la obligacion de enajenar los inmuebles en el preciso término de tres años, y de convertir su importe en láminas intrasferibles de la renta del 3 por 100.

Se exceptúan de esta enajenacion los edificios y objetos destinados al culto; los cementerios, las casas de seminarios mientras estos subsistan, y las episcopales y parroquiales, á razon de una por cada uno de estos oficios, exceptuándose asimismo los edificios necesarios para el culto y habitacion de las congregaciones y órdenes religiosas.

Art. 14. Se procederá inmediatamente, por acuerdo de ambas potestades, á la formacion ó reforma de los aranceles de los derechos de estola y pie de altar, los cuales continuarán formando parte de la dotacion diocesana ó parroquial, segun los casos.

Los aranceles mencionados, despues de ser definitivamente aprobados, tendrán el carácter de civiles para los efectos de la exaccion y pago de los derechos que en ellos se fijen.



## ARTÍCULO TRANSITORIO.

Por el presupuesto general del Estado se satisfará anualmente la cantidad de 2.938.775-88 pesetas, la cual irá reduciéndose a medida que vayan disminuyendo las clases que á continuacion se expresan, y para cuya congrua sustentacion se destinan:

	Pesetas.
1. <sup>a</sup> Para jubilados del clero superior y parroquial.....	20.300
2. <sup>a</sup> Para personal de religiosas en clausura....	1.159.843-73
3. <sup>a</sup> Para material de idem.....	244.425
4. <sup>a</sup> Para capellanes excedentes en las catedrales.....	15.549
5. <sup>a</sup> Para el personal del clero colegial que se suprime.....	164.500
6. <sup>a</sup> Para el personal del suprimido por el Concordato.....	163.316-75
7. <sup>a</sup> Para vicarios, tenientes y beneficiados parroquiales.....	1.163.319
8. <sup>a</sup> Para obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.....	7.522-40
Total.....	2.938.775-88

## ARTÍCULOS ADICIONALES.

1.º Se derogan todas las leyes y disposiciones contrarias á lo que en ésta se establece, y señaladamente las que prohiban ó pongan obstáculos al establecimiento de congregaciones y órdenes religiosas en uso del derecho de asociacion.

2.º El Estado no reconoce en las referidas asociaciones más derechos ni concede á los actos de sus individuos más efectos, que los civiles que les correspondan segun las leyes comunes.

3.º El Gobierno dictará los reglamentos necesarios para llevar á efecto lo dispuesto en esta ley.

Y el Congreso de los diputados lo pasa al Senado, acompañando el expediente, para los efectos prescritos en la Constitución.

Palacio del Congreso 6 de Diciembre de 1872.—Nicolas María Rivero, presidente.

SENADO DEL 12 DE AGOSTO DE 1872.

Puesto á discusión el dictamen relativo al proyecto de ley sobre obligaciones de los señores, que se había sido modificado por la Comisión, así el Orador de la palabra en contra el Sr. Suarez Villa.

## SENADO.

El Sr. SUAREZ VILLA: Señores senadores, siento que me sea indispensable de mi amigo y compañero el Sr. Rodas me obligue á ser el primero á usar de la palabra en esta importante y delicada debate. Cosa yo que la discusión que con motivo del primer turno que había de desempeñar muy satisfactoriamente el Sr. Rodas, se agotaba y que alguna pregunta que por algun señor senador se hubiese dirigido al Gobierno, acerca de los gravísimos sucesos que ocurrieron en esta corte en la noche de ayer, habian de consumir el tiempo suficiente para que ya no hubiese la atención del Senado hasta el día de mañana; pero porque á saber en primer término, examinar el proyecto sometido al examen del Senado, teniendo en cuenta las circunstancias por que atraviesa hoy nuestra patria.

Durante mi larga vida parlamentaria, primero en la Cámara popular, donde he ejercido el cargo de diputado con que me honro en once elecciones generales en distrito natal, y después en este alto cuerpo, sometido á la respetada distinción que me dispensaron por dos veces los electores de Aragón, yo, señores señores, apen de haber estado á disposición de proyectos de ley graves, importantes, algunos de los cuales han revestido el carácter de constitucionales y otros el más modesto de reglamentarios y ordinarios, declaro que no he visto, que no recuerdo haber visto proyecto alguno de ley que hubiese



## ANEXO TRANSITORIO.

Por el presupuesto general del Estado se satisfará anualmente la cantidad de 2.338.775-50 pesetas, la cual irá reduciéndose a medida que vayan disminuyendo los cuotes que contribuyan al efecto, y para cuya congrua sustentación se designa:

	Pagos.
1.ª Para jefes de los cleros superior y parvo- quiai.....	20.300
2.ª Para personal de religiones en clausura.....	1.150.843-75
3.ª Para material de idem.....	244.426
4.ª Para capellanías existentes en las catedrales.....	15.549
5.ª Para el personal del clero secular que es supruido.....	161.500
6.ª Para el personal de la Secretaría del Con- sejo.....	163.310-75
7.ª Para vicarios, beneficiados y habilitados por requeridos.....	1.183.210
8.ª Para obligaciones de ejercicio cerradas que carecen de crédito legislativo.....	7.322-40
<b>Total.....</b>	<b>2.338.775-50</b>

## ANEXOS LEGISLATIVOS.

1.ª Se derogará toda ley y disposición contraria a lo que en esta se establece, y especialmente las que prohibían o ponían obstáculos al establecimiento de congregaciones y órdenes religiosos en uso del derecho de asociación.

2.ª El Estado no reconoce en las referidas asociaciones más derechos ni concede a los actos de sus individuos más efectos que los civiles que les correspondan según las leyes comunes.

3.ª El Gobierno dictará los reglamentos necesarios para llevar a efecto lo dispuesto en esta ley.

4.ª El Congreso de los diputados le pasa al Senado, acompaña-  
do al expediente, para los efectos previstos en la Constitución.

Palacio del Congreso 6 de Diciembre de 1873.—Nicolas María  
Rivero, presidente.

SESION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 1872.

Puesto á discusion el dictamen referente al proyecto de ley sobre obligaciones eclesiásticas, que no habia sido modificado por la comision, usó el primero de la palabra en contra el Sr. Suarez Inclan en los siguientes términos:

El Sr. SUAREZ INCLAN: Señores senadores, siento que una indisposicion de mi amigo y compañero el Sr. Ródenas me obligue á ser el primero á usar de la palabra en este tan importante y solemne debate. Creia yo que la discusion que con motivo del primer turno, que habia de desempeñar muy satisfactoriamente el Sr. Ródenas, se suscitase, y quizas alguna pregunta que por algun señor senador se hubiese dirigido al Gobierno, acerca de los gravísimos sucesos que ocurrieron en esta corte en la noche de anteayer, habian de consumir el tiempo suficiente para que yo no molestase la atencion del Senado hasta el dia de mañana; pero precisado á hablar en primer término, examinaré el proyecto sometido al exámen del Senado, teniendo en cuenta las circunstancias por que atraviesa hoy nuestra patria.

Durante mi larga vida parlamentaria, primero en la Cámara popular, donde he ejercido el cargo de diputado con que me honró en once elecciones generales mi distrito natal, y despues en este alto cuerpo, merced á la señalada distincion que me dispensaron por dos veces los electores de Astúrias, yo, señores señadores, apesar de haber asistido á discusiones de proyectos de ley graves, importantes, algunos de los cuales han revestido el carácter de constituyentes y otros el más modesto de reglamentarios y ordinarios, declaro que no he visto, que no recuerdo haber visto proyecto alguno de ley que hubiese



nacido en hora más triste y menguada que el que en estos momentos ocupa vuestra atencion, vuestra deliberacion, y sobre el cual ha de recaer más tarde el voto de este alto cuerpo.

Tan pronto como apareció este proyecto de ley en la *Gaceta*, ya hace algun tiempo, si no recuerdo mal, en el primer período parlamentario en que ocupaba dignamente el señor ministro de Gracia y Justicia el mismo puesto que hoy le está confiado, una explosion del sentimiento público, en general, hubo de manifestarse en contra de esta laboriosa lucubracion del señor Montero Rios. No ha habido partido alguno político, no ha habido clase social alguna que no haya significado su disgusto, su desagrado, su reprobacion contra el proyecto que se llama de dotacion del clero ó de arreglo de las relaciones económicas entre el clero y el Estado, y que yo llamaré, en mi sentir con más verdad, ley de PROSCRIPCION CONTRA EL CLERO, *de hambre, de abyeccion y de miseria* para tan digna y respetable clase.

El clero español, á quien principalmente afecta, acudió por el autorizado conducto del episcopado, unánime, respetuosa y reverentemente á las Córtes del reino, pidiéndoles que desechen este proyecto de ley, que viola en su esencia las leyes canónicas, las leyes civiles positivas; que infringe el Concordato de 1851 y el convenio adicional de 1859 en todas sus principales partes; que, entrando en terreno vedado y en mies ajena, invadiendo facultades que no competen en manera alguna al poder civil, establece una nueva organizacion eclesiástica, disminuyendo el número de diócesis y de dignidades, alterando graves puntos de disciplina canónica que afectan á la existencia íntima, á la economía y régimen interior de la Iglesia: el proyecto del Sr. Montero Rios es nada ménos que una nueva constitucion civil del clero, la cual viene á recordarnos las lágrimas y sangre que otra análoga, de igual índole, hizo derramar en la república vecina, en el pueblo frances, á fines del pasado siglo, y que hubiera ocasionado seguramente mayores calamidades y conflictos si el primer capitán del siglo, despreciando los consejos de los que le excitaban á proclamarse jefe de la Iglesia galicana, no se hubiera apresurado, siendo primer cónsul, á cicatrizar las heridas que la revolucion habia causado á la Francia católica, celebrando en 1801 un Concordato, que hoy rige todavía en la vecina república, concertando, arreglando las diferencias con Roma. Aquel guerrero que habia derribado y creado tronos comprendia que era el único medio de llevar la paz á las conciencias de las familias católicas.

Ese Concordato es respetado, y se cumple rigurosamente por todos los partidos que dividen la nacion francesa.

Combate, señores senadores, el proyecto del señor ministro de Gracia y Justicia el partido conservador de todos matices y procedencias: el partido conservador, que formó un día el antiguo partido moderado; el partido conservador, que hoy se llama constitucional; el partido conservador, que recuerda con gloria el nombre de la union liberal, al cual me vanaglorio de pertenecer; combate este proyecto el partido conservador en todas sus agrupaciones, porque viola y quebranta el dogma político en virtud del cual todos los conservadores creemos que ningun acuerdo puede tomarse en estas delicadísimas materias sino de conformidad, inteligencia y en armonía con la Sede Pontificia.

Combate el proyecto el partido carlista, el partido absolutista, enérgica y calorosamente; ¡pues no le ha de combatir! ¿Cuál es la causa principal, señores senadores, que mantiene la guerra en muchas de las provincias de España? Pues no es otra, y yo respecto de este punto llamo muy principalmente la atencion del Senado, que las novedades peligrosas, que las reformas trascendentales introducidas en estas difíciles, arduas, espinosas materias despues de la revolucion de 1868.

Combate el proyecto el partido democrático, el partido republicano, porque ostenta noble y francamente la bandera en que se escribe la separacion de la Iglesia y del Estado, y el proyecto del Sr. Montero Rios dista inmensamente de estos principios y de estas ideas.

Combaten el proyecto los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, amenazados de una nueva carga en sus presupuestos, que es imposible, yo lo declaro sin temor á que se me desmienta, que es imposible logren atender y levantar.

No puede satisfacer el proyecto á la parte de la mayoría del Senado y del Congreso que proceden del partido democrático, porque ese partido ha escrito, con avasalladora y absorbente iniciativa, sus doctrinas en la ley fundamental del Estado, consagrando en uno de sus artículos el principio de la libertad de asociacion para todos los fines de la vida humana, sin restricciones, sin trabas de ninguna especie, y el Sr. Montero Rios con su proyecto viene á establecer limites, trámites, cortapisas en perjuicio del clero por cierto, y á reglamentar el artículo constitucional. No puede, pues, el partido democrático, que forma parte de la situacion actual, sin faltar fundamentalmente á sus creencias, aceptar el proyecto que se discute. ¿Y el parti-



do progresista? ¿Y la parte de la mayoría que procede del partido progresista?

El Sr. Montero Rios, que ha sufrido contrariedades en la larga, detenida y prolija discusion de que ha sido objeto este proyecto en el otro Cuerpo colegislador, y su obra modificaciones á consecuencia de la oposicion que provocaba y de las reuniones que se han celebrado allí por los diputados de ese partido y por un grupo considerable de representantes de muchas provincias, á quienes el proyecto, el día que llegue á ser ley, va á inferir notables agravios y graves perjuicios; el señor ministro hubiera visto la popularidad de su obra y la suerte que le esperaba si hubiese declarado libre la votacion de la ley en la otra Cámara, y no hubiese existido la presion, el compromiso político, para muchos ineludible, que la cuestion de gabinete hubo de ejercer en el ánimo de los ministeriales.

Aquí mismo, señores senadores, se ha observado un fenómeno raro y singular que viene en corroboracion de mis aserciones. Las secciones del Senado eligieron para formar parte de la comision que ha redactado el dictámen, pendiente de la deliberacion del Senado, á los Sres. Gonzalez Acevedo, marques de Seoane, y Reus y García.

Estos señores senadores, que no están conformes con el proyecto, yo debo creerlo así, debo pensarlo así en virtud de la renuncia que han depositado sobre la mesa del Senado de sus respectivos cargos; estos señores senadores es de esperar que no solamente han de emitir un voto negativo contra el proyecto, sino que han de venir á la esfera del debate á ayudarme en la impugnacion que estoy haciendo.

Y no son solamente estos dignísimos compañeros nuestros los que han prejuzgado su opinion relativamente al proyecto: toman asiento tambien en el Senado otros señores que suelen votar de ordinario con la mayoría, que á mi juicio tampoco pueden aprobar el dictámen de la comision. Yo espero que mi respetable amigo, con cuya amistad me honro, el Sr. Moreno Lopez, á quien siento no tener el gusto de ver en su puesto, sin duda por la indisposicion que le aqueja, que en el Congreso de diputados y en la legislatura, si no recuerdo mal, de 1859 dió su voto afirmativo, en union de mi humilde persona, autorizando al gobierno para celebrar el convenio adicional al Concordato de 1851; yo espero, repito, que este respetable y dignísimo senador, lo mismo que algun otro, para mí muy estimado, que tiene la dignacion de escucharme, tampoco pueden ni deben prestar su conformidad al proyecto del Sr. Montero Rios.

Si tiendo la vista por esos bancos, me encuentro el primero con el señor conde de Fabraquer. ¡Cómo he de creer yo, señores senadores, que el señor conde de Fabraquer ha de dar su voto favorable al proyecto que se discute! Sería para mí la mayor anomalía del mundo. ¡El señor conde de Fabraquer, senador vitalicio que tomó asiento en esta Cámara, si no recuerdo mal, propuesto á la Corona por el ministerio que presidió el ilustre duque de Valencia; el señor conde de Fabraquer, íntimamente ligado con todas las administraciones, si vale la frase, de raza pura moderadas; el señor conde de Fabraquer votar este proyecto, señores! Yo no puedo ni imaginarlo siquiera.

Otros señores senadores, el señor marqués de Mudela, á quien no veo sentado en su banco, pero que leerá la discusion; el señor Sabau, persona por tantos títulos apreciable, consejero de Estado, que ocupaba esa altísima posicion oficial durante la administracion presidida por el inolvidable duque de Tetuan, á cuyo ministerio me parece que debió tan distinguida y señalada honra, ¿cómo es posible que voten tampoco este proyecto?

Y no me contento, no me basta que todos estos señores á quienes he aludido, sin que la alusion pueda lastimarles, porque les enaltece y les honra, recordándoles páginas billantes de su carrera política, oficial y parlamentaria, no me basta, digo, que emitan un voto contrario al proyecto del Sr. Montero Rios.

Exijo más de la consecuencia política de estos ilustres patriotas; exijo que vengan á la arena de la lucha á ayudarme con sus luces é ilustracion, y á ayudar á los señores senadores que tienen pedida la palabra en contra, empeñados como yo en la tarea de combatir el dictámen que es objeto de este debate.

Á los adoradores de la obra predilecta, en mi opinion funesta y desgraciada, del Sr. Montero Rios, persona competente, ilustrada, á quien yo respeto; á los admiradores de la nueva constitucion civil del clero español, que se extasien con la lectura del largo preámbulo que precede al proyecto, considerándole como delicada flor que ha brotado de la rica imaginacion del señor Montero Rios, á estos señores, admiradores conmigo del talento y rica fantasía del señor ministro de Gracia y Justicia, me ocurre recordarles los versos que la vista de una pura rosa inspiró á uno de nuestros más insignes poetas, al célebre Rioja, cuando escribia:

«Tan cerca, tan unida  
está al morir tu vida,  
que dudo si en sus lágrimas la aurora  
mustia tu nacimiento ó muerte llora.»



Tal es el horóscopo que me permito hacer desde este banco al proyecto del Sr. Montero Rios.

El dictámen que se discute es á todas luces anticonstitucional; pugna con el texto y el espíritu del art. 21 de la Constitución: «La nacion, dice este artículo, se obliga á mantener el culto y los ministros de la Iglesia católica.»

Pues bien, señores, la nacion, en su significacion gramatical y filológica, es el organismo político, social y económico del país en su representacion central; la agrupacion de los elementos sociales, de la riqueza contributiva, de todas las fuerzas vivas de la sociedad en su expresion sintética; y tratándose de servicios generales que han de pagar los pueblos colectivamente, la nacion, en este concepto, es el presupuesto del Estado, donde se abren y autorizan los créditos para satisfacer cada uno de los servicios á cargo directamente del poder central. La nacion, en su manifestacion legal externa, es el conjunto de los poderos públicos, son las Córtes del reino, votando el presupuesto, distribuyendo á los pueblos y provincias las cargas de interes general, y los centros oficiales, los centros directivos del ministerio de Hacienda, la direccion de la Deuda, la de Contribuciones, la del Tesoro, la de Contabilidad, los encargados de recaudar los ingresos y de pagar las obligaciones, que afectan peculiar y diréctamente á la entidad moral que se llama nacion.

Tal es, en mi sentir, la acepcion legal de esa palabra para los efectos del artículo constitucional; y en ese concepto digo que, ó hemos perdido completamente las nociones de lo que significan los vocablos en el sentido filológico y gramatical, ó la palabra nacion, á que se refiere el art. 21 de la Constitución, no puede ni debe explicarse ni entenderse de otro modo. El proyecto que nos ocupa quebranta y viola, por lo tanto, el artículo del Código fundamental en su letra y en su espíritu.

Pues bien, señores, si tal es la significacion del precepto constitucional; si en ese concepto y bajo el punto de vista y de la explicacion que acabo de dar venia satisfaciendo el Estado la dotacion del clero, no á título gratuito, no como el pago de un servicio oficial y público, no porque el clero pueda equipararse á los funcionarios que sirven al Estado mediante una retribucion, sino á virtud de un título oneroso, á consecuencia de un derecho perfecto que le asiste á percibir esa dotacion, que es una exigua indemnizacion por los bienes que le vendió el Estado, y una carga de justicia que se le debe; si tan sagrado origen representasen las obligaciones eclesiásticas, yo pregunto:

¿es lícito á los poderes públicos, pueden confundirse y trastornarse las nociones del derecho y de la justicia hasta el punto que le sea permitido al Estado cambiar, alterar sustancialmente contra la voluntad del acreedor, que es el clero, la naturaleza y la índole de la deuda y de la obligacion solemnemente contraída? ¿Puede variarse la personalidad jurídica del deudor, que es la nacion ó el Estado, por su propia autoridad, introduciendo una verdadera novacion de contrato, sin que á ello contribuyan las dos partes interesadas? Esto, señores, sería una verdadera iniquidad si se lleva á cabo. No puede descargarse del presupuesto general la dotacion del clero sin violar los principios más claros del derecho y de la justicia. No establezcamos, señores, precedentes funestos, de que mañana podamos arrepentirnos, precisamente cuando ciertas doctrinas disolventes tantos y tan fatales progresos hacen en esta nacion.

La Iglesia católica, que derramó en los tres primeros siglos de la era vulgar la sangre de innumerables mártires por conservar la pureza de la doctrina, del dogma y de la fé; la Iglesia católica, que más tarde, después que Constantino la dió la paz, fué considerada como una asociacion legítima dentro del Estado; la Iglesia católica, que tiene una personalidad jurídica reconocida y sancionada por todos nuestros Códigos y compilaciones legales, desde el Breviario de Aniano y desde el Fuero-Juzgo hasta el Concordato de 1851; la Iglesia católica, asistida de éstos títulos solemnes, ha poseído bienes, ha disfrutado bienes de todas clases, y este principio incontrovertible nadie puede desconocerlo, como tampoco lo desconoce el señor ministro de Gracia y Justicia.

Pero, señores, si la nacion se apoderó de los bienes de la Iglesia, si se incautó de ellos, segun la palabra que ha venido á consagrar el uso, aunque en pleno Parlamento se le llamó despojo, no discuto acerca de esto; quizás no ha sido aplicada impropriamente la frase: si la nacion, digo, se incautó y se apropió de todos los bienes de la Iglesia, si se utilizó del producto y de los rendimientos de las ventas, ¿con qué derecho señores senadores, vamos á borrar y eliminar del presupuesto general del Estado lo que es una justa compensacion y una justísima indemnizacion del valor de estos bienes? ¿Qué razon valedera y atendible puede alegar la comision ni podrá alegar el señor ministro de Gracia y Justicia, aun reconociendo su talento y lo sutil de su raciocinio, qué razones podrán alegar, repito, para persuadirme de que no envuelve el acto de que me ocupo la mayor arbitrariedad y un atentado verdaderamente escandaloso?



Pero se dice: «¡Ah! que la penuria del Tesoro, ¡ah! que los conflictos de la Hacienda, ¡ah! que la triste y aflictiva situación económica por que atraviesa el país nos obligan á adoptar esta medida».

Francamente, señores, cuando he oído enunciar estos razonamientos, cuando he oído discutir sobre esta base, no puedo menos de confesar que se ha enardecido mi espíritu y sublevado mi conciencia.

¿Cómo! ¿Por qué se establece una diferencia irritante contra el clero? ¿Que títulos superiores ostentan los acreedores del Estado para que no se adopte con ellos una medida análoga? ¿Qué títulos superiores tienen los pensionistas por cargas de justicia y todos los que cobran sus haberes del Estado? ¿Qué títulos presentan enfrente del clero todas estas clases para que á su favor se constituya un privilegio? Pues qué, ¿el pago de las obligaciones eclesiásticas no está bajo la salvaguardia del crédito de la nación, lo mismo que el de la deuda pública? ¿Qué diferencia los separa en el orden legal y constitucional? Ninguna, absolutamente ninguna. ¿Es, señores, porque á los ojos del Gobierno y de la mayoría se considere débil y poco temible la oposición del clero? ¡Ah! esto no puedo ni siquiera sospecharlo, cuando fijo la vista en el largo preámbulo que precede al proyecto de ley que se discute, en el que se formula la aspiración, supongo con sinceridad, de crear una dotación independiente para esa nobilísima clase. Al Sr. Montero Ríos no puede ocultarse, es bastante ilustrado S. S. para dejar de advertirlo, que la obligación de satisfacer al clero la indemnización que se le debe, en equivalencia del valor de sus bienes vendidos, reviste diferentes sanciones: reviste, en primer lugar, el precepto de la ley canónica, pues si bien yo no puedo en este terreno cruzar mis débiles armas con las muy superiores del profesor de derecho canónico de la Universidad central, tengo aprendido que desde el primer capítulo del Génesis hasta el Concordato, todas las leyes eclesiásticas, absolutamente todas, consignan como sagrada é inviolable la propiedad del clero, y espiritualizada estaba en virtud de las disposiciones de la Iglesia y de los cánones de los Concilios.

Si registramos las compilaciones generales del derecho positivo español y las actas de las Cortes de los antiguos reinos, veremos que han considerado á la Iglesia como una asociación legítima y con la personalidad jurídica competente y perfecta, para adquirir propiedad inmueble y de todas clases, sin limitación de ningún género. Yo invito á los señores de la comisión

y al señor ministro á que me citen una sola ley del reino con carácter general, compilada en nuestros Códigos, que establezca una doctrina contraria á la que estoy exponiendo. Reviste la obligacion de que me ocupo la sancion de la ley canónica y de la ley positiva sin género alguno de duda; reviste tambien la sancion que la imprime un tratado internacional solemne, *pacta sunt servanda*, como es el Concordato de 1851 y el convenio adicional de 1859; y, finalmente, reviste la sancion constitucional del art. 21 de la ley fundamental del Estado, en virtud del cual y de toda la doctrina anteriormente expuesta cobraba el clero su dotacion directamente del Tesoro.

Señores, la Santa Sede hubo de convenir en las ventas por el Estado de los bienes de la Iglesia (nótese bien esto); hubo de sanear ademas las que se habian verificado sin su acuerdo y su previa conformidad, prestando un señalado servicio á la nacion; hubo, repito, de sanear y autorizar esas ventas cuando el Estado se obligó solemne y formalmente á pagar la indemnizacion correspondiente, constituyéndose á incluir en el presupuesto general de la nacion los créditos suficientes para satisfacer esta deuda sagrada. Y bien, señores, hoy que el Estado rompe arbitrariamente lo concordado, lo estipulado con la Sede Apostólica, yo pregunto: ¿no estaria en el ejercicio de su pleno derecho el poder espiritual reivindicando, como puede hacerlo, la libertad primitiva, volviendo á la situacion anterior de las cosas, al año 1851, para adoptar la actitud que tuviera por conveniente frente al Gobierno español? ¿No podria dejar sin efecto la aprobacion y el saneamiento de aquellas ventas, puesto que el poder temporal rompe sus compromisos? Si el Estado se cree autorizado por sí solo, *auctoritate qua fungor*, para violar el Concordato, ¿no quedan *ipso facto* á salvo los derechos de la Iglesia para que á su vez pueda hacer lo que estime oportuno dentro de sus peculiares facultades?

Consideren los señores senadores cuál sería el porvenir de nuestra desgraciada nacion, la perturbacion de las conciencias, la inquietud dentro de las familias, si la Iglesia (no lo hará, tan alta idea tengo yo del varon verdaderamente apostólico que ocupa hoy la Silla de San Pedro; no lo hará, pero estaria, haciéndolo, en su derecho) quisiera esgrimir, en su derecho estaria, las armas espirituales en contra de un gobierno y de un pais que así violan y rompen y rasgan los tratados internacionales. Contemple el señor ministro de Gracia y Justicia, examine con ánimo sereno y tranquilo la situacion moral del pais, el orden moral perturbado en toda España; observe el señor minis-



tro esta lucha desgraciada en que arden los partidos dentro de nuestra nacion tan desventurada. Fije su ilustrada atencion el señor ministro en las consecuencias de las predicaciones deletereas y disolventes contra la propiedad, contra la religion y contra la familia, piedra angular sobre que descansa el edificio social, y en el inmenso daño que causan los apóstoles de ciertas doctrinas anticatólicas y anticristianas, y apreciando sus funestos resultados, estoy seguro echará de ver que la conducta del gobierno radical en los asuntos eclesiásticos explica, desgraciadamente, con diáfana y luminosa claridad la causa permanente de la honda perturbacion que hoy cunde por todas las provincias de España.

Es menester, señores, amparar, defender y vigorizar el sentimiento religioso del pais; es necesario satisfacer las legítimas aspiraciones de los pueblos, establecer la concordia y salvadora armonía entre ambos poderes, venir á un acuerdo con la corte de Roma, mejor dicho, con la Sede Pontificia, porque con la corte de Roma no nos importa intimar nuestras relaciones, harto se hace sentir su extraña y dañosa influencia; es menester llegar pronto á una inteligencia sincera y cordial con el poder espiritual, y que, á la agresion injusta, á la hostilidad rencorosa, á la persecucion inmotivada que se ha desencadenado contra el clero, sustituyan la concordia, la amistad y la armonía, única manera de poder llevar la paz á las conciencias, la tranquilidad á los espíritus, el orden y el sosiego á las familias, y levantar con decision el sentimiento moral del pais.

Para conseguir tan altos objetos es preciso que el Gobierno se coloque en condiciones de poder negociar y de tratar, porque dicho se está que si el Gobierno no toma resueltamente esa actitud, no podremos conseguir el acuerdo con la Silla Apostólica. Pues qué, ¿cree el señor ministro de Gracia y Justicia que podemos vivir indefinidamente así? Al Sr. Morales Diaz le parecerá que sí; yo entiendo que no. ¿Cree el Sr. Morales Diaz que este pais puede vivir como situacion normal en hostilidad abierta con la corte pontificia? ¿Cree la comision, cree el Gobierno que se puede lastimar impunemente la fibra más delicada del corazón humano, que es la libertad de la conciencia? ¿Cree el señor ministro de Gracia y Justicia que, sin trastornar el orden moral y religioso de las ideas, puede perpetuarse indefinidamente esta situacion de rompimiento, de agresion y divorcio con el clero? ¿Es que, abatiendo, humillando, persiguiendo al clero, privándole del agua y del fuego, reduciéndole á la abyeccion, á la miseria, al infortunio, que abre la puerta al en-

vilecimiento, se consigue realizar el ideal, el *desideratum* por muchos defendido, que es privar al clero de toda influencia social, por el temor de que con la influencia social pueda ejercer influencia política? ¡Ah! ¡Qué equivocado está el señor ministro de Gracia y Justicia, qué equivocados están los individuos de la comision si tal creen y tal piensan!

Pues qué, ¿es posible que entre nosotros dominen y prevalezcan las doctrinas que dominaron y prevalecieron entre los revolucionarios del último siglo en Francia, de aquellos convencionales de 1793, que quisieron cortar á cercen las siete cabezas de la hidra clerical, juzgando que así dejarían á su país, si vale la frase, como una balsa de aceite? ¡Ah! yo hago más justicia en este punto al Sr. Montero Rios. S. S., persona entendida, hábil estadista, profundo filósofo, hombre experimentado y de gobierno, no puede sostener las ideas de los convencionales de 1793.

¡Privar al clero español de influencia social, señores senadores! Una magnífica y admirable epopeya de cerca de ocho siglos, como no la ofrece la historia de ningun pueblo, sostenida con indomable fiereza y heroico entusiasmo por nuestros antepasados, atestigua con caracteres irrecusables que en este noble país no se llegará afortunadamente á extinguir, ni siquiera á debilitar, el sentimiento religioso que sostuvo poderosamente esa lucha gigantesca, lucha que comienza en las ásperas montañas de Astúrias y acaba con la reconquista del territorio, clavando los Reyes Católicos, de imperecedera memoria, en las almenas de Granada el estandarte glorioso de Castilla y el lábaro santo de la religion.

¡Ah! No; cuando esa preciada tradicion y nobilísima historia tenemos, no se debe ni siquiera pensar que pueda debilitarse en nuestro corazon el sentimiento religioso. La idea de la independencia y de la libertad de la patria, asociada, encarnada iba al principio religioso, y ambas formaban una sola aspiracion, el grito vigoroso que alentaba en la guerra el valor invencible de nuestra raza, jamas sojuzgada. De este modo se explica la tenacidad perseverante de aquellos valientes durante tan largo periodo, hasta expulsar del territorio español á los infieles, á los secuaces del islamismo.

Las gloriosas reminiscencias de los laureles adquiridos en esa guerra, que inspiró las leyendas populares; nuestra literatura clásica, que registra las obras renombradas de Fray Luis de Granada, Mariana, Fray Luis de Leon y Santa Teresa de Jesus, saturadas del más sublime y filosófico misticismo; las





no ménos célebres de los Cervantes, los Garcilasos, los Lope de Vega y tantos otros cuyas admiradas producciones esmaltan como ricas flores el campo de nuestra literatura nacional; esas suntuosas catedrales góticas y bizantinas que elevan sus esbeltas y afligranadas torres, desafiando al tiempo en el espacio; esos soberbios monumentos donde se admiran y custodian los ricos tesoros de nuestra arquitectura, de nuestra pintura y de todos los ramos de las bellas artes; todo eso, señores, demuestra que es vano intento debilitar ni extinguir el sentimiento religioso en un pueblo, que se envanece de ostentar ligada la fé y la unidad de sus creencias con el triunfo de aquellos heroicos tercios, de aquellas temibles legiones que vencieron á la Europa y al mundo, y con el gran saber, con los grandes adelantos en la ciencia, de que fué depositaria un día la célebre universidad de Salamanca.

¡Ah, señores! estas gloriosísimas tradiciones, grabadas indeblemente en el corazon de los españoles, perpetuadas en la sucesion de los siglos por la dilatada serie de numerosas generaciones, fueron las que inflamaron ayer, todavía ayer, la época es reciente, el corazon de esta raza meridional, proporcionando á España los grandes triunfos de Tetuan y de Vad-Ras, con sorpresa y admiracion de la Europa, que descubre en la pericia de un general, ilustre descendiente de una nobilísima y antigua familia católica irlandesa, el esforzado y valiente caudillo, que estaba por el destino llamado á reverdecer los inmarcesibles laureles, que un día habian recogido los Gonzalos de Córdoba y Alejandro Farnesio.

Y, señores, de que tal fuerza tiene en nuestro pais el sentimiento religioso da elocuente é irrecusable testimonio, lo que estamos presenciando, lo que pasa á nuestra propia vista en estos momentos. ¿Quieren decirme los señores senadores qué ha sucedido con los templos protestantes abiertos en Madrid, con las escasas capillas evangélicas que hemos visto solo en Madrid, despues de la revolucion de Setiembre? ¿No observais clara y distintamente que se ha producido una saludable reaccion religiosa en las almas tibias é indiferentes, y que van desapareciendo una por una todas esas asociaciones? Y, señores, esforzando un poco más este argumento, si se pidiera á la Sociedad bíblica de Londres una nota de las cantidades que ha invertido en la libre circulacion de las Biblias protestantes por España, no solo estéril é infructuosamente, sino con un resultado contraproducente, ¿no advertiríais que todavía crece y aumenta la fuerza de mi observacion? ¿Cuál es la causa princi-

pal que mantiene en armas á las facciones que recorren impunemente las provincias de Cataluña, Aragon y otras comarcas de España? ¿Cuál es la causa que influyó esencialmente en el alzamiento, casi en masa, en el último mes de Abril, de las tres Provincias Vascongadas y de Navarra? Oid, oid las inspiraciones de vuestra conciencia, y contestadme si no es cierto que no ha sido otra mas que las peligrosas novedades introducidas por el gobierno con la reforma religiosa.

Señores senadores, la gran perturbacion que nos conmueve, la lucha de los partidos, esa lucha encarnizada y permanente; la alarma de todos los intereses; el desprestigio del principio de autoridad, que anda por los suelos; el desquiciamiento de esta sociedad, que parece que se derrumba, porque todos los dias estamos sorprendidos por alguna aterradora novedad: ayer en Vejer se levanta una partida, quema el archivo municipal, se apodera de los caudales públicos, invade las casas de los vecinos más ricos y los roba impunemente; al dia siguiente se detiene un tren en una estacion inmediata á Ciudad-Real, y escandalosamente se despoja á los viajeros de cuanto traian, cosa bochornosa, que nos avergüenza á los ojos del mundo civilizado; otro dia nos sorprenden los tiros en las calles de Madrid, y se derrama aquí la sangre española sin que el Gobierno parezca darle importancia...

¿Qué es esto, señores senadores? ¿se puede vivir así? ¿Cuáles son las causas de esta perturbacion social? Es menester, registrando la historia, fijarse en el reinado del débil Enrique IV ó, mejor dicho, en el del incapaz é imbécil Carlos II (*Murmullos*) para encontrar algo parecido á lo que hoy sucede en España; no retiro la frase, aunque parece que la comparacion no gusta á algunos; del imbécil Carlos II, sí, lo repito. Yo he estudiado la historia de mi país; he reflexionado sobre las enseñanzas que nos suministran las crónicas particulares de ciertos monarcas, y no encuentro absolutamente fundador alguno de dinastía, absolutamente ninguno que no haya estado á la altura de los tiempos, de las circunstancias y de la civilizacion en que ha reinado; quizá esta regla general tenga alguna excepcion; esto lo dejo y lo abandono á la consideracion de los ilustrados señores senadores. Pues bien, si todas estas cosas suceden, y retrato fielmente la situacion del país, ¿qué es menester hacer? ¿En qué deben fijar la atencion el Gobierno y los poderes públicos? Deben pensar en restablecer órden moral y material, deben pensar en dar prestigio á la autoridad, deben pensar en devolver su fuerza y su prestigio á las instituciones permanentes, á los ele-



mentos seculares y conservadores, sin los cuales es imposible gobernar; y dicho se está que entre estas instituciones, entre estos elementos permanentes y conservadores el clero ocupa un lugar distinguido.

Perseguid al clero, humillad al clero, envileced al clero, reducidle al hambre y á la abyeccion, y vereis como esta obra demoledora se refleja en la situacion moral, en la situacion intelectual, en la situacion material de esta nacion desventurada.

Hay, pues, señores senadores, necesidad absoluta, imprescindible, urgente, de poner término á semejante estado de cosas, tratando, conviniendo y acordando con la Sede Pontificia los puntos que nos separan, y dando solucion satisfactoria á tantos conflictos. Atienda el señor ministro al *Memorandum* de agravios dirigido por la Santa Sede al gobierno español; atienda al sentimiento general del pais que le indica ese derrotero. (*El Sr. Alonso (D. Juan Bautista): ¿Al Syllabus?*) No se trata del *Syllabus*, Sr. Bautista Alonso, sobre lo cual habria mucho que hablar, como de las causas que han dado lugar al *Syllabus*.

La Sede Pontificia tiene harto bien acreditado, con un gran espíritu de moderacion y de templanza, que sabe apreciar las necesidades de los tiempos y de la civilizacion contemporanea. Atienda, digo, el señor ministro de Gracia y Justicia al *Memorandum* de la corte pontificia; suprima ese injusto, vejatorio, antipolítico, cruel é inhumano juramento del clero, que por cierto todavía no comprendo por qué ha venido á imponerse semejante juramento; traiga S. S. á las Córtes las modificaciones necesarias, indispensables, urgentes que reclama la ley del matrimonio civil, la cual, lastimando en lo más sagrado las conciencias de las familias católicas, no es la menor de las causas que nos tienen en tan honda perturbacion. Suprima su señoría, ó proponga á las Córtes la supresion de los decretos-leyes que se han dado antes y despues de haberse coronado con éxito desgraciado el edificio constitucional; disponga su señoría que se pague la justa dotacion que se debe al clero, muy procedente despues de dos años y medio de prolongada é inhumana insolencia; haga todo esto el señor ministro de Gracia y Justicia, y despues, fuerte con su derecho, acuda á negociar con la Santa Sede, que oirá las reclamaciones del gobierno español si son justas, prudentes, moderadas y convenientes, y entonces pondremos feliz término con ese acuerdo al afflictivo estado del pais.

¿No basta aún esto? ¿Es preciso todavía hacer más para venir á una inteligencia con el Sumo Pontífice? Pues no se detenga

el señor ministro, hágalo también. ¿Es que es menester dar al clero la participacion que le corresponde en la enseñanza, no ya como asociacion legítima, cuya existencia sanciona y autoriza la Constitucion del Estado, sino por otro orden distinto de consideraciones? Si es preciso, como supongo firmemente, someter á las Córtes las medidas encaminadas á que tenga el clero la intervencion conveniente en la enseñanza, para velar por la pureza del dogma y de la moral cristiana en virtud del divino precepto *Id, enseñad*, etc., hágase también, que no está esto reñido con las exigencias de la civilizacion ni con la Constitucion vigente. Interprete el señor ministro los sentimientos casi unánimes del pueblo español, y despues que haya hecho esto, yo aseguro, yo acaricio la esperanza, me lisonjea la idea de que S. S. hará desaparecer la intranquilidad de las conciencias, la inquietud de los espíritus, la alarma de las familias católicas, la perturbacion que nos consume, que nos agita y que amenaza disolver esta sociedad.

Pero, señores, la nacion española, que es católica, esencialmente católica casi en su generalidad, quiere más, aspira á más; yo voy á decirlo, creyendo que en este momento soy intérprete de sus aspiraciones. La nacion española quiere que el Gobierno use de su vigorosa iniciativa con las demas potencias católicas de Europa y de fuera de Europa en favor de la independencia y de la libertad del prisionero del Vaticano. La nacion española quiere que con el concurso de 200 millones de habitantes distribuidos sobre la haz de la tierra, ó de los gobiernos que los representan, rompa el gobierno español, rompan esos 200 millones de católicos las cadenas que aprisionan al Sumo Pontífice, forjadas por un príncipe á quien la historia le ha de dar su justo calificativo.

La nacion española quiere, y yo interpreto fielmente sus votos y sentimientos, que por el concurso eficaz de todas las fuerzas del catolicismo se restablezca al jefe visible de la Iglesia en el imperio de su dominio temporal, á lo ménos en la capital del orbe católico, en Roma, para que pueda ejercer de este modo libremente sus facultades espirituales.

La nacion española quiere, y lo quiere vehementemente, que se ponga coto y correctivo vigoroso á la política del príncipe de Bismarck, á la política del jefe del protestantismo alemán, hoy que busca un instrumento poderoso en un aliado suyo para ejercer con el concurso de España, con la eficaz cooperacion de España, su dominacion sobre la república francesa y sus planes de exterminio contra el catolicismo del mundo. España



quiere que en esta noble é indomable tierra no haya ni camarillas extranjeras que nos deshonren, ni gobiernos extraños que influyan sobre nosotros, ora se llamen sus presidentes...

El Sr. VICEPRESIDENTE (marqués de Perales): Señor senador, me voy á permitir recordar á S. S. que estamos discutiendo el dictámen de la comision sobre el proyecto de ley de obligaciones eclesiásticas.

El Sr. SUAREZ INCLAN: Y yo, señor presidente, combatiendo la política de gobiernos extranjeros que están haciendo la guerra al catolicismo en España.

El Sr. VICEPRESIDENTE (marqués de Perales): Que no tiene nada que ver con el proyecto que se discute.

El Sr. SUAREZ INCLAN: Tal vez; yo respeto el criterio superior del señor presidente, pero creo que tiene mucha relacion, que está íntimamente ligado con el proyecto que se discute.

El Sr. VICEPRESIDENTE (marqués de Perales): No está á la orden del dia eso, y no puedo permitir que siga S. S. en ese camino.

El Sr. SUAREZ INCLAN: Señor presidente, no hay nada que respete yo tanto como las prerogativas de la presidencia; pero me juzgo con derecho para exponer libremente desde estos escaños, mientras el Senado me preste su atencion y benevolencia, todos los razonamientos y observaciones que vengan en apoyo de mis doctrinas: la nacion nos oye, la nacion nos juzgará. No puede haber potencia ninguna en el mundo, es vana quimera si lo intentase, que influya sobre el gobierno español con éxito respecto de las cuestiones eclesiásticas; y como los senadores españoles son independientes y celosos del cumplimiento de su deber, no pueden permitir ni tolerar influencias de gobiernos extraños, ora sus presidentes se llamen Lanzas, Ratazzis ó Menabreas. ¿Es que existe algun obstáculo, no tradicional, porque siendo reciente no se le puede aplicar este calificativo, que impide al Gobierno seguir este camino salvador? ¿Puede adoptar esta política? Pues siga con paso firme la senda que le señalan las aspiraciones del pueblo español, y someta con franqueza y noble lisura á la aprobacion de los mas altos poderes é instituciones sus propósitos, en consonancia con los sentimientos, tradiciones y modo de ser de nuestro pais. ¿No merece la sancion superior esta política?

Pues abandone su puesto el Gabinete y deje libre paso á otros ministros que puedan realizar este programa nacional. ¿Es que no hay posibilidad, dentro del actual orden de cosas, de formar

un ministerio que pueda seguir una marcha desembarazada, independiente en los asuntos eclesiásticos y en las relaciones con el Sumo Pontífice? ¿Es que existe, repito, algún obstáculo que impide á los poderes públicos hacer política católica y puramente española? Pues si esto sucede, señores senadores, si hay estorbos y obstáculos que impidan interpretar en la esfera del gobierno las aspiraciones y los sentimientos del país, yo respetuosamente, desde este augusto recinto, con la investidura que me da el cargo de senador y con la noble independencia que caracteriza á los representantes de la católica España, diría á esa entidad, diría á esa institucion, diría á esa personalidad: «Propio es de nobles é hidalgos corazones, mucho más cuando se han mecido en dorada cuna, atender y estudiar las necesidades de los pueblos; propio es de esos nobles é hidalgos corazones satisfacer las aspiraciones y los sentimientos nacionales cuando son justos y legítimos; propio es de esos nobles é hidalgos corazones afirmar, proteger, amparar las creencias del pueblo y atender las necesidades que esas mismas creencias y la realizacion de esos mismos sentimientos reclaman de los gobiernos».

Desde este sitio lo digo solemnemente: si estas necesidades, si estos sentimientos, si estas aspiraciones no pueden satisfacerse, adóptese una resolución magnánima y generosa; déjese funcionar, ábrase paso á la monarquía legítima y constitucional, enlazada con las tradiciones seculares y con las arraigadas creencias religiosas y católicas de este país. Para esa determinacion tendria la historia una página gloriosa y un recuerdo eterno. ¿No se hace así? Pues yo, que no me siento inspirado de espíritu profético, puedo, no obstante, sin esfuerzo alguno vaticinar y augurar desdichas, calamidades y desastres sin cuento.

El proyecto, señores senadores, y voy á abreviar mi discurso porque me siento fatigado, es de imposible ejecucion; adolece de una gran dificultad, de un gran defecto: de ser irrealizable bajo el punto de vista económico. Señores, eso que se conoce desde la revolucion de Setiembre, y que se llama sin duda por antítesis Hacienda provincial y municipal, cuya existencia en realidad va siendo un mito, no solamente se encuentra en la imposibilidad de poder soportar la carga de más de ciento veinte millones que le amenaza, sino que, como saben perfectamente los señores senadores, tanto el municipio como la provincia están insolventes é indotados, y no pueden sufrir ni levantar sus más urgentes, sus más apremiantes obligaciones.



El señor ministro de Gracia y Justicia, á quien impulsa la idea, patriótica en el fondo, desgraciada y funesta en la ejecución, de buscar independencia y libertad para la Iglesia, así lo declara y consigna en el preámbulo que precede al proyecto que se discute, y de cuya sinceridad no debemos dudar, juzga que esta libertad y esta independencia la va á alcanzar la Iglesia descargando el Estado de su presupuesto la dotación del clero y trasladándola á los presupuestos locales, á los presupuestos provinciales y municipales.

En mal hora ha concebido el señor ministro de Gracia y Justicia tan lamentable pensamiento. Yo, señores, que me he dedicado con alguna perseverancia en mi larga vida política á los estudios administrativos, que he desempeñado funciones de esta índole, de este carácter durante muchos años, conozco algo en su constitución interior, en detalle, lo que es la organización municipal y provincial bajo el aspecto económico, y echo de ver de una manera evidente que en el ministerio de Gracia y Justicia, no se ha estudiado la cuestión bajo este punto de vista, y no se han advertido, por tanto, los insuperables obstáculos ante los que en la práctica tiene que estrellarse el pensamiento del Sr. Montero Ríos.

El proyecto de obligaciones eclesiásticas viene del ministerio de Gracia y Justicia sin preparación oficial, sin que se hayan consultado los antecedentes necesarios relativamente á la situación económica de las corporaciones locales; en dicho ministerio no se ha estudiado bajo este aspecto el proyecto que nos ocupa; carece de los datos necesarios é indispensables para haber formulado el pensamiento del señor ministro de Gracia y Justicia, en el sentido de que hayan de ser los municipios y las provincias quienes satisfagan de aquí en adelante las obligaciones de carácter eclesiástico.

Yo, señores, vengo reclamando al ministerio de la Gobernación desde 1870, y aun antes como diputado constituyente, sin haberlo obtenido del Gobierno, un estado, un resumen de los últimos ejercicios de los presupuestos provinciales y municipales, ó de la liquidación definitiva; cosa sumamente fácil y sencilla, y que, sin embargo, no debe conocerse en los centros oficiales.

En virtud y en cumplimiento de una prescripción de las leyes administrativas de 1845, el Gobierno estaba obligado á remitir al Congreso y al Senado un resumen, un estado general por capítulos y artículos de los servicios locales, que alcanzan una gran cuantía, que ascienden á muchos millones de reales.

En un pliego de papel marquilla (en el archivo del Senado estoy seguro que han de existir muchos de estos documentos) se exponía el completo verdadero cuadro de la administracion local, y se publicaba en la *Gaceta* y en el *Anuario estadístico*, para que los aficionados á estos estudios pudieran examinarlos y estudiarlos. Tenían los resúmenes á que me refiero un encasillado sumamente fácil y sencillo.

Pues bien, yo pido con perseverante constancia, uno y otro día, alguno de esos estados, alguno de esos resúmenes acomodados á las modificaciones recientemente introducidas por la ley municipal, para ver cuál ha sido el resultado de las novedades planteadas en el orden económico y administrativo por los poderes públicos después de la revolución de Setiembre; y lo hice con tal desgracia, que aún no los he conseguido: son doce ó trece los capítulos correspondientes á otros tantos servicios de carácter provincial y municipal; de manera que vienen á ser unos doce ó trece renglones los que se necesitan para conocer la situación económica de las corporaciones populares.

El municipio y la provincia levantan las cargas que impone la administracion local; el municipio y la provincia sostienen la beneficencia provincial y municipal, la instruccion pública y las obras de carácter local, una buena parte de los gastos de los establecimientos de correccion pública, y sobre el presupuesto municipal gravitan hoy también los gastos que ocasionan la instalacion y el material de los juzgados municipales. De manera, señores, que con facilidad suma, si esos datos se hubiesen reunido, como se ha hecho antes, podríamos tener un verdadero cuadro de la administracion local, para juzgar con ilustracion y perfecto conocimiento de causa si podemos imponer á los pueblos la pesada y gravísima carga á que los sujeta el señor ministro de Gracia y Justicia con su proyecto.

El humilde diputado que en el Congreso hacía esta peticion, el humilde senador que hubo de reproducirla más tarde en el Senado, no ha podido conseguir aún el objeto de sus reiteradas reclamaciones; y es, señores senadores, que la administracion local ofrece realmente la verdadera imágen del desorden, de la confusion y del caos en todos sus servicios.

El Sr. Sagasta, ministro de la Gobernacion cuando yo instaba en mis reiterados ruegos, me respondía que fuera menester alquilar cien carros, para remitir al Congreso cargas inmensas de papel, á fin de satisfacer mi extraña curiosidad.

Más tarde decía el Sr. Rivero que no podía atender mi reclamacion, por no haberse planteado todavía la nueva legislacion



municipal, y que por consiguiente no le era posible exigir de los gobernadores los datos que yo pedia. Mas no es esta la causa, señores: el motivo de no existir estos documentos voy á manifestarlo con franqueza, porque en este sitio debe hablarse sin reticencias y decir la verdad al país, y la verdad es que ha sido tal el desórden y la confusion que reina en los centros oficiales, en las provincias y en los municipios, que ha desaparecido por completo toda nocion de administracion y de gobierno.

Yo quisiera que los señores senadores examinaran los resúmenes de los presupuestos provinciales y municipales que se han remitido á los Cuerpos colegisladores y están publicados en el *Anuario estadístico* de 1870, para que comprendan cuán sencillo es el trabajo que he pedido á las oficinas centrales, cuán fácil es ejecutarlo y cuán obvio hubiera sido facilitarnos esos datos, si aquí hubiera algo, algo nada más, una sombra siquiera de administracion y de órden.

Nosotros habíamos dado una modelacion completa para la redaccion de los resúmenes, y como todos los pueblos en mayor ó menor escala tienen unos mismos servicios, la unidad facilita los medios de formar la estadística y de conocer la situacion económico-administrativa municipal. Decíamos en nuestra modelacion y expresaba el encasillado de la misma: «Créditos autorizados en el presupuesto municipal para sufragar los gastos de la administracion provincial; cantidades pagadas con cargo á este crédito durante el ejercicio económico y durante los tres ó seis meses del período de ampliacion; cantidades no invertidas de esos créditos; obligaciones que han quedado pendientes al liquidar definitivamente en este ejercicio». Esto, señores, es sumamente sencillo, y yo no concibo cómo han dejado de redactarse tales documentos, despues de haberlos pedido yo uno y otro año, una y otra legislatura.

¿Cuáles, señores senadores, la situacion de este país? Ya sé yo, saben, por desgracia, los pueblos, á quienes afligen todo género de calamidades, que en España no se gobierna; pero sé ademas que si no se gobierna, en la recta acepcion de la palabra, tampoco se administra.

¿Qué idea se puede formar de los funcionarios públicos, de su aptitud, de sus conocimientos y de su laboriosidad, cuando unos datos tan sencillos, pedidos y reclamados por mí durante tres años, no han sido remitidos al Parlamento? Comprendiendo la importancia de esos documentos y su interés de actualidad, reproduce la reclamacion hace unos quince días, cuando ame-

nazaba la discusion del proyecto de ley de la dotacion del clero, y he rogado encarecidamente al señor presidente de esta Cámara que los pidiese al Gobierno (una vez que no estaba en el banco ninguno de los señores ministros), para que los señores senadores pudieran conocerlos é ilustrar con ellos á la vista su conciencia al examinar, discutir y aprobar el dictámen de la comision.

He pedido tambien al señor ministro de Fomento, el cual no me ha dado hasta ahora contestacion, un estado demostrativo de la cantidad que se adeuda á los maestros de instruccion primaria. Más cortés ha sido conmigo el Sr. Ruiz Zorrilla, que ha contestado al Senado diciendo que en el ministerio de la Gobernacion no existian los datos que yo pedí, pero que se iba á circular una real orden pidiéndolos á los gobernadores.

Debo hacer presente al Senado, respecto de este punto, que el Sr. Sagasta adoptó igual resolucion en Junio de 1870, la cual se halla publicada en la *Gaceta* con la modelacion literal que yo habia propuesto: al mismo tiempo debo advertir que los señores gobernadores y las diputaciones provinciales no se han cuidado mucho de cumplir las órdenes del ministro, que ocupado preferentemente, como los que le han sucedido, en otras cuestiones candentes de orden público, ó no prestaron atencion á estas cosas, ó no han tenido tiempo para gobernar y administrar al pais.

Pues bien, señores, al considerar que el señor ministro de Gracia y Justicia ha carecido de esos datos para apreciar la situacion económica del municipio y de la provincia, para examinar si pueden soportar los agobiados pueblos la pesada y nueva carga que les amenaza de ciento veintitantos millones, creo necesario llamar la atencion del Senado sobre este punto, como lo haré, no hoy, porque no quiero fatigar mucho su atencion, pero acaso muy pronto; porque me parece que los presupuestos de ingresos están ya ultimados por el Congreso de los señores diputados, y no tardará el dia en que hayan de discutirse; pero, aunque no ofrezca ahora detalles á la consideracion del Senado, he de adelantar cifras aproximadas de carácter oficial, en demostracion de mi aserto, cual es que los municipios están completamente indotados, y que amenazan al clero el hambre y la miseria si de ellos han de esperar el pago de sus dotaciones.

Los gastos, señores, de los presupuestos provinciales y municipales, segun el *Anuario estadístico* publicado en el año 1870, con los aumentos que ahora se les imponen para la dotacion



del clero, para la instalacion y pago de los juzgados municipales, para la conservacion de las carreteras (nótese bien esto, pues la conservacion y reparacion de las carreteras, que figuraban antes en el cuadro general de las que sostiene el Estado, corren á cargo hoy de las diputaciones provinciales, que no la cumplen por cierto), por la injusta compensacion de créditos establecida por el señor ministro de Hacienda, que tiene el vano empeño de que los municipios han de realizar lo que se llamó capitacion ó impuesto personal, que no ha podido cobrar el mismo gobierno con toda la accion vigorosa de sus agentes, cuya compensacion representa 52 millones de reales de aumento de gastos en los presupuestos locales, con todas estas cifras y algunas más que he de ofrecer en su día á la consideracion del Senado, los gastos de los presupuestos municipales y provinciales se acercan mucho á la cifra de 1.000 millones de reales. Conocido el gasto, veamos los orígenes de renta, los arbitrios é impuestos con que cuentan las corporaciones populares para levantar estos servicios. Voy á exponerlo en breves palabras, porque repito que esta cuestion habrá de tratarse en otra ocasion más detenidamente.

Los señores senadores conocen la ley municipal, en la cual se determina que los pueblos puedan aplicar á la satisfaccion y pago de sus obligaciones, en primer término, el producto de los bienes del caudal de propios no enajenados y de los intereses de las inscripciones intrasferibles, que ha debido el Gobierno emitir en pago de los que les fueron vendidos, lo mismo que á los establecimientos de beneficencia y de instruccion pública. Cuentan, en segundo lugar, con los arbitrios locales sobre determinados servicios de la misma índole; cuentan con lo que se llama repartimiento vecinal, que es el impuesto personal, ó aquella desgraciada capitacion, que no ha podido establecerse, que no se establecerá porque lucha contra los hábitos y contra los instintos del pueblo español; y, por último, cuentan los ayuntamientos con el impuesto de consumos, que, por no darle este calificativo, se le designa en la ley municipal con el nombre de contribucion sobre artículos de beber, comer y arder: *le nom ne fait pas à la chose*, como dicen los franceses, pues nadie duda que es la misma contribucion de consumos. Ahora bien, señores, ¿pueden los municipios con los productos de estos orígenes de ingresos y de renta satisfacer las cargas que se les imponen?

El señor ministro de Gracia y Justicia, que en mi sentir no conoce el estado angustioso de la Hacienda provincial y muni-

cipal, pretende un imposible metafísico y material y persigue un verdadero fantasma, porque, en vez de estudiar la cuestión, en términos generales, sobre la situación económica de los municipios, se ha fijado en la contribución de consumos, y ha dicho: «Esta contribución ha producido en sus buenos tiempos 360 millones de reales; esta contribución indirecta, que hoy se concede y se deja á disposición de los ayuntamientos, en su totalidad no puede ménos de ofrecer la misma recaudación; vamos, por tanto, á darles 360 millones de ingresos por consumos, y como yo no les recargo mas que con 120, merced á dicha contribución los pueblos nadarán en la abundancia, saldarán con grandes remanentes sus presupuestos y habrá que apuntalar las arcas municipales como estaban las del Tesoro en tiempo de Carlos III». Ésta es la argumentación del señor ministro. Pero no llevemos, por Dios, señores, las cosas fuera de su cauce natural; estudiemos con seriedad estas materias más á fondo y con el detenimiento que su gravedad y su importancia exige.

¿Creén los señores senadores que la contribución de consumos, sin el establecimiento de las puertas, de los fielatos y de los aforos, sin las condiciones y requisitos inherentes y esenciales que constituyen esta tributación, sin el principio de autoridad y la fuerza en los agentes encargados de la recaudación, necesaria para obtener sus rendimientos naturales, va á producir esos 360 millones que acaricia en su fantasía el señor Montero Ríos? Yo siento mucho venir á desvanecer sus esperanzas lisonjeras: la contribución de consumos, repito, sin las tarifas que regían en virtud de la instrucción de 1.º de Julio de 1864, la contribución de consumos sin poder establecerse los aforos y los fielatos y las puertas, porque esto afecta al dogma de los revolucionarios de 1868, que las anatematizaron con aquel *delenda est Carthago*, no puede llegar á la cantidad necesaria para cubrir tantas cargas como se quiere imponer á los ayuntamientos. ¡Abajo los consumos, abajo las puertas! fué la proclama de las juntas revolucionarias, al mismo tiempo que se decía: ¡Abajo las quintas! y otras instituciones venerandas que, por tener arraigo en el país, han de volver necesariamente á restablecerse, quedando reducidos todos aquellos *abajos* á otros tantos *encimas*. (Risas.)

La contribución de consumos restringida, y no pudiendo plantearla con sus esenciales condiciones, con las puertas y fielatos, lo cual está prohibido clara y expresamente, no solo en un artículo de la ley municipal, sino también en otra disposi-



cion que solo autoriza á los pueblos y juntas municipales para fijar las tarifas de los artículos sujetos á esta contribucion, de manera que no puedan en ningun caso exceder de un 25 por 100 del precio medio del valor del artículo; la contribucion de consumos, con tales cortapisas y limitaciones, ha sido despojada completamente de su carácter real y positivo, de su peculiar organismo, con lo que vendrán á ser estériles sus rendimientos. ¡Trescientos sesenta millones calcula por esta tributacion el señor ministro! ¡Ah, señores, si este humilde senador que tiene la honra de dirigiros la palabra hubiera podido recabar de los ministerios que se han sucedido desde 1870 acá los necesarios estados que he pedido un dia y otro dia, veríais inconcusamente demostrado á qué quedaban reducidos los 360 millones que espera habrán de recaudarse por consumos el señor Montero Rios. Yo no he de recordar que esta contribucion se exigia con arreglo á la instruccion de 1.º de Julio de 1864, con las tarifas y reglas que la misma determinaba, con el sistema de recaudacion que he indicado; no he de recordar que la contribucion de consumos, despojada de su organizacion natural y de los requisitos que caracterizan el impuesto, va á ser inútil é ineficaz.

Pues bien, aseguro á los señores senadores y al señor ministro que, aunque en mera hipótesis supongamos un imposible, y yo no quiero argumentar en hipótesis cuando discuto esta materia, que aunque supongamos que la contribucion ó el impuesto sobre los artículos de comer, beber y arder, á que yo llamo impuesto de consumos, que se concede á los ayuntamientos y provincias, va á producir una cantidad á que no puede llegar, como sería la de 250 millones de reales, aun en este caso, y concediendo por via de suposicion que produzca esa cantidad, resultará, segun el estado que yo he de presentar á la consideracion del Senado en tiempo oportuno, que los presupuestos provinciales y municipales habrán de registrar un déficit de 460 á 500 millones de reales. Me propongo demostrarlo: presentaré á este efecto los datos necesarios, y reto al Gobierno á que si los juzga inexactos los combata con otros de carácter oficial; los compararemos, los examinaremos, y el Senado y el país juzgarán despues. Yo planteo la cuestion en estos términos: 500 millones de déficit van á tener los presupuestos municipales y provinciales en el próximo ejercicio económico. Sepa el clero lo que desde este sitio le anuncio, sépanlo los pueblos: con la carga que se les va á imponer en virtud de este proyecto, ademas de las que vienen imponiéndoseles todos los dias, ha-

brán de tener un descubierto de cerca de 500 millones en el próximo año económico.

«Pues bien, el país que nos escucha y que nos atiende, los pueblos á quienes llega más de cerca y han de sentir inmediatamente las consecuencias de este proyecto y ver realizadas las observaciones que expongo en este sitio, comprenderán perfectamente desde luego que no hay posibilidad material de satisfacer al clero su asignacion de las cajas provinciales y municipales. Aun cuando hubiera una voluntad decidida, aun cuando hubiera el más recto, el más sano y el más santo propósito en todos los alcaldes y ayuntamientos del reino, y ya habeis visto el espíritu político que domina en muchas corporaciones populares, de que dan testimonio los alcaldes como el de Linares y otros puntos, poniéndose al frente de partidas y facciones; con tales antecedentes, repito, ya puede el clero esperar y ver clara y distintamente la suerte que le depara el señor ministro de Gracia y Justicia.

«Yo tenía que hacer otras muchas observaciones, porque son tantos los puntos de vista bajo los cuales se puede estudiar y debatir este proyecto que, si fuera á examinarle en sus distintos aspectos, sería interminable esta discusion.

«Yo tendría mucho que decir analizando el proyecto bajo el punto de vista del derecho libérrimo que tiene la Iglesia, como lo tienen las asociaciones legítimas, para adquirir, conservar y poseer bienes inmuebles y de toda clase. Mis doctrinas en este punto son las que consigna el Concordato de 1851 y el convenio de 1859. Como diputado he aprobado este convenio; como senador necesito repetir que no he modificado mis ideas y que las mantengo en toda su integridad. Todo con el acuerdo de Roma; nada sin el acuerdo de Roma: éste es mi lema y mi invariable principio. Las Córtes de 1859, á las que me envanezco de haber pertenecido, consiguieron la desamortizacion de los bienes de la Iglesia, porque era una necesidad social, y lo consiguieron porque es sabido que á la Iglesia se la encuentra benévola siempre, cuando se la busca por dignos, nobles y levantados medios: á aquella desamortizacion se prestó la Silla Apostólica; pero al mismo tiempo hemos reconocido en el convenio un principio, nótese bien, un principio que sostendrá siempre la Silla Pontificia, y es la libre facultad de adquirir en favor de la Iglesia, facultad que tienen hoy todas las asociaciones legítimas dentro del Estado, en virtud de la Constitucion democrática que rige en nuestro país.

«Combato, pues, el proyecto bajo este punto de vista, porque



niega legítimos derechos de la Iglesia, porque reglamenta y limita el ejercicio de un derecho constitucional que asiste á la Iglesia, como asiste particularmente á los individuos ó fieles que constituyen esa asociacion; porque es un derecho, como se dice ahora, inherente á la personalidad humana, y que subsiste, no solo en tanto que consideramos al hombre individualmente, sino en cuanto le vemos asociado y en relacion con sus semejantes. Combato, pues, el proyecto porque limita, porque restringe un derecho libérrimo de la Iglesia, y ataca un artículo constitucional. No hay facultad ni poder en el Estado para obligar á la Iglesia, para obligar á la Silla Apostólica, sin su acuerdo, sin su consentimiento, á permutar dentro de cierto período los bienes inmuebles que pueda adquirir.

El proyecto primitivo del Sr. Montero Rios iba todavía bastante más allá en este punto concreto. El proyecto del señor Montero Rios trazaba un límite fuera del que la Iglesia no podía ejercitar el derecho innegable de adquirir, que tendria indisputablemente, aunque no fuera mas que considerándola como una de tantas asociaciones legítimas que viven á la sombra de las instituciones.

El Sr. Montero Rios decia: la parroquia, el clero colegiado, el catedral, podrán adquirir bienes inmuebles; pero solo dentro de un límite que habia de ser, segun S. S., un equivalente á los rendimientos ó productos de las dotaciones y tipos que establece el Concordato. De modo que el Sr. Montero Rios, obediendo no sé á qué principios, no sé á qué doctrina constitucional, canónica ni jurídica, establecia una limitacion á la facultad de adquirir, que lo mismo á la comision que á la mayoría del otro Cuerpo ha parecido demasiado restrictiva, por lo que hubo de modificarse el proyecto en este concepto; pero yo niego al Gobierno la facultad y el derecho que se atribuye arbitrariamente para limitar la libre adquisicion en favor de la Iglesia, y me opongo abiertamente al dictámen de la comision con relacion á este particular.

La Iglesia tiene, ha tenido siempre la libre facultad de adquirir bienes raíces, bienes inmuebles y de todas clases; no es verdad que haya ley alguna en nuestros Códigos que establezca limitacion directa ni indirecta respecto de este punto; no hay ley que ponga límites á la Iglesia en cuanto á la libre facultad de adquirir. Hablo de las compilaciones de carácter general; pero aun descendiendo á otras de menor importancia, á las que se conocen con el nombre de fueros locales ó particulares, á cuyo arsenal van á buscar sus armas todos los que quieren es-

grimirlas en ese terreno, estoy tambien dispuesto á seguirles en él y á entrar en ese debate con el señor ministro, puesto que invoca la autoridad de esos fueros en apoyo de su doctrina, á juzgar por algunas de las aseveraciones que se ven escritas en el preámbulo del proyecto.

Creo, y voy á concluir, pues estoy muy fatigado y no puedo continuar, haber demostrado que el proyecto sometido á vuestra consideracion es antipolítico, es anticonstitucional, viola y quebranta el texto y el espíritu del artículo indicado del Código fundamental: creo que viene á arrojar más combustible en medio del incendio que devora y destruye el país, exacerbando la lucha en que se ha colocado el poder temporal con la Santa Sede, y estableciendo un precedente fatal, que es el de perpetuar el divorcio, el alejamiento, la separacion horrible que existe entre la Iglesia y el Estado. Creo haber demostrado tambien que el proyecto carece de estudio y que no viene acompañado de los antecedentes necesarios para que, bajo el punto de vista económico, los señores senadores puedan examinar y conocer el estado, la situacion dolorosa y aflictiva de los municipios, y si cuentan con los medios y recursos necesarios para subvenir á la nueva carga que se les impone; y entiendo igualmente, por último, haber demostrado que el proyecto es anticatólico, porque al cabo el derecho existente en España es el Concordato de 1851, adicionado por el convenio de 1859, y yo no puedo conceder al poder temporal, no puedo conceder al Gobierno, no puedo conceder á las Córtes, porque es un absurdo concederles facultades para legislar sobre esta materia, sin el concurso, sin el acuerdo, sin la inteligencia con la Sede Pontificia.

He dicho.

Los señores senadores que hay en el salón oírán atentamente al señor Morales Díaz cuando echado de ver que el discurso de su señoría encierra una impropiedad mas fuerte y vigorosa al proyecto que aquel que tuvo yo el honor de pronunciar. Hay absoluta diversidad de opiniones entre el Gobierno, entre el Sr. Morales Díaz y el individuo de la comision que se levanto á sostener el dictamen; y esta diversidad de opiniones merece sobre puntos de doctrina capitales.

Por esto me admira que el Sr. Morales Díaz, al sustentar



323

SESION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE.

Habia consumido todo el resto de la sesion del dia anterior el Sr. Morales Diaz, que en un extenso discurso contestó, en nombre de la comision, al Sr. Suarez Inclan.

Los puntos principales en que se ocupó, y de los que el senador alfonsino se hizo cargo en su rectificacion, están por éste claramente señalados, y es, por lo tanto, innecesario exponerlos para la inteligencia del debate.

Rectificando, pues, el Sr. Suarez Inclan en esta sesion, se expresó en los siguientes términos:

El Sr. SUAREZ INCLAN: Señores senadores, soy enemigo de ocupar la atencion del Senado con largas rectificaciones. Harto molesté su atencion en el dia de ayer, y le doy las gracias por la benevolencia con que se ha dignado escucharme; procuraré ser breve, condensando en las ménos palabras posibles las rectificaciones de hecho y de concepto en que incurrió ayer el señor individuo de la comision que contestó á mi discurso.

Los señores senadores que hayan oido atentamente al señor Morales Diaz habrán echado de ver que el discurso de su señoría encierra una impugnacion más fuerte y vigorosa al proyecto que aquel que tuve yo el honor de pronunciar. Hay absoluta diversidad de opiniones entre el Gobierno, entre el Sr. Montero Rios y el individuo de la comision que se levantó á sostener el dictámen; y esta diversidad de opiniones recae sobre puntos de doctrina capitales.

Por esto me admira que el Sr. Morales Diaz, al sustentar

ideas y principios que tan fundamentalmente se apartan de los del Gobierno, hubiera aceptado el cargo de individuo de la comision y emitido un dictámen favorable al proyecto. ¡Cosas vamos viendo tan sorprendentes y extraordinarias, que ya en realidad no tiene uno nada de que admirarse! El Sr. Morales Diaz viene á la comision con el criterio de la escuela democrática pura, y S. S., que sustenta los principios que forman la base y fundamento de esa escuela, naturalmente tenía que encontrarse de frente con las doctrinas que sostiene el Sr. Montero Rios en éstos y otros asuntos graves de administracion y de gobierno, y este antagonismo de ideas y esta discordancia de escuela es la causa del raro espectáculo que estamos presenciando.

Tratábase, por ejemplo, de si la Iglesia es una corporacion ó asociacion legítima dentro del Estado, y que, como personalidad jurídica, ha tenido siempre perfecto derecho de adquirir, y el Sr. Morales Diaz niega rotundamente este principio. Por el contrario, el señor ministro de Gracia y Justicia, que viene de otro campo y sostiene otro sistema, funda principalmente su proyecto en el principio de que la Iglesia tiene hoy, como ha tenido siempre, desde Constantino, la libre facultad de adquirir toda clase de bienes. Pónganse de acuerdo el Sr. Morales Diaz y el señor ministro de Gracia y Justicia, y explíquennos, como se lo ruego, el extraordinario fenómeno de que el primero de estos señores se siente en esos bancos, sosteniendo un proyecto que pugna abiertamente con sus opiniones y doctrinas en materia tan grave.

El Sr. PRESIDENTE: Sr. Suarez Inclan, S. S. vió la latitud con que ayer habló, pero hoy no puede refutar las doctrinas del señor senador que le contestó; solo puede rectificar los errores de hecho ó de concepto equivocados que á S. S. le haya atribuido.

El Sr. SUAREZ INCLAN: Sr. Presidente, tiene S. S. razon; pero las necesidades del debate suelen llevar, en el orden de los razonamientos y de las apreciaciones, más lejos del punto á donde uno se encamina, colocándole fuera de los límites estrechos de una mera rectificacion reglamentaria.

No es verdad que la Iglesia no haya tenido, no tenga hoy la libre facultad de adquirir bienes de todas clases, principio que S. S. ha sustentado y tratado de probar, á mi juicio con poca fortuna y negativo resultado.

¿Y para qué he de entrar yo en una refutacion detenida, ampliando los razonamientos, las consideraciones que hice á



ste propósito, cuando me basta poner frente á frente al Sr. Morales Díaz con el señor ministro de Gracia y Justicia? Entiéndanse SS. SS., que á mí me basta invocar las opiniones del Sr. Montero Ríos, conformes con las mías en este punto concreto. El Sr. Morales Díaz, tratando de combatir algunas de mis observaciones contra el proyecto bajo el punto de vista constitucional, ha pretendido demostrar que el proyecto de ley puede descargar del presupuesto general del Estado la dotacion de clero, trasladándola á los presupuestos municipales y provinciales, sin infringir ni quebrantar el art. 21 de la Constitucion, á cuyo fin intentó probar S. S. que la palabra *nacion* no es sinónima de la palabra *Estado*. Algo de argucia y de sofisma encuentro en esta distincion. La *nacion*, al efecto del art. 21 de la Constitucion, en cuanto prescribe y determina que es obligacion del pueblo español mantener el culto y clero, es voz sinónima y equivalente de la palabra *Estado*: lo que hay es que los constituyentes de 1837 emplearon el primero de estos vocablos en el artículo de la Constitucion de aquel año, que habla de la religion católica apostólica romana, con exclusion de toda otra, como habian hecho los constituyentes de 1812, que se proponen imitar fielmente los demócratas y radicales, y se copió la misma palabra *nacion* en la Constitucion reformada en 1845, y la adoptaron tambien los constituyentes de 1869; de manera que, sin haber introducido variante en la expresion material del concepto, constantemente hubo de emplearse la voz *nacion* en un mismo sentido en los Códigos fundamentales anteriores al actual.

Y no puede desconocer el Sr. Morales Díaz que la inteligencia que se ha dado á la palabra *nacion*, como hecho legal en la práctica, es la que yo vengo sosteniendo. El Estado, como entidad que representa la colectividad de los pueblos, ha tomado á su cargo pagar la dotacion al clero; así se ha entendido siempre, así lo entiendo yo, y así entiende todo el mundo lo que expresa y significa la palabra *nacion*, escrita en el art. 21 de la ley fundamental del Estado.

Mucho siento, señores senadores, haber oido de boca de un senador, y más si es individuo de la comision, los calificativos que el Sr. Morales Díaz ha empleado en la sesion de ayer refiriéndose al clero, y mucho más al pobre y sufrido y por todos conceptos dignísimo clero parroquial. ¡Ah, Sr. Morales Díaz! si á S. S. se le hubiese privado de los medios materiales de subsistencia por el largo período de dos años y medio; si S. S. no contase como no cuentan los afligidos párrocos mas que con una

exigua y mezquina dotacion para cubrir sus necesidades y atender á las de sus feligreses, pues las casas rectorales en este país católico son, como suele decirse, el paño de lágrimas de los infelices campesinos, de la viuda honesta, del pobre enfermo, del huérfano desamparado; si S. S. se viese privado por espacio de dos mortales años y medio de su haber reducido, quizás habria empleado otro lenguaje muy distinto de aquel, que con dolor y pena he oido de los labios de S. S. en la sesion de ayer.

Yo condeno ¿cómo no he de condenar? la conducta de esos párrocos que, abandonando su sagrado ministerio, han ido á unirse á las facciones, lo repruebo como S. S.; pero hay palabras que la explican hasta cierto punto, hay motivos que pueden excusar y atenuar en parte esa falta. Si con ellos se hubiera empleado otro sistema, si á esos desgraciados párrocos no se les hubiera privado de los medios de subsistencia, reduciéndolos á la miseria y á la abyeccion, entonces estaria en su lugar la acusacion; pero cuando se les condena con rencorosa persistencia á una situacion inhumana y degradante, al envilecimiento, hay que tener en cuenta que no son ángeles ni espíritus puros; que sienten las necesidades del hombre corporal, y de algun modo han de procurar satisfacerlas.

El Sr. Morales Díaz, recogiendo en cierto sentido una observacion que yo me permití hacer respecto á los fundadores de dinastías y las cualidades que yo creia debian tener los que se encuentran en ese caso, como lo atestigua la historia, nos ha dicho que el reinado de Felipe V era sin duda aquel á quien yo me referia, porque se habia dejado dominar por una influencia italiana, por un abate, truhan purpurado, que así calificó el Sr. Morales Díaz al que yo llamo esclarecido, entendido y hábil ministro Julio Alberoni. Señores, que Julio Alberoni no era hombre vulgar lo atestigua el hecho de que, siendo hijo de un oscuro campesino de Fiorenzuola, llegó á la primera dignidad, al primer puesto en la corte de Felipe V, por su inteligencia, por su capacidad y por las eminentes cualidades de hombre de Estado de que estaba adornado; eso no lo desconoce ni lo ignora nadie, y hemes de convenir en que desgraciado estaba el Sr. Morales Díaz en esa cita histórica, al menos con el propósito que llevaba S. S. al evocarla.

Julio Alberoni no sirvió los intereses de Italia (nótese bien esto) al lado de Felipe V de Borbon; por el contrario, Julio Alberoni, al influir cerca del rey para concertar su enlace con Isabel de Farnesio, su segunda esposa, fué inspirado por el no-



bilísimo y patriótico pensamiento de que, en virtud de este matrimonio, viniesen á formar un día parte de los dominios de la nacion española, los estados de Parma y de Toscana, de los cuales aquella princesa era presunta heredera, por falta de sucesion directa del duque su hermano. Vea, pues, S. S. cuán desgraciado ha estado en la cita. Yo hablaba de otras influencias que, colocadas cerca de la corte, en íntima relacion con ella, pretenden buscar en el apoyo oficial del gobierno español un instrumento al servicio de intereses que no son españoles.

Julio Alberoni, al lado de Felipe V, sirvió lealmente en mi sentir á la nacion española, aspirando á que volviera á ejercer su predominio en los ducados y estados de Italia. Y, señores ¿quién otro que Julio Alberoni fué el que preparó aquella colosal expedicion marítima que ocupó la Cerdeña en tiempo de Felipe V? Si esta nacion empobrecida, debilitada y casi exánime, como la habia dejado el reinado anterior, de repente se vió con sorpresa y admiracion de Europa dotada de medios y recursos bastantes para armar aquella poderosa escuadra, ¿á quién se debió esto sino al esclarecido Julio Alberoni? Conste, pues, que, queriendo forzar las cosas y sacarlas de quicio, ha servido muy mal á los propósitos del Sr. Morales Diaz el recuerdo del reinado de Felipe V y de su primer ministro el cardenal Julio Alberoni. Ya quisiera yo que hoy otro Julio Alberoni pudiese influir aquí, en el sentido de que hablo, para que España ejerciese predominio en Italia; no para que Italia le ejerza en España, como ahora acontece, con mengua del decoro nacional.

Finalmente, he dedicado la segunda parte de mi discurso, dándole alguna extension, á demostrar que, supuesta la situacion económica de las corporaciones populares, supuesta la situacion aflictiva en que se encuentra la Hacienda municipal y provincial, supuesta la indotacion y la insolvencia de los servicios y obligaciones que pèsan sobre las cajas municipales, es de todo punto imposible, materialmente imposible, que el clero pueda percibir sus haberes con puntual justicia de los presupuestos provinciales y municipales, que se van á recargar con este nuevo servicio.

¿Qué se ha dicho en contestacion á esta parte de mi discurso? ¿Se ha dado una réplica satisfactoria? ¿Se han presentado datos de carácter oficial para impugnarme y contestarme? Ni una sola palabra: únicamente el Sr. Morales Diaz suponía que yo hablaba de memoria; me parece que, al fijar yo en 1.000 millones de reales los gastos que van á pesar en el próximo ejercicio económico sobre los ayuntamientos y diputaciones provinciales, he

dicho que hablaba con los datos que me proporciona el *Anuario estadístico* publicado con carácter oficial en 1870.

He dicho que, como quizás haya de tomar parte en la próxima discusión de presupuestos, no quería molestar ahora la atención del Senado exponiendo y presentando las cifras que han de tener más oportunidad en aquel debate. Conste, pues, que al consignar yo que los presupuestos provinciales y municipales de gastos se acercarán á la suma de 1.000 millones en el próximo ejercicio económico, he demostrado todo lo grave y además perturbador que es el proyecto que se discute. El ejercicio económico de los presupuestos locales está en consonancia con el del Estado en cuanto al período de su duración, porque ambos comienzan en 1.º de Julio y terminan en 30 de Junio del año siguiente, resultando en consecuencia que á mitad de ejercicio se llevará á dichos presupuestos una perturbación completa, porque tienen que dar cabida á nuevas obligaciones, á nuevos gastos que implican el pago de la dotación del clero, y á que se establecerán nuevos ingresos, nuevos órdenes de rentas, que no sé yo ni cómo ni por quién se han de distribuir, ni ménos quién los ha de recaudar.

La confusión, el desorden material que tales operaciones van á producir en la contabilidad provincial y municipal son incalculables.

Expuse además que para levantar tan pesada, abrumadora carga, representada por cerca de 1.000 millones de reales, que aun suponiendo un imposible, cual es que la contribución de consumos, planteada sin fletatos, sin puertas, despojada de todo lo que impide la libre circulación y el comercio interior en los pueblos, haya de producir 250 millones de reales, aun así, lo cual es imposible, los ayuntamientos se van á ver con un déficit de 470 á 500 millones de reales; apelo al tiempo: él vendrá á dar testimonio de mis asertos y á demostrar si yo estoy equivocado ó aquellos que me combaten.

He dicho.

Al rectificar el Sr. Morales Diaz, contestó á varias de las aseveraciones que acababa de hacer el Sr. Suarez Inclan; ocupándose de lo que este senador habia expuesto referente al triste estado en que la Hacienda de la provincia y del municipio se encontraban, quiso hacer pesar la responsabilidad de ello sobre las administraciones moderadas y sobre la de los cinco años de la union liberal.



El Sr. Suarez Inclan rectificó para defender á esta última de semejante acusacion, expresándose del modo siguiente:

El Sr. SUAREZ INCLAN: No puedo ni debo dejar sin contestacion, ni sería decoroso para mí, algunas de las especies que acaba de emitir el Sr. Morales Diaz. Este señor senador ha pretendido increpar á una administracion gloriosa que siempre recordará con grande elogio el país, que yo he tenido la honra de apoyar y defender, suponiendo con flagrante injusticia, y solo impulsado por la pasion política, que ella ha sido la causa de la insolvencia del Tesoro, el estado desdichado de bancarota de la Hacienda municipal y provincial. ¡Cómo, señores, permitirse semejante asercion sin prueba de ninguna clase que venga á demostrarlo! ¡Cómo estaba el crédito público en Julio de 1866, cuando dejó el ilustre duque de Tetuan la administracion de este país? ¡Cómo estaba la administracion pública en todos sus ramos? ¡Cuáles eran los tipos de cotizacion en la Bolsa de nuestros valores públicos? ¡Cómo estaba el crédito del país en el exterior? Permitidme, señores senadores, que me exprese con este calor, porque no puedo dominar la impresion que me han causado las infundadas, gratuitas, inexactas aserciones del Sr. Morales Diaz.

No se contesta á mi discurso con generalidades ni con acusaciones á la union liberal en sus buenos tiempos, destituidas de todo fundamento; es necesario aducir pruebas de lo que se dice, ó de lo contrario sufrir las consecuencias de la ligereza en la expresion de los hechos que no son ciertos. ¡Que se había utilizado la union liberal de los productos de la desamortizacion! ¡En qué, parece preguntar el Sr. Morales Diaz, se ha invertido el producto de esa desamortizacion? ¡Tan ofuscado está su señoría que no ve cruzada toda la Peninsula de caminos de hierro? ¡No ve magníficamente alumbradas nuestras costas, como no están las de ninguna potencia de Europa? ¡No ha visto S. S. el desarrollo que entonces se dió á los trabajos de nuestros arsenales? ¡No ha visto á qué punto se perfeccionó y mejoró el material de nuestro ejército? ¡No ha visto el grado de pujanza á que se elevó la marina y el aumento considerable de la armada? ¡No ha visto los miles de kilometros de carreteras que se han construido, las obras de consideracion en varios puertos, las líneas telegráficas que cruzan todas las provincias y la prosperidad creciente en todos los ramos? ¡Ah, Sr. Morales Diaz! la España recordará siempre con entusiasmo, con admiracion

y con orgullo aquellos cinco años en que había paz, orden, sosiego y verdadera y amplia libertad, progreso positivo, prosperidad, en fin, en todos los ramos de la administracion del Estado. Es en vano venir con alharacas y sofismas, pretendiendo oscurecer lo que está á la vista de todo el mundo. La administracion de los cinco años....

El Sr. PRESIDENTE: Eso no es rectificar, Sr. Suarez Inclan.

El Sr. SUAREZ INCLAN; Señor presidente, permítame su señoría, me considero atacado como funcionario que he tenido la honra de prestar mis humildes servicios á la administracion calumniada, y creo que debo volver por su defensa y su vindicacion.

El Sr. PRESIDENTE: Eso podrá hacerlo S. S. en ocasion más oportuna; límitese ahora á rectificar.

El Sr. SUAREZ INCLAN: Rertificaré, señor presidente.

La administracion municipal y provincial estaba en aquel periodo á la misma altura que la del Estado. Yo puedo decir al Sr. Morales Diaz que el ejercicio económico de los presupuestos de los municipios y de las provincias se cerró con sobrantes en 1866, porque entonces había orden, administracion y gobierno; entonces los municipios percibian 150 millones por la contribucion de consumos, que habeis proscrito y suprimido empíricamente, para volverla á restablecer en malas condiciones; porque entonces los municipios cobraban los recargos, de segura recaudación, sobre las contribuciones directas, que subian á muchos millones, que el Estado se ha apropiado injustamente por el gran vacío que dejaba en sus arcas la abolicion de los consumos.

Habeis privado al municipio y á la provincia de cuantiosos ingresos por la tributacion indirecta; les habeis privado de los recargos sobre las contribuciones directas, que han quedado incorporados al cupo del Tesoro para suplir los rendimientos de los suprimidos consumos, teniendo que pasar por las horcas caudinas de restablecerlos, segun lo hace ó intenta hacerlo el señor ministro de Hacienda, comprendiendo, aunque tarde, las tristes consecuencias de tantos errores económicos como se han cometido de cuatro años á esta parte. Habia en la época á que me refiero orden en la administracion local; yo quisiera discutir esto muy al detalle, no con vaguedades como el Sr. Morales Diaz, para probarle que entonces hubo gobierno y administracion; no empirismo, no declamaciones de escuela estériles, que tanto perjuicio han traido sobre este país, sino administracion ordenada, regularizada, práctica y de gobierno. Señor presi-



dente ruego á S. S. me dispense, y nada más tengo que decir.

El ministro de Gracia y Justicia Sr. Montero Ricos terció en el debate, para protestar de las declaraciones dinásticas hechas en su discurso por el Sr. Suarez Inclan, y, entre otras cosas, siendo repetidas veces interrumpido por este senador, dijo:

«¡Quién me habia de decir á mí que á los pocos momentos una persona tan distinguida como el Sr. Suarez Inclan, de tan notables antecedentes políticos en nuestra patria, que concurrió de una manera tan eficaz á la obra revolucionaria de 1868 (*El Sr. Suarez Inclan*: No), que dió fuerza á la Constitucion del Estado con su voto (*El Sr. Suarez Inclan*: No), que desempeñó altos cargos en la administracion pública despues de la revolucion de 1868 (*El Sr. Suarez Inclan*: Sí); quién me habia de decir á mí que habia de venir á sostener una causa completamente muerta, que murió á manos de la revolucion de 1868, á la que habia servido con sus distinguidas y extraordinarias dotes el señor Suarez Inclan!»

El senador alfonsino rectificó en estos términos:

El Sr. SUAREZ INCLAN: Sería en mí faltar á un deber de cortesía si no me hiciese cargo en breves frases de las que me ha dedicado el señor ministro de Gracia y Justicia.

Yo no sé, señor ministro, si sostengo una causa muerta; acaso se equivoque S. S. en este aserto: yo he tenido el mérito, si es que cabe en ello mérito, de hablar con claridad y franqueza en este cuerpo; quizás lo que algunos llaman, con más ó menos acierto, en determinadas circunstancias conveniencias políticas, que pueden tambien traducirse por egoismo personal, me hubiera aconsejado guardar absoluto silencio sobre lo que, en mi concepto, puede remediar los males y restañar las heridas que destilan sangre en esta nacion sin ventura.

Yo, con más franqueza; yo, respondiendo á mi temperamento, á mi idiosincrasia, y creyendo que es deber de todos los senadores y hombres públicos decir la verdad á su pais, la he dicho dando al viento una bandera: bien claro hube de explicarme, señores senadores; me parece que todo el mundo sabe lo

que soy, lo que pienso y lo que signifíco y represento en este sitio. No soy, señor ministro, tiene S. S. razón en decirlo, no soy partidario de esa causa á cuyo servicio afirmaba su señoría que yo he puesto mi pobre razonamiento y mi pobre palabra; pero si mi bandera es otra, si mi lema es otro, porque yo he profesado siempre el principio monárquico-constitucional dentro de una monarquía templada, hay puntos de contacto, hay principios que son comunes á muchas escuelas; ¡pues no lo han de ser, señores senadores! Todo lo que representa y defiende los intereses de instituciones seculares, los elementos de verdadera representación social en el país, ¿no ha de ser su defensa común á todos los partidos conservadores? ¿Quién lo ignora?

Pues los intereses conservadores, las instituciones permanentes, los elementos sociales á que yo quiero que se dé fuerza y prestigio para restablecer el orden moral en esta desgraciada España, son los que han tenido un débil representante en mi humilde persona en la sesión de ayer. No, Sr. Montero Ríos, yo no he tenido parte en los acontecimientos que provocaron los sucesos de 1868: en eso ha incurrido S. S. en una equivocación: yo entonces estaba retirado en el modesto hogar de mi familia; pertenecía á un partido político que habia militado á las órdenes del ilustre duque de Tetuán, de lo cual me envanezco y habré de envanecerme siempre.

Vinieron aquellos sucesos á que yo no habia contribuido, en que no habia tenido parte alguna, lo he dicho ya cien veces; y al lado de mis amigos hube de continuar, y los he seguido mientras he creído que iban por mi camino y que servían á lo que, en mi juicio, reclamaban entonces los intereses de mi país; esto explica por qué yo he desempeñado un cargo oficial durante el gobierno provisional; pero desde el momento en que hube de convencerme que el derrotero era funesto, cuando se abandonaban por completo las instituciones venerandas, únicas que pueden salvar á este país, entonces fué cuando abandoné aquella administración. No hay, pues, inconsecuencia en mí, señor ministro; yo estoy hoy donde he estado siempre, no he desertado de mi bandera ni he faltado á ninguno de mis principios: he firmado la Constitución vigente, sí; la he firmado como diputado constituyente que he sido, pero salvando todos y cada uno de los votos que he emitido acerca de las bases fundamentales de la Constitución.

Yo no he votado la libertad de cultos; ¿cómo la habia de votar? Yo no he votado tampoco el sufragio universal; ¿cómo ha-



bia de votarle? Yo no he votado, en fin, tantas otras cosas que forman parte integrante de ese Código; y he dicho en otra ocasion y repito ahora que, para protestar solemnemente de que nuestra adhesion á la ley fundamental no indicaba, la conformidad absoluta con todos sus artículos, se levantó en la otra Cámara el Sr. D. Francisco Santa Cruz, antes de firmar la Constitucion, á consignar una protesta en ese sentido en nombre de todos los que sustentábamos los mismos principios.

Celebro que el gobierno radical que hoy está al frente de los destinos del país navegue con mar bonanza, con mar tranquila y que acaricie el pensamiento de consolidar y arraigar lo que yo juzgo imposible, lo que tropieza con obstáculos insuperables; y como yo creo que por la coincidencia indeclinable de los sucesos este propósito, noble á juicio de los señores ministros, funesto en mi sentir, es irrealizable, tiendo la vista al faro luminoso que puede señalar, que señala en efecto el puerto de seguridad para esta nacion, para los intereses de mi patria. Yo quisiera que los señores ministros, siguiendo ese camino y con esas miras, hubieran encontrado un árbol frondoso de profundas raíces, sólido cimiento de monarquías seculares, ora por el genio del conquistador, ora por el brillo de las armas, ora por los títulos esclarecidos que constituyen el fundamento de todas las dinastías en el mundo, y ademas porque encarnan los medios de dar satisfaccion á grandes necesidades sociales.

Si el señor ministro cree que existe ese árbol añoso, y el Gobierno en situacion de poder llerar altísimos deberes en las difíciles circunstancias que atravesamos, bajaré mi cabeza y nada habré de replicar; mas si S. S. piensa que la situacion de las cosas es, por desgracia, de todo punto contraria; si se agitan en el vacío que se agranda por momentos; si están arrimados á un árbol estéril, sin sombra, sin savia, sin vigor, sin lozanía, sin raíces que lo sostengan, entonces habrá de darnos la razon y decir que el senador Suarez Inclan hace muy bien y cumple un deber patriótico enarbolando la bandera bajo cuyos anchos pliegues me cobijo con legítima esperanza y ardiente entusiasmo.

SESION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE.

Habiendo acordado el Senado á propuesta de su presidente, cuando empezó la discusion de este proyecto de ley, que por su importancia se ampliase el debate, el Sr. Ródenas consumió el cuarto turno en estos términos:

El Sr. RÓDENAS: Señores senadores, siempre que os dirijo la palabra necesito de vuestra benevolencia; pero hoy doblemente, que el estado de mi salud es poco satisfactorio.

Señores senadores, todos conoceis mis ideas, y por lo mismo no tengo necesidad de hacer aquí nueva protesta de fé política. Soy consecuente con mis principios, y fundo mi gloria en no asociarme jamas á los que creen que es lícito volver las espaldas á la desgracia. Para mí, el infortunio noblemente sobrellevado no es mas que un nuevo y precioso esmalte del derecho. Pero, aunque así pienso, y aunque ésta es mi principal gloria, en este instante me olvido de todo lo que á mi pudiera referirse, para no acordarme de otra cosa que del interes general ó de lo que exige la conveniencia pública. El proyecto de ley que ahora se discute es tan grande y tiene tanta trascendencia, que, sin cometer una gravísima falta, no se podria examinar bajo el punto de vista, siempre estrecho, de una sola fraccion política. Yo, pues, trataré esta cuestion sin pasion, sin espíritu de partido y sin mira alguna de oposicion, y solo con el deseo de que el Gobierno y el Senado se persuadan de que el mal que nos amenaza es la demagogia, y de que la Iglesia es el más fuerte dique que puede oponerse al torrente demagógico. ¿Está conforme con este principio, tiende á este fin el proyecto de ley que hoy discutimos? Creo que no; pero, antes de examinarlo,



voy á exponer algunas observaciones, en mi opinion no desprovistas de intereses.

No há muchos dias que tuve la honra de defender en esta misma Cámara las exposiciones de algunos arzobispos y obispos, y pedir que recayese sobre ellas un dictámen favorable. Al contestarme el señor ministro de Gracia y Justicia, entre otras cosas, me dijo que pudiera hacer mi obra más útil y más meritoria para el país empleando mis esfuerzos en facilitar la reconciliacion entre el Gobierno y la Iglesia. No acepté esta mision, porque mi influjo cerca del clero es, ni puede menos de ser, muy escaso; pero aunque fuese de otra manera, aunque hubiera podido aceptarla, ¿qué resultado hubieran tenido mis tan desinteresadas como humildes gestiones? ¿Hubiera sido posible restablecer la armonía? Por más que el clero hubiera estado animado de los más pacíficos sentimientos, ¿habria sido posible la paz? De ninguna manera. En efecto, á los pocos dias de hablarme de deseos de reconciliacion, rompe el Gobierno de nuevo las hostilidades trayendo al Senado el proyecto de ley de obligaciones eclesiásticas, que por necesidad ha de ser causa de un rompimiento definitivo. Y no se crea, señores, que juzgo con severidad el proyecto de ley. Léanse con detencion sus principales disposiciones, medítense bien, y se verá cuán exacta es la apreciacion que acabo de hacer.

El proyecto de ley es una revolucion completa en la disciplina eclesiástica vigente. En su virtud se rompe solemnemente el Concordato; se quita á la dotacion del clero el carácter de indemnizacion ó carga de justicia; se disminuye esta misma dotacion; se dispone de una manera anticanónica de parte de los productos de Cruzada y de la obra pia de Jerusalem; se somete la Iglesia á la potestad civil, y se declara al clero como mero pensionista del Estado. Más aún: se obliga al clero á que perciba su ya tan mermada dotacion de manos de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos, lo cual tan peligroso puede ser en las críticas circunstancias que atravesamos. Y hablemos con sinceridad. ¿Se dirá que cuando así se procede se desea verdaderamente la reconciliacion? Obrar así, más bien que proponer la paz, es declarar la guerra. Pero añadía el señor ministro de Gracia y Justicia: «¿Qué adelanta el Sr. Ródenas con defender al clero? Por más que haga y diga en favor de la Iglesia, el clero ha de desconfiar siempre del partido á que pertenece S. S.» ¡Cuánto se equivoca en esto el Sr. Montero Ríos! El clero español, que tan ilustrado es, conoce la historia de los últimos cien años, y sabe perfectamente la responsabilidad que

cabe á todos los partidos, desde el absolutista hasta el radical, que durante un siglo se han sucedido en el poder. El juicio del clero, que tan recto y tan imparcial es, nos da á cada uno lo que nos corresponde.

El partido moderado, al cual he pertenecido y tengo la honra de pertenecer, no ocupó en realidad el poder ni pudo ser responsable de lo ocurrido en España hasta que ya la revolución había consumado su obra. Los conservadores, al llegar al poder, se encontraron ante un cúmulo de ruinas que de ninguna manera habían amontonado.

La revolución se había preparado por los regalistas de los tiempos de Felipe V, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, que eran absolutistas, y se había llevado á cabo por los exaltados de 1820 y 1835, que eran progresistas. El partido moderado no ha preparado ni hecho ninguna ley desamortizadora; por el contrario, las ha combatido todas. El partido moderado no ha preparado ni hecho ninguna ley regalista de esas que tanto hayan podido lastimar á la Iglesia. Esas leyes son todas antiguas ó anteriores al partido moderado. ¿Se quiere que el partido moderado, que no ha existido hasta muy adelantado el presente siglo, responda de lo que se hizo contra la inmunidad eclesiástica por el Gobierno de Felipe V en la primera mitad del siglo pasado? Carlos III expulsó á los jesuitas y les confisco sus bienes. Esto se hizo en tiempos del absolutismo. ¿Se dirá, no obstante, que la responsabilidad recae sobre el partido moderado? Se dice por algunos: si el partido moderado no ha preparado ni hecho la desamortización, se ha aprovechado de ella. Esto no es exacto, y además es un absurdo; ésta es una vulgaridad, que no se comprende siquiera en labios de personas ilustradas. Los bienes nacionales salieron al mercado, y los adquirieron quien los ha deseado adquirir, ó los que han ambicionado ser ricos; y sabido es que este deseo, esta ambición no es mal de un partido ni de una época, sino de todos los partidos y de todos los tiempos. En el reinado de Carlos III se desamortizaron los bienes de la compañía de Jesús: entonces no había progresistas ni moderados. ¿Faltaron, sin embargo, absolutistas que desearan y aceptasen aquellos bienes?

En cuanto á la tendencia general del partido conservador, el clero español ofrece en sí mismo una prueba que ha llamado y llama justamente la atención del orbe católico. Moderados y conservadores han sido los ministros de Isabel II que han presentado á Su Santidad los obispos que tan dignamente ocupan hoy las Sillas episcopales de España. Estos obispos han ido al



Concilio Vaticano, y entre todos no ha habido ni uno solo, ni siquiera uno que no se hallase en perfecta armonía con la Santa Sede. ¿Y hubiera sucedido esto si el partido conservador no hubiera tenido empeño en no proponer para las mitras, sino á personas de verdadera y probada ortodoxia? Conservadores han sido tambien los ministros que han nombrado casi todos los canónigos que hay en las catedrales de España. ¿Y cuántos ha habido entre estos canónigos que se hayan separado de la Iglesia ó se hayan puesto en rebeldía con sus prelados? Muy pocos; y esto ha sido debido al sistema de exclusion de todos aquellos de sospechosa ortodoxia. El partido moderado ha dejado de hacer algunas cosas por no poderlas hacer todas de una vez. Caminaba lentamente, pero con paso seguro y cierto, en favor de la Iglesia y en contra de la revolucion. No es hacer poco cuando poco á poco se iban restableciendo las órdenes religiosas. ¿Qué partido ha dado más libertad á la Iglesia, ha mostrado más solicitud por el Papa ó ha hecho más esfuerzos para que no dejase de percibir su dotacion el clero? Ya ve el Sr. Montero Rios cómo, entre todos los partidos, el moderado es el que ménos responsabilidad tiene en los males que ha causado á la Iglesia la revolucion. Pero supongamos por un momento que el Sr. Montero Rios no se equivocase, ó que el clero desconfiase de mi partido. ¿Sería esta razon suficiente para que yo dejase de defender la causa del clero? De ningun modo; yo soy católico y hombre de partido, y aunque el clero no pensase jamas como yo en política, yo pensaria siempre como el clero en religion. Lo he dicho antes y lo repito ahora: defendiendo al clero y combato el dictámen de la comision, no como hombre político, sino como hombre de sólidas y arraigadas creencias.

Entrando ahora de lleno en el exámen del proyecto, confieso con toda sinceridad que no comprendo cómo el Gobierno se ha atrevido á plantear esta cuestion, que tan grave es, tan pocas ventajas le trae y tantos disgustos le ha de ocasionar. En los Estados-Unidos corre muy válida una máxima que deberia generalizarse. En efecto, allí los hombres de Estado no se ocultan de nadie para decir que no debe tenerse mas que un enemigo enfrente, ó que deben hacerse todos los sacrificios posibles para que no haya dos guerras á la vez. Así es que, si estando ocupados por una cuestion se les presenta otra, la eluden ó la aplazan, por comprender que cuando se piensa en muchas cosas no se puede hacer bien ninguna. De esta manera los Estados-Unidos se ven libres de los terribles conflictos que tantas veces provoca la imprudencia ó temeridad de ciertos obcecados

gobernantes. ¡Cuán al contrario se procede en España! El Gobierno tiene hoy sobre sí la cuestión de Cuba, la de Puerto Rico, la de Filipinas, la de Roma, la de los federales, la de los carlistas, la de los conservadores de la revolución, la de Hacienda, la del cuerpo de artillería, la de revisión de grados y otras varias; y como si estas cuestiones, todas difíciles, algunas de funestísimas consecuencias, le pareciesen pocas, por mero capricho, y sin necesidad y razón, provoca la del clero, que tantos enemigos le ha de proporcionar y tantas simpatías le ha de enajenar. ¿Y qué es lo que se propone el Gobierno al obrar así? ¿No ve que esta cuestión debilita su poder y complica su política? ¿No comprende que disgustando al clero se despoja de un elemento que tan necesario es para contener á la revolución? Nunca podría justificarse, pero hoy no se puede ni aun concebir, cómo hay un gobierno que tenga la imprudencia de complicar su situación provocando una cuestión tan grave como ésta.

Los hombres políticos prudentes que desean organizar no promueven conflictos, no plantean cuestiones nuevas sino cuando la necesidad les obliga á plantearlas ó cuando, planteándolas, adquieren fuerza y prestigio en el país. ¿Se encuentra hoy en este caso el Gobierno? ¿Se ve obligado á plantear la tan delicada como espinosa cuestión del clero? ¿Quién le obliga? ¿Se agita esta cuestión en la prensa? No. ¿Se había provocado en la tribuna? Tampoco. ¿Era bandera de partidos consecuentes, poderosos y decididos, á los cuales conviniese desarmar? Menos aún. ¿Reclaman su planteamiento los pueblos? Ni han pensado en tal cosa. El Gobierno, pues, comete una ligereza suscitándose esta nueva dificultad, á no ser que tenga el empeño de que los ánimos permanezcan agitados, ó que quiera que el disgusto general y la indignación de los conservadores favorezcan indirectamente á la revolución. La verdad es, señores, que la conducta del Gobierno solo merece calificarse de temeraria.

Pero aunque el Gobierno se viese obligado á plantear esta cuestión, ¿podrá decirse que la plantea por adquirir fuerzas? ¿Por adquirir fuerzas! ¿Qué ilusión! ¿Qué enemigos va á desarmar? ¿Qué amigos va á granjearse? ¿Qué ventajas materiales ó políticas va á reportar? Supongamos que el Gobierno prescindiese de la justicia y del bien general para pensar solo en el interés de partido. Aún siendo así, ¿qué utilidad reporta de este conflicto el partido al cual pertenece el Gobierno? En religion, no hay ya jansenismo ó términos medios. Hoy, ó se cree todo, ó no se cree nada. Los que lo creen todo, los católicos, rechazan



con indignacion el proyecto del Gobierno, y los que no creen nada, los racionalistas, le combaten como hipócrita, pues comprenden que tras del proyecto está la miseria del clero. El proyecto, pues, que ahora examinamos no es ni puede ser aceptado, ni mucho ménos defendido, por nadie con entusiasmo. ¿Dónde está, pues, su utilidad política?

El Sr. Montero Rios, que sin duda ha leído á Maquiavelo, habra visto y recordará cuán peligroso es hacer leyes contrarias á las costumbres de los pueblos. Ahora bien, señores senadores, si las leyes contrarias á las costumbres de los pueblos son peligrosas aun en épocas normales, mucho más lo serán en las gravísimas y críticas circunstancias que atravesamos. El Gobierno nos dirá que no se opone esta ley á las costumbres del país, porque respeta la religion y solo legisla acerca de cosas materiales. Esto dice el Gobierno; pero nadie interpreta así el proyecto de ley que impugno. Diga lo que quiera el Gobierno, todo el mundo lo considera como lo que es, es decir, como la reglamentacion de la miseria del clero. Si el proyecto, como me temo, llega á ser ley, todos verán en ella una arma de persecucion contra la Iglesia católica. En prueba de esto, citaré solo un hecho.

Al clero, por ejemplo, se le permite adquirir bienes, pero con la condicion de que en un corto plazo los ha de enajenar y entregar su producto al Gobierno, para recibir en cambio inscripciones intrasferibles. Es decir, señores senadores, que el clero, en cambio de sus bienes, adquirirá un papel que no puede negociar porque es intrasferible y que no le producirá nada, porque el Gobierno, que no puede pagar otros intereses, mucho ménos pagará los que le reclame el clero, que son los primeros que por sistema se abandonan.

Así es que el clero se encontrará con una renta que no es renta, porque ahora no la percibe, y con un papel que no es dinero, porque no puede llevarlo al mercado. ¿Es esto reconocer en el clero el derecho de adquirir? ¿Podrá nunca interpretarse como favorable al clero una ley en la cual esto se sanciona? Además, la Constitucion reconoce en todo individuo el derecho de adquirir y poseer con arreglo á la legislacion comun. No hay razon para negar al clero este derecho que la Constitucion le reconoce. ¿Por qué se infringe pública y solemnemente la Constitucion solo para perjudicar al clero? En vista de esto, tengo derecho para decir que el proyecto, si llega á ser ley, será una ley de desconfianza hacia el clero y de persecucion contra la Iglesia. El Gobierno podrá alegar en su favor que al

clero le considera como menor de edad, y que quiere constituirse en su tutor y curador; pero esto es injusto, esto no es compatible con la Constitución. El Gobierno, despues de haber proclamado la libertad de cultos, niega la libertad al culto católico, obstinándose á ser tutor perpetuo de la Iglesia. Y cuenta, señores, que el Gobierno, al hablar así, proclama un principio que puede ser de consecuencias muy funestas. El Gobierno, sentando una máxima socialista ó partiendo de la omnipotencia del Estado, dice hoy al clero: me declaro tu tutor perpetuo, ó sea, te obligo á vender lo que adquieras, y entrégame el producto de lo que vendas. Bien sé que el Gobierno, que en este punto es inconsecuente, no aspira á ir más lejos. Pero, señores, si hoy admitís la teoría socialista del Gobierno, ¿qué responderéis mañana á otros revolucionarios más lógicos que intenten desarrollar hasta sus últimas consecuencias este principio? En efecto, mañana vendrá La Internacional, y os dirá: «Vosotros habeis admitido el socialismo contra el clero; vosotros os habeis declarado tutores perpetuos del clero, y yo me declaro tutor perpetuo de todos vosotros. Vosotros habeis obligado al clero á entregar toda su fortuna al Estado, y yo ahora os obligo á que hagais lo mismo. Entregad, pues, todos vuestros bienes al Estado. Que no haya propiedad particular. Que se considere la propiedad como un robo».

Vosotros, si aprobais el proyecto, abris la brecha. ¿Podreis despues cerrar el paso á La Internacional?

Voy ahora á considerar la cuestion bajo otro aspecto. Hoy, señores, está como de moda dar poca importancia á las creencias religiosas, ó sea el creer que es posible el gobierno de las masas, cuando en ellas no es una ley la abnegacion y el espíritu de obediencia que prescribe el Evangelio.

El mismo Voltaire se espantaba al considerar lo que podrian ser las masas el dia en que les faltase el freno de la religion.

Ésta es una cuestion muy grave, que siempre ha llamado la atencion de los hombres de Estado. ¿Habrà quien no quiera darle la importancia que en sí tiene? Pues si así hay quien piense, desconoce el arte de gobernar, y los pueblos que estén bajo su autoridad tendrán que llorar muchos males.

Yo, señores, voy á resolver este problema, valiéndome al intento, no de mis propias observaciones, sino de las de un escritor italiano, que no era católico, y que consideraba y recomendaba la religion solo bajo el punto de vista de su utilidad. Este escritor italiano y anticatólico, Maquiavelo, no creo que pueda ser recusado en las actuales circunstancias. Pues bien, Maquia-



velo, que ciertamente no podrá ser tachado de fanático, en sus discursos sobre las décadas de Tito Livio dice: «Donde no existe el temor de Dios, el gobierno sucumbe».

Y cuenta, señores, que lo que Maquiavelo quiso decir es, no que caiga un Ministerio para que se levante otro, sino que faltando el espíritu religioso se generaliza el espíritu revolucionario, y se hace imposible todo gobierno. Añade el mismo autor: «Los hombres prudentes, para hacer aceptar las leyes, recurren á la divinidad. La religion es el auxiliar más poderoso para conservar los Estados. Cuando se examina el espíritu de la historia romana, se comprende cuán útil es la religion para reconciliar los pueblos, dar seguridad á los buenos y contener á los malvados. La observancia del culto divino es el origen de la grandeza de los Estados. Por el contrario, el olvido de este culto es la causa de la ruina de los pueblos. Los príncipes y las repúblicas, concluye Maquiavelo, que quieren impedir que el Estado se corrompa, deben sobre todo mantener sin alteracion las ceremonias de la religion y el respeto que inspiran, porque el más seguro indicio de la ruina de un pais es el desprecio del culto.» Esto es, señores senadores, lo que el estudio del corazón humano hacía decir al mismo autor de *El Príncipe*.

«La revolucion no tiene dique más poderoso que la religion. Aprobad el proyecto que se os presenta, impedid que la Iglesia enseñe y practique la caridad, empobreced á la Iglesia para que no pueda difundir ideas de paz y resignacion en las masas, y cubrid la cabeza con vuestras togas, esperando, como César, el momento de la catástrofe. ¿Cuáles serán, bajo otro orden de consideraciones, las consecuencias de esta ley en el orden económico? Por de pronto, serán la anarquía administrativa y económica. La ley se aplicará con una irregularidad escandalosa. Donde haya un ayuntamiento católico percibirá su dotacion el clero. Por el contrario, donde haya una corporacion municipal poco ortodoxa se hará lo que ha estado haciendo el gobierno en estos últimos cuatro años, esto es, cobrar la contribucion de culto y clero, y no pagar al clero. ¿Y quién impedirá á los ayuntamientos seguir el ejemplo del Gobierno? Nadie. De aquí resultará que el clero se verá en la necesidad de tomar parte muy activa en las elecciones, con el fin de que los elegidos sean sus hermanos, parientes y amigos, para que le den su dotacion íntegra y en tiempo oportuno. ¿Y es esto conveniente? ¿Aconseja la sana política que se obligue al clero á tomar parte y muy activa en las luchas electorales?»

El proyecto que discutimos se ha ensayado ya en parte. La

suerte del clero sería igual á la que han sufrido los profesores de instruccion primaria, sujetando el pago de la dotacion de aquel á las mismas corporaciones que satisfacian la asignacion de éstos y por lo mismo, cierta su miseria.

Un gobierno solo vive lo que viven los principios que proclama. Cuando se separa de ellos, como el cuerpo del cual se separa el alma, se convierte en un cadáver. El Gobierno ha proclamado la libertad, y la libertad, ó es un sarcasmo, ó es la justicia, la lógica y la prudencia. ¿Hay justicia, lógica y prudencia en el proyecto de ley que impugno? He demostrado que no.

Pues bien, señores senadores, si el Gobierno prescinde de la justicia, no tendria razon de ser, ó se quedaria sin la base única que pudiera sustentarlo. Si se olvida de la lógica, renegaría de su política y de su historia; se enajenaría el apoyo de la opinion pública, perderia el de sus amigos y no ganaria el de sus adversarios. En fin, si no tiene presente los consejos de la prudencia, hará enteramente imposible su existencia, irritando, exasperando y multiplicando sus enemigos.

Para concluir, señores senadores, deseo saber qué es este Gobierno. ¿Lo es de orden ó no lo es? Aquí no caben términos medios ni frases ambiguas. Si el Gobierno se empeña en no decidirse ni por la revolucion ni por el orden, imitará al que, acercándose á un abismo, se obstina en caminar con un pie sobre el borde y otro sobre el aire. Permaneciendo así, por lo que haga en favor de la revolucion, disgustará á los amigos del orden, y por lo que haga en favor del orden, disgustará á los amigos de la revolucion. Vivir así es peor que morir, pues que solo se vive poco, en constante agonía y ninguna gloria.

Contestó al Sr. Ródenas el Sr. Rojo Arias, manifestando en su discurso que se tenía por tan católico como el senador alfonsino.

Defendió el proyecto y dijo que la oposicion del Sr. Ródenas era la de un hombre político, y de ninguna manera la de un católico.

El Sr. Ródenas rectificó de esta suerte:

El Sr. RÓDENAS: He oido con especial gusto al Sr. Rojo Arias, que esta tarde ha adelantado algo más en las buenas ideas de religion, que antes por cierto eran muy escasas; de



suerte que me felicito de haber provocado la ocasion para que S. S. haga en esta tarde una especie de protesta de fé religiosa, que tanto honra á S. S. Lo que no admito de S. S. es que suponga que he combatido el proyecto como hombre político. Clara y terminantemente he dicho que no, y esto se desprende de todas y cada una de mis apreciaciones; claramente he dicho que le combato solo como católico, si bien tenía forzosamente que hacerme cargo del proyecto como legislador, como uno de los individuos que contribuyen á la formacion de esta ley, ocupándome de la parte administrativa y económica que contiene el proyecto, pero sin separarme del espíritu dominante en mis observaciones, que es el religioso, y dejando á un lado los sentimientos políticos.

El Sr. Rojo Arias principió y ha concluido con una observacion que voy á contestar únicamente con un hecho.

El Sr. PRESIDENTE: Sr. Ródenas, S. S. no va á contestar al discurso del Sr. Rojo Arias.

El Sr. RÓDENAS: Voy á rectificar un hecho.

El Sr. PRESIDENTE: De los que le hayan atribuido equivocadamente á S. S.

El Sr. RÓDENAS: Ha supuesto el Sr. Rojo Arias que nosotros hacíamos á los hombres de la revolucion un ataque injusto; y ha adelantado más, añadiendo que lo hacíamos con un clamor constante y general desde hace cuatro años. Me parece que, pasados los primeros momentos, habia cesado algo, por más que desde que el Sr. Romero Ortiz, antecesor del Sr. Montero Rios, publicó los decretos, á los que no creo deberia estar muy agradecida la Santa Sede ni el clero, habia motivo bastante para que no mirásemos con buenos ojos la revolucion. Teníamos á más, señores, el recuerdo de aquella noche fatal en que las turbas acometieron la casa del Nuncio y arrastraron sus armas por el suelo. Dejo á la consideracion del mismo Sr. Rojo Arias, si hemos tenido ó no motivo bastante para censurar á los hombres de la revolucion. Sin embargo, no he entrado en ese terreno, y me parece que he sido más parco que S. S.

Lo que sí puedo decir es que, es tal la conducta de los hombres de la revolucion, que desde el momento en que suben al poder sale el Nuncio de Madrid, quedan interrumpidas nuestras relaciones con la Santa Sede y la Iglesia española en el mayor conflicto. ¡Y aún tiene valor el Sr. Rojo Arias para decir que es infundada esa queja!

Ha dicho S. S., y concluyo con esta observacion, que nosotros hacemos que el clero se desprenda de su sagrado ministerio y

que le echamos á negociante. Yo creo que S. S., que es hombre tan entendido en derecho, sabe muy bien la diferencia que existe entre un negociante y un propietario. He dicho.

El Sr. Rojo Arias rectificó á su vez, y, entre otras cosas, dijo que al Nuncio, en la ocasion que recordaba el señor Ródenas, nada le habia ocurrido, mientras que en el año 1834 tuvieron lugar sucesos seguramente mucho más graves, siendo gobierno hombres que no queria indicar, pues estaban presentes en la memoria de todos, y á quienes no deseaba ofender recordando sus nombres.

El Sr. Ródenas rectificó de nuevo:

El Sr. RÓDENAS: Únicamente voy á decir que el recuerdo que nos ha hecho ahora el Sr. Rojo Arias del año 34, ya se ha hecho muchas veces, y ha sido perfectamente explicado y perfectamente contestado, y por cierto que no salen muy bien librados los amigos de S. S. con tal recuerdo. Pudo haber indudablemente cierta debilidad por parte de aquel gobierno, por circunstancias de todos conocidas; pero mayor fué la del gobierno de la revolucion con los que atacaron la casa del Nuncio; y cuenta que allí habia una circunstancia gravísima, pues el Nuncio, ademas de su elevado carácter eclesiástico, era el representante de una Nacion extranjera y amiga, á quien el gobierno tenía obligacion de respetar y hacer respetar, á fin de que no fuese molestado. Por lo demas, el Sr. Rojo Arias sabe muy bien el partido á que pertenecian los autores de ambos sucesos.



SESION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE.

Ocupando el sexto turno en contra el señor marqués de Barzanallana, pronunció el siguiente discurso:

El Sr. Marqués de BARZANALLANA: Señores senadores, ardua empresa, tanto como honrosa, es la que en estos momentos tengo que llevar á cabo al levantarme á exponer algunas consideraciones, que resuman el debate elevadísimo en que estamos empeñados, sobre una de las cuestiones más graves que pueden formar objeto de las deliberaciones de una Asamblea.

Hablo después que numerosísimos oradores, algunos de ellos verdaderamente elocuentes, casi todos instruidísimos y de clara inteligencia, han dejado, por decirlo así, casi agotado el asunto en la Cámara popular y en este Senado. No puedo tener, pues, la pretension, y en ninguna manera la abrigo, de decir cosas que por la novedad interesen al auditorio que tenga á bien prestarme benévolo y atento oído: lo que puedo esperar es resumir con alguna claridad y fuerza de expresion las razones aducidas en contra del proyecto de ley que discutimos, y añadir varias consideraciones que acaso podrán tener algo de personal por la posicion que en esta cuestion tengo aquí, y por la naturaleza, si no especial, al menos preferente, de mis estudios y de mis ocupaciones.

El medio que me parece más apropósito, señores senadores, para poner algun orden en la exposicion de mis observaciones, es condensar los argumentos hechos en contra del proyecto de ley sobre los tres puntos principales que abraza, y que, por decirlo así, explican el objeto que al Gobierno ha guiado al proponer á la Cámara que lo aprobara.

He leído, releído y meditado con la detencion que exigía,

y cual era de mi deber, el discurso que el señor ministro de Gracia y Justicia pronunció en el Congreso, para empapar me bien en su genuino espíritu, y para de este modo no combatir fantasmas, sino en realidad lo que puede considerarse el centro de la fortaleza en que S. S. defendía su pensamiento.

El Sr. Montero Ríos dice que en este proyecto de ley el Gobierno trata de desarrollar y de llevar á términos tres pensamientos: uno político, otro religioso y el tercero económico.

Vamos á examinar cada uno de estos tres puntos, apesar, vuelvo á decir, de que no puedo hacer otra cosa que repetir las razones ya alegadas y que se relacionan con cada uno de estos tres pensamientos del Gobierno.

Pensamiento político. Hacer que el clero tome una parte activa en la marcha política de la sociedad, contrayendo relaciones antes casi perdidas con el pueblo, y haciendo que participe de las ideas y de los sentimientos de la generalidad de los individuos de su patria.

En primer lugar, para que el clero llegue á ser hasta cierto punto ciudadano, tal como yo creo que se desprende de las ideas expresadas por el señor ministro, ¿qué es lo que habría que hacer, señores senadores? Que el gobierno obrase de manera tal que á todas luces pareciese indiscutible su respeto á las leyes constitucionales del país á cuyo frente se encuentra. ¿Y cómo queda la Constitución con este proyecto? ¿Qué se ha contestado de valedero á los argumentos presentados, entre otros señores, con una grandísima fuerza de exposicion y, en mi sentir, con una lógica irrefragable por el Sr. Calderon Collantes, en contra de la constitucionalidad del proyecto? ¿Qué se ha dicho para responder á la observacion de que la Constitución impone al país el deber de sostener el clero y sus ministros?

Yo siempre deseo usar los términos más corteses en las deliberaciones en que tomo parte; pero creo que tengo el derecho de decir que se han contestado estas razones con argucias. Se nos ha explicado la nocion del Estado y del país de una manera ininteligible; y voy á ver si presento alguna consideracion un poco nueva, para hacer comprender á los señores senadores la justicia que me asiste, al decir que se ha contestado hasta ahora meramente con argucias.

¿Qué es el clero? El medio de hacer que un país practique y reporte todas las ventajas que tiene una religion; es decir que, al ménos en sus relaciones con el Estado y con la nacion, tenemos que considerarlo como una de las más grandes instituciones políticas. Pues vamos á examinar de qué manera son sosten-



nidas las instituciones que tienen por objeto llenar grandes necesidades sociales.

Las sociedades humanas se defienden de los ataques que otras naciones independientes puedan dirigir á sus intereses, primero por la discusion, exponiendo sus razones. ¿Quién tiene esta mision elevadísima? ¿Quién llena este objeto, que es de los que constituyen uno de los rasgos fisonómicos de la sociedad moderna comparada con la antigua? La diplomacia ¿Quién sostiene la diplomacia? ¿Son los municipios y las provincias, ó el Estado, la nacion? Y la nacion (dejo á un lado la palabra Estado para no dar ocasion á que continuemos en discusiones algo pedantescas y más académicas que legislativas) ¿qué es? Cuando se dice la nacion ¿quién habla en nombre de esta nacion, y quién paga la diplomacia á nombre de esta nacion? ¿Los ayuntamientos, las provincias ó el Estado? Es indudable que el Estado y la nacion personificada en el gobierno. Llegado el momento en que la defensa de estos intereses nacionales no es posible verla realizada por medio de la diplomacia, la voz cortés y á veces casi melosa de sus agentes se ve reemplazada por la voz tonante de los cañones, así en los campos de batalla como en las inmensas planicies del mar.

¿Quién paga entonces la guerra? ¿Quién paga los ejércitos en tiempo de paz, á fin de preparar los medios de sostener en la guerra los intereses de los pueblos? ¿Los ayuntamientos, las diputaciones ó la nacion por medio de su gobierno?

Una de las más grandes necesidades sociales es la de que los intereses de los ciudadanos queden á salvo, y que todo el mundo tenga garantido y asegurado su derecho. Esto se consigue por la administracion de justicia.

¿Quién sostiene la administracion de justicia, los ayuntamientos, las diputaciones provinciales ó la nacion por medio del gobierno? Y reparad, señores, la marcha progresiva de las ideas en este punto. No hace demasiados años (los que hemos salido de la juventud lo recordamos perfectamente) la administracion de justicia, al menos en su primer escalon, en su primer grado, puede decirse que era pagada por aquellos que más directa y personalmente reportaban sus beneficios. El juez de primera instancia, el corregidor, vivian casi exclusivamente de derechos. ¿Cómo se ha considerado que la sociedad debía pagar y remunerar á los que en su nombre, en nombre del poder nacional y legal, cualquiera que fuese la forma de gobierno, administraban justicia? Llevando esta obligacion al presupuesto general del Estado. No de otro modo se ha creido que se enaltecia esta

institucion y á los que llenaban el objeto social que, al crearla y sostenerla, se han propuesto las naciones civilizadas. Pues descendiendo un poco de esta alta institucion, y vengo á otro órden de intereses algo más secundario, para fortificar la conclusion que luego voy á sacar.

Se trata, no ya de la justicia, de esa emanacion divina, de ese inmenso bien que constituye acaso la principal ventaja de la sociabilidad y de la cultura; se trata solo de la instruccion. Pues cuando un pueblo quiere tener algunas garantias de que han de ser defendidos sus derechos ante los tribunales por personas peritas, ¿á quién se encomienda la instruccion de las personas que aquel objeto se proponen, y que han de sostener ante los jueces los derechos de los ciudadanos, sus personas y sus propiedades? ¿Se deja á la libre enseñanza, sin que el Estado intervenga de algun modo, y por medio de establecimientos por él sostenidos, para que haya, por decirlo así, peritos legales que se encarguen de la defensa de los derechos de todos los asociados?

Para aliviar á la humanidad doliente en las consecuencias de nuestra debilidad orgánica, para aliviar los dolores de los enfermos, ¿á quién acudimos sino á hombres que han sido instruidos á expensas de la nacion entera, y por medio del gobierno, en establecimientos especiales sostenidos por el presupuesto general del Estado?

Todavía, para fijar más esta idea, tratemos de la instruccion de ingenieros, encargada de aumentar con los medios de comunicacion, los de produccion y riqueza en el pais. Pues hasta esa institucion es sostenida por los fondos públicos.

Y la religion, señores, sobre todo en un pais que quiere fundar la libertad sobre sólidas bases; que está regido por hombres que dicen que están convencidos de que la libertad solo se afianza sobre fuerzas morales, y que éstas tienen su fundamento natural en el sentimiento religioso, por una excepcion única, ¿va á ser pagada como una atencion municipal, como la contratacion del alumbrado ó de la limpieza de las calles? ¿Qué manera es ésta de hacer que el clero comprenda que tiene interes en unirse con los sentimientos del pueblo, de que forma parte, y de que se convenza de que se le considera en lo que tienen de justas sus exigencias, y en lo que de todas maneras sería indispensable, no digo necesario, para el buen régimen de la república?

Ved, señores senadores, cómo el pensamiento del señor ministro de Gracia y Justicia no responde á ningun resultado con-



veniente; ved cómo, de esta manera obrando, cada día ha de haber más separacion de sentimientos entre el clero y el pueblo; ved cómo de este modo, además de que el proyecto de ley aparecerá inconstitucional, producirá en el ánimo de todos una prevencion desfavorable, de la que no pueden resultar, en definitiva, sino grandísimos inconvenientes para la libertad política.

Decía el señor ministro de Gracia y Justicia, citando las palabras de un gran pensador, de uno de los publicistas más profundos de nuestro siglo, y que es además reputado por la escuela democrática como uno de sus apóstoles más inteligentes, Tocqueville; decía, repito, el señor ministro de Gracia y Justicia que la escuela liberal ha de ir reflexionando sobre las consecuencias, para ella funestas, que no han podido menos de resultar de haber separado al clero de la posesion territorial, por la cual entraba, por decirlo así, en los intereses generales de la sociedad, los comprendía y los defendía. Después de haberle desposeído de sus bienes y de haberse llevado á cabo con fanatismo una extensa y absoluta desamortizacion, el clero se había aliado en las cuestiones religiosas con una autoridad que su señoría llamaba extranjera, con la autoridad del Sumo Pontífice; mientras que en punto á cuestiones políticas se había aliado y se había puesto á la defensa de la autoridad judicial, del poder central, de donde había venido á depender como sostenido y remunerado por el presupuesto nacional.

Pues bien, señores, si eso es así, ¿cómo será posible esperar que este proyecto de ley dé el resultado apetecido por el señor ministro de Gracia y Justicia? ¿Cómo será posible que esta dependencia, en que se va á poner al clero y al párroco del municipio, sirva para mantener esas relaciones simpáticas y cordiales, cuya falta S. S. deplora, como deplora otras cosas? ¿Qué relaciones van á establecerse entre el párroco y el municipio? Relaciones de una naturaleza mísera, antipática; se van á oponer intereses contra intereses, se va á hacer que se rebajen muchas asignaciones, si no de una manera ostensible, al menos real y positiva; ó se conseguirá que el clero, por no entrar en esa clase de disputas que rebajan su dignidad, se reconcentre en su dignidad misma y se acoja al aislamiento en que ahora le vemos ya reconcentrado. ¿Cómo será posible que así el clero varíe de sentimientos de la manera que desea el señor ministro? ¿Dónde se ha visto eso? ¿En las naciones revolucionadas, en las naciones imbuidas del espíritu que modifica la manera de ser de la vieja Europa? Recorro una por una

todas las naciones que nos han precedido en reformas radicales; observo lo que pasa en Francia, la institutora revolucionaria de la Europa occidental y latina, y veo que allí el clero es considerado, si no como una institucion que deba ser muy cuantiosamente sostenida, al menos tanto como los amigos más entusiastas del clero podian desear: allí es considerado como una institucion nacional. Por eso su dotacion se halla incluida en el presupuesto general del Estado.

— Sé perfectamente que luego la sociedad francesa ayuda en privado al clero; que los ayuntamientos lo ayudan tambien, y que ademas tiene otros medios y percibe rentas, de que en este momento no hay necesidad de ocuparnos. Pero el clero tiene allí sobre 50 millones de francos en el presupuesto hoy mismo vigente, en el presupuesto de 1872. (*Un Sr. Senador*: No.) ¿No? Me parece que la suma es de 49 millones y pico para las tres religiones sostenidas por el Estado, la católica, la protestante y la israelita, en una inmensísima desproporcion naturalmente; porque la protestante y la israelita por casi nada figuran en el presupuesto, mientras que su casi totalidad se la lleva el clero católico.

— Vamos á Bélgica y sucede lo mismo: el clero parroquial y el catedral están sostenidos por el Estado.

— En Italia lo mismo, exactamente lo mismo; y sin embargo, señores, ¿hay algun pueblo en que haya habido una preocupacion más impía é irreligiosa que en Italia, en estos últimos tiempos; allí, donde ha habido la desgracia de confundir la idea nacional con la idea anticatólica? Pues la religion y el culto están sostenidos por la nacion, por el presupuesto general.

— No creo que se pueda citar más ejemplo que Portugal; y digo creo, porque no tengo de ello certidumbre. He procurado estudiar la cuestion, ver el presupuesto portugues, hacer preguntas á varios portugueses que creia yo estaban en el caso de explicarme bien lo que allí pasaba, y esta es la hora, lo confieso modestamente, en que no tengo acerca de dicho punto ideas tan claras y seguras como yo desearia.

— Pero, aun suponiendo que en Portugal estuviera la dotacion del clero encomendada á los municipios, ¿qué sería el ejemplo de ese pais? ¿Y qué autoridad debe tener para nosotros, hasta el punto de que con solo este ejemplo podamos hacer, bajo el aspecto religioso, una obra conveniente, y bajo el de la justicia una obra á ella acomodada, arreglando nuestra conducta á la conducta del pueblo vecino?

— Dejo á un lado, señores, consideraciones muy elevadas, porque tengo que ir midiendo mis fuerzas y procurando no abusar



demasiado de la atención que me dispensa el Senado, y me resta que hacer bastantes observaciones. Dejo á un lado consideraciones muy elevadas que podría exponer, al contemplar y comparar lo que se pretende que pase en nuestro país con lo que pasa en otras naciones, que, sin embargo, no pueden ser recusadas como ejemplos de liberalismo para la escuela radical que hoy domina. Dejo de exponer lo que pasa en casi toda Europa, no ya en la Europa católica, sino en la cismática: allí donde existe un clero, como acontece en Rusia, íntimamente ligado con el Estado; allí donde puede decirse que el César ó el Czar es á la vez el pontífice de la Iglesia cismática, triste herencia de los errores de Focio. Me voy á concentrar en Inglaterra, modelo siempre para el liberalismo de nuestro país, al menos para el liberalismo que no es republicano.

¿Qué pasa en Inglaterra? ¿Está allí separada la Iglesia del Estado? ¿Están allí consideradas las atenciones del culto y del clero como una obligación municipal? ¡Ah! en Inglaterra el clero está íntimamente conexionado con el Estado; forma uno de sus elementos más vigorosos; es un elemento político, al par que social. Allí los obispos, por el mero hecho de serlo, tienen un asiento en la Cámara de los lores; y están ampliamente dotados, de la manera que sin duda conocen los señores senadores, y no digo por no ofender su ilustración ó porque no parezca que ofendo su ilustración diciéndoles lo que indudablemente saben como yo ó mejor que yo.

¿Á dónde, pues, vamos á buscar ejemplos y autoridades dentro de los principios de que, al parecer, no quiere separarse el Gobierno? ¿Á dónde vamos á buscar autoridades para la innovación radicalísima de llevar á los municipios las obligaciones generales del culto y clero? Á ninguna parte.

Pensamiento religioso del señor ministro al presentar este proyecto de ley (y ruego á S. S. que, si me equivoco en lo que voy á decir, me rectifique para ahorrarme el hacer argumentos sin base) es el de hacer ajustar en lo posible, y como los tiempos lo permitan, la actual disciplina de la Iglesia á la disciplina de otros tiempos, para S. S. más genuina expresión del espíritu y del sentimiento cristiano.

Creo que he interpretado bien su pensamiento. Y pregunto al señor ministro: ¿cómo es posible conciliar eso, cuando se va á romper violenta y bruscamente todo el organismo actual y las relaciones existentes hasta ahora entre España y la Santa Sede; á presentar al clero, no dependiente de los fieles, sino del Estado, casi como pudiera suceder en una de las naciones, para mí

desgraciadas, en que el poder civil y el religioso se concentran en una sola mano, casi siempre por lo mismo tiránica? ¿Con qué autoridad va el señor ministro á quitar y poner aqui ó allí tales ó cuales sedes episcopales ó metropolitanas? ¿Con qué autoridad va á quitar tales ó cuales curas de esta parroquia y de este pueblo, para llevarlos allí donde le parezca que es necesario aumentarlos? ¿Es que va á prescindir, para todo esto, de la autoridad del Jefe supremo de la Iglesia? Prescindirá. ¿Y qué conseguirá?

Medios prácticos de llevar esto á cabo. ¿Quién va á presentar, y á quién, los párrocos que S. S. quiere que se establezcan en tal ó cual punto? ¿Qué obispo va á hacer eso? Creo que ninguno.

Recuerde S. S. lo que ha pasado en algunas parroquias de las órdenes militares. ¿Ha conseguido S. S. que obtengan la colación necesaria, para desempeñar su mision religiosa? Es imposible que procediendo de esta manera vayamos á otra cosa más que á una ruptura verdaderamente escandalosa entre la Iglesia y el Estado; ruptura en la cual quien más perderá, señores senadores, tenedlo entendido, será el Estado y el partido que representa oficialmente el Estado, ó la nacion gobernada, es decir, el partido radical ahora.

¿Y de qué modo va á hacerse eso? ¿Qué datos hay ya reunidos para hacer de repente el arreglo? He estudiado un poco esta cuestion, cuando en otro tiempo tuve la honra de sentarme en ese banco (*Señalando al ministerial*), y me he convencido de que es empresa muy larga; que al fin, con buena intencion y sin exagerar nada, se conseguiria un arreglo parroquial, poniéndose de acuerdo con quien debe ponerse, como lo he pedido, como lo he solicitado; condicion previa para que fuese el arreglo, no solamente aceptado, sino posible, y ademas para que no saliera de los principios religiosos, de que yo siempre he sido sostenedor.

Pero S. S. se coloca en una esfera completamente distinta: rompe el Concordato; obra como si no existiera para nada, siendo en esto inconsecuente, como el Sr. Cala, entre otros, ha demostrado, puesto que al mismo tiempo pretende que ciertas reformas, miserables en comparacion de las que se trata de llevar á cabo independientemente de la Iglesia, se hagan de acuerdo con ésta, como, por ejemplo, la cuestion de tarifas de los derechos de estola y pie de altar.

Creo, pues, señores, que ese pensamiento religioso no produce resultado alguno, porque ¿cómo van á juzgarlo los fieles? Y es, señores, que en este proyecto se parte de sentimientos muy



irreligiosos, por más que sea muy religiosa la naturaleza de los sentimientos de S. S., en los cuales tengo completa fé.

Pero es necesario que no solo sea el Gobierno religioso, sino que lo parezca en el texto y el espíritu de las leyes que, bajo su influencia, lleve á la discusion del Parlamento.

Pensamiento económico. El pensamiento económico que el señor ministro desea realizar con este proyecto, es el de aliviar las cargas públicas por una parte, y por otra, concluir para siempre con la desamortizacion.

Vamos á examinar, siquiera sea someramente, este punto.

Á ciento veinte y tantos millones de reales hace subir S. S. el presupuesto del clero; y luego, dando una prueba de un poco de ligereza en la confeccion de la ley, ha tenido que aceptar una enmienda de la cual resulta que en todos aquellos pueblos ó provincias en que el clero exija para su sostenimiento una suma mayor de 10 rs. por individuo, el Estado sufragará la diferencia que haya entre esos 10 rs. y el coste efectivo del clero.

Pues bien, esa carga, echada sobre el presupuesto general de una manera indirecta, va á hacer que el presupuesto de gastos, que muy en breve examinaremos, esté completamente falseado y en una cantidad importantísima.

¿Cuál es la cuota que va á pagar el Estado? He oido á varios señores senadores que no les era conocida; y voy á dar algunos datos, aun cuando sirvan solo de medio para que la discusion se concrete acerca de este punto.

Creo que hay sobre seis millones de españoles que viven en provincias en que, por varias causas, históricas en su mayor parte, tienen un gran número de párrocos. En estas provincias el sostenimiento del culto y del clero ha de venir á costar próximamente sobre 90 millones de reales, al menos con arreglo á las condiciones actuales; es decir que sale próximamente cada español de estos seis millones de habitantes á 15 reales. Es así que el Estado deberá pagar todo aquello que pase de 10 rs. por persona, máximum de cuota que ha de asignarse para el culto y el clero; luego seis millones de españoles, multiplicados por 5 rs., arrojan 30 millones; es decir, que en 30 millones de reales, ó poco ménos, vendrá á aumentar el presupuesto de gastos de la nacion con esa ley, que, al parecer, tenía por uno de los principales objetos el formular un pensamiento económico beneficioso para el Tesoro público. No ha de descargarse este peso sobre aquellas provincias que se hallan en situacion opuesta, sobre aquellas provincias que son habitadas por 10 millones de españoles, en que las cuotas bajan

de 10 rs.; por consiguiente, hay una pérdida grande, sin medio de indemnizacion y sin que entren recursos parecidos á la cuota que tendrá que satisfacerse.

¿Dónde está, bajo este punto de vista, la ventaja económica del pensamiento para el presupuesto general del Estado?

Y despues de todo, señores, ¿qué principio es éste que lleva el culto y clero á los municipios, cuando hay que reconocer la imposibilidad física y material en que se encuentran de sopor-tar tales cargas, y que deben recaer de nuevo sobre el Gobierno? ¿En qué quedamos? ¿Bajo qué punto de vista se va á considerar el proyecto? ¿Bajo el punto de vista nacional ó el municipal? ¿Por qué no establecer un principio fijo? Si se tiene fé en el principio municipal, es preciso atenerse á sus consecuencias; y si no estamos preparados para establecerlo, empezad por hacer un arreglo parroquial, y para ello es preciso ponerse en relacion con la Santa Sede, á fin de que las negociaciones den un resultado positivo.

Otras atenciones, aunque pequeñas, comparadas con la que se va á hacer pesar sobre el presupuesto municipal, se imponen al Estado, como, por ejemplo, la del sostenimiento de la colegiata de Covadonga, para lo cual se asignan, segun creo, 37.000 pesetas. Algunas excepciones hay ademas, que son una nueva falta de consecuencia y de lógica, y al mismo tiempo demostracion de que no ha presidido á este proyecto ningun pensamiento.

Pero la parte más trascendental de esta idea económica se halla en lo relativo á la desamortizacion. El Sr. Montero Rios cree que debe romperse con la convencion de 1859, adicional al Concordato de 1851, por la cual se concedia ó se reconocia á la Iglesia la facultad de adquirir propiedades de toda especie, así de bienes inmuebles como de capitales muebles. Voy sobre ello á hacer algunas consideraciones, pues es necesario ligar este punto de la cuestion con el que estamos examinando.

El clero, bajo el punto de vista político, ha perdido tanto como la sociedad con habérsele prohibido la adquisicion de propiedades territoriales. Una grande autoridad democrática está de mi parte diciendo que quien más ha perdido ha sido la sociedad. Conmigo está el señor ministro de Gracia y Justicia, que en los pensamientos y en las palabras de ese gran publicista se apoya.

Ahora vamos á examinar la cuestion bajo el punto de vista económico, en el cual creo que, aun cuando poca, puedo alegar alguna más competencia.



¿Qué es la desamortizacion, señores? Permítame el Senado que insista mucho sobre este asunto; porque, á mi parecer, es la parte esencial del proyecto, y á la vez el baluarte donde se encierran los adversarios del clero y de su influencia; y creo que esta ley no es aceptable en lo que tiene de anticlerical.

La desamortizacion aparece á los ojos de los que la consideran con un poco de ligereza como una de las causas principales del aumento de la riqueza de España, y la amortizacion á su vez, como la explicacion, si no exclusiva, casi principal, de lo que llaman la antigua pobreza y despoblacion de España. Se necesita, señores, un poco de valor para decir lo que voy á manifestar; pero toda mi vida he tenido la costumbre, no menos que el valor, de decir lo que mi conciencia y mi entendimiento unidos creian justo y conveniente á los intereses de mi pais, cualesquiera que fuesen, las consecuencias personales que esta conducta me pudiera traer. Voy, pues, á sostener aquí la amortizacion.

¿Por qué no ha de tener el clero propiedades territoriales? Se dice á esto: porque de esa manera se le daría una gran influencia en la suerte general de la sociedad.

En primer lugar, los defensores de todas estas ideas, que forman parte de lo que constituye los principios de las escuelas liberales, radicales, republicanas y democráticas puras, usan ordinariamente un lenguaje que me parece pretencioso, y nos hablan de los signos del tiempo, cuando precisamente uno de los signos de estos tiempos es el que vaya perdiendo la propiedad territorial grandísima parte de su influencia, que era predominante en la sociedad vieja, por no decir sociedad muerta.

Esto se ve claramente cuando comparamos el espíritu que la animaba con el espíritu que vivifica y anima á la sociedad de nuestros dias. ¿Qué es la propiedad territorial, comparada con la propiedad mueble, aun en aquellos pueblos en que la práctica por una parte, las condiciones y aptitud de las razas por otra, y una educacion especial ademas, han facilitado el desarrollo de la riqueza territorial, hasta un punto verdaderamente portentoso, como sucede en esa misma Inglaterra, en que con dos quintas partes del territorio de España se resuelve el problema de mantener la casi totalidad de sus habitantes, que pasan de 30 millones, mucho más consumidores que nosotros por las condiciones de la raza y del clima?

¿Qué es lo que sucede en esa misma Inglaterra, donde hay una grandísima concentracion de la propiedad y hombres dueños de inmensos territorios, con una renta superior á la que

tienen algunos de los monarcas más ampliamente dotados por su lista civil en los pueblos ricos?

¿Qué es lo que sucede en Inglaterra, en que hay lores que tienen 40 y más millones de renta anual? ¿Qué es la propiedad territorial? Un medio ya secundado de influir en la sociedad; y al lado de la propiedad inmueble se ha colocado por encima la inmensa influencia del capital mueble, que allí se valúa en más del doble del total valor de la propiedad rural y urbana. Así es que aun los jefes de la escuela conservadora, que, como en todas partes, tienen á su lado los dueños del suelo, como escudo tras del cual se abriga para defenderse contra los embates de sus enemigos, han tenido que transigir, y en la reforma de la ley de cereales de 1846 hicieron que prevaleciera el interes del capital mueble, sobre el capital dedicado á la agricultura. ¿Por qué? Porque pesaba más este interes que la propiedad inmueble. Yo bien sé que todos los pueblos de Europa y de América no son Inglaterra, y que en ellos no es igual la proporcion que en Inglaterra tienen el capital mueble y el inmueble. En todos los pueblos, unos más y otros ménos, hay gran desproporcion entre estos capitales. En España, por desgracia, crecen en proporcion muy desemejante. Solo la deuda pública representa un crecimiento mayor que el que ha obtenido en los últimos años la propiedad inmueble.

Agregando á esto el interes del capital móvil de la industria, del comercio y de las sociedades de crédito, vereis que hay algo de apocado, y de indigno de hombres de gobierno, en ese miedo á que el clero tenga propiedad territorial. Tanto es así que desde 1845 un gran pensador, Donoso Cortés, honra de las escuelas conservadoras, y cuyo nombre será de los pocos que se salven del olvido que á muchos nos cubrirá, decia en su discurso relativo á la ley del clero de 1845: «Dadle al clero la independencia; no le hagais depender de un sueldo, pero no le deis propiedad territorial, que ya realmente esta propiedad no es el elemento predominante en las sociedades modernas. Dadle la posesion del capital mueble; dadle renta del Estado; hacedle acreedor del Estado».

Aquel hombre veía lejos, pues tenía un entendimiento trascendental. En lo que creo que erraba era en dejar á la Iglesia exclusivamente en posesion del capital mueble. Entiendo yo que lo que debe hacerse es cumplir la convencion del año 1859; esto es, concederse al clero ó reconocérsele la facultad de poseer propiedad inmueble y mueble. Por consecuencia, calculad qué voto voy á dar á un proyecto en el cual se obliga al clero á ven-



der, no sabemos cómo, la propiedad territorial que legítimamente pueda adquirir, para emplear su producto en la adquisición ¿de qué? ¿De tres por ciento ó de cualquiera otro título de la deuda de España? No, de inscripciones intrasferibles.

Amortizacion es ésta, despues de todo, de un capital mueble; porque ¿qué quiere decir intrasferibles? Que no pueden ser trasferidas, lo que equivale á decir que no pueden ser objeto de trueque. ¿Qué es la amortizacion mas que eso? ¿No indica esto desconfianza y recelo en contra del clero? ¿Y todo por qué? Porque se nos dice que la posesion de los bienes territoriales del clero ha sido una de las causas de la debilidad de España, de su despoblacion y de la falta de riqueza. ¿Qué era la propiedad territorial del clero? Un modo de adquirir de la Iglesia, que recibe de personas en lo general acomodadas una parte alicuota de la fortuna de éstas, para con su producto atender á grandes necesidades sociales, en las que principalmente se hallaban interesados la muchedumbre, los desvalidos, los pobres. Era una verdadera institucion democrática, en el buen sentido de la palabra, que, para mí, esto de democrático tiene tanto del bueno como de malo. Era un medio de que el pobre tuviera una alimentacion barata, una educacion moral segura; y bajo el punto de vista económico, que es el en que se funda la razon potisima contra la influencia clerical, un medio de que el trabajador honrado le tuviera de ir economizando y formando, por la aglomeracion fructuosa de esa economía, un verdadero capital: de lo cual resultaba que, cuando caia en manos de un hombre inteligente y económico, la propiedad del clero podia recibir un cultivo de que en la generalidad de los casos, entonces como ahora, carece la mayoría de nuestras tierras.

¿No es verdad, y sea dicho sin ofender á nadie, sin excitar antipatías ni recelos, que los nuevos propietarios han subido los arrendamientos de las tierras, en otro tiempo concedidas con mano benévola y verdaderamente paternal, como ocurría con el clero para la mayoría de sus terratenientes? ¿Es cierto ó falso? ¿Y cuál ha sido la consecuencia, en el orden económico, de estas variaciones en la cuota de arrendamiento? Que es imposible que el cultivador dedique al suelo los capitales, de que cada dia tenemos más necesidad.

He oido hablar el otro dia á un señor senador del cultivo intenso. ¿Y qué es este cultivo? Es el cultivo que exige grandes capitales para que dé el producto que se apetece en determinada extension de terrenos, de los que se quieren obtener grandes productos; lo cual es exigencia del crecimiento de las

poblaciones al no tener medios de ensanchar el territorio que habitan. ¿Y cuál ha sido el resultado en esta sociedad vieja europea, que cada día va sufriendo las consecuencias de la dificultad de hacer que vivan entre sí en paz los hombres, que se van encontrando más estrechos en su patria? Que son necesarios mayores capitales. Y el resultado de la amortización es el cultivo abandonado á manos débiles y faltas de capitales intelectuales y materiales. Como ha habido una revolución profunda bajo este punto de vista en nuestro país, resulta que, aun cuando sea del modo estrecho que le considero, hay un verdadero inconveniente para la agricultura. Porque hubiese antes ciertos terrenos mal cultivados, que se han mejorado ahora, por habérseles puesto cercas y hecho plantíos, ¿se ha transformado la propiedad inmueble de modo que no hayan perdido el capital necesario otras fuentes de la producción? ¿No existía antes cultivo en esos campos? Y los capitales ¿estaban faltos de todo empleo fructuoso?

«Ah, señores senadores! ¿No os dice nada el aumento del interés del capital hoy en España, pues aunque haya más capitales que antes, con relación á sus necesidades tiene menos? ¿No os dice nada la subida del interés, no siendo posible tener hoy capitales al 3 ó al 4 por 100, como los tenían nuestros padres y nuestros abuelos? ¿No sabemos que en el día hay necesidad de acudir (esperando abrazar un cuerpo real, si bien temo que nos habremos abrazado solo á una sombra fugaz y vana) al establecimiento de Bancos hipotecarios y territoriales que resuelvan este problema? ¿No vemos que hay 200 millones de deuda en favor del Tesoro, procedentes de los descubiertos en las ventas de bienes nacionales, cuyos compradores no han tenido medio de cumplir sus compromisos con la administración? ¿Pues no está demostrando esto que existe una verdadera manía para la adquisición del suelo, y que es necesario decir sobre este punto algo, como yo lo estoy haciendo ahora, para encarrilar la opinión y que los españoles comprendan, como los ingleses, que es más productiva la explotación del suelo como colonos, cuando se dispone de capitales necesarios para el cultivo, que convertirse en propietarios de esos suelos para obtener una utilidad menor que el interés del capital dedicado al cultivo? Porque no hay salida á este dilema: ó la administración no es proba, lo cual no creo; ó es poco inteligente, ó es impotente. Algo de esto sí creo que existe; y si no, no veo el remedio.

Los 200 millones de deuda procedente de compradores de bienes nacionales están demostrando un gravísimo malestar en



gran parte de individuos que se empeñan contra viento y marea en ser poseedores de tierra. ¿Y qué esperais vosotros, señores senadores, muchos de los cuales sois propietarios y peritos en la materia que yo estoy tratando? ¿Esperais algo de un cultivo puesto en manos de hombres, que ni siquiera tienen dinero para pagar los plazos de la compra de la tierra de que se dicen propietarios? Miseria, y nada más que miseria.

Se trata de realizar un capital; ¿cómo? Descuajando los montes y reduciendo á situacion deplorable para lo futuro, primero, lo descuajado, y segundo empeorando las tierras con los aluviones que arrastran la grava y la arena de las alturas, estropeando las tierras de las vegas y perdiendo los antiguos pastos naturales. Esto es imposible que siga sin que muy pronto nos veamos reducidos á una situacion tristísima: á la situacion de tener producciones muy escasas ó muy caras; á tener la base de nuestra alimentacion nacional carísima, como va sucediendo.

Agregad á las demas causas de la carestía de la produccion el que los impuestos directos tienen que ir en aumento sobre lo que han crecido como en esta época, apesar de que se nos decia que tendríamos la ventaja económica de aliviar las contribuciones. Vemos que en nuestro pais, con las desamortizaciones llevadas á cabo hasta con frenesí, nos encontraremos dentro de poco en una situacion angustiosísima.

Una de dos: ó tendremos que dejar de cultivar las tierras que tengan ménos condiciones de fertilidad natural, ó acudir á un sistema protector que evite la competencia de los extranjeros á los agricultores nacionales, aumentando el impuesto sobre los artículos que se introduzcan.

Con motivo de tratar esta cuestion económica, me parece que debo decir algo acerca de otra razon alegada por nuestro colega el Sr. Barcia. Sabiendo bien á dónde debe apuntar, en su discurso, tan rico de fantasía, se ocupó principalmente de esta cuestion económica; y tratando de herir nuestra imaginacion hasta conseguir su objeto, porque conocí que habia hecho hondísima impresion en el ánimo de los señores senadores, citó una cifra enorme que nos asustó, como expresion de los valores malbaratados y derrochados por el desarrollo de la riqueza de la propiedad clerical. Dijo S. S. que todos los capitales venidos de América no habian tenido mas que el triste é infructuoso empleo de convertirse en grandes catedrales y otros edificios religiosos.

En primer lugar, no sé de dónde ha sacado el Sr. Barcia el dato de los valores venidos de América á España. ¿Dónde

ha encontrado S. S. el guarismo de doscientos y tantos mil millones venidos solo y precisamente á España? Esto, en mi opinion, es físicamente imposible; no habria siquiera medio de acuñarlos, sobre todo entonces: se lo demostraria á S. S., rogándole que tuviese la bondad de acompañarme á nuestra Casa de moneda, una de las más importantes hoy de Europa, y allí veria que lo que se acuña es de 6 á 7 millones diarios, y esto en oro, cuando es sabido que las tres cuartas partes del numerario que vino de América á Europa fué en plata. Ni siquiera seria físicamente posible acuñar hoy mismo esa plata; y ménos habia de serlo entonces, cuando existia el sistema de balancin. Así, pues, no sé de dónde ha sacado tal dato S. S. Voy á citar las autoridades en que me fundo, para juzgar que lo dicho por el Sr. Barcia, y con lo que causó impresion en los señores senadores, no debe ser aceptado como exacto.

Segun los datos, en mi sentir, los más ciertos, por lo autorizado de las personas que los dan; segun los datos de Alejandro Humboldt, una de las glorias del siglo XIX, que ha estudiado profundamente el estado de la América española, con medios de investigacion abundantísimos, porque esos gobiernos de que tan mal se habla cuidaban de proporcionarlos á los sabios, y que ha expuesto en obras destinadas á dar á conocer la situacion material de aquellos paises, que habilísimamente ha descrito despues en su admirable obra el *Cosmos*; y tambien segun Miguel Chevalier, en su tratado de *Economía política*, modernamente impreso, á Europa, y no á España solo, á todos los paises de Europa vinieron desde América 35.000 millones de francos, que equivalen á unos 130.000 millones de reales, ó sea próximamente la mitad de lo que decia el Sr. Barcia. (*El Sr. Barcia pide la palabra.*) Me dirá S. S. que ha visto esos datos en las obras de Canga-Argüelles y de otros escritores; pero, con permiso del Sr. Barcia, no tengo fé en lo que dicen Canga-Argüelles, Solórzano, Martínez de la Mata y otros publicistas, de gran riqueza de imaginacion, pero de poco espíritu analítico. ¿Cómo he de creer yo lo que alguno dice de que España en tiempo de los romanos tenia 75 millones de habitantes, y otras extravagancias por el estilo?

No ha habido, pues, nada de eso: han venido á Europa unos 27.500 millones de francos en plata y 7.500 en oro: se ha calculado hasta el volumen de esos valores, y resulta que el de la plata es una esfera de 100 pies de diámetro, próximamente la longitud de este salon, y el oro un cupo de cinco metros de lado: eso es todo lo que ha venido de América.



¿Pero se han empleado esas cantidades en hacer catedrales y establecimientos religiosos, como decia el Sr. Barcia? ¿Debe hacerse responsable al clero de España porque no se haya sabido utilizar la parte de esos 130.000 millones de reales, que ha venido á nuestro pais? Señores, ¿por ventura nuestras catedrales no son anteriores al descubrimiento de América? ¿Pues cómo es posible que un hecho anterior sea dependiente y consecuencia de otro que le es posterior? Todas nuestras catedrales están indicando con su arquitectura, para el que sea un poco perito en materias de arte, la fecha en que se levantaron. Dejo de hablar de las catedrales bizantinas de Zamora y otras, de las posteriores á éstas, ó góticas; y me fijo en las del Renacimiento, últimas que se han edificado, como las de Salamanca, Segovia, Jaen, Granada, Málaga, todas las cuales son obras, en su mayor parte, de la primera mitad del siglo XVI.

¿Qué oro ni qué plata habia venido entonces desde América á España? El oro y la plata empezaron á venir, en proporciones algo sensibles, hasta el punto de que se notara su influencia en el valor de esos metales, á fines, muy á fines del siglo XVI. Ahí están los valores de lo que se puede considerar como tipo. Siendo ministro, para estudiar yo la cuestion de la produccion territorial en España, hice buscar, en el archivo de Simancas y en otros puntos documentos que me dieran á conocer el precio de una fanega de trigo; é indagué que á fines del siglo XVI valía 7 ú 8 rs.: lo cual prueba que aún no habia causado su efecto, en la depreciacion de valores, la masa de oro y de plata que de América venía. Es decir que me parece plenamente probado que lo que viniera de América no se ha invertido aquí en catedrales; porque ese oro y esa plata han venido despues que las magníficas construcciones del arte estaban levantadas, para gloria de Dios y de nuestra patria.

Y ademas, ¿por ventura solo España tiene catedrales? Bien sé que hay muchos, muchos de nuestros compatriotas que, en su amor patrio, creen que no hay catedrales ni más hermosas ni más importantes que las de nuestro pais. Pero el Sr. Barcia, persona ilustrada y que creo que ha viajado, ¿no ha visto catedrales como las nuestras en toda Europa, en la Europa católica y en la protestante, en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, en Alemania y en Italia? Señores, ¿cómo es posible sostener esas exageraciones en el siglo del análisis y de la crítica? ¿Cómo es posible hacer al clero católico responsable, si hubiera en ello responsabilidad, de esta manifestacion comun del sentimiento religioso; manifestacion comun á todos los pueblos europeos,

y con la cual se han honrado las generaciones de los tiempos en que tuvo el arte esa magnífica florescencia?

Pues qué, la catedral de Londres, ese San Pablo con que los ingleses se enorgullecen tanto, que casi lo quieren comparar, bajo el punto de vista de su planta y de su cúpula, al San Pedro de Roma, ¿no es del último tercio del siglo XVII? Y no cito otras catedrales, porque no voy á hacer aquí un curso de historia del arte: asiento solamente hechos que, para las personas ilustradas que se hayan fijado un poco en este punto, deben ser indudables. España no ha sido en el particular ni más ni ménos que los demas países. Los capitales que vinieron de América se han invertido en una porción de cosas que fueron en gran parte utilísimas á nuestra nación; y si España no ha tenido sino desde el siglo pasado canales de navegacion y de riego y otros medios de comunicacion, pregunto al Sr. Barcia: ¿los habia en Europa? Todos, absolutamente todos datan desde esa fecha, desde mediados del siglo pasado acá. El primer canal de Inglaterra es de mediados del siglo pasado, y las primeras carreteras inglesas son posteriores á la de Guadarrama, hecha en tiempo de Fernando VI. Creo, pues, que estoy en mi derecho atacando esa preocupacion en que se apoyan muchos hombres de sentimientos patrióticos, que miran con horror cuanto contribuye á dar riqueza al clero, porque creen que va á hacer uso de sus bienes de un modo improductivo para la patria; en cuyo lustre, como sus buenos hijos, están interesados los clérigos y quieren promoverlo de todas maneras.

Por lo demas, señores, ¿qué he de decir yo sobre la prohibicion que se establece en el artículo á que me he referido? Bajo el punto de vista económico, he expuesto algunas razones que creo serán meditadas por los que de buena fé estudien estas cuestiones. Y bajo el punto de vista político, ¿qué inmensa inconsecuencia, señores, cometida por los hombres que tienen horror al sistema preventivo, y que nos presentan á los que lo hemos sostenido como un objeto de odio para todo hombre que de liberal se precie!

¿Hay en el fondo de ese artículo mas que el sistema preventivo y de desconfianza, atentando á la libre testamentificacion, al libre uso que de su propiedad puede hacer todo ciudadano? ¿Por qué no ha de dejarse al clero la libertad de poder adquirir bienes muebles é inmuebles? Si yo, dentro del uso legal que puedo hacer de mis bienes, lego ó por donacion *inter vivos* doy ó regalo al clero tal ó cual propiedad, ¿por qué se le ha de obligar á aquel que recibe mis bienes á que los venda, con buenas



6 malas condiciones del mercado, y á invertir su producto en determinado sentido?

Pero se dice: «Es que el clero irá así poco á poco adquiriendo una inmensa propiedad»; y el Sr. Cala manifestaba que pudiera llegar el caso de que tuviera 2.000 millones de reales de renta en títulos de la deuda. En primer lugar, esto me parece una exageracion: 2.000 millones de reales representarían sobre dos veces el importe de los intereses de la ya cuantiosísima deuda que tenemos hoy. Pero para facilitar la discusion, *via argumentandi*, como decíamos en las escuelas, voy á conceder el hecho. Eso probaría que el país era tan rico que podía dar al clero un capital tan cuantioso, y que respondía á cierta situacion de los ánimos favorables al mismo clero.

Dentro de las ideas democráticas del Sr. Cala, y de los radicales de la mayoría de este Senado, y del gobierno que dirige nuestras deliberaciones y procura darles determinado carácter político, ¿qué derecho hay para impedir á la mayoría de los ciudadanos del país que dispongan de su fortuna segun lo tengan por conveniente? ¿No es éste el sistema preventivo, señores? Y ese sistema preventivo, de que apartais vuestros ojos con horror, ¿por qué lo habeis de plantear solo en una cuestion que con el clero se relaciona?

¿Por qué habeis de tener en materias políticas gran confianza en el establecimiento de vuestras ideas; por qué habeis de profesar, como profesais, el principio de la soberanía nacional, el derecho de la mayoría á imponerse á la minoría en la confeccion de las leyes; por qué habeis de proclamar el sufragio universal y la obligacion que tenemos todos de respetar lo que de él resulte, y luego á esa sociedad en que radica, segun se asegura, la soberanía, le habeis de decir «te ato las manos, para que no puedas disponer libremente de tu fortuna en favor de determinada clase?» ¿Qué grande contradiccion, y en el fondo qué odiosa tiranía! ¿Y no solo qué odiosa tiranía, sino qué inconsecuencia! Sí, despues de todo, la mayoría de nuestros conciudadanos piensa acerca de esta materia de distinta manera que los que juzgan que el clero debe ser pobre; tendrán obligacion estos señores, so pena de no ser liberales, de pasar por lo que acordase la mayoría, de respetarlo y de no tratar de imponerse. ¿En nombre de qué principios tratarían de imponer sus convicciones á la masa inmensa de conciudadanos que pensase obrar de otro modo?

Se trata de un imposible; porque, si esa fuese la situacion de los ánimos, de nada servirían ciertos esfuerzos. Pues qué ¿se va

¿a detener el impulso de las ideas en una nacion, por tal ó cual ley? ¿No hay medios de eludir el texto de las leyes tiránicas? Teniendo yo conviccion de que tal ó cual sacerdote era modelo de virtudes, tal que pudiese hacer un uso conveniente de mis bienes, ¿llegaria nadie á impedirme que dispusiera de ellos en favor de determinada persona?

No quiero tratar la cuestion, filosófica más que política, que ha presentado aquí el señor Cala; sobre todo no habiéndola presentado como expresion de la escuela en que S. S. milita. Ésta es una cuestion en que sería difícil que nos entendiéramos, pues repito que es fisológica más que política; y tendríamos que modificar completamente todas las ideas que tenemos acerca de la personalidad jurídica en España y en toda Europa.

Otra inconsecuencia, señores, de este proyecto de ley, que prueba la falta de pensamiento, como antes he dicho, que á él preside, es la siguiente: el Gobierno ha impuesto hasta ahora al clero la obligacion de jurar la Constitucion, si ha de percibir las asignaciones que por el Concordato se establecieron. Deseo que sobre esto tenga el señor ministro de Gracia y Justicia la bondad de hacer una declaracion precisa y terminante, como corresponde á la dignidad de todo gobierno y á la de una Cámara como el Senado, ante la cual se le pide esta declaracion por un senador, más que en uso de su derecho, en cumplimiento de un deber.

Sepamos á qué atenernos los españoles en general y el clero en particular. La verdad es que se ha creido que la dificultad en que el Gobierno se encuentra, por haber impremeditada y apasionadamente impuesto al clero ese juramento (otra falta del sistema represivo, del que se dice exclusivamente sostenedor; otra falta de inconsecuencia; otra prevencion odiosa que pugna con la naturaleza de los sentimientos que se abrigan por la escuela que se llama revolucionaria), se salvaba haciendo que el Tesoro municipal, y no el general, sostenga al clero. Pero ¿cómo ha tenido despues que aceptar esto el Gobierno, pues de otro modo no hubiera pasado el proyecto en el Congreso; cómo ha tenido, repito, el Gobierno que admitir esa traslacion de obligaciones? Comprometiéndose á pagar al clero lo que falte despues de recaudar los 10 rs. á que se hace subir como máximo la cuota individual, para aquello á que realmente asciende la obligacion. Pues bien, si el Gobierno se empeña en sostener la teoría del juramento previo, el cura párroco de alguna determinada localidad será pagado por la municipalidad que no cuide de exigirle ese juramento y que obre más religiosa



que políticamente; y lo que le falte de su asignacion, porque lo tiene que recibir del Gobierno, éste no se lo pagará si el párroco no jura.

¿No es un deber del Gobierno salir de esta situacion, para que sepamos á qué atenernos? ¿Puede tolerarse el absurdo de que en unas partes se pague al clero y en otras no, según lo tenga por conveniente el ayuntamiento, y que pueda suceder que un municipio, no diré revolucionario, sino anticatólico sobre todo, se escude con la obligacion de que el clero tiene que jurar la Constitucion para ser pagado, y que el Gobierno despues no ayude al clero á exigir lo que se le deba?

Es necesario, por lo tanto, que sobre esto sepamos qué va á acontecer y la suerte que depara esta ley al clero: si tendrá ó no derecho de exigir sus asignaciones sin jurar, ó si para exigir las ha de pasar por esas horcas caudinas que se le han impuesto. Ruego al Gobierno y al Senado, que puede, manifestando sus opiniones en este punto, influir de una manera decisiva en la cuestion, que se den explicaciones terminantes. Lo digo con sinceridad: en este particular no hablo como hombre de partido, sino como español; y os ruego consideréis bien las consecuencias de seguir en esta ceguedad en que estamos atollados.

Ruego al señor ministro que prescinda para siempre de esa obligacion del juramento; porque de buena fé se va á esperar que el clero jure á los cinco ó á los seis años lo que durante cuatro años se ha negado á jurar? Y si no jura y no le pagais, ¿qué va á resultar? Resultará lo que parece que no quereis que suceda: la separacion de la Iglesia y el Estado, al ménos en cuanto á sus relaciones económicas. ¿Y qué ganará el partido revolucionario en demostrar evidentemente que está separado del clero español, ¿Qué no perderá con dar á esta clase respetabilísima la ocasion de seguir en la linea de conducta que le ha valido el respeto y la consideracion, no ya de todo hombresensato y liberal verdadero, sino de los revolucionarios no fanáticos, ó al ménos de los hombres que se precien de honrados?

Pues qué, ¿puede haber algo más sensible hoy, en que se sacrifica tanto al deseo de goces materiales, que ver una clase de miles de individuos, de 30 ó 40.000 españoles reducidos á la miseria, verdaderamente á la miseria, solo por el respeto á un principio en que tienen fé y del cual no quieren separarse, y en cuyo obsequio hacen los mayores sacrificios? ¿Qué resultará de aquí sino la demostracion de que esa clase, moral y hasta políticamente considerada, es superior á nosotros, que de liberales nos preciámos?

Y bajo el punto de vista político, señores ministros, no podeis olvidar que esa clase está demostrando que, para todo gobierno que sepa dirigir bien esta sociedad, puede convertirse en un grande é inmenso elemento de fuerza. No apoya, señores senadores, sino lo que resiste. Cuando necesitamos sostener nuestro paso tembloroso por la edad ó por las dolencias, no nos apoyamos en débil junco, que se plega y dobla á la más mínima inflexion de la mano; sino en un báculo ó bastón que, con su dureza y rigidez, resista el peso de nuestro cuerpo. Esa clase no apoya sino lo que resiste; esa institucion, que os resiste hoy, os podria apoyar inmensamente, si quisiérais hacer justicia á sus sentimientos, para sostener todo lo que sea juicioso, para sostener todo lo que sea conveniente al órden social, que en manera alguna está reñido con la verdadera libertad, y para sostener todo lo que sea español y patriótico.

Pero profesais principios que están completamente divorciados con los sentimientos y con el modo de ser de la nacion española; profesais principios que son la expresion de una escuela exclusiva, y en mi sentir muy limitada en número y en influencia en la sociedad; y así es que solo se han impuesto por la violencia y la revolucion á esta misma sociedad.

He expuesto, señores, principalmente consideraciones económicas muy deliberadas. No sé si habré acertado á demostrar lo que me proponia, pero sí creo haber probado que sirvo la causa en cuyo favor me he levantado, que no es la causa del clero, sino la general de los intereses más grandes de nuestro pais, sosteniendo ideas y presentando hechos que poco á poco han venido á modificar las tendencias exclusivas y, en mi concepto, erróneas de la generacion presente.

Sé que se necesita perseverar en este camino para que la nacion española vea que el remedio de sus males y la manera de aumentar su poblacion y su riqueza no consisten en asentar sobre bases y leyes, en mi sentir inicuas é injustas, la prosperidad pública; sino en favorecer y desarrollar una educacion profesional y un sistema de crédito que, despues de darnos un aumento en el capital intelectual que produjese esa educacion, nos daria un capital material, de que tanto necesitamos. Este pais es un pueblo de imaginacion, y por consiguiente el ménos apropiado para el trabajo productor de todos los de Europa.

Tal es la causa de nuestra pobreza: no el que tengamos un poco más ó un poco ménos de ilustracion; no el que tengamos un poco más ó un poco ménos de renta; no el que tengamos un



poco más ó un poco menos de capital inmueble. Eso ha existido en todos los países del mundo; pero para que la riqueza haya llegado á florecer, en las sociedades que tanto envidiamos, no ha sido necesario romper la forma antigua y respetable de la vieja sociedad europea; y como creo que en el proyecto que discutimos se rompe con el carácter, con la esencia, con la vida de nuestros antepasados, de los cuales no podemos separarnos sin que esa solución de continuidad rompa todo lo que tiene vigor en nuestra raza, voto contra el proyecto de ley y ruego á los señores senadores que sigan mi ejemplo. He concluido.

Al tratar en la misma sesión el Sr. Barcia de rectificar lo manifestado por algunos senadores, insistió en exagerrar la cifra de los caudales que vinieron á España desde América, apoyándose en los dichos de algunos historiadores, y expuso la diferente manera de apreciar la amortización y el sistema absoluto, del que presentó como defensor al señor marqués de Barzanallana. Éste, inmediatamente, trató de rectificar tales asertos en la forma que sigue:

El Sr. Marqués de BARZANALLANA: Señores senadores, creo que es deber mío dejar claros algunos puntos que, por la desgracia que he tenido de no ser bien oído ó comprendido por el Sr. Barcia, han quedado algo confusos.

En primer lugar, no me he atribuido un ridículo derecho de ser creído sobre mi palabra; y no contesto á lo que el Sr. Barcia ha dicho sobre si me había comunicado con algún Espíritu Santo, en cuanto á la cuestión que ventilamos, sobre la estadística de la cantidad de oro y plata venida á Europa de América, porque quiero huir de todo debate que empiece á tomar algún carácter demasiado personal, para que no pierda la dignidad de los que en él intervengan.

Es claro que no estoy en comunicación, no digo con el Espíritu Santo (perdonen todos los hombres piadosos que esta palabra salga de mis labios, por las necesidades de la discusión); he estado en comunicación con hombres de ciencia, cuyos datos he aducido aquí modestamente, para añadir su enorme autoridad á la escasísima ó nula que yo tengo.

He citado esos nombres, algo más importantes para la historia del desarrollo de la producción minera y mineralógica en Europa y en América, que los Sres. Solórzano, Gerbruck,

Martínez Mata, Sánchez Moncada, el Sr. Canga-Argüelles, y hasta el mismo Robertson. Esos nombres voy á repetirlos, para que el Sr. Barcia los oiga de mi boca, ya que tuve la desgracia de que pasasen para S. S. desapercibidos antes. Son Humboldt, del que dije en mi discurso que es considerado universalmente como una de las grandes glorias científicas del siglo XIX; Miguel Chevalier, que ha escrito, con todos los datos que era posible reunir, sobre la cuestión de la moneda y sobre la situación de los mercados y numerario en el mundo, en una obra que puede decirse de ayer, datos muy posteriores á los de los señores citados por el Sr. Barcia, que con excepción de Canga-Argüelles, escritor de la primera cuarta parte de este siglo, el más moderno, Robertson, es de mitad del siglo pasado.

Estas cosas, señores, se hallan hoy puestas mucho más en claro que cuando aquel célebre escritor escocés escribía su *Historia de América*, que supongo será de donde las ha tomado el Sr. Barcia.

He usado, pues, del derecho y de la obligación á la vez en que estaba de dar autoridad con esos nombres respetabilísimos á mis asertos, y no he venido á exponer consideraciones mías al Senado, á quien respeto demasiado para que abrigara tan injustificada como pueril pretensión.

Ha dicho el Sr. Barcia que él detesta la amortización, que se liga con la muerte. Para una persona tan cristiana como el Sr. Barcia, me parece la razón extraña. La muerte, para los cristianos, no es una cosa tan temible como para los que tienen la desgracia de creer que todo se concluye acá en la tierra. S. S. es poeta, muy poeta, más que positivo; y voy á permitirme recordar á S. S. el dicho de un gran poeta de este siglo, Chateaubriand, que, hablando de la muerte, dice: «La muerte es hermosa; es nuestra amiga; solo que no la conocemos porque se nos presenta enmascarada y nos espanta su máscara»; pero, muerte ó vida, la institución de que yo hablaba, en realidad, no es lo que el Sr. Barcia ha combatido.

He dicho sobre la amortización cosas que creo pertinentes á la cuestión que debatimos; y he presentado el ejemplo de pueblos que han vivido y viven bajo formas de propiedad que se creen de amortización, sin que esas formas de propiedad corporativa, seglar ó religiosa, hayan para nada impedido el admirable, el envidiable y nunca visto desarrollo y la prosperidad material que constituye la fuerza de esas naciones y la administración, á la vez que la envidia, de las que son sus rivales.



Y, por último, no he defendido el absolutismo. No soy absolutista: soy liberal; pero creo que la libertad, en vez de crecer y fortificarse, se debilitará y perecerá si se desarrollan las ideas religiosas á las que, en mi sentir, favorece el proyecto sobre que discutimos. Por eso, Sr. Barcia, y en nombre precisamente de la libertad, lo he combatido.

Recuerdo que los pueblos que son profundamente religiosos en Europa y América libres son, mientras que las naciones latinas, que han confundido la libertad con el sentimiento irreligioso, han tenido fugaces momentos de brillo y de pujanza para volver á caer en esa decadencia que á algunos parece incurable, y de que seguramente solo podrian salir si volvieran á beber en las fuentes vividas y puras del sentimiento moral y religioso, que tan buenos resultados produce en la marcha de las naciones. He dicho.

Historia de América, que aunque está dañada las ha tomado el Sr. Barcia. He nacido, pues, del derecho y de la obligación a la vez en que estaba de dar autoridad con esos nombres respetabilísimos á mis asertos, y no he venido á exponer consideraciones más al Sr. Barcia, á quien respeto demasiado para que atribuya tan injustificada como pueril pretensión. He dicho el Sr. Barcia que el detesta la amonestación, que se liga con la muerte. Para una persona tan cristiana como el Sr. Barcia, me parece la razón extraña. La muerte para los cristianos, no es una cosa tan terrible como para los que tienen la idea de la eternidad, para todos se concluye en la tierra. Si á espaldas muy pocas, más que positivas y verdaderas, se recorda al Sr. Barcia de un gran poeta de este siglo, Chén- tentando, que, hablando de la muerte, dice: «la muerte es hermosa; se muere sin dolor; solo que no la conocemos porque se nos presenta enmascarada y nos espanta su máscara; pero, muerte de vida, la institución de que yo hablaba, no es la que el Sr. Barcia ha combatido en su discurso. He dicho sobre la amonestación cosas que creo pertinentes á la cuestión que debatimos; y he presentado el ejemplo de pueblos que han vivido y viven bajo formas de propiedad que se creen de amonestación, sin que esas formas de propiedad corporativa, según á religiosos, hayan para nada impedido el aumento, el crecimiento y nunca visto desarrollo y la prosperidad material que connota la fuerza de esas naciones y la dominación, á la vez que la envidia, de las que son sus rivales.

# SESION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE.

En esta sesion concluyó el Sr. Alonso el discurso que empezó el dia anterior, y en el cual no impugnó realmente nada de lo dicho por el señor marqués de Barzanallana. Pero, al resumir enseguida todo el debate el Sr. Montero Rios, ministro de Gracia y Justicia, se hizo cargo del discurso del mismo en la forma que podrá deducirse de la rectificacion que pronunció, concebida en estos términos:

El Sr. Marqués de BARZANALLANA: Voy á ser muy breve en mi rectificacion. Algunos de los puntos que ha tocado el señor ministro de Gracia y Justicia son para mí personalmente, de cierta importancia: otros no lo son tanto; pero se rozan con el decoro y buen nombre de los intereses políticos que aquí represento, y creo que estoy, no solo en el derecho, sino en el deber defenderlos.

Yo no he acusado al Gobierno, ni ménos al señor ministro de Gracia y Justicia, de irreligioso, ni aun al proyecto mismo. He dicho que conocia las condiciones morales y religiosas del señor ministro de Gracia y Justicia, con cuya amistad personal me honro. Lo que dije es que ni los gobiernos ni los proyectos, que, bajo su natural y legítima y parlamentaria influencia, se votan por las Cortes, deben ser solo religiosos; sino que deben aparecer como tales, y como defensores ademas de los intereses que la generalidad del pais tiene ligados con el sentimiento religioso. Esto es lo que he dicho; y con tal motivo el señor ministro de Gracia y Justicia viene, por decirlo así, á rechazar y replicar con argumentos que, si tenian algun objeto, era el de



presentar al partido moderado como poco religioso y poco defensor de los intereses de la religion y del clero católico.

À este objeto nos dirigió S. S. el recuerdo de algunos hechos, varios de los cuales yo podria dejar pasar en olvido; porque no creo que me halle en la obligacion de defender todos y cada uno de los actos de mi partido, y algunos de los cuales hasta pueden parecerme mal. Despues de todo, señores, ¿es justo hablar del partido moderado, apropósito de lo que se hizo en Enero de 1834 con el Sr. Inguanzo, cardenal primado de Toledo? La verdad es que entonces no habia partido moderado ni partido progresista: lo que habia era un principio de guerra civil, en la cual por un lado aparecia el partido absolutista ó carlista enfrente del partido liberal, que realmente hasta entonces permanecia unido y compacto de todo punto. Si hubiese alguna acusacion que dirigir, sería lo mismo á la fraccion que despues se llamó progresista que á la que se llamó moderada de ese partido liberal; pero la verdadera explicacion no creo que está en esto, y con lo que voy á decir no pretendo justificar, sino explicar aquella medida gubernativa.

El cardenal Inguanzo (creo recordarlo bien, aunque yo entonces era mozo y solo me ocupaba de mis libros y de mis estudios en Salamanca, y de pasar la vida lo más alegremente posible, como lo han hecho y hacen todos los jóvenes y aun muchos de los que han dejado de serlo); el señor cardenal Inguanzo, repito, era un hombre de altísima importancia política. Y desde las Córtes de Cádiz se habia distinguido en ellas, por una verdadera elocuencia, por un saber profundo, como entre otras cosas lo atestigua el tomo que especialmente se ha destinado á reproducir las discusiones sobre la Inquisicion, despues de publicadas otras varias obras que estoy seguro habrá leído el señor ministro de Gracia y Justicia, aunque no tenga iguales convicciones que las que en ellas se expresan respecto á la propiedad, al *dominio sagrado de la Iglesia* y á otras cosas.

Era notable aquel señor cardenal por sus antecedentes, por su profundísimo saber, por su clarísima inteligencia, por los enormes recursos de que legítimamente disponía como arzobispo primado de España; y ejercia ademas una inmensa influencia sobre una parte del clero español, y aun sobre la opinion de no pocos seglares. ¿Qué mucho, pues, que el gobierno, que naturalmente tenía que obedecer á las exigencias de su posición, empezándose una guerra civil, considerara á aquel arzobispo, más bien que como tal, como una entidad política de primer orden, y obrase con él como obró el partido liberal. Y

aun después de todo, no parece sino que los señores que se afilian á un partido, como el Sr. Montero Ríos, en determinadas circunstancias no han hecho lo mismo. En cuanto á esto, creo que no tenemos nada absolutamente que echarnos en cara los unos á los otros; y no digo que solo en los tiempos actuales, sino en los antiguos, bajo el gobierno absoluto, los procedimientos gubernamentales han sido, poco más ó menos, iguales.

Que el partido moderado habla mucho de religión, se dice, y que nunca, cuando ha mandado, ha cuidado de indemnizar al clero de las pérdidas que éste había sufrido durante el mandato del partido revolucionario. Con este motivo ha recordado su señoría que en el año 1843, viniendo al poder el partido conservador, no restableció los diezmos. Señores, si hubiéramos hecho eso, se nos habría acusado de reaccionarios, de hombres que no olvidan ni aprenden, que no tienen para nada en cuenta ciertos hechos, ni la influencia política y social de esos mismos hechos. ¿Cómo hemos de acertar entonces? Nosotros hemos sido hombres eminentemente políticos y no fanáticos sectarios de ningún partido; nosotros hemos sido hombres eminentemente prácticos; y por eso, si no nos encomian las pasiones políticas y sus exageraciones, la historia tengo la seguridad de que nos ha de hacer justicia.

La verdad es que en los años 1843, 1844 y 1845, por consecuencia de la guerra civil y de las reformas impremeditadas llevadas á cabo desde 1840 á 1843 por el partido adversario al nuestro, se hallaba la Hacienda española en un desorden é imposibilidad tal de atender á las cargas públicas que, empezando por la deuda, á la que no se pagaba ni un real, todo estaba en el mayor desorden. ¿Cómo puede una persona sensata, acostumbrada á los negocios; cómo puede un hombre como el señor ministro de Gracia y Justicia exigir del partido moderado que en 1843 restableciese los diezmos ni votase algo que al diezmo se pareciera, ó hiciera cosas, en una palabra, completamente reaccionarias que le hubiesen impedido hacer lo que hizo para gloria suya y ventaja del país, como fué el principio del arreglo de la Hacienda española en el llamado sistema tributario de 1845, del cual formaba parte principalmente el establecimiento de la contribucion territorial, que al diezmo reemplazase? ¿Qué fue lo que hizo? Lo que debió hacer: trabajar por que la situación del clero de España llegase á ser independiente, en lo posible holgada y de todos modos decorosa, y para ello entrar enseguida en negociaciones con la Santa Sede.

El mismo señor ministro de Gracia y Justicia, que nos ha re-



cordado lo dicho en 1845 al representante de España en Roma, Sr. Castillo y Ayensa, por el cardenal Lambruschini, me ha dado la razon y ha puesto la cuestion en su verdadero punto de vista, pues legitimó la conducta del partido moderado.

Nosotros, siguiendo siempre en ese camino, continuamos las negociaciones, que dieron al fin por resultado el Concordato del año de 1851, modificado, ampliado y completado por la convencion de 1859.

Por lo que hace á mí personalísimamente, es aún más fácil la defensa. La primera vez que tuve la honra de ocupar ese banco (*Señalando el ministerial*) y entré en los consejos de la Corona, bien joven todavía, fué el año de 1856; juré ese cargo el 12 de Octubre, y el día 13 tuve la honra de firmar con mis compañeros un decreto, por el cual se suspendian las leyes de desamortizacion, dadas por las Córtes del bienio de 1854 á 1856, en todo lo que al Concordato de 1851 se opusiesen: no sé si podíamos haber hecho más.

Y despues, ¿cuál ha sido mi conducta? La sabe bien S. S.

Con esto ha ligado el señor ministro de Gracia y Justicia otra observacion, que prueba su sagacidad y con cuánta habilidad procura poner á sus amigos personales, pero adversarios políticos, en la posicion más embarazosa que le es dable. Por eso con cierta inocencia ha cuidado de decir que no hemos tratado nosotros de censurar el proyecto por cuanto en él se reduzca la asignacion del culto y del clero; y muy en particular se ha dignado nombrarme, aludiendo á los discursos que, por una equivocacion naturalísima, dice que pronuncié el año 1867, cuando fué en los días 29 y 30 de Abril de 1868.

Bien puede suponer S. S. que habré cuidado, apesar de la natural repugnancia que eso debia causarme, el releer mis discursos (mucho más cuando ya voy siendo algo viejo, y sé cuán corta es la vida y cuántas otras grandes y hermosas cosas hay que leer), á fin de estar más dispuesto á contestar á los argumentos, de cierta naturaleza, que podia suponer se me habian de dirigir. Con toda verdad puedo decir á S. S. que lo que entonces hice no fué fijar cantidad alguna en el presupuesto del clero. Si no temiese parecer á S. S. algo inmodesto, le rogaria que (si es que el tiempo se lo permite, aunque supongo que no, y que en todo caso más bien lo emplearia en otras cosas mejores) releyese mis discursos; y en ellos veria lo que yo dije, aunque creo que dará completa fé á lo que yo asiente. Sería para mí la cosa más fácil del mundo demostrárselo, rogando al señor presidente que se sirviera mandar leer la parte de mi pe-

roracion á que me refiero. Entonces, repito, no fijé ninguna cantidad en el presupuesto del clero. Expresé, al tratar de los presupuestos, mi deseo de que se entrase en negociaciones con la Santa Sede, para que, por los medios legales y canónicos, y dentro de las doctrinas que siempre he profesado como buenas y justas, se redujesen los gastos; cuya reduccion probé que era posible, no solo sin menoscabo de los intereses legítimos del clero, sino hasta aumentando las dotaciones de determinadas clases del mismo.

Ademas propuse una idea que no se tiene en cuenta, y á la cual he de volver con el tiempo, y es que cada quinquenio se modificase ese presupuesto, en la misma proporcion en qué se hubieran modificado los ingresos, de modo que el clero tuviera siempre una dotacion proporcionada al presupuesto general del Estado; dando con esto explicacion profundamente económica á la cuestion, dentro de mis principios, que todos los que sean medianamente entendidos en esta ciencia comprenderán cuán fundados eran. Con arreglo á ellos, dicho sea de paso, es fácil conocer la justicia que me asiste para ser partidario de que al clero se le reconozca la facultad de adquirir bienes territoriales; porque, atendido siempre solamente á una cuota en dinero, será más pobre un año que otro: esto fué lo que dije entonces, y no entré en explicaciones sobre el modo con que habia de hacerse la reduccion.

Creo, como S. S., que si se hubiese hecho eso, como lo propuso algun ministro, se hubiera realizado una cosa no muy justa; porque se hubiera dejado, por ejemplo, el material de las iglesias y parroquias en una mala situacion. Me guardé muy bien de hacerlo: hablé solo del presupuesto en general, y en particular del clero y de otra porcion de atenciones que podrían reformarse. No fué de eso solo: propuse, por ejemplo, tambien la modificacion de la ley de retiros militares, á fin de que se disminuyera la enorme carga que entonces imponia, como ahora impone al presupuesto; y que, como saben los señores senadores, asciende á 100 millones ahora por el importe de las clases militares.

Otra rectificacion tengo que hacer. El señor ministro ha puesto en duda la exactitud de la cifra que he presentado del coste del clero francés, y nos ha citado el presupuesto de 1859. Me he referido al presupuesto de 1871 á 1872, cuyo extracto está á su disposicion, porque le poseo, en el cual aparecen 49 millones y pico de francos para esa atencion. Lo que he sostenido en principio es que la asignacion debia ser nacional: no me he



opuesto á sus alteraciones ó suplementos provinciales y municipales, que es lo que hay en Francia. Y ruego al señor ministro que considere la diferencia que hay de principio á principio, pues yo por lo que lucho es por los principios. Creo y creía que, en vez de lo que se hizo en 1863, se debía haber acudido á Roma, porque Roma nunca, jamás, hay que hacerle esta justicia, ha discutido sobre un guarismo; solo ha sostenido principios.

Lo que defendía también era que el Estado ó la nación está obligada, no los municipios ni las provincias, al sostenimiento del culto y clero; pero si se quiere que las provincias y los pueblos aumenten las asignaciones al clero, no tengo por qué oponerme: eso será en definitiva una apreciación local ó provincial, creyendo que en el día en que se realice se encontrarán los ayuntamientos y las provincias en situación de atender subsidiariamente á esa obligación. Si no resolvemos este problema, y el clero deja de mirar al partido liberal como enemigo implacable, no hay que hacerse ilusiones, tengo la convicción profunda de que seremos vencidos.

Último extremo de mi rectificación: la cuestión de juramentos. El señor ministro de Gracia y Justicia nos ha echado en cara que nuestro partido haya obligado al clero á jurar. Nosotros hicimos jurar á todo el mundo, porque era disposición general; era el espíritu de la legislación de España, y lo hacían todos los partidos. Pero es de todo punto ilógico que el que profesa el principio contrario á ese juramento lo imponga exclusivamente, y como privilegio odioso, á una clase. Éste ha sido mi propósito.

Por lo demás, me felicitó por haber hecho la pregunta que S. S. ha tenido la bondad de contestar, por lo cual le doy las gracias; felicitando también á S. S. por la declaración que ha hecho acerca del juramento. Tengo la convicción de que obrando S. S. de esa manera será mucho más útil al país y á los grandes intereses de la sociedad que empeñándose, como hasta ahora lo ha hecho el Gobierno de que S. S. forma parte dignamente, en sostener la imposición de un juramento que, según nos ha asegurado hoy, lo había mantenido porque consideraba que debía sostener el compromiso contraído por un ministerio conservador, conservador de los nuevos, distinto de nosotros, no pareciéndome muy conservadores los que así se apellidan. Lo extraño es que, siguiendo S. S. una política diferente de esos conservadores, no hubiesen aprovechado hombres de tanto entendimiento como S. S. y sus compañeros la ocasión de apare-

cer verdaderamente liberales y decir: nosotros tenemos otro sistema y otra línea de conducta, y dejamos en completa libertad al clero de jurar ó no jurar, porque tenemos el sistema represivo, y al que no cumpla con las obligaciones que la Constitución le impone le haremos sentir la sancion penal correspondiente.

La Constitución actual, como las de todo el mundo, al lado de dos ó tres deberes asigna muchos derechos; y todavía no comprendo que, imponiéndose por la Constitución á todos los españoles el deber de defender á la patria con las armas en la mano cuando sean llamados por la ley, y el de contribuir en proporcion á sus haberes á levantar las cargas públicas, los cuales no alcanzan al clero, porque por su ministerio se exime del uno, y por no percibir haberes queda de hecho exento del otro, haya de quererle imponerle la obligación de jurar ese Código, cuando no tiene fé en la bondad de los principios que en él se consignan, estando en su derecho al proceder así. Me ha parecido esto un lujo de arbitrariedad y un privilegio odioso, contra el cual debía clamar. Pero repito que doy gracias al señor ministro de Gracia y Justicia por la manifestación que ha hecho.

Y no teniendo que responder al Sr. Alonso, puesto que no ha contradicho ni los hechos ni las doctrinas que he sentado, me limito, al sentarme, á darle gracias por las frases benévolas que he debido á su cortesía.

---

El Sr. Suarez Inclan rectificó á su vez, haciéndose cargo de varios puntos en los que el ministro de Gracia y Justicia había combatido su discurso.

Inútil es reproducir lo dicho por el ministro, pues el Sr. Suarez Inclan lo indica claramente en su rectificación, que fué como sigue:

El Sr. SUAREZ INCLAN: No tema el Senado que yo moleste tampoco largo rato su atención. El señor ministro de Gracia y Justicia hubo de refutar con alguna extension el discurso que pronuncié en contra del proyecto; sin embargo, solo voy á ocuparme de dos ó tres puntos en que debo hacer necesariamente algunas rectificaciones.

Suponia S. S. haberme cogido en pleno delito de inconse-



cuencia y contradicción al afirmar que yo había prometido sostener y apoyar con mi palabra y mi voto un presupuesto presentado por algún amigo mío, en el cual se reducía la dotación del clero en iguales ó parecidas proporciones que en el proyecto que nos ocupa. Es verdad: después estaba el senador que en este momento ocupa la atención de la Cámara á prestar su humilde voto á ese presupuesto; pero entiéndase bien: ¿en qué forma venía aquella reducción? La reducción que entonces se hacía en la dotación del clero era igual á la que se hacía á las demás clases del Estado que cobran sus haberes del presupuesto general de la nación; el clero sufría una rebaja de 20 por 100, como habían de sufrirla todos los empleados públicos, los pensionistas por cargas de justicia y otros. ¿Es esto lo que propone hoy el señor ministro de Gracia y Justicia? ¿Viene en esta forma en el proyecto la reducción de la dotación del clero? No; nótese esto bien: el señor ministro de Gracia y Justicia penetra en la organización interior del clero para hacer esta rebaja; S. S., arrogándose atribuciones que en mi sentir nó tiene, reduce arzobispados, catedrales, iglesias sufraganeas y dignidades dentro de esas mismas iglesias; es decir, afecta á la íntima organización del clero, lo cual, según mi doctrina y la del ministro que llevó aquel presupuesto á las Cortes, no puede ni debe hacerse sino de acuerdo con la Santa Sede. Ésta es la doctrina, y no hay que confundir los términos.

En efecto, estoy persuadido de que el clero no había de rehusar ahora la reducción del 20 por 100 en sus haberes, si en esa forma hubiese venido el proyecto, pues no se ha negado nunca á sufrir las mismas condiciones que los demás acreedores del Estado, en la reducción de sus haberes, que han exigido las circunstancias. Traiga el señor ministro de Gracia y Justicia una reducción igual á la que supone la aprobación de este proyecto, en el presupuesto general de la nación, manteniendo en él la dotación del clero, y desde luego le voto, estando seguro de que el clero se prestará á esa reducción, como se ha prestado siempre; pero no se mezcle S. S. en la vida íntima de la Iglesia, alterando las condiciones internas de su organización, porque esto ya afecta al principio, y en cuanto á los principios nunca transige la Iglesia. Vea, pues, el señor ministro explicado satisfactoriamente, á mi juicio, eso que S. S. ha creído contradicción de mi parte.

He tenido también el honor de sostener en mi discurso que no hay en nuestros cuerpos legales ley alguna que restrinja, que limite la libre facultad de la Iglesia para adquirir bienes

de todas clases. El señor ministro de Gracia y Justicia, impugnando esta doctrina, nos citó el tratado de *Regalias y amortización*, del señor conde de Campomanes, y algun otro defensor del proyecto, me parece que ha sido el Sr. Godínez de Paz, ha intentado refutar mis afirmaciones en este punto. Permitanme SS. SS. que tampoco haya de darme por convencido. He sostenido y sostengo que absolutamente ninguna ley de carácter general se encuentra en nuestras compilaciones legales que limite la libre facultad de adquirir á la Iglesia; no soy yo, cuyo parecer pudiera considerar el Senado como un testimonio recusable, el que lo afirma: lo afirma el Sr. D. Joaquin Aguirre, en su tratado de *Disciplina eclesiástica*, donde lo pueden registrar si gustan los señores senadores.

El Sr. PRESIDENTE: Sr. Suarez Inclan, S. S. sabe que está rectificando, y no es ocasion de entrar en esa prueba que ya ha hecho S. S.

El Sr. SUAREZ INCLAN: Señor presidente, como es un punto esencial en la cuestion que se discute, y han de ser muy breves momentos los que moleste la atencion del Senado, concluiré en pocas frases este raciocinio.

El Sr. Aguirre dice que «los deseos de las antiguas Cortes de Castilla y de Aragon no han pasado de simples peticiones que jamas han llegado á ser leyes del reino», como no lo son, señor Godínez, los fueros municipales, ni ninguna de las compilaciones que S. S. ha citado.

Finalmente, respecto á la cuestion económica, ó sea á que el restablecimiento de la contribucion de consumos ha de producir una cantidad bastante para que el clero pueda percibir sus haberes del presupuesto provincial ó municipal, yo afirmo y sostengo que esto no se conseguirá. Los presupuestos provinciales y municipales van á quedar con un déficit de 500 millones de reales; esto aun suponiendo que se recaude por consumos el máximo de lo que supone el señor ministro de Gracia y Justicia. Y no digo más, señor presidente.

---

En la sesion del dia 19 de Diciembre fué aprobado definitivamente, en votacion ordinaria, el proyecto de ley fijando el presupuesto de obligaciones eclesiásticas y relaciones económicas entre el clero y el Estado, habiendo



salvado su voto contrario los señores marqués de Barzanallana y Suarez Inclan.

Este proyecto de ley no ha sido aún (9 de Febrero 1873) sancionado, y por lo tanto no ha visto la luz pública en la *Gaceta*. No se publica tampoco íntegro en este sitio, pues fué aprobado tal como salió del Congreso de diputados, y puede verse en el lugar correspondiente.

# INDICE.

Páginas.

Proyecto de ley presentado en el Congreso de los diputados por el ministro de Gracia y Justicia, D. Eugenio Montero Rios, fijando el presupuesto de obligaciones eclesiásticas y las relaciones económicas entre el clero y el Estado.....	3
Dictámen de la comision sobre el proyecto de ley fijando el presupuesto de obligaciones eclesiásticas y las relaciones económicas entre el clero y el Estado.....	46
Proyecto de ley, aprobado definitivamente por el Congreso, fijando el presupuesto de obligaciones eclesiásticas y las relaciones económicas entre el clero y el Estado.....	219

## BARZANALLANA.

Discurso contra la totalidad del proyecto.....	276
Rectificación al discurso del Sr. Barcia.....	298
Rectificación al discurso del ministro de Gracia y Justicia.....	301

## ESTÉBAN COLLANTES.

Discurso contra la totalidad del proyecto.....	73
Rectificación al discurso del Sr. Canalejas.....	96
Rectificación al discurso del Sr. Maisonnave.....	110
Rectificación al discurso del ministro de Gracia y Justicia.....	112



**JOVE Y HÉVIA.**

Discurso en apoyo de una enmienda al artículo 1.º.....	124
Rectificación al discurso del Sr. Vazquez Rojo.....	141
Rectificación al discurso del ministro de Gracia y Justicia.....	144
Rectificación á la del ministro.....	145
Discurso en contra del art. 3.º.....	186
Rectificación al discurso del Sr. Gonzalez Gutierrez.....	188
Discurso en apoyo de una enmienda al art. 11.....	206
Rectificación al discurso del Sr. Pasaron y Lastra.....	211

**PIDAL Y MON.**

Discurso en contra de la totalidad del proyecto.....	58
Rectificación al discurso del Sr. Gonzalez Gutierrez.....	68
Rectificación á la del Sr. Gonzalez Gutierrez.....	72
Rectificación al discurso del Sr. Canalejas.....	101
Rectificación al discurso del Sr. Pasaron y Lastra.....	103
Alusion del Sr. Maisonnave.....	106
Rectificación á la del Sr. Maisonnave.....	109
Rectificación á los Sres. Maisonnave, ministro de Gracia y Justicia y Gil Sanz.....	118
Rectificación á la del Sr. Pasaron y Lastra.....	122
Alusion del Sr. Canalejas.....	200
Rectificación á la del Sr. Canalejas.....	201
Discurso en contra del art. 13.....	213

**RÓDENAS.**

Discurso contra la totalidad del proyecto.....	265
Rectificación al discurso del Sr. Rojo-Arias.....	273
Rectificación á la del Sr. Rojo Arias.....	275

**SALAVERRÍA.**

Discurso en contra del artículo 1.º.....	146
Rectificación á los discursos del ministro de Gracia y Justicia y del Sr. Gil Sanz.....	173
Rectificación á la del ministro de Gracia y Justicia.....	179

Discurso en contra del art. 2.º.....	180
Rectificación al discurso del ministro de Gracia y Justicia.....	183
Rectificación á la del ministro de Gracia y Justicia.....	184
Discurso en contra del art. 3.º.....	189
Rectificación al discurso del ministro de Gracia y Justicia.....	190
Rectificación á la del ministro de Gracia y Justicia.....	190
Discurso en apoyo de una enmienda al art. 11.....	208
Rectificación al discurso del Sr. Pasaron y Lastra.....	211
Discurso en apoyo de otra enmienda al art. 11.....	212

#### SUAREZ INCLAN.

Discurso en contra de la totalidad del proyecto.....	227
Rectificación al discurso del Sr. Morales Díaz.....	254
Rectificación á la del Sr. Morales Díaz.....	260
Rectificación al discurso del ministro de Gracia y Justicia.....	262
Rectificación al discurso del ministro de Gracia y Justicia.....	307

#### TORENO.

Discurso en apoyo de una enmienda al artículo 10.....	191
Rectificación á los Sres. Pasaron y Lastra, Canalejas y Gil Sanz.....	203
Votacion del Congreso.....	217
Votacion del Senado.....	309





























BARZALLANA, &



DISCURSOS  
CONTRA  
PROYECTO  
OBLIGS.  
ECLES.

MADRID

1873